



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprensa.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXX - Nº 1914

Bogotá, D. C., lunes, 27 de diciembre de 2021

EDICIÓN DE 174 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 107 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se regula el derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones.

ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚMERO 121 DE 2021 CÁMARA

por medio del cual se regula el derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y se crean mecanismos de participación ciudadana para deliberar y decidir sobre la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 107 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 121 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA AFECTADA Y POTENCIALMENTE AFECTADA POR PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y SE CREAN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA DELIBERAR Y DECIDIR SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES”.

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2021

Honorable Representante
JULIO CESAR TRIANA QUINTERO
Presidente
Comisión Primera Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad

Ref: Informe de Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley Estatutaria No. 107 de 2021 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria No. 121 de 2021 Cámara

Honorables Representantes,

En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes del Congreso de la República y de conformidad con lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Ley Estatutaria No. 107 de 2021 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria No. 121 de 2021 Cámara, con base en las siguientes consideraciones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. OBJETO DE LA LEY

La presente ley estatutaria tiene por objeto garantizar el derecho a la participación ciudadana en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Para ello desarrolla mecanismos de participación al servicio de la ciudadanía que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se pretenda desarrollar o se estén llevando a cabo proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

2. ANTECEDENTES

El 21 de julio de 2021 fue radicado el Proyecto de Ley Estatutaria No. 107 de 2021 Cámara por los Honorables Senadores Juan Carlos Lozada Vargas, John Jairo Hoyos García, Harry Giovanni González García, Jorge Méndez Hernández, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, David Ricardo Racero Mayorca, Andrés David Calle Aguas, Juanita María Goebertus Estrada, Adriana Magali Matiz Vargas, Julián Peinado Ramírez, Carlos Germán Navas Talero, Oscar Hernán Sánchez León y Alejandro Alberto Vega Pérez.

El 22 de julio de 2021 fue radicado el Proyecto de Ley Estatutaria No. 121 de 2021 Cámara por los Honorables Senadores Angélica Lisbeth Lozano Correa, Antonio Sanguino Páez, Iván Cepeda Castro, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Temístocles Ortega Narváez, Gustavo Bolívar Moreno, Feliciano Valencia Medina, Julián Gallo Cubillo, Wilson Arias Castillo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Victoria Sandino Simanca Herrera, Jesús Alberto Castilla Salazar, Israel Alberto Zúñiga Iriarte, Alexander López Maya, Griselda Lobo Silva, Iván Marulanda Gómez, Jorge Enrique Robledo Castillo, Aida Yolanda Avella Esquivel, Juan Luis Castro Córdoba, Leonidas Name Iván, Andrés Cristo Bustos, Roosevelt Rodríguez Rengifo, Roy Leonardo Barreras Montealegre y por los Honorables Representantes María José Pizarro Rodríguez, Inti Raúl Asprilla Reyes, León Fredy Muñoz Lopera, Wilmer Leal Pérez, Fabián Díaz Plata, Harry Giovanni González García, Carlos Alberto Carreño Marín, Omar De Jesús Restrepo Correa, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Luis Alberto Albán Urbano, César Augusto Ortiz Zorro, Abel David Jaramillo Largo, César Augusto Pachón Achury, Jorge Alberto Gómez Gallego, David Ricardo Racero Mayorca, Juan Carlos Lozada Vargas y Julián Peinado Ramírez.

El Proyecto de Ley Estatutaria No. 121 de 2021 Cámara fue construido por las organizaciones que conforman el Movimiento Nacional Ambiental, siendo esta iniciativa respaldada por 107 organizaciones de 48 municipios ubicados

<p>en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Cesar, Risaralda, Santander y Tolima.</p> <p>Los proyectos de ley estatutaria 107 y 121 de 2021 Cámara fueron remitidos a la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes donde se determinó que deberían ser acumulados y se designó como único ponente para primer debate al H.R. Juan Carlos Lozada Vargas.</p> <p>El 25 de octubre de 2021 se realizó una audiencia pública para conocer la postura de las entidades estatales, de la ciudadanía, la academia y demás actores sociales frente a los Proyectos de Ley Estatutaria. En la referida audiencia se recibieron distintas observaciones frente a los articulados que habían sido radicado originalmente y algunos participantes extendieron propuestas para la acumulación de los textos.</p> <p>2.2. AUDIENCIA PÚBLICA AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 107 DE 2021 CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO.121 DE 2021 CÁMARA.</p> <p>A la audiencia celebrada el 25 de octubre del 2021 fueron invitadas en calidad de intervinientes ocho entidades estatales, a saber: el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.</p> <p>A su vez, se invitó a las Facultades de Derecho de la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás, Universidad del Rosario, Universidad Externado y la Universidad Nacional. También fueron invitados actores académicos de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario y de la Universidad Libre dedicados a estudiar temas de medio ambiente, acciones públicas y derecho constitucional.</p> <p>Asimismo, se extendió invitación para participar al PNUD, al Comité DESC de la Organización de Naciones Unidas y a ONU Medioambiente, así como a varias organizaciones no gubernamentales y centros de pensamiento dedicados a estudiar la problemática ambiental y de derechos humanos en Colombia y a líderes sociales y organizaciones comunitarias que se han visto afectadas o serían potencialmente afectadas por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales alrededor de todo el país. Finalmente, se</p>	<p>2021C. Lo anterior, bajo la premisa de que el ordenamiento ya contemplaba mecanismos de consulta.</p> <p>Finalmente, manifestó que había funciones que pretendían otorgarse a la Agencia Nacional de Hidrocarburos con las que no coincidía, pero no precisó cuales eran esas competencias ni en cuál de los dos proyectos de ley estatutaria se encontraban. Anunció que la Agencia remitiría un documento escrito ampliando las observaciones a las iniciativas objeto de la audiencia.</p> <p>Concepto escrito:</p> <p>El 27 de octubre de 2021, la Agencia Nacional de Hidrocarburos remitió un concepto escrito a la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes.</p> <p>Presentó una síntesis de los Proyectos de Ley Estatutaria No. 107 de 2021C y No.121 de 2021C, resaltando las principales medidas propuestas en las referidas iniciativas. Seguidamente hizo una valoración jurídica de las iniciativas. De resaltar los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 El derecho a la participación ya está garantizado por vía constitucional (artículos 1, 2, 40.2, 79 y 103) y desarrollado legalmente en materia ambiental por la Ley 21 de 1991 que adopta el Convenio 169 de la OIT, la Ley 99 de 1993, la Ley 134 de 1994 y el Decreto 1076 de 2015. 2 En materia de participación en el ordenamiento de territorio, la ANH resaltó la existencia de la Ley 388 de 1997 y de la Ley 2079 de 2021 que ordena al gobierno reglamentar esos mecanismos. 3 Ya existen mecanismos de participación desarrollados por otras normas, como la audiencia pública y el Cabildo Abierto. 4 El mecanismo de Consulta Universal Anticipada es inconveniente toda vez que las consultas no están destinadas a obtener avales o vetos por parte de la población sino a establecer acuerdos a partir de la identificación de los impactos generados por los proyectos y las medidas de manejo de esos impactos. 5 Precisa que quien decide sobre la contratación de estos proyectos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos y no la autoridad ambiental. 6 La Constitución en sus artículos 80, 332, 334, 360 y 361 establece que los mecanismos de participación no pueden ser la instancia para decidir sobre la ejecución o no de los proyectos relacionados con la explotación de recursos minero-energéticos. 7 La Corte Constitucional ha señalado que ni la Consulta Popular ni ningún otro mecanismo de participación puede ser empleado para que la
<p>invitó a participar a más de diez expertos y académicos nacionales dedicados al estudio de las problemáticas que abordan los Proyectos de Ley Estatutaria.</p> <p>La convocatoria a la audiencia fue ampliamente difundida por medios digitales y redes sociales invitando a la ciudadanía en general a participar e intervenir en la audiencia.</p> <p>Es preciso resaltar que ni el Ministerio de Justicia y del Derecho ni el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asistieron a la audiencia ni enviaron por escrito comentario alguno respecto al contenido de los Proyectos de Ley Estatutaria. Lo anterior, pese a haber sido invitados y pese a que se ven directamente vinculados con la materia de los Proyectos de Ley Estatutaria.</p> <p>A continuación, se da cuenta del contenido de las intervenciones de quienes asistieron a la audiencia y participaron haciendo uso de la palabra.</p> <p>Agencia Nacional de Hidrocarburos.</p> <p>El señor José Armando Zamora, en representación, y como presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, afirmó que la participación de las comunidades en los contextos de actividades extractivas beneficia tanto a la industria como a la población. Sin embargo, añadió que la participación no puede ir en contra del interés general, seguido de lo cual afirmó que no puede reconocerse un poder de veto.</p> <p>De manera concomitante a este último argumento, manifestó que la población no cuenta con el conocimiento, ni el nivel de análisis ni los recursos para tomar decisiones relacionadas con el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Manifestó su preocupación respecto de “presiones indebidas” que podrían influenciar la opinión de la población frente a los proyectos extractivos.</p> <p>Por otro lado, afirmó que el proyecto de Ley Estatutaria propuesto imponía mayores restricciones a la actividad minera y de hidrocarburos en comparación con la que imponía a otras actividades económicas. Consideró que los principios orientadores a la participación propuestos en el Proyecto de Ley Estatutaria deben hacerse extensivos no solo a los proyectos de recursos naturales sino a las actividades del Estado y del sector privado que afecten a las comunidades en el país.</p> <p>Adicionalmente, consideró como inconveniente el mecanismo de Consulta Universal Anticipada propuesto por el Proyecto de Ley Estatutaria No.107 de</p>	<p>ciudadanía decida sobre la conveniencia o inconveniencia de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8 Los principios de precaución y prevención no pueden limitar arbitrariamente el aprovechamiento de los recursos naturales. Los mecanismos con poder de decisión podrían incurrir en decisiones arbitrarias. 9 La Agencia Nacional de Hidrocarburos ha desarrollado y viene implementando desde el 2019 un procedimiento para la coordinación y concurrencia con entidades territoriales para la definición y determinación de las áreas de interés en hidrocarburos. 10 La propuesta del Proyecto de Ley Estatutaria 121 de dar aplicación retroactiva a los mecanismos de participación puede afectar el desarrollo de las actividades de exploración y explotación en curso lo que vulneraría los derechos adquiridos por terceros y su seguridad jurídica. Esto pondría en riesgo al Estado ante posibles reclamaciones económicas, compensaciones e indemnizaciones por la eventual imposibilidad de dar continuidad al objeto contractual. 11 La aprobación del proyecto podría poner en riesgo la asignación de nuevas áreas para explotar hidrocarburos en el país. Ello podría afectar la cantidad de recursos disponibles para el desarrollo de las regiones del país. 12 La industria de hidrocarburos está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la erradicación de la pobreza. <p>Ministerio de Minas y Energía</p> <p>Intervino en representación del Ministerio de Minas y Energía la señora Adriana Marcela Rueda. Sostuvo que la propiedad del subsuelo recae en el Estado, por lo que las decisiones sobre los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables alojados en el subsuelo corresponde al Gobierno Nacional.</p> <p>Añadió que la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos han realizado importantes esfuerzos para crear sistemas de información pública relacionada con el otorgamiento de títulos y contratos y la ejecución de los mismos. Resaltó también, los esfuerzos de ambas entidades para garantizar la participación.</p> <p>Resaltó que algunos de los mecanismos de participación propuestos por los proyectos ya están en uso por lo que mantenerlos en el proyecto de ley estatutaria podría devenir en duplicidad de actuaciones dificultando la eficiencia administrativa para la ejecución de los proyectos.</p>

<p>Resaltó que en razón de la sentencia SU-095 de 2018 no es posible que las comunidades ejerzan un poder de veto sobre los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Agencia Nacional de Minería:</p> <p>La señora Ana María González intervino en representación de la Agencia Nacional de Minería. Consideró que debía observarse la Sentencia SU-095 de 2018 en la medida que, en su criterio, esta fijaba que los mecanismos de participación no podrían comprender un poder de veto sobre los proyectos extractivos.</p> <p>Seguidamente explicó que la Agencia cuenta con protocolos orientados a garantizar la plena participación de la población civil en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y resalto el éxito de esas medidas. Hizo un llamado a tener en cuenta los procesos y mecanismos de participación que adelanta la Agencia Nacional de Minería. En consecuencia, resaltó que el derecho a la participación ya está garantizado en la ley.</p> <p>En línea con lo expresado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, resaltó su representante que las Agencias cuentan con un sistema de información pública con información disponible para consulta sobre las particularidades de los proyectos de exploración y explotación de recursos mineros.</p> <p>Procuraduría General de la Nación:</p> <p>Intervino Laura Marcela Olier en representación de la Procuraduría General de la Nación. Sostuvo que para la Procuraduría la iniciativa legislativa es de la mayor importancia. A su vez, afirmó que la Procuraduría estaba de acuerdo con las obligaciones de acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los mecanismos de participación que el proyecto pretende otorgarle. Sin embargo, advirtió que algunos mecanismos planteados por el proyecto podrían suponer una duplicidad con mecanismos ya existentes.</p> <p>Finalmente, se opuso al mecanismo de la Consulta Universal Anticipada toda vez que podría suponer un riesgo para los derechos de las comunidades e individuos directamente afectados o potencialmente afectados por los proyectos.</p> <p>Defensoría del Pueblo:</p>	<p>en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y que ha realizado un esfuerzo grande para garantizar la participación.</p> <p>Centro Jurídico para la Defensa Territorial (SIEMBRA):</p> <p>El Centro Jurídico insistió en que estos proyectos de ley estatutaria pretenden atender una situación urgente y preocupante, a saber: el déficit de protección al derecho a la participación ciudadana en el contexto de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Resaltó que el Proyecto de Ley Estatutaria 121 de 2021C fue construido por 107 organizaciones ambientales de todo el país y que el proceso ha durado más de un año. Indicó que al menos 21 de esas 107 organizaciones asistieron a la audiencia.</p> <p>Llamó la atención sobre la necesidad de considerar de manera completa e integral la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de participación y no reducir el análisis a lo fijado por la Sentencia SU-095 de 2018.</p> <p>Precisó que si bien es cierto que no puede haber poder de veto contra los proyectos extractivos, de conformidad con la Constitución, la vocación de lograr una democracia participativa, y los desarrollos jurisprudenciales en la materia, tampoco puede existir imposición por parte del Gobierno Central para que las comunidades para desarrollar los proyectos extractivos.</p> <p>En consecuencia sostuvo que los mecanismos de participación deben llevar a la capacidad de decisión por parte de las comunidades afectadas y deben ser vinculantes para las autoridades. Reiteró que no existe prohibición normativa para que las personas decidan sobre su territorio.</p> <p>Sostuvo que las decisiones sobre los proyectos extractivos se haga en clave del ordenamiento territorial y no en función de la potencialidad extractiva de los territorios. Insistió en la necesidad de considerar aspectos ambientales, sociales y culturales al decidir sobre los proyectos extractivos.</p> <p>Resaltó que los mecanismos de Cabildo Abierto Socio ambiental y la Audiencia Pública de Control Socio ambiental son idóneos para lograr consensos entre las partes interesadas en el desarrollo de los proyectos.</p> <p>A su vez, llamó la atención sobre la importancia de garantizar el goce efectivo del derecho de acceso a la información completa sobre los proyectos y los territorios, pues en la actualidad eso no ocurre. Finalmente, resaltó que suplir</p>
<p>En representación de la Defensoría del Pueblo intervino Sandra Lucía Rodríguez, quien afirmó que las iniciativas estatutarias son de la mayor relevancia y las celebró, resaltando que la participación es principio y fin del Estado colombiano, vinculado con el principio de justicia ambiental, previsto en la Declaración de Río e incorporado al ordenamiento en la Ley 99 de 1993.</p> <p>Ahondó en la importancia del principio de justicia ambiental toda vez que ese principio tiene tres elementos: garantizar el acceso a la información, la participación y posibilidad de incidir en las decisiones y la reparación de los efectos causados. Resaltó que los proyectos adoptan mecanismos encaminados a concretar esos propósitos.</p> <p>Llamó la atención sobre los estándares constitucionales de la participación e hizo énfasis en que de acuerdo con los desarrollos jurisprudenciales la participación no puede equipararse ni reducirse a espacios de socialización.</p> <p>En tercer lugar, resaltó que los mecanismos deben ser aplicados con enfoque diferencial de manera que consideren las particularidades y diversidades de las diferentes regiones y territorios del país e hizo un llamado para extender la aplicación de los mecanismos de participación a asuntos más diversos que los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Adicionalmente agregó que es fundamental que todos los actos administrativos relacionados con los proyectos extractivos y los mecanismos de participación sean motivados. Resaltó la importancia de generar espacios de diálogo entre Estado y ciudadanía en las etapas tempranas de los proyectos.</p> <p>Al igual que la Procuraduría, manifestó su complacencia con que se vinculara a la Defensoría en el acompañamiento para actuar como garantes a la aplicación de los mecanismos de participación.</p> <p>Finalmente, también expresó preocupación por el mecanismo de Consulta Universal Anticipada por poder reñir con las previsiones legales y constitucionales relacionadas con la Consulta Previa.</p> <p>Autoridad Nacional de Licencias Ambientales:</p> <p>Luego de reiteradas dificultades de conectividad, intervino la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Sostuvo que los trámites de licenciamiento ambiental ya prevén la realización de la Audiencia Pública ambiental. En segundo lugar, resaltó que la Autoridad ya cuenta con una subdirección especialmente orientada a garantizar la participación ciudadana</p>	<p>el déficit de protección a la participación es fundamental para evitar el surgimiento de conflictos ambientales.</p> <p>Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia:</p> <p>La señora Laura Santacoloma intervino en representación de Dejusticia. Adicionalmente remitió un concepto por escrito. Resaltó que los proyectos de ley estatutaria son fundamentales por atender un problema urgente como el déficit de protección a la participación ciudadana en contextos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Seguidamente, resaltó que sí es constitucional que los mecanismos de participación adoptados otorguen a las comunidades poder de decisión sobre el desarrollo de los proyectos y que era también constitucional que esas decisiones fuesen vinculantes para el Estado. Llamó la atención sobre la importancia de que así fuera dado que se tratan de proyectos de utilidad pública e interés social.</p> <p>Resaltó que ninguna norma en el ordenamiento impide a los ciudadanos tomar esas decisiones y que, por el contrario, la constitución propende para que la participación sea efectiva no solo durante el proceso sino respecto del resultado de la decisión.</p> <p>Complementó recordando que la finalidad del Estado es dar satisfacción a las necesidades de la población, por lo que debe tener en cuenta la voluntad ciudadana en las decisiones que la afectan. En este contexto, afirmó que esta finalidad se garantiza con procesos de participación directa.</p> <p>Agregó que aunque ya existen mecanismos de participación vinculantes para el Estado, los que se proponen en este proyecto los fortalecen, y que la sentencia C-389 de 2016, en referencia con el consentimiento libre e informado, opera cuando se trata de medidas que generan afectación intensa a los derechos de la población. Por ende, la comunidad debe consentir ante amenazas graves a sus derechos. Concluyó que justamente los mecanismos previstos en las iniciativas estatutarias propenden por lograr ese consentimiento. Advirtió que los mecanismos planteados para lograr el consentimiento de las comunidades no implican necesariamente herramientas de veto.</p> <p>Al respecto consideró que el orden constitucional permite y aboga por la democracia participativa en la que se garantice espacios de participación directa de la ciudadanía en los asuntos que la afectan. Al respecto citó la sentencia de la Corte Constitucional C-389 de 2016 en la que la Corte</p>

<p>determinó la necesidad de fortalecer la democracia directa como mecanismo para reducir la corrupción y la cooptación gremial del Estado.</p> <p>Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas.</p> <p>Intervino en representación del Comité DESC de la ONU el señor Renato Zerbini, quien resaltó la importancia de la iniciativa. Recomendó revisar las observaciones conclusivas del Informe del Comité DESC sobre el Estado colombiano en la materia de explotación de recursos naturales y sobre el informe equivalente de 2017.</p> <p>Resaltó que sería profundamente problemático desconocer la voluntad de la población en lo relacionado con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, por lo que recomendó tomar todas las medidas necesarias para que esas voluntades puedan ser tenidas en cuenta. Insistió que eso implica generar desarrollos normativos que garanticen la participación ciudadana y la concertación entre las comunidades y el Estado para el desarrollo de los proyectos extractivos.</p> <p>A su vez, resaltó que la adopción de esas recomendaciones es de especial importancia considerando las obligaciones del Estado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, especialmente en materia de procesos decisorios y participativos.</p> <p>Oscar Aguilón. Universidad Santo Tomás:</p> <p>El profesor de la Universidad Santo Tomás afirmó que ambos proyectos de ley estatutaria resultan pertinentes y apoyó ambas iniciativas. Resaltó que se debe permitir que los municipios y comunidades decidan sobre el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Resaltó que, si bien se deben respetar las reglas dadas por la sentencia SU-095 de 2018, dicha providencia detenta graves deficiencias y desconoce otros desarrollos jurisprudenciales en materia de participación que deben ser tenidos en cuenta por el legislador en esta materia en la medida que avalan el poder de decisión de las comunidades en los asuntos que pretenden atender las iniciativas legislativas.</p> <p>Finalmente resaltó que si bien al Estado le corresponde decidir sobre el subsuelo justamente los municipios hacen parte del Estado por lo que se les debe dar capacidad de injerencia en la decisión.</p>	<p>llamó la atención sobre la constitucionalidad de permitir a la población tomar decisiones, participando de manera directa en los asuntos que la afectan.</p> <p>Finalmente consideró particularmente convenientes los mecanismos de Cabildo Abierto y Consulta Universal Anticipada planteados por los proyectos de ley estatutaria.</p> <p>Nicolás Figueroa. Universidad del Rosario:</p> <p>El profesor de derecho de la Universidad del Rosario resaltó que era urgente atender el déficit de protección a la participación en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Al igual que los demás constitucionalistas, académicos y centros de pensamiento participantes, sostuvo que no solo era constitucional sino particularmente importante permitir que la población incida y decida en la toma de decisiones relacionadas con los proyectos extractivos.</p> <p>En consecuencia, recomendó descartar el mecanismo de Consulta Universal Anticipada en la medida que no permite poder de decisión por parte de la ciudadanía. Al tiempo insistió en la necesidad de priorizar la adopción de mecanismos como el Cabildo Abierto Socio ambiental que permitan el consenso mayoritario. En consecuencia, recomendó tomar como modelo lo previsto por el Proyecto de Ley Estatutaria No. 121.</p> <p>Explicó que, de adoptarse los mecanismos propuestos, se estaría generando una circunstancia diferente a la que valoró la Corte Constitucional en la SU-095 de 2018. Sostuvo que mediante esos mecanismos, no se podría decir, como si se podría afirmar con las Consultas Populares, que las comunidades decidan sin atender ni considerar lo expresado por el Gobierno Nacional ni a las empresas. Acotó que, a diferencia de las Consultas Populares, mediante la figura del Cabildo Abierto se hacía posible la participación e incidencia de entidades territoriales, del gobierno central, de las empresas y de la población.</p> <p>En consecuencia, advirtió que con la aplicación del Cabildo Abierto Socio ambiental no sería posible continuar afirmando que la población decide sin considerar los intereses de la nación y de las empresas o que tomarían decisiones desinformadas.</p> <p>Finalmente, y al igual que el profesor García, consideró que el principal fundamento constitucional para avalar el poder de decisión de la población es el principio de subsidiariedad reconocido constitucionalmente en el artículo 288 superior.</p> <p>Ciudadanía interesada:</p>
<p>Juan Felipe García. Universidad Javeriana.</p> <p>El director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana y director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la misma universidad sostuvo que los proyectos son fundamentales para garantizar el derecho a la participación. Precisó que pese a haber tenido la oportunidad de aplicar diversos mecanismos de participación, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos no han garantizado de manera adecuada este derecho.</p> <p>Resaltó que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-095 de 2018, determinó que existe un inadmisibles déficit de protección al derecho a la participación y que por esta razón exhortó al Congreso a legislar en la materia.</p> <p>Seguidamente conceptuó que si es constitucional reconocerle poder de decisión a la población y a las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Precisó que si bien la Sentencia SU-095 de 2018 dispuso que no puede haber poder de veto por parte de las entidades territoriales sobre los proyectos que involucren el subsuelo, también es claro que ni el Congreso, ni las agencias del Estado pueden prohibir a las entidades territoriales ordenar el suelo. Al respecto mencionó como necesario considerar la sentencia C-273 de 2016.</p> <p>Añadió que para resolver las tensiones existentes entre las entidades territoriales y nacionales en materia de la gestión del suelo y el subsuelo y, por ende, al diseñar los mecanismos de participación, es indispensable considerar el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 288 superior.</p> <p>Precisó que el principio de subsidiariedad desarrolla el principio democrático y del artículo 2 superior que establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan. En consecuencia, la intervención del Estado y la subsecuente atribución de competencias deben realizarse en el nivel más próximo al ciudadano, es decir, a quien más afecta las decisiones.</p> <p>Insistió que no se trata de un poder de veto, sino de lograr resolver las tensiones entre entidades territoriales y nacionales priorizando la incidencia de las personas más afectadas por las decisiones que deban tomarse.</p> <p>Resaltó que la Sentencia SU-095 de 2018 abordó el problema considerando los principios de coordinación y concurrencia pero no valoró adecuadamente el principio de subsidiariedad. En consecuencia, y conforme lo hizo Dejusticia,</p>	<p>Intervinieron al menos treinta y dos (32) personas provenientes de muy diversos lugares del país, en su mayoría líderes sociales ambientales, representantes de movimientos ambientales, con amplio conocimiento de las problemáticas y de las particularidades de sus territorios. Algunas de estas personas remitieron también sus comentarios por escrito.</p> <p>La totalidad de los ciudadanos intervinientes, de manera unánime llamó la atención sobre la necesidad de adoptar mecanismos de participación ciudadana que permitiera el poder de decisión de las comunidades en las decisiones relacionadas con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables por ser asuntos que directamente les afectan. A continuación se presenta un recuento de los principales contenidos de las intervenciones ciudadanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existe un déficit de protección a la participación ciudadana en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. • Las empresas dedicadas a los proyectos extractivos no garantizan la participación de la población conforme con los estándares que debe tener la participación en atención a la jurisprudencia constitucional en la materia. • La garantía de la participación es fundamental para evitar y solucionar pacíficamente conflictos ambientales. • La participación debe permitir el poder de decisión de la población y esas decisiones deben ser vinculantes para el Estado. • La distinción entre suelo y subsuelo es una ficción jurídica que no tiene asidero en la realidad. • El Proyecto de Ley Estatutaria No.121 de 2021 fue construido entre más de 100 organizaciones sociales de todo el país. Es fiel reflejo de la voluntad popular de participar y decidir sobre los asuntos que afectan a las comunidades en relación con los proyectos extractivos de recursos naturales no renovables. • La Constitución de 1991 reconoce el deber del Estado de proteger el ambiente y de garantizar el derecho a la participación. Hace falta desarrollar más herramientas legislativas para la participación. • Si bien la Agencia Nacional de Minería y de Hidrocarburos cuenta con procesos para la participación, esos son insuficientes y no tienen las protecciones ni estándares que la Corte Constitucional ha exigido. • No se deben confundir las medidas para garantizar la coordinación y concurrencia entre el gobierno central y los gobiernos locales y los mecanismos para garantizar el derecho a la participación. Los proyectos versan sobre la participación.

<ul style="list-style-type: none"> • Si bien las comunidades no tienen poder de veto, el gobierno central tampoco puede imponer decisiones sobre los proyectos extractivos. Las decisiones deben observar la voluntad popular. • Las comunidades afectadas y potencialmente afectadas por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables sí tienen las herramientas y están cualificados para participar y decidir en los asuntos que les afectan. • Las autoridades y las empresas vinculadas con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables no garantizan el derecho de acceso a la información que es fundamental para que la participación ciudadana sea real y efectiva. Le hacen “conejo” a la participación. Hay un déficit y barreras para acceder a la información. • Los mecanismos de participación deben permitir que se tengan en cuenta los impactos sociales y ambientales generados por los proyectos extractivos. Las empresas dejando impactos irresolutos. Incumpliendo sus obligaciones en la materia. • Se deben adoptar mecanismos como el Cabildo Abierto Socio ambiental y las Audiencias Públicas de Control. • Las decisiones sobre los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables no deben ser unilaterales desde el gobierno central. • Varios casos como los de Salento, en Quindío demuestran que la participación es una herramienta para lograr la protección del medio ambiente. • Al valorar la posibilidad de desarrollar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se debe tener en cuenta el principio de precaución, la protección de la biodiversidad, la vocación agrícola de los territorios y la necesidad de hacer frente a la crisis climática. • Luego de que se prohibiera hacer uso de la Consulta Popular, el congreso debe garantizar alternativas a la población para participar y decidir sobre el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. • Se deben considerar las particularidades de cada territorio en la aplicación de los mecanismos de participación. • Se deben tomar medidas contra la cooptación gremial del Estado por parte de las empresas interesadas en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables pues ese fenómeno puede afectar el desarrollo de los mecanismos de participación. 	<p>derecho puede: (...) 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.</p> <p>Artículo 79°. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.</p> <p>Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.</p> <p>Artículo 80°. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.</p> <p>Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.</p> <p>Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.</p> <p>Artículo 95.5°. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (...) 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;</p> <p>Artículo 95.8°. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: (...) 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.</p> <p>Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.</p> <p>El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su</p>
<p>Adicionalmente, para la construcción de la ponencia para primer debate del proyecto acumulado, se realizaron al menos cinco mesas técnicas con representantes del Movimiento Nacional Ambiental, con académicos y constitucionalistas, con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al estudio de la participación ciudadana en contextos ambientales.</p> <p>La ponencia del proyecto de ley estatutaria que se presenta para primer debate contiene los aportes y modificaciones producto de la audiencia pública que se realizó en la Comisión Primera y de los aportes resultantes de las referidas mesas técnicas.</p> <p>3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO</p> <p>3.1. CONSTITUCIONALES</p> <p>Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.</p> <p>Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.</p> <p>Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.</p> <p>Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.</p> <p>Artículo 8°. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.</p> <p>Artículo 40.2°. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este</p>	<p>autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.</p> <p>Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.</p> <p>Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.</p> <p>Artículo 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.</p> <p>Artículo 360. La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables.</p> <p>Mediante otra ley, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías.</p> <p>3.2. LEGALES</p> <p>Ley 23 de 1973. “Por el cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.”</p> <p>Esta ley busca la protección del medio ambiente a través de la prevención y el control de la contaminación del mismo de modo que se mejore, conserven y restauren los recursos naturales renovables. Por otro lado, reconoce al medio ambiente como un patrimonio común y entiende que el agua, el aire y el suelo son bienes contaminables.</p> <p>Ley 11 de 1986. “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de la Administración Municipal y se ordena la participación de la comunidad en el manejo de los asuntos locales”.</p>

Esta ley es precursora en el reconocimiento del derecho a la participación en el ámbito municipal.

Ley 21 de 1991. "Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989".

Esta ley busca adoptar el Convenio 169 sobre poblaciones indígenas y tribales adoptada por la OIT, el cual establece mecanismos para la garantía de los derechos de los miembros de los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; en temas como tierras, condiciones de empleo, formación profesional, artesanía e industrias rurales, educación entre otras.

Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones."

Esta ley establece los principios generales de la política ambiental colombiana, se establecen los principios generales ambientales y regula el Ministerio y los Institutos de carácter científico que tienen como función fomentar el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo ambiental y de recursos naturales, de las culturas indígenas y demás recursos étnicos. Define las autoridades ambientales y el Sistema Nacional Ambiental.

A su vez, reconoce y regula varios mecanismos de participación administrativa dentro de los que se encuentran la audiencia pública ambiental, la intervención en los procedimientos administrativos ambientales, el derecho de petición y la consulta previa para pueblos indígenas y otras comunidades étnicas.

Ley 134 de 1994 "por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana."

La presente ley regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto, entre otros.

Ley 685 de 2001 "Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones."

Esta ley busca regular las actividades de explotación de recursos mineros de propiedad estatal y privada de modo que se realicen en consonancia con los principios y normas relacionadas con la explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente. A su vez establece un marco de regulación a las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada.

Ley 1757 de 2015. "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática."

Esta ley es de especial relevancia por la Estatutaria en materia de mecanismos de participación democrática en un sentido general. Entre otras reglamenta el cabildo abierto.

3.3. DECRETOS

Decreto Ley 2811 de 1974. "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente."

El presente decreto tiene la función de crear el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, a través del cual se reconoce el ambiente como patrimonio común y por esto, tiene como objeto la regulación de la conducta humana, individual y colectiva respecto al ambiente y los recursos naturales renovables con la finalidad de garantizar la preservación y manejo de los recursos naturales renovables que también son de utilidad pública e interés social.

Decreto-Ley 3573 de 2011. "Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y se dictan otras disposiciones."

El presente decreto tiene como objeto la creación de un organismo técnico con autonomía administrativa y financiera que se encargue del estudio, aprobación y expedición de licencias, permisos y trámites ambientales que contribuirá a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión ambiental y al desarrollo sostenible.

Decreto 1076 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

El presente decreto busca compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.

3.4 JURISPRUDENCIALES

3.4.1. CORTE CONSTITUCIONAL

Desde 1994 la Corte Constitucional ha desarrollado de manera amplia la relevancia de los mecanismos de participación ciudadana como desarrollo del mandato del Constituyente Primario. En la sentencia **C-089 de 1994** expresó:

"El fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente, luego traducido en las disposiciones de la Carta Política que ahora rige el destino de Colombia y de las que se infiere el mandato de afianzar y extender la democracia tanto en el escenario electoral como en los demás procesos públicos y sociales en los que se adopten decisiones y concentren poderes que interesen a la comunidad por la influencia que puedan tener en la vida social y personal."

Así, la Corporación en Sentencia **C-180 de 1994** analizó los mecanismos de participación ciudadana como una extensión o fortalecimiento del sistema democrático que rigen el Estado Colombiano:

"En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa."

En esta misma providencia, además, la Corte ligó el principio de participación con los principios de pluralismo, tolerancia, protección de derechos y libertades y la responsabilidad con el desarrollo colectivo de los ciudadanos:

"El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades, así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. El concepto de democracia participativa lleva insita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional."

Posteriormente en Sentencia **C-1338 de 2000** la Corte determinó que la participación ciudadana es un derecho - deber para los ciudadanos y atañe a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria. Por esto, señaló que la participación ciudadana:

"Mirada desde el punto de vista de la dogmática constitucional, la participación ciudadana es un principio fundamental que ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho, y que, en relación con el régimen constitucional anterior, persigue un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses generales. Por ello mismo, mirada desde el punto de vista del ciudadano, la participación democrática es un derecho-deber, toda vez que le concede la facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica social que involucra intereses colectivos. Esa facultad no se circunscribe a los procesos propiamente políticos, y su ejercicio debe estar adecuadamente garantizado, pues así lo exigen las mismas normas superiores."

En Sentencia **T-637 de 2001** la Corte explicó cómo la participación ciudadana consagrada en la Constitución Política de 1991 redefinió lo que significa ser ciudadano ya que:

"En la democracia participativa, hay una concepción por completo contraria a la que expresa Montesquieu acerca del ciudadano y de su papel en la vida pública. En este sistema,

en lugar de desconfiarse del ciudadano, éste goza de plena confianza, lo cual se manifiesta en el derecho que se le otorga de participar en los procesos decisivos públicos que habrán de afectarlo, pues se entiende que es el ciudadano quien en realidad sabe cuáles son sus necesidades y, en esa medida, cuáles las prioridades en la distribución de recursos escasos y, además, tiene mayor interés en obtener los resultados perseguidos.”

Continuando con el desarrollo jurisprudencial, en la sentencia **C-123 de 2014** la Corte resaltó la relevancia de la participación ciudadana en casos de explotación minera y la toma de decisiones respecto a la explotación de los suelos. En dicha providencia se discutió el alcance de las disposiciones constitucionales sobre la necesaria participación de las entidades municipales y distritales en los casos donde se tuviera que decidir sobre la extracción de recursos del suelo, propiedad del Estado. Por lo anterior, sobre el ordenamiento territorial determinó:

“Al ser estos los aspectos que Constitución y ley entienden que conforman el ordenamiento territorial, se evidencia la trascendencia de la función asignada a concejos distritales y municipales por los artículos 311 y 313 numeral 7, lo relevante que resulta la participación en la reglamentación de los usos del suelo por parte de estas autoridades y lo fundamental que es que en un Estado unitario, con autonomía de sus entidades territoriales y que adopta como pilar fundamental la participación de sus habitantes en las decisiones que los afectan, se entienda el papel de estas corporaciones como un elemento identificador de la esencia y determinante del desarrollo práctico del régimen territorial previsto por la Constitución.”

De manera complementaria, la Corte sostuvo que para dirimir ese tipo de tensiones entre competencias de entes nacionales y territoriales sobre el uso del suelo y el subsuelo, debería darse aplicación a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad reconocidos en el artículo 288 superior.

“en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano,

entidades del orden nacional determinar los usos del subsuelo, al hacerlo, resulta imposible no afectar el suelo. Al respecto:

“33. En el presente caso es claro que la selección de áreas de reserva minera no excluye la realización de actividades agrícolas, entre otras. Más aun, la organización del territorio a partir de su potencial minero, por sí mismo, corresponde al ejercicio de una actividad propia de la administración nacional, que se ajusta al carácter unitario del Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad de ordenación del territorio de manera exclusiva por una entidad del nivel central sí puede tener un impacto significativo sobre la autonomía de las autoridades municipales para planificar y ordenar sus territorios. La extracción de recursos naturales no renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el subsuelo, sino también modifica la vocación general del territorio, y en particular, la capacidad que tienen las autoridades territoriales para llevar a cabo un ordenamiento territorial autónomo. En esa medida, tiene que existir un mecanismo que permita la realización del principio de coordinación entre las competencias de la Nación para regular y ordenar lo atinente a la extracción de recursos naturales no renovables y la competencia de las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su territorio, con criterios de autonomía.”

Esto es relevante para el recuento jurisprudencial que nos ocupa toda vez que da cuenta de la tensión de competencias entre los entes territoriales y nacionales en materia de gestión del suelo y el subsuelo. Se colige de lo afirmado por la Corte que si las entidades territoriales tienen competencia sobre el suelo pero al tiempo los entes nacionales son competentes sobre el subsuelo, cuando haya colisión de interés o discrepancias entre el desarrollo de proyectos extractivos se configuraría la tensión referida.

En segundo lugar, queda claro que las competencias de los entes del orden nacional sobre el subsuelo no pueden desconocer las capacidades de los entes territoriales para ordenar el territorio ni la vocación del territorio, ni los derechos e intereses de las comunidades. Más aún, que las entidades del orden nacional no pueden adoptar unilateralmente decisiones en materia del subsuelo sin la participación de quienes se ven afectados o potencialmente afectados por los efectos de esas actividades.

y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política.”

El presente proyecto, satisface ambas exigencias constitucionales fijadas por el alto tribunal en la precitada sentencia toda vez que permite la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan y al tiempo dirimir tensiones entre autoridades nacionales y territoriales. Ambos propósitos en desarrollo del principio de subsidiariedad.

Adicionalmente la Corte Constitucional a través de la sentencia **C-273 de 2016** regló que ni el congreso, ni las agencias del Estado pueden prohibir a las entidades territoriales ordenar el suelo.

“es necesario tener en cuenta que el ámbito de las competencias de las entidades territoriales y de la Nación no está compuesto por un conjunto de materias aisladas entre sí. Por el contrario, las materias que componen los respectivos ámbitos de competencias de las entidades en los distintos órdenes se traslapan y están relacionadas de manera inescindible.

(...)

Es así como pese a la propiedad estatal de los recursos mineros, (...) la Corte también ha dicho que en el ejercicio de esta competencia, la ley no puede desconocer los derechos y demás garantías, de aquellas personas, grupos y entidades a quienes pueda afectarlos la explotación de los recursos naturales. En la Sentencia C-891 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería), la Corte estudió una demanda contra algunas disposiciones de la misma Ley 685 de 2001, una de las cuales reafirmaba la disposición constitucional sobre la propiedad de los recursos mineros, pues desconocía los derechos de los pueblos indígenas sobre los mismos. Si bien la Corte desechó el cargo, sí advirtió que la titularidad de ese derecho en cabeza del Estado no puede ir en desmedro de los derechos y garantías de las que gozan, no sólo los pueblos indígenas, las demás comunidades y los individuos, sino las entidades públicas de diverso orden.”

De manera concomitante, en la providencia **C-035 de 2016** la Corte Constitucional sostuvo que si bien la constitución le otorga competencias a

El desarrollo del principio de subsidiariedad mediante los mecanismos de participación que se pretende crear en este proyecto lograr solventar esa tensión de competencias.

Por otro lado, en Sentencia **C-298 de 2016** la Corte explicó la relación existente entre el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos a tener un ambiente sano, la posibilidad de participar en asuntos que pongan en peligro la garantía de dicho derecho y la regulación sobre emisión de licencias ambientales. Señaló, de acuerdo con la Carta Política, que:

“Según el artículo 79 de la Constitución Política “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

El criterio que ha sostenido la Corte, se ajusta a reconocer que del artículo 79 de la Constitución, se desprende el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. En este sentido, se ha sostenido que la licencia ambiental es un mecanismo jurídico de especial importancia para el cumplimiento del mandato constitucional derivado del artículo 79, dentro de lo cual debe incluirse la garantía de participación de las comunidades durante el eventual trámite de las licencias ambientales, pues el licenciamiento de la intervención en un determinado territorio con posibles consecuencias ambientales, sin lugar a dudas es una de las decisiones que las afectan.

De ahí que en la Sentencia C-746 de 2012, se haya precisado que “En efecto, es la licencia la figura jurídica que permite armonizar los mandatos constitucionales de protección de los recursos naturales, con los contenidos protegidos de los derechos individuales y colectivos previstos en el Texto Superior”. Pues ciertamente, es el proceso de licenciamiento ambiental el espacio en el cual las comunidades o posibles afectados por una intervención, obra, proyecto o actividad que se pretende realizar, tienen la posibilidad de participar y ser escuchados. Motivo por el cual las comunidades se encuentran legitimadas para participar en este tipo de decisiones que puedan afectarlas y como expresión de su deber constitucional,

<p>deben colaborar en la efectiva conservación de los bienes ambientales.”</p> <p>Seguidamente, en la sentencia C-389 de 2016 la Corte Constitucional al valorar la relación entre la minería y la participación advirtió el carácter universal y expansivo de la participación y algunos estándares internacionales que la protegen. Así las cosas explicó que:</p> <p><i>“La participación, según lo ha afirmado la Corte Constitucional tiene un efecto universal y expansivo, es decir, se caracteriza por una ampliación normativa progresiva, lo que explica la posibilidad de que el Legislador cree espacios diversos a los previstos en el texto superior, y las autoridades generen constantemente nuevas instancias de decisión participativa.</i></p> <p>(...)</p> <p>A nivel internacional, el principio 10 de la Declaración de Río reconoce la importancia de la participación ciudadana en asuntos ambientales: <i>“el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.</i></p> <p>El Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por Ley 165 de 1994, en su principio 1° señala que <i>“la elección de los objetivos de la gestión de los recursos de tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad”, el principio 2° establece que “la gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo” y el Principio 12 determina que “en el enfoque por ecosistemas deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas científicas pertinentes”.</i></p> <p>Así las cosas, queda claro que i) la participación debe ser universal y expansiva, de manera que el legislador tiene facultad para incrementar las protecciones existentes, ii) que las garantías a la participación exigen</p>	<p>coordinación, que definen el contenido de la autonomía territorial y su relación con el principio de unidad nacional.</p> <p><i>La participación genera un doble beneficio en el ámbito normativo que nos ocupa. De una parte, la materialización del modelo de democracia participativa establecido en la Carta de 1991 y la eficacia del derecho fundamental de participación. De otra, dota de seguridad jurídica a las personas interesadas en obtener una concesión minera, en la medida en que les permite conocer la recepción del proyecto por parte de los posibles afectados.”</i></p> <p>A su vez, mediante la sentencia SU-133 de 2017 con ocasión de una tutela interpuesta por un grupo de los mineros tradicionales de Marmato, Caldas, la Corte Constitucional reiteró que el desarrollo de proyectos extractivos debe estar antecedida de adecuados espacios de participación y que estos deben garantizarse también con ocasión del desarrollo de esos proyectos, atendiendo a la potencialidad que esos proyectos tienen para afectar a las poblaciones de las zonas en que se desarrollan.</p> <p><i>“La diversidad de escenarios y mecanismos de participación a los que hizo referencia la Carta han sido leídos, en ese sentido, como una manifestación explícita de su propósito de asegurar que los ciudadanos intervengan en el análisis y en la definición de los asuntos que inciden en su vida diaria y en los “procesos políticos que comprometen el futuro colectivo”. La Constitución, ha dicho la Corte, asume que cada ciudadano “es parte activa en las determinaciones de carácter público y que tiene algo que decir en relación con ellas, lo cual genera verdaderos derechos amparados por la Carta Política, cuya normatividad plasma los mecanismos idóneos para su ejercicio”.</i></p> <p>(...)</p> <p>La Sentencia C-366 de 2011 advirtió, hace ya cinco años, sobre el consenso que existía en el derecho constitucional colombiano y el derecho internacional de los derechos humanos acerca de la forma en que la exploración y la explotación minera suele impactar sobre los derechos fundamentales de los pueblos étnicos y sobre la consecuente obligación de consultarlos sobre las medidas legislativas y administrativas relacionadas con el ejercicio de esas actividades.</p>
<p>garantías de acceso a la información, ii) que las decisiones sobre la gestión de los recursos naturales debe quedar en manos de la sociedad, iv) que la participación implica que las decisiones sobre la gestión de los recursos naturales deben estar descentralizadas al nivel más bajo de manera que decidan los más afectados por las medidas.</p> <p>A su vez, la Corte desarrolló el concepto de justicia ambiental, propio de los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la participación en contextos ambientales. Precisó que esas previsiones de justicia ambiental tienen protección de rango constitucional. Así determinó que:</p> <p><i>“el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de justicia distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados por una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio “para el conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación”.</i></p> <p>Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto medio para prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como para promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y visiones plurales del desarrollo que, quizás puedan tornar más compleja, pero sin duda habrán de enriquecer la toma de decisiones ambientales”</p> <p>Finalmente, resaltó los beneficios de la participación:</p> <p><i>“Corte Constitucional ha desarrollado un sólido cuerpo jurisprudencial, en el que se ha defendido la idea de que las decisiones ambientales de importancia, como aquellas relacionadas con el uso, explotación y aprovechamiento del subsuelo no pueden adoptarse de forma centralizada, sino que exigen la participación de los entes territoriales, en desarrollo de los principios de concurrencia, subsidiariedad y</i></p>	<p>Para entonces, no había duda de que la exploración y la explotación de recursos mineros configuraban hipótesis de afectación directa que activaban el deber de agotar los procesos consultivos. Hoy es claro que también la entrega de los contratos de concesión tiene la virtualidad de afectar a los pueblos indígenas y tribales y que, en consecuencia, las comunidades tienen derecho a ser consultadas al respecto.</p> <p>En el ámbito internacional y en el interno se ha entendido, así mismo, que las personas, familias y comunidades potencialmente afectadas por la minería tienen derecho a participar en la adopción de las decisiones relacionadas con la planeación y ejecución de los proyectos, aun si no reivindican una identidad étnicamente diversa. Bajo esa premisa, los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y esta Corte han coincidido en reconocerlas como titulares del derecho a ser informadas sobre los impactos sociales, culturales y ambientales que pueden derivarse de la ejecución de la minería en cualquiera de sus ramas y fases –incluyendo la entrega del contrato de concesión– y del derecho a contar con espacios de participación para pronunciarse sobre el particular de forma activa y efectiva.”</p> <p>La Corte Constitucional reiteró que las protecciones y el alcance a la participación como vía para que las personas más afectadas por los proyectos decidan sobre su ocurrencia y desarrollo se derivan de la característica de nuestro Estado Social de Derecho como uno democrático, participativo, pluralista que además tiene como uno de sus fines principales permitir la participación de las personas en las decisiones que la afectan.</p> <p><i>“La participación ciudadana es uno de los pilares de la Constitución de 1991. De ello da cuenta el hecho de que, tras caracterizar a Colombia como un Estado democrático, participativo y pluralista (C.P. Artículo 1°), haya establecido que uno de sus fines esenciales consiste en facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (C.P. Artículo 2). (...) y condicionó la adopción de ciertas decisiones, como las que afectan el ambiente (C.P. Artículo 79), las que conllevan la explotación de recursos naturales en territorios indígenas (C.P. Artículo 330) y las que involucran la adopción de los planes de desarrollo (C.P. Artículo 342), a que se discutan en un escenario que garantice la participación de los interesados.”</i></p>

<p>Precisó, además, que esas protecciones responden también a estándares interamericanos y correlativas obligaciones del Estado colombiano en materia de derechos humanos:</p> <p><i>“Respecto de la obligación de garantizar el acceso a la información y la disponibilidad de mecanismos de participación efectiva, el informe precisa que se deriva, puntualmente, de los artículos 13 y 23 de la Convención Americana, que, en su orden, consagran los derechos de libertad de pensamiento y expresión y el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos.”</i></p> <p>En consecuencia, la Corte desarrolló siete estándares para la participación real y efectiva que serían retomados con posterioridad en sentencias como la SU-095 de 2018. Así estableció que la participación debía ser efectiva, estar disponible, debe vincular a quienes tradicionalmente han habitado el territorio, debe prever medidas de compensación, debe estar mediada por la buena fe, debe ser adecuada a los estándares internacionales de derechos humanos y específicamente a los estándares interamericanos sobre la participación de las comunidades en la adopción de las decisiones que puedan afectarlas.</p> <p>Es prudente insistir que a criterio del Alto Tribunal, es necesario garantizar que la ciudadanía afectada pueda activa y efectivamente en la definición de los impactos ambientales, culturales y sociales de la minería, en todas sus etapas y ramas.</p> <p>El efecto de estas reglas, además de insistir en que con ocasión de la participación las comunidades pueden decidir sobre los asuntos que las afectan, es que garantizan la inclusión social en la gobernanza del ambiente.</p> <p>En sentencia T-361 de 2017 la Corte resaltó que</p> <p><i>“no pueden existir espacios vedados para la participación ciudadana en las decisiones que afectan a la comunidad. Así, se protege ese derecho en determinaciones de la administración que van más allá de la representación, de la toma de decisiones colectivas mediante mecanismos de participación del artículo 102 superior y de la formulación de acciones constitucionales. Ello sucede en la construcción e implementación de acciones afirmativas, en el ejercicio del control político, en el</i></p>	<p><i>“esta lista no es taxativa, y que el Legislador por potestad constitucional podrá adoptar nuevos mecanismos para permitir la participación ciudadana”</i></p> <p>Sin embargo, luego de reconocer la existencia de diversos mecanismos de participación adujo que en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables esa participación no estaba garantizada. Al respecto señaló:</p> <p><i>“las autoridades estatales competentes en otorgar un título minero o conceder un contrato de concesión, han fortalecido los espacios de participación y socialización en la etapa precontractual y contractual. Igualmente se han garantizado escenarios de concertación con las entidades territoriales, con el fin de que se conozcan los proyectos que se ejecutaran en determinados territorios y se tenga en cuenta los intereses de las autoridades locales. No obstante, estos instrumentos no están regulados adecuadamente mediante leyes estatutarias, ni son lo suficientemente vigorosos y robustos para garantizar la participación efectiva de la comunidad.”</i></p> <p>En mérito de lo expuesto la Corte reconoció la existencia de un déficit de protección constitucional en materia de mecanismos de participación ciudadana en el contexto de la exploración y explotación del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Al respecto insistió:</p> <p><i>“para la Sala es evidente que existe un déficit de protección, porque se desconoce una realidad que desde un enfoque constitucional, requiere un imperativo de atención toda vez que el ordenamiento jurídico colombiano no garantiza legalmente de forma específica la participación de las comunidades que se encuentran ubicadas en lugares donde se desarrollan actividades u operaciones para explorar o explotar RNNR y del subsuelo, y que puedan verse impactadas o afectadas por las mismas, ni un instrumento para que las entidades territoriales, a través de sus autoridades competentes, concurren en la definición, ejecución y seguimiento de las actividades de hidrocarburos y de minería.”</i></p> <p>Indicó que el llamado a suplir ese déficit era el Congreso:</p> <p><i>“La Sala advierte que el Legislador, en el marco de sus competencias de determinar las condiciones para la explotación</i></p>
<p><i>procedimiento de decisiones que restringen derechos fundamentales, o normatividades regulatorias de desarrollo, construcción de políticas sociales o de distribución de recursos etc, es decir, en una participación administrativa. La maximización de la intervención de la población se justifica en que la eficacia de la administración también depende de la materialidad de la participación del pueblo, por eso, ésta debe ser activa, real y efectiva, al punto que no se limita a obtener información sobre los asuntos públicos. La Constitución de 1991 quiso que el ciudadano se apropiara de la satisfacción de sus necesidades, de ahí que entregó amplias facultades a la colectividad con el fin de que su voz fuese escuchada por las autoridades.”</i></p> <p>En la referida decisión la Corte analizó la participación ciudadana en temas ambientales destacando la especial relación que guarda esta temática con el desarrollo del ciudadano en tanto la participación ciudadana como principio se fundamenta necesariamente en el interés por el territorio y lo que rodea al individuo. Así, las decisiones deben ser tomadas en conjunto y con participación de diferentes sujetos, reconociendo que:</p> <p><i>“La participación de la sociedad en materia ambiental es un elemento central para la obtención de un orden justo, puesto que la intervención de las personas es una condición imprescindible para alcanzar la sostenibilidad de los ecosistemas y la distribución equitativa de recursos naturales. El futuro del planeta no puede quedar de manera exclusiva en manos de las personas que se concentran en explotar económicamente el ambiente o en quienes soslayan el carácter finito de este. En realidad, ese destino debe incluir a la comunidad que se ve afectada por ese uso colectivo que debe concientizarse de la conservación de los recursos naturales.</i></p> <p>Finalmente, en la sentencia SU-095 de 2018 la Corte realizó un análisis juicioso sobre la toma de decisiones respecto a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables del subsuelo y cómo deben concurrir las autoridades nacionales y las autoridades territoriales para la determinación y adopción de estas.</p> <p>En la decisión, la Corte enunció los mecanismos de participación ciudadana existentes y además aclaró que</p>	<p><i>de los RNNR (artículo 151 constitucional), regular los derechos fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana (artículo 152 constitucional) y determinar las competencias de entidades territoriales (artículo 151 constitucional), tiene la obligación de definir, en el rango legal adecuado, lo relativo a la creación de un mecanismo o de mecanismos para la participación ciudadana y la coordinación y concurrencia nación territorio en los sectores de hidrocarburos y de minería.”</i></p> <p>En consideración de todo ello, en su cuarta resolutive la sentencia dispuso:</p> <p><i>“EXHORTAR al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio, con fundamento en la parte motiva de esta providencia.”</i></p> <p>Junto con lo anterior esta sentencia fue también relevante, pues consideró que las poblaciones y autoridades locales no tienen poder para vetar los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables toda vez que la propiedad del subsuelo es del Estado.</p> <p>Sin embargo, es indispensable realizar una precisión sobre el alcance de la decisión. En virtud de la SU-095 de 2018 la consulta popular no puede ser el mecanismo de participación en los casos en los que entran en tensión las competencias de las entidades nacionales y territoriales toda vez que su uso quedó restringido a asuntos cuya decisión fuera competencia exclusiva del órgano convocante y de la población llamada a participar.</p> <p>Por ende, tal como lo señalaron los constitucionalistas y la academia en la audiencia pública, la conclusión a la que llegó la Corte Constitucional respecto de la carencia de idoneidad de la consulta popular no implica que la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables no pueda participar y decidir sobre la ocurrencia y desarrollo de esos proyectos. Simplemente supone que debe hacerlo acudiendo a otros mecanismos de participación que son justamente aquellos que el Congreso de la República ha de crear.</p> <p>Defender la idea de que no es posible la participación con carácter decisor en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables refleja una lectura de la sentencia SU-095 de 2018 que no considera plenamente los consolidados desarrollos jurisprudenciales</p>

existentes sobre el ejercicio y alcance de la participación ciudadana en el contexto ambiental y en particular en el de los proyectos que hagan uso de los recursos del subsuelo.

Finalmente, es preciso insistir en que la Corte Constitucional en la precitada sentencia se limitó a considerar los principios de concurrencia y coordinación sin valorar el principio de subsidiariedad. Sin embargo, las demás sentencias enunciadas en este acápite dan cuenta de la relevancia de desarrollar por vía estatutaria este principio como herramienta para garantizar la adecuada participación y decisión ciudadana en lo relacionado con la ocurrencia y desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

3.5. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

La participación como derecho, deber y principio ha sido ampliamente reconocida en el concierto internacional desde hace décadas, tanto en un enfoque general como en un ámbito ambiental. Han sido muchos los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes que, al menos desde 1948, han desarrollado estándares internacionales y han abogado por el reconocimiento, protección y goce efectivo del derecho a participar.

Del desarrollo internacional en la materia es posible concluir que la participación se relaciona con el desarrollo y fortalecimiento del régimen democrático y pluralista. Además, que es determinante para prevenir y solucionar conflictos socio ambientales y para garantizar una gobernanza ambiental acorde con los objetivos de desarrollo sostenible.

En el nivel universal de protección de derechos humanos, la **Declaración Universal de Derechos Humanos** en 1948 reconoció mediante su artículo 21 el derecho de las personas a la participación. A su vez, el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, en 1966, por vía de su artículo 25 consagró la participación como un derecho humano.

En el ámbito interamericano la **Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre** de 1948 y más adelante la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y la **Carta Democrática de la OEA** reconocieron el derecho a la participación como un derecho humano.

El **Convenio 169 de la OIT**, de 1972, que es vinculante para el Estado colombiano, empezó a trazar estándares de protección al derecho a la participación. Entonces, estableció la obligación internacional de los Estados para proteger y garantizar el derecho a la participación de todas las personas

como un medio para proteger otros de sus derechos y su integridad. Además, se reconoció la especial protección estatal debida a los pueblos indígenas y a lo que ocurriera con sus territorios.

De manera más reciente y en materia ambiental el **Acuerdo de Escazú**¹ desarrolla el derecho a la participación, insiste en la importancia de su protección y dispone de estrategias y mecanismos para garantizar el derecho a la participación en contextos ambientales.

A continuación, se mencionarán algunos instrumentos internacionales específicamente relacionados con la protección del ambiente y en los que se ha reconocido la relevancia de la participación. Si bien no son vinculantes, bien por su carácter de *soft law* o por la negativa de Colombia de obligarse a sus disposiciones, igual son relevantes pues reflejan el consenso global en torno a la relevancia de la participación. Se podrían destacar algunos como:

La **Carta Mundial de la Naturaleza** de 1983, reconoció que la participación es un asunto directamente vinculado con la protección ambiental. Más adelante, la **Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible** de 1992 reiteró que la participación es fundamental para la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Además, resaltó que la falta de participación se constituye en un aliciente para la degradación de la naturaleza y para el incremento de la pobreza y la desigualdad. En tercer lugar, vinculó la obligación de los Estados de garantizar la participación con la correlativa obligación de garantizar el acceso al aparato de justicia. Ello es particularmente relevante pues implica que la participación es un derecho que permite gozar efectivamente de otros derechos.

De manera más reciente, en 2002 la **Declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible** explicó que el desarrollo sostenible requiere procesos de decisión basados en la participación como medio necesario para favorecer la consolidación de sociedades más equitativas y sostenibles con el ambiente. A su vez, en 2012 mediante las conclusiones a la **Conferencia Río +20**, publicadas bajo un documento denominado “El futuro que queremos”, se reconoció internacionalmente que la participación está también relacionada con el goce efectivo del derecho de acceso a la información. En consecuencia, se afirmó que la precariedad o inexistencia en la información, dificulta la participación y la incidencia de la población en la adopción de políticas y

¹ Es preciso advertir que el Acuerdo pese a ser firmado aún no ha sido ratificado por Colombia por lo que para nuestro Estado no es aún vinculante. En todo caso se incluyó como un instrumento vinculante en tanto tiene toda la potencialidad de serlo en caso de ser ratificado.

programas relacionados con el desarrollo sostenible y la destinación de recursos naturales.

Finalmente, en 2015, a través de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, se acordó avanzar internacionalmente en materia ambiental hacia la garantía de la participación reiterando su relación con el acceso a la información y a la justicia. Ello como requisito para que la participación pudiera ser efectiva y darse en todos los niveles de decisión. Asimismo, se notó la necesidad de que los estados acompañaran más decididamente la participación de poblaciones históricamente marginadas como las mujeres y las poblaciones étnicas. En similar dirección se redactó en 2015 el **Acuerdo de París** y la **Resolución 2/25 de la ONU sobre medio ambiente** en 2016 que fungió como el referente más cercano a la expedición del Acuerdo de Escazú.

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1 CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO EN EL QUE SURGE LA NECESIDAD DE APROBAR ESTE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN FRENTE A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.

A. La política extractiva y los conflictos socio ambientales en Colombia.

En el marco de la adopción del modelo económico neoliberal en la década de 1990, con su énfasis en las ventajas comparativas, así como el aumento de la demanda mundial de materias primas y energía -propiciado por el crecimiento acelerado de China y otras economías emergentes-, se gestó en América Latina un modelo económico basado en el extractivismo, es decir, en la explotación intensiva y a gran escala de bienes comunes de la naturaleza.

El término “extractivismo” se relaciona con la reprimarización económica, toda vez que implica un modelo de desarrollo anclado en la explotación y exportación de materias primas, pero también le es inherente una dinámica de expansión territorial y la apropiación privada y violenta de los recursos naturales, generando múltiples conflictos socioambientales.

En Colombia, la reconfiguración neoliberal de la economía reflejada en la apertura económica de 1991, impulsó una transformación en la política económica orientada a atraer la inversión extranjera directa (IED) y a minimizar el papel del Estado en el control de los recursos naturales (Vélez-Torres/Ruiz-Torres 2015: 4). Esto tuvo un impacto significativo en la

extracción de minerales y materias primas, provocó el aumento del capital minero y desencadenó un boom minero-energético en el país.

El auge y expansión del sector minero-energético aumentó proporcionalmente los conflictos socioambientales, ocasionados por la apropiación y explotación de los territorios, la contaminación de la tierra, el agua y otros elementos de la naturaleza. A su vez, promovió la intensificación de la competencia por estos recursos naturales, entre otros factores, transando un conflicto asimétrico entre actores privados, principalmente empresas multinacionales, y comunidades afectadas, en su mayoría rurales.

Estos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza, el ambiente, así como el desarrollo y la democracia (Svampa 2019: 32; Pérez-Rincón 2014: 4). El modelo de desarrollo extractivo también ha generado altos niveles de violencia, expresada comúnmente en el desplazamiento forzado de comunidades rurales que habitan zonas estratégicas para la minería o los hidrocarburos. Según Sankey (2013: 26), el 74% de las violaciones de los derechos humanos están ocurriendo en regiones caracterizadas por la actividad minera, que actualmente representan 32% del territorio de Colombia.

Entre enero del 2001 y diciembre del 2011, el Programa para la Paz del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP 2012) registró 274 acciones sociales asociadas a conflictos sobre actividades mineras y de hidrocarburos. La ausencia de mecanismos institucionales para la participación y consulta de las comunidades afectadas por proyectos extractivos, así como los obstáculos de acceso a la justicia para la resolución de los conflictos, llevó a las organizaciones sociales a hacer uso de la consulta popular como estrategia de protesta e impugnación ante la imposición de megaproyectos minero-energéticos en los territorios. No obstante, el Gobierno nacional y las empresas han desconocido los resultados de las consultas populares, argumentando que la minería y los hidrocarburos son de utilidad pública e interés social, y que las decisiones relacionadas con estos asuntos deben ser tomadas por el Gobierno central (Dietz 2018).

B. El boom minero-energético en Colombia.

Desde principios de la década del 2000 se proyectó a Colombia como un “País Minero” y se implementaron una serie de reformas institucionales para atraer la inversión extranjera e impulsar el sector minero-energético como eje fundamental del crecimiento económico. Mediante la Ley 685 de 2001 se aprobó el nuevo Código de Minas que declaró la minería como actividad de interés público y consolidó el rol del Estado como facilitador y fiscalizador de

<p style="text-align: center;">***** CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>los proyectos mineros, suprimiendo las empresas mineras estatales para en su lugar incentivar la inversión privada (Sankey 2015: 115).</p> <p>Con ese objetivo, se reestructuró el reparto de la renta minera, disminuyendo paulatinamente regalías e impuestos, se eliminaron los requisitos ambientales para la fase de exploración y se estableció un régimen fiscal que impuso unos requisitos mínimos en términos de costos sociales y ambientales. Estas reformas, que se presentaron como transitorias para estimular la inversión, a la postre se tornaron permanentes.</p> <p>Como resultado de esta política, la inversión extranjera en minería aumentó considerablemente; de 466 millones de dólares en 2002 pasó a 4.500 millones de dólares en 2010. En este mismo periodo, la producción de carbón aumentó en un 80%, la de petróleo en un 36%. Sólo entre 2006 y 2010 la producción de oro aumentó un 340% (Vélez-Torres 2013: 72). En el año 2014, dos tercios de todas las exportaciones procedían del sector minero y petrolero. En 2013, estos sectores se posicionaron casi a la par del sector industrial, con una participación del 12% en el PBI (Dietz 2018; (Sankey 2015:131).</p> <p>Asimismo, se multiplicaron las concesiones mineras. Al finalizar el año 2010, el 60% del territorio colombiano estaba bajo concesión minera o con solicitudes pendientes (Sankey 2015: 130). A 2011, cerca de 8,4 millones de Ha. se habían concesionado para minería y en 2012 se declararon dos Áreas Estratégicas Mineras para su concesión a inversores internacionales, sobre una superficie total de 20,5 millones de Ha.</p> <p>A corte de marzo de 2021, la Agencia Nacional de Minería reportó que se encuentran vigentes 7.258 títulos mineros que abarcan un área de 3,3 millones de Ha. y que equivalen al 2,91% del territorio nacional, y se encuentra evaluando otras 8.306 solicitudes de títulos.</p> <p>Adicionalmente, el Gobierno Duque le dio un nuevo impulso a las ahora denominadas Áreas Estratégicas de Reserva Minera declarando y delimitando cinco polígonos bajo esta figura en un área de 6.559 Ha. en los departamentos de Cesar y La Guajira. En materia de hidrocarburos, según el Mapa de Tierras de la ANH, a corte de junio de 2021, 14 millones de Ha. se encontraban en exploración, 2,3 millones de Ha. en producción o explotación y 5,2 millones de Ha. en evaluación técnica. En conjunto, representan el 19% del territorio nacional.</p> <p>C. Conflictos socioambientales como consecuencia del boom minero-energético.</p>	<p style="text-align: center;">***** CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>Estos conflictos oponen actores asimétricos. Las compañías privadas tienen mayor acceso al poder político y mayores ingresos económicos, lo que les permite influir en las decisiones sobre la gestión y el uso de los territorios en beneficio propio (Pérez-Rincón 2014: 4). En la realización de sus actividades económicas, se benefician no solo de las regulaciones estatales sobre el uso de la tierra, sino también de la presencia de las fuerzas armadas del Estado y de los grupos paramilitares para asegurar sus proyectos extractivos (CENSAT 2010: 51).</p> <p>4.2. CONTEXTO LEGAL EN EL QUE SURGE LA NECESIDAD DE APROBAR ESTE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN FRENTE A LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.</p> <p>A. Las consultas populares como mecanismo de participación ante proyectos extractivos.</p> <p>Ante la imposición del modelo extractivo sobre los territorios y la correlativa ausencia de escenarios de participación en la implementación de proyectos mineros y petroleros, las comunidades acudieron al mecanismo de consulta popular como una alternativa legal para democratizar estas decisiones. Entre 2013 y 2018 se realizaron diez consultas populares en igual número de municipios del país² y otras 54 habrían quedado pendientes de realizarse,³ lo que demuestra la magnitud de la exigencia popular de participación y la oposición a este tipo de proyectos.</p> <p>La consulta popular es un mecanismo de participación directa del pueblo estatuido en el artículo 103 de la Constitución Política. La Ley Estatutaria 134 de 1994, que reguló los mecanismos de participación ciudadana, la define como la <i>“institución mediante la cual, una pregunta, de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto”</i>.</p> <p>Las Consultas Populares sobre actividades minero-energéticas se realizaron con fundamento en un marco normativo según el cual, al municipio, como</p> <p>² En el año 2013 se realizaron consultas en los municipios de Piedras (Tolima) y de Tauramena (Casanare). En el año 2017 se realizaron siete consultas populares en los municipios de Cabrera (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Cumaral (Meta), Arbeláez (Cundinamarca), Pijao (Quindío), Jesús María y Sucre (Santander). En el 2018 se realizó la última consulta en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca).</p> <p>³ Disponible en: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/consultas-mineras-pendientes-contra-minas-y-energia-172302.</p>
<p>El modelo extractivista, basado en la apropiación y explotación privada de los recursos naturales, ha conllevado nuevas formas de despojo y desplazamiento de comunidades locales. Las empresas privadas capitalizan los beneficios mientras que las comunidades pierden sus medios de vida.</p> <p>Pérez-Rincón (2015) realizó un inventario de los conflictos socioambientales en Colombia encontrando 95 conflictos a 2014. Al analizar su periodización, concluye que hay una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y la apertura económica y la desregulación de la mayor parte de las actividades productivas y extractivas por parte del Estado. Sólo el 21% de los conflictos inventariados se generaron antes de 1994, mientras que el periodo comprendido entre 2002 y 2010, que coincide con el boom minero energético, concentra el 58% de todos los conflictos analizados. El sector extractivo concentra buena parte de los conflictos socioambientales; actividad minera concentra el 34% de los conflictos, destacándose el oro con el 29% del total, mientras que la energía fósil acumula el 20% de los conflictos, donde el carbón representa el 13% del total.</p> <p>También se identificó que los impactos sociales recaen principalmente sobre los grupos humanos más pobres y marginalizados; campesinos (23%), indígenas (14%), pequeños pescadores (10%) pequeños mineros (7%) y comunidades afrodescendientes (6%), entre los más afectados (Pérez-Rincón 2015: 80).</p> <p>La afectación diferenciada sobre comunidades étnicas y rurales, además de evidenciar un racismo ambiental, imprime unas particularidades a la conflictividad, en la medida en que estas comunidades, por su especial relación con la tierra y el territorio, dependen de los recursos del medio para su sustento de vida, pero también de su permanencia en el territorio depende su supervivencia cultural, ya sea por la conexión espiritual y ancestral con la tierra en el caso de las comunidades étnicas, o porque forma parte de su identidad cultural, como es el caso de las comunidades campesinas o pesqueras.</p> <p>De otro lado, la expansión de las actividades extractivas en el sector minero y de hidrocarburos eleva la presión sobre el uso del suelo, crea dificultades para mantener la seguridad alimentaria en las zonas rurales y genera una mayor competencia por las tierras agrícolas, lo que afecta el derecho a la soberanía alimentaria (Garay Salamanca 2013: 59). Asimismo, estas actividades se llevan a cabo en zonas caracterizadas por su riqueza en la diversidad de ecosistemas como humedales, bosques, ciénagas, manglares, etc. por cuya protección luchan muchos grupos sociales que, frecuentemente, resultan en conflictos con actores privados, estatales o paraestatales.</p>	<p>entidad fundamental de la división político administrativa, le corresponde ordenar el desarrollo de su territorio (CP. Art. 311) y reglamentar los usos del suelo (CP. Art. 313.7). En armonía con lo anterior, la Ley 136 de 1996, sobre la organización y funcionamiento de los municipios, disponía que cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza minera o de otro tipo, amenazarán con cambios significativos en el uso del suelo y a una transformación en las actividades tradicionales del municipio, era obligación realizar una consulta popular.</p> <p>Asimismo, las consultas fueron avaladas por la jurisprudencia del máximo tribunal constitucional, que entre 2013 y 2017 emitió importantes sentencias, entre ellas la T-135 de 2013, C-123 de 2014, T-445 de 2016, C-273 de 2016, C-035 de 2016, C-389 de 2016, y SU-133 de 2017, las cuales ampliaron progresivamente el alcance y contenido del derecho a la participación ambiental de los ciudadanos y la autonomía territorial de los municipios.</p> <p>La sentencia C-123 de 2014 concluyó que la Nación no puede ser el único nivel competencial involucrado en la toma de decisiones trascendentales para aspectos principales de la vida local y, por tanto, los municipio y distritos deben participar, de manera activa y eficaz, en el proceso de decisión sobre si se realiza o no minería en su territorio.</p> <p>La sentencia T-445 de 2016 concluyó que la participación de los municipios habilita –incluso– la prohibición de actividades mineras en su jurisdicción, bajo el entendido que suelo y subsuelo, pese a tener regímenes jurídicos distintos, son indisolubles en la práctica y resultaría ilógico que el municipio pueda regular el uso del suelo y ordenar actividades productivas de su territorio, sin verse afectado por las actividades de exploración y explotación minero-energética que sean autorizadas por entidades del nivel central.</p> <p>En la sentencia T-361 de 2017, la Corte Constitucional hizo una prolífica caracterización del principio democrático y del principio participativo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, así como del contenido y alcance del derecho genérico a la participación y del derecho singular a la participación en materia ambiental, que tiene carácter fundamental.</p> <p>La Corte hizo un recuento de las normas superiores (artículos 2 y 79), de la jurisprudencia constitucional (entre otras, las sentencias C-030 del 2008, C-366 del 2011, T-348 de 2012, C-253 del 2013, T-294 de 2014 y T-660 de 2015) y las normas del derecho internacional (tratados firmados por Colombia, normas obligatorias por remisión legal y documentos no vinculantes que sirven como parámetro de interpretación) que reafirman la</p>

obligación del Estado de garantizar el derecho a la participación ambiental en cabeza de las comunidades.

Haciendo una síntesis de dichos instrumentos, se destacan como elementos esenciales del derecho a la participación ambiental: (i) el acceso a la información, (ii) la participación pública y deliberada de la comunidad; y (iii) la existencia de mecanismos administrativos y judiciales para la defensa de los anteriores contenidos normativos.

B. Obligación del Congreso de la República de suplir el déficit de participación frente a proyectos extractivos.

Las consultas populares fueron utilizadas hasta el año 2018 cuando se profirió la sentencia SU-095 de 2018. Allí, la Corte Constitucional unificó criterios frente a las competencias de la Nación y de las entidades territoriales con relación a la explotación del subsuelo y los recursos naturales no renovables, indicando que ninguno tiene competencias absolutas en la materia y, por tanto, debe darse aplicación al artículo 288 constitucional que define los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. En línea con lo anterior, concluyó que la consulta popular no es el mecanismo idóneo para dar aplicación a estos principios y no puede utilizarse para definir si en un territorio se realizan o no actividades de exploración o explotación minera-energética.

No obstante, con el objetivo de no desamparar el derecho fundamental a la participación y el principio de democracia participativa, la Corte también analizó si “i) los procedimientos de concesión de bloques de hidrocarburos y del contrato único de concesión minera;” y “ii) los actuales instrumentos ambientales y los mecanismos de participación existentes para la explotación del subsuelo y de RNNR”, cumplen con los postulados constitucionales.

En materia de hidrocarburos, la Corte identificó que “los trámites previstos para la determinación, clasificación, delimitación y/o regulación de áreas susceptibles de asignación para exploración y explotación de hidrocarburos (...) no establecen un mecanismo de participación ciudadana en el que las comunidades ubicadas en las zonas de operaciones de exploración y explotación del subsuelo y de RNNR puedan contar con información, presentar sus inquietudes o manifestar su oposición a proyectos del sector”. Por tanto, concluye que “no se evidencia una regulación específica que dé cuenta de la implementación vigorosa de los principios de democracia participativa, (artículos 1,40, 79, 130, 105 y 95 Constitucionales)”.

En materia ambiental, la Sala observó que:

“i) a lo largo del proceso de licenciamiento ambiental se observan diferentes momentos en los que se exige la socialización del proyecto; ii) se contemplan mecanismos de participación ciudadana cuyos resultados son insumos para la autoridad ambiental, pero no un factor de incidencia en la decisión; iii) las visitas de campo al área que se pretende explotar, están sujetas a la discrecionalidad de las autoridades ambientales competentes”.

Por tanto, concluye que:

“los mecanismos participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio existentes no son suficientes para garantizar los postulados constitucionales. Ello explica la razón por la cual las comunidades se han visto avocadas a utilizar la consulta popular, como forma de expresar sus inquietudes, pero que como se dijo, no resulta ser el mecanismo idóneo”.

Del análisis expuesto, la Corte encuentra que existe un déficit de protección constitucionalmente inadmisibles, “porque se desconoce una realidad que desde un enfoque constitucional, requiere un imperativo de atención toda vez que el ordenamiento jurídico colombiano no garantiza legalmente de forma específica la participación de las comunidades que se encuentran ubicadas en lugares donde se desarrollan actividades u operaciones para explorar o explotar RNNR y del subsuelo, y que puedan verse impactadas o afectadas por las mismas”.

En esa medida, señaló que es el Legislador quien, en el marco de sus competencias de determinar las condiciones para la explotación de los RNNR (CP. Art. 151) y de regular los derechos fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana (CP. Art. 152), tiene la obligación de definir, en el rango legal adecuado, la creación de uno o varios mecanismos para la participación ciudadana en los sectores de hidrocarburos y minería.

Para tal efecto, en la sentencia SU-095 de 2018 se dispusieron una serie de criterios para la definición de dichos mecanismos de participación, entre los que se encuentran: 1) participación ciudadana y pluralidad; 2) Enfoque Territorial; 3) Legitimidad y Representatividad; 4) Información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; 5) Desarrollo sostenible; 6) Diálogo, comunicación y confianza; 7) Respeto, protección y garantía de los derechos humanos; 8) Buena fe. Además, el numeral cuarto de la decisión ordenó de manera perentoria la consagración de dichos mecanismos en los siguientes términos: “CUARTO. - EXHORTAR al Congreso de la República para que en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación

territorio, con fundamento en la parte motiva de esta providencia” (subrayado fuera del texto).

4.3. RESPECTO DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO

La Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina jurídica reconocen que la participación es, a la vez, un derecho fundamental, un deber, un valor y un principio constitucional que resulta axial al constitucionalismo colombiano y por ende al modelo de sociedad y de régimen político al que aspiramos. Esto, en la medida en que su garantía permite el desarrollo y fortalecimiento del régimen democrático.⁴

En materia ambiental se ha reconocido que garantizar la participación previene, en mayor medida, la ocurrencia de conflictos ambientales, especialmente en lo relacionado con el aprovechamiento de recursos naturales no renovables. A su vez, que en contextos donde existen esos conflictos, la participación puede coadyuvar a darles solución.⁵

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido en forma reiterada y especialmente de manera inequívoca en la sentencia SU-095 de 2018 que en Colombia existe un déficit de protección al derecho fundamental a la participación en el escenario constitucional puntual de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

La Corte expresó justamente que ese déficit iba en desmedro del régimen democrático, de los principios esenciales y fundantes de nuestra carta política y promovía la creación y complicación de conflictos ambientales.

En consideración a ello, exhortó al Congreso de la República para que legislara sobre la materia, creando o adaptando uno o varios mecanismos de participación de manera que se garantizara ese derecho en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

La más importante justificación de este proyecto es entonces la necesidad imperiosa y urgente de solventar ese déficit de protección al derecho a la participación en el contexto señalado. Solucionar ese vacío normativo existente y el correlativo déficit de protección implica dar cumplimiento a la orden que la Corte Constitucional le dio al Congreso frente al particular. Es importante considerar que esa orden fue dada hace casi cuatro años, mediante la sentencia SU-095 de 2018. Que el Congreso atienda el llamado

⁴ Rodríguez, G. (2021) *Yo participo, tu participas, otros deciden: participación ambiental en Colombia*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung. Foro Nacional Ambiental. Disponible en: <https://foronacionalambiental.org.co/publicaciones/detalle/participacionrodriguez/>

⁵ Ibid.

de la Corte para legislar en la materia refleja una actitud respetuosa por parte del legislativo, no solo frente al Alto Tribunal Constitucional, sino principalmente frente a la ciudadanía que demanda la expedición de esta norma y comporta el desarrollo del principio de colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público en Colombia.

Si algo de aquello fuera poco, es claro que este proyecto de ley, y esta regulación estatutaria del derecho fundamental a la participación en contextos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, aboga por el fortalecimiento de la democracia, por la inclusión social de comunidades e individuos histórica y estructuralmente marginados y excluidos de las decisiones públicas que las afectan. Además, de acuerdo con Rodríguez⁶ garantizar la participación con capacidad de incidencia en favor de las comunidades en el contexto señalado permite reducir los conflictos ambientales y así propender por la materialización de otros derechos y principios constitucionales como la paz y la convivencia pacífica.

Finalmente, la realidad de varias comunidades a lo largo y ancho del país con relación al desarrollo de proyectos mineros y de hidrocarburos reflejan el déficit de participación efectiva que notó la Corte en la SU-095 de 2018 y que actúa en desmedro de la población civil actual y de las generaciones futuras.

Por poner algunos ejemplos, tal es el caso de la comunidad de El Hatillo en la zona carbonífera del Cesar, de Puerto Wilches en Santander con relación al fracking, del suroeste antioqueño con relación a la minería de oro, cobre y platino. Todos esos ejemplos tienen en común la existencia de comunidades que se oponen a los proyectos de exploración y explotación pero que no encuentran canales efectivos para que sus posiciones, intereses, deseos y necesidades hagan parte de las decisiones relacionadas con el desarrollo y condiciones de operación de esos proyectos extractivos. Además, a la falta de canales efectivos para la participación e incidencia en los procesos de toma de decisión sobre el desarrollo de los proyectos extractivos se suma un ambiente de inseguridad y riesgo de muerte por ejercer sus liderazgos ambientales y abogar por el fortalecimiento de la participación.

La situación general de los líderes ambientales en Colombia refleja la necesidad de desarrollar instrumentos normativos que garanticen y suplan el déficit de protección constitucional que afecta a quienes pretenden ejercer su derecho a participar en contextos ambientales.

⁶ Ibid.

De acuerdo con el informe *Defendiendo el mañana*, de Global Witness⁷, para 2020 Colombia fue el país en el mundo más peligroso para los líderes ambientales con una lamentable cifra de 64 líderes asesinados solo durante el año 2019. Para poner en perspectiva esa cifra conviene mencionar que en ese mismo año fueron asesinados en todo el mundo 212 líderes ambientales. Ello implica que casi la tercera parte del total de seres humanos que fueron asesinados en 2019 por defender el ambiente habitaban y ejercían su liderazgo en Colombia.

Temper⁸ advierte que los activistas ambientales tienden a sufrir mayores amenazas, intimidaciones y homicidios cuando sus actividades de liderazgo se dirigen contra el desarrollo de proyectos extractivos de recursos naturales no renovables. A su vez, Butt y otros⁹ advierten que entre 2015 y 2017 Colombia fue el país del mundo en el que estuvieron en mayor riesgo los líderes indígenas que ejercen liderazgo por el ambiente.

Las amenazas y homicidios de líderes ambientales desincentivan la participación en los procesos relacionados con toma de decisiones sobre proyectos extractivos. Además, de acuerdo con García y otros¹⁰ estos ataques a líderes comunitarios ambientales afectan el tejido social de las comunidades a las que pertenecen y lesiona su capacidad de movilización social y agencia. Los mismos autores señalan la importancia de adoptar instrumentos de política que protejan y aboguen por garantizar la participación en condiciones de seguridad de los líderes ambientales.

En el contexto reciente de los procesos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en Colombia se ha evidenciado, en conjunto con el déficit de protección a la participación, la vulnerabilidad y falta de garantías de seguridad para que los líderes ambientales desarrollen su tarea. A la preocupante cifra de líderes ambientales asesinados en 2019 se suman otras experiencias concretas. Por ejemplo, en febrero del 2021 diferentes bancadas del Congreso de la República expresaron su preocupación por una serie de amenazas de muerte e intimidaciones que habían recibido jóvenes

⁷ Global Witness. (2020). Informe de Global Witness revela que Colombia lidera cifras de asesinados contra personas defensoras en 2019. Recuperado de: <https://www.globalwitness.org/es/blog-es/colombia-leads-number-killing-2019-global-witness-reports-es/>

⁸ Temper L., Shmelev S. (2015) Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the E.J. Atlas. *Journal of political ecology* 22.

⁹ Butt N., Lambrick F., Menton M., Renwick A. (2019) The supply chain of violence. *Nature Sustainability* 2.

¹⁰ García L.C., Ribeiro D.B., de Oliveira Roque F., Ochoa-Quintero J.M., Laurance W.F. (2017) Brazil's worst mining disaster: Corporations must be compelled to pay the actual environmental costs. *Ecological Applications* 27.

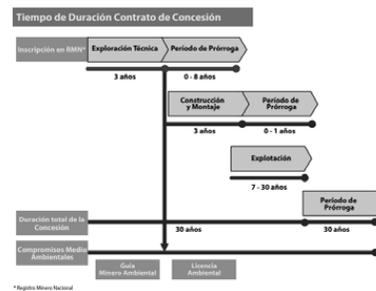
4.5 RESPECTO DE LAS ETAPAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. LOS CASOS MINEROS Y DE HIDROCARBUROS.

EN EL CONTEXTO MINERO

Toda persona (natural o jurídica) nacional o extranjera que cuente con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y las respectivas autorizaciones ambientales puede llevar a cabo actividades mineras en Colombia¹⁴.

El título minero es el contrato de concesión, el cual es necesario para constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal. Así, el contrato otorga la facultad de efectuar, dentro de la zona concedida, los estudios, trabajos y obras para establecer la existencia de minerales objeto del contrato y para explotarlos de acuerdo con los principios, reglas y criterios propios de las técnicas de geología e ingeniería de minas.¹⁵

El contrato de concesión se pacta por un término de acuerdo con la solicitud del proponente y la ley prevé que podrá ser máximo por 30 años. Se desarrolla en tres etapas: 1. Exploración; 2. Construcción y montaje; 3. Explotación.



Dentro de las etapas de estudios geológicos la primera es la prospección minera. De acuerdo con el Ministerio de Minas, la prospección minera es el estudio superficial de una zona, a través del cual se busca determinar áreas

¹⁴ Agencia Nacional de Minería. (2015) Cartilla de Minería. Recuperado de: https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/cartilla_de_mineria_final.pdf

¹⁵ Agencia Nacional de Minería. (s.f.). Título Minero. Recuperado de: http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/titulo_minero.pdf

líderes del municipio de Puerto Wilches, en Santander, que se oponían a los pilotos para hacer fracking en su territorio.¹¹

A su vez, durante la última década, integrantes de las comunidades de la zona carbonífera en el departamento del Cesar reportaron que recibieron amenazas por su participación en procesos decisivos vinculados con el desarrollo de los proyectos mineros en la zona. Además, advirtieron que ciertos líderes que defendían el territorio y se oponían a la actividad minera han sido asesinados. Reportaron que por cuenta de su activismo en torno a los procesos de reasentamiento ocasionalmente aparecen hombres en moto y pasamontañas recorriendo las comunidades e intimidando a la población¹². Por otra parte, aseguraron que quienes se han manifestado en paros cívicos para exigir mejores condiciones de vida han sido estigmatizados¹³.

Tal como se desprende de desarrollos normativos como el Acuerdo de Escazú, y de las experiencias anteriormente referidas, es claro que la protección y seguridad de los líderes ambientales está estrechamente relacionada con garantizar mecanismos y escenarios para que hagan efectivo su derecho a la participación en contextos ambientales. Por el contrario, la inseguridad, las amenazas y la persecución en su contra desincentivan su participación y la de sus comunidades.

Es entonces necesario desarrollar instrumentos normativos como el adoptado por este proyecto de ley para profundizar y concretar espacios y mecanismos territoriales de participación en contextos ambientales y en el marco del desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. El andamiaje institucional y el desarrollo vigilado y constante de la participación constituye una garantía de seguridad para los líderes ambientales con la que hoy no cuentan.

¹¹ Infobae. (16/02/21). Amenazan a jóvenes que se oponen al proyecto piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. Recuperado de: <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/16/amenazan-a-jovenes-que-se-oponen-al-proyecto-piloto-de-fracking-en-puerto-wilches-santander/>

¹² Informe conjunto de misión a las veredas El Hatillo, y Plan Bonito (El Paso), y Boquerón (La Jagua de Ibirico) en el departamento del Cesar. Marzo 5 al 8 de 2013. Programa Mundial de Alimentos, oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia OCHA.

¹³ Transformaciones territoriales en la comunidad de El Hatillo. Un recorrido por los impactos de la minería de carbón. Comité de Concertación de la Vereda El Hatillo Pensamiento y Acción Social - PAS Grupo de Trabajo Suiza Colombia - ASK Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz - CINEP/PPP. Bogotá, Colombia. 2013.

de existencia de minerales. De acuerdo con el artículo 40 del código de minas, dentro de la prospección minera se incluyen métodos como la identificación de afloramientos, la cartografía geológica, los estudios geofísicos y geoquímicos y la investigación superficial, en áreas no sujetas a derechos exclusivos. Este procedimiento no requiere título minero a diferencia de otras actividades mineras.

Una vez finalizada la etapa de prospección minera, se inicia la siguiente fase a través del contrato de concesión el cual de acuerdo con el artículo 45 del Código de Minas es aquel contrato que "se celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse dentro de una zona determinada y para explotarlos en los términos y condiciones establecidos en este Código."

1. Trabajos de exploración

Dentro de los 3 meses después de la suscripción del contrato de concesión se debe iniciar la etapa de exploración técnica, en la cual se llevan a cabo los trabajos, estudios y obras necesarios para establecer y determinar las características de los minerales que se contrataron, su ubicación, calidad y cantidad explotable, viabilidad de la extracción y el impacto ambiental que generaría esta.

La fase de exploración puede durar hasta 3 años y se puede solicitar hasta cuatro prórrogas sucesivas de 2 años para un máximo 11 años. Una vez esta fase finalice se debe realizar la delimitación y devolución de áreas, es decir que se debe establecer con precisión el espacio donde se va a realizar la explotación, al área que no va a ser utilizada, las obras requeridas y las demás características que integran el Programa de Trabajo y Obras. El Plan de Trabajo es el informe final de la fase de exploración que suministra la base técnica, logística, económica y comercial para tomar la decisión de invertir y desarrollar un proyecto minero.

Fases de la etapa de exploración:

- Fase I. Exploración Geológica de Superficie.

En esta fase se realizan estudios y caracterizaciones geológicas superficiales de una zona determinada y permiten establecer los sectores con las mejores manifestaciones o indicios geológicos que indican la presencia de una sustancia mineralizada y de proponer los sitios específicos donde la misma

sustancia pueda ser evaluada mediante la aplicación de técnicas directas o indirectas.

• Fase II. Exploración Geológica del Subsuelo

Esta fase busca delimitar el depósito potencialmente económico, con estimativos más específicos de tamaño y contenido mineral, definiendo el verdadero potencial geológico minero del yacimiento.

• Fase III. Evaluación y Modelo Geológico.

Con los resultados obtenidos en las fases previas se define el verdadero potencial del yacimiento y se da inicio a la planificación y diseño del Programa de Trabajos y Obras (PTO).

• Fase IV. Programa de Trabajos y Obras.

Se realiza el Programa de Trabajos y Obras (PTO). Este PTO deberá presentarse de manera simultánea con el Estudio de Impacto Ambiental, ante las autoridades competentes, y será la base del otorgamiento de la Licencia Ambiental, requisito indispensable para pasar a la siguiente etapa del contrato de concesión: Construcción y Montaje.

HITOS DE LA FASE DE EXPLORACIÓN
<input type="checkbox"/> Duración de 3 años con posibilidad de prórroga hasta por un término total de 11 años
<input type="checkbox"/> Delimitación y devolución de áreas
<input type="checkbox"/> Zonas de exploración adicional
<input type="checkbox"/> Presentación del P.T.O
<input type="checkbox"/> Presentación del estudio de impacto ambiental
<input type="checkbox"/> Presentación de póliza minero ambiental
<input type="checkbox"/> Pago de canon superficario
<input type="checkbox"/> Presentación de F.B.M
<input type="checkbox"/> Consulta Previa

2. Construcción y Montaje¹⁶

Esta fase es esencialmente para preparar todo lo necesario para dar inicio a la etapa de explotación. Las construcciones, instalaciones y

¹⁶ Agencia Nacional de Minería. (s.f). Etapa de construcción y montaje. Recuperado de: http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/cons_montaje.pdf

montajes deben tener las características, dimensiones y calidades señaladas en el Programa de Trabajos y Obras (P.T.O) aprobado. Sin embargo, el concesionario puede realizar cambios y adiciones necesarios que deberá informar previamente a la Autoridad Minera y a la Ambiental.

La duración de esta etapa es de tres años y puede prorrogarse por un año más; se da inicio a esta segunda etapa una vez se ha aprobado el Programa de Trabajos y Obras y el Estudio de Impacto Ambiental.

HITOS DE LA FASE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
<input type="checkbox"/> Duración de 3 años con posibilidad de prórroga hasta de 1 año
<input type="checkbox"/> Cumplimiento del P.T.O
<input type="checkbox"/> Presentación de F.B.M
<input type="checkbox"/> Licencia Ambiental
<input type="checkbox"/> Explotación Anticipada
<input type="checkbox"/> Presentación de póliza minero ambiental
<input type="checkbox"/> Pago de canon superficario

3. Los trabajos de explotación¹⁷

La explotación es el conjunto de operaciones que tienen por objeto la extracción o captación de los minerales yacientes en el suelo o subsuelo del área de la concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de los montajes y de la infraestructura. El acopio y el beneficio pueden realizarse dentro o fuera de dicha área.

Para realizar trabajos de explotación minera se requiere una licencia minera la cual será otorgada de acuerdo a la clasificación que se le dé a las actividades. Esta clasificación puede dar lugar a estas posibilidades: i) pequeña minería; ii) mediana minería; iii) gran minería.

De acuerdo con el artículo 15 del Código de Minas, “para la definición de pequeña, mediana y gran minería se adopta como criterio fundamental el volumen o tonelaje de materiales útiles y estériles extraídos de la mina durante un determinado período de tiempo”. Se clasifican en explotaciones a cielo cubierto y subterráneas para cuatro (4) grupos de minerales o materiales a saber: 1. Metales y piedras preciosas; 2. Carbón; 3. Materiales de construcción; 5. Otros.

¹⁷ Agencia Nacional de Minería. (s.f). Etapa de explotación. Recuperado de: <http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/explotacion.pdf>

La licencia minera tiene una duración de máximo 10 años. Además, se requiere de una Licencia Ambiental, cuya existencia se entiende implícita dentro del Contrato de Concesión ya que esta debe ser solicitada por el concesionario al finalizar la etapa de exploración junto con la póliza minero-ambiental vigente.

HITOS DE LA FASE DE EXPLORACIÓN
<input type="checkbox"/> Duración de 3 años con posibilidad de prórroga hasta por un término total de 11 años
<input type="checkbox"/> Delimitación y devolución de áreas
<input type="checkbox"/> Zonas de exploración adicional
<input type="checkbox"/> Presentación del P.T.O
<input type="checkbox"/> Presentación del estudio de impacto ambiental
<input type="checkbox"/> Presentación de póliza minero ambiental
<input type="checkbox"/> Pago de canon superficario
<input type="checkbox"/> Presentación de F.B.M
<input type="checkbox"/> Consulta Previa

EN EL CONTEXTO DE HIDROCARBUROS¹⁸

1. Etapa de exploración sísmica

La exploración sísmica es un método que se utiliza para conocer las capas de rocas que se encuentran debajo de la tierra, el cual consiste en emitir ondas de sonido a través de generadores de energía (sismigel), que viajan por medio de las capas de rocas y son registradas por unos instrumentos llamados geófonos.

Se realiza con la finalidad de obtener una imagen del subsuelo de tal manera que se pueda saber con certeza si existe un lugar donde se acumula un recurso natural.

Es importante resaltar que esta actividad no requiere licencia ambiental en tanto no genera un deterioro a los recursos naturales. Una vez se finaliza esta etapa la compañía que realice el estudio sísmico debe abandonar la zona dejándola en perfecto estado.

¹⁸ Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2008). Cadena Productiva de los hidrocarburos. <https://www.anh.gov.co/Ninos/Cartillas/cadenaProductivaHidrocarburos.pdf>

2. Etapa de perforación exploratoria

Consiste en la perforación de pozos, cuya finalidad es llegar hasta la capa de roca donde posiblemente se pudieron acumular los hidrocarburos (petróleo y gas). Esta etapa inicia, por lo general, después de que se obtiene la información del estudio sísmico.

Si luego de realizar la perforación del pozo se comprueba que no existen hidrocarburos (petróleo y gas), la compañía procede al taponamiento del pozo según el Decreto 1895 de 1973, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. Si al perforar el pozo se encuentran hidrocarburos (petróleo y gas) se continúa con la etapa de producción.

3. Etapa de producción

Con ella inicia la etapa de explotación. Es el proceso por el cual se extraen los hidrocarburos (petróleo y gas) desde la capa de roca hasta la superficie. En esta etapa se pueden perforar varios pozos de acuerdo con el tamaño del yacimiento encontrado. Para extraer los Hidrocarburos se utilizan dos mecanismos: a través de válvulas llamadas Árbol de Navidad, cuando los hidrocarburos fluyen a la superficie por sí solos, y mediante una máquina llamada Balancin, cuando estos necesitan ayuda para subir a la superficie.

4. Etapa de transporte

Consiste en transportar los hidrocarburos en oleoductos, gasoductos, carrotanques o buques, desde la boca del pozo hasta los sitios de almacenamiento y procesamiento, como son las estaciones de bombeo, refinerías y centros de comercialización (puertos).

5. Etapa de refinamiento

Esta etapa final consiste en el proceso de transformación de los recursos explotados con la finalidad de obtener productos derivados.

4.6. LA NECESIDAD DE PLANTEAR DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.

Del numeral anterior es posible colegir que las etapas y fases que caracterizan los proyectos de exploración y explotación en contextos mineros y de hidrocarburos son ampliamente diferentes. Por ende, se optó por enfocar el articulado de manera que se acotaran mecanismos de participación aplicables

<p>de manera general a la etapa de exploración y a la etapa de explotación sin entrar a puntualizar los mecanismos y escenarios de participación en cada una de las fases de esas etapas.</p> <p>La denominación y contenido de las acciones específicas que deben desarrollarse como parte de la exploración y explotación son indeterminadas y variables en el tiempo. Los desarrollos normativos posteriores pueden variar los nombres, la cantidad de procesos y acciones que comportan la exploración y la explotación. Por ende, podría ser contraproducente, por dar lugar a equívocos en la interpretación y aplicación de la ley, un enfoque que ahondara con tal nivel de detalle en los mecanismos de participación específicos para cada componente de la exploración y en cada componente de la explotación.</p> <p>Sin embargo, tanto en hidrocarburos como en el contexto minero se desarrollan actividades de exploración y explotación. Esa caracterización de los dos tipos de procesos es genérica e invariable con independencia de los desarrollos normativos futuros. Entonces, se prefirió establecer las condiciones de participación que fueran comunes a las actividades de exploración y de explotación comprendidas en un sentido más amplio tanto para hidrocarburos como para contextos mineros.</p> <p>Así, los Títulos III y IV de la ley se refieren de manera general a los mecanismos de participación que pueden y deben ser aplicados, precisando la forma para hacerlo, en las etapas de exploración y de explotación de manera común para minería como para actividad de hidrocarburos.</p> <p>4.7 PROPUESTAS RESULTANTES DE LA ACUMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY ESTATUTARIA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN EL ESCENARIO CONSTITUCIONAL DE INTERÉS.</p> <p>Del estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como de las normas constitucionales y legales, de los comentarios en la doctrina jurídica y ambiental, y de los espacios de las mesas técnicas y la audiencia pública que antecedió la elaboración de la presente ponencia, fue posible concluir que era necesario crear mecanismos de participación específicamente diseñados para el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Lo anterior, para permitir que puedan obrar como medio para garantizar derecho a la participación en los contextos de interés y conforme los estándares fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Además, el articulado sometido a consideración del Honorable Congreso de la</p>	<p>imperante al momento de otorgar una concesión o abrir procesos públicos de oferta para la exploración y explotación del territorio, el cual reside en la presencia del recurso natural no renovable, sin tomar en cuenta si ello entra en conflicto con la vocación social, ambiental, económica y cultural del territorio.</p> <p>Por ello, una premisa que desarrolla este proyecto de ley, y que puede atenuar los conflictos socioambientales que se suscitan por su implementación, es que las decisiones que se adopten sobre la viabilidad de proyectos minero-energéticos específicos valoren un conjunto de elementos del territorio – con igual valor e importancia– e información específica y relevante para la toma de la decisión, como la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Información general del municipio donde se pretende llevar a cabo el proyecto (demografía, datos administrativos, territorio), vocación del suelo y actividades económicas principales, conflictos socioambientales relevantes y demás información relacionada que sea de importancia para la toma de decisiones. • Criterios técnicos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural de los municipios o el municipio donde se pretenda llevar a cabo el proyecto. • Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales que se encuentren en el o los municipios donde se pretenda llevar a cabo el proyecto; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; solicitud de sustracción de áreas ambientales con ocasión de los proyectos de extracción de recursos naturales no renovables objeto del cabildo y demás información relevante sobre la importancia ecológica del territorio en cuestión. • Estado actual de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios donde se pretende ejecutar el proyecto. • Procesos de adjudicación de baldíos o programas de tierras implementados en el municipio o municipios; procesos de delimitación y constitución de zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial; procesos de titulación colectiva a comunidades étnicas y negras y, en general, la información que detente la máxima autoridad de las tierras de la nación sobre los municipios o el municipio donde se pretenda llevar a cabo el proyecto.
<p>República busca responder a los conflictos socioambientales que ha suscitado el referido déficit de participación en contextos extractivos y como un esfuerzo por profundizar el modelo de democracia participativa que caracteriza la Constitución Política de 1991.</p> <p>Las propuestas que contempla este proyecto de ley parten, entonces, de la necesidad de reglamentar mecanismos para garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el modelo minero energético – a partir de la constatación que hizo la Corte Constitucional– y de la necesidad de llevar la democracia a ámbitos que, como el sector minero energético, han carecido de un espíritu democrático. Para ello, se presentan a continuación las ideas centrales que desarrolla la ponencia mediante la cual se acumularon las dos iniciativas estatutarias para atender la problemática.</p> <p>Esta ponencia desarrolla una serie de derechos y mecanismos de participación ciudadana que parten de dos ideas centrales, orientadas no solo a suplir el déficit de participación ciudadana constatado por la Corte Constitucional, sino a proporcionar mecanismos que permitan una mejor toma de decisiones sobre la viabilidad o inviabilidad de desarrollar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en los territorios donde tienen lugar: (i) las decisiones sobre el desarrollo de proyectos minero energéticos en los municipios debe tener en cuenta criterios adicionales al potencial minero energético del territorio, tales como criterios ambientales, sociales, económicos y culturales, para decidir si es viable, o no, desarrollar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales y bajo qué condiciones; (ii) los mecanismos de participación que se garanticen deben tener incidencia en las decisiones y deben partir de la información y deliberación que se brinde sobre el proyecto y sobre todos los elementos del territorio que puedan ser relevantes para la toma de la decisión.</p> <p>A. La toma de decisiones sobre la implementación y ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales debe tomarse atendiendo factores adicionales al potencial minero energético de los territorios.</p> <p>Tomando en consideración que varios de los conflictos que se presentan en los municipios donde se ejecutan o pretenden ejecutar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales se suscitan por la contradicción que se genera entre la actividad minero-energética y aspectos sociales, económicos y culturales relevantes para los municipios, es indispensable que se cambie el paradigma bajo el cual se adelanta la concesión del territorio para dichos fines. Esta concesión, actualmente, parte del potencial minero energético del territorio; es decir, hay un criterio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estado actual de procesos de restitución de tierras despojadas en el o los municipios donde se pretenda llevar a cabo el proyecto; número de sentencias de restitución de tierras despojadas en de los municipios o el municipio donde se pretenda llevar a cabo el proyecto. • Informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos en el territorio y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía del municipio o municipios donde se pretenda llevar a cabo el proyecto. <p>Actualmente, esta información no es tenida en cuenta para la toma de decisiones, razón por la que, una vez el proyecto está en marcha, sea en su fase de exploración o de explotación, emergen reclamos legales y políticos encaminados a poner en evidencia la manera como dichos proyectos entran en contradicción con este tipo de asuntos de orden ambiental, social, económico y cultural. Este proyecto de ley busca, a través de una mirada integral del territorio – que se dará en los mecanismos de participación que se proponen-, garantizar que la toma de decisiones sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables esté armonizada con aspectos relevantes del ordenamiento territorial y no tome la presencia de minerales o de hidrocarburos como el único –y más importante- criterio para la adopción de una decisión.</p> <p>B. Adopción de mecanismos de participación que garanticen una participación activa, eficaz y con poder de decisión.</p> <p>Teniendo en cuenta que la orden de la Corte fue la de adoptar una ley que cree mecanismos de participación para la toma de decisiones en materia minero-energética, emerge la necesidad de identificar cuál es el mecanismo más adecuado para garantizar una participación activa y eficaz de la ciudadanía y que ofrezca condiciones que atiendan a la complejidad de la decisión por tomar. Este proyecto de ley busca retomar mecanismos de participación existentes que permitan atender la necesidad de abordar esta discusión desde todas sus aristas, que brinden voz a la ciudadanía, con poder de deliberación y de decisión, y que permita a las autoridades del orden local, departamental y nacional la posibilidad de articular y coordinar sus distintas competencias, armonizando de esta manera la toma de decisiones.</p> <p>Por ello, se propone la adaptación del cabildo abierto y de la audiencia pública (mecanismos ya existentes) para que, a través de ellos, se adopten decisiones sobre la exploración y explotación de recursos naturales, dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Estos mecanismos tienen una serie de características que resultan idóneas para brindar participación</p>

a la ciudadanía en tanto: (i) permiten espacios de deliberación, ya que no se limitan a un escenario electoral y permiten una amplia discusión comunitaria y con las autoridades; (ii) permiten el involucramiento de la ciudadanía interesada, pues se conciben como espacios para brindar información relevante para la vida comunitaria; (iii) permiten la articulación de los distintos niveles del Estado en el marco de sus competencias; (iv) permiten ejercicios de diálogo y acercamiento entre la comunidad y los representantes de las distintas entidades estatales; (v) permiten una toma de decisiones basada en la información, la deliberación, las competencias estatales y los derechos ciudadanos. Veamos algunas características de cada uno de ellos.

• **Cabildo Abierto.**

El cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política. Se trata de un mecanismo de reunión pública para tratar cualquier asunto que sea de interés para la comunidad, el cual se da en el marco de los consejos distritales, municipales o las juntas administradoras locales. El mecanismo también se encuentra reglamentado en la Ley 134 de 1994 (art. 9 y arts. 81 a 100) y en la Ley 1757 de 2015 (art. 3 y arts. 22 al 30).

De acuerdo con la Corte Constitucional, “debe entenderse por este mecanismo de participación ciudadana [cabildo abierto], la congregación del pueblo soberano para discutir libremente, acerca de los asuntos que le interesen o afecten. Se constituye, además, en la garantía constitucional de las reuniones políticas de carácter deliberante”.¹⁹ De hecho, el fortalecimiento del cabildo abierto, ha dicho la Corte, “permite la expansión de la modalidad de participación directa en forma de asambleas generales a otros ámbitos del Estado”.²⁰ Y concluye, “El cabildo abierto, como nos enseña la historia, cuando adquiere dinámica, se convierte en escenario del tratamiento popular a los problemas nacionales, regionales o locales, según el caso”.²¹

En virtud de lo anterior, este proyecto de ley retoma el mecanismo de cabildo abierto con miras a fortalecerlo y a adecuarlo para la toma de decisiones sobre un asunto trascendental para la vida comunitaria, como lo es la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, convirtiéndolo en escenario de tratamiento de problemáticas que son de orden local, pero con repercusión nacional. El fortalecimiento de este mecanismo, propuesto por este proyecto de ley, pasa por trascender su carácter deliberante y dotarlo de un carácter decisorio. Esto último ha sido reconocido

¹⁹ Corte Constitucional, sentencia C- 180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara
²⁰ Corte Constitucional, sentencia C- 180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara
²¹ Corte Constitucional, sentencia C- 180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara

• **Audiencia Pública**

El ordenamiento jurídico colombiano define mecanismos de participación ambiental de carácter administrativo, político y judicial. Uno de los mecanismos de participación de naturaleza administrativa es la audiencia pública ambiental, la cual está regulada en la Ley 99 de 1993 (art. 72) y en el Decreto 1076 de 2015 (arts. 2.2.2.4.1.1 a 2.2.2.4.1.14). Estas audiencias se vienen desarrollando de manera meramente informativa, por lo que la ciudadanía no ha percibido estos espacios como realmente participativos, pues se limitan a brindar información a la ciudadanía sin que se evidencie su incidencia en la toma de decisiones. De hecho, tal como lo constató la Corte en la sentencia SU-095 de 2018, en la audiencia pública ambiental no se adoptan decisiones, “pues se trata de un espacio en el que se reciben opiniones, informaciones y documentos, que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente”.²⁴

En ese sentido, tal como están contempladas, estas audiencias no satisfacen de manera efectiva el derecho a participación. Tampoco están contempladas para escenarios previos a la concesión del territorio (solo están contempladas para el licenciamiento ambiental), por lo que igualmente resultan limitadas, ya que no es posible activar una audiencia pública ambiental cuando la comunidad se entera de la solicitud de un título minero en el territorio o de un proceso de selección objetiva para la asignación de bloques petroleros.

De esta manera, este proyecto de ley retoma la figura de la Audiencia Ambiental, pero dotándola de una serie de elementos que la convierten en un escenario de control ciudadano con real incidencia en la toma de decisiones frente a los proyectos que se encuentran en etapa de explotación, cuyos impactos se pueden corregir o evitar, garantizando voz a la ciudadanía con poder de decisión. Esto tiene como base el derecho al control del poder político, el cual es otra expresión de la democracia participativa. Así lo ha expresado la Corte:

“En la democracia participativa no sólo se valora más al ciudadano sino que, en razón a ello, el sistema político puede alcanzar mayores niveles de eficiencia. Un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados”²⁵

²⁴ Corte Constitucional, sentencia SU-095 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
²⁵ Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo

por la Corte Constitucional como una posibilidad constitucionalmente válida en manos del legislador:

“En este punto la Corte pone de presente que la connotación eminentemente deliberante del cabildo que figura en la definición, en modo alguno significa que el legislador haya circunscrito sus efectos. Por el contrario, puede en todo tiempo conferirle capacidad decisoria. Queda, pues, abierta la puerta para que en el futuro, el Congreso por la vía estatutaria le reconozca fuerza vinculante a las deliberaciones populares en cabildo, en forma congruente con la potestad soberana del pueblo quien, como titular originario la ejerce por esta vía de manera directa (artículo 3o. CP)”²²

El carácter decisorio que se da al cabildo abierto que propone este proyecto de ley, tiene como fundamento la legitimidad que brindará a la decisión el carácter deliberativo del mismo, la manera como se desarrollará y las diversas instituciones del Estado que participarán. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la esencia de la democracia participativa reside en que “las decisiones que adoptan las diferentes instituciones públicas, solo es legítima cuando ha estado precedida de un proceso deliberativo, en que los interesados en las medidas correspondientes logran espacios concretos y efectivos de participación”.²³ Esto es lo que persigue el cabildo abierto que adopta este proyecto de ley.

Adicionalmente, el proyecto crea una segunda modalidad de cabildo abierto exclusivamente para la etapa de explotación: el cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Su propósito es garantizar que las autoridades y particulares responsables del proyecto implementen de manera cabal y oportuna las medidas de corrección, compensación reparación y den cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con los impactos ambientales, sociales y culturales generados por los proyectos de explotación. A su vez, permite que las poblaciones afectadas decidan sobre las medidas a tomar y manifiesten su satisfacción o insatisfacción con las mismas. Esto es una garantía en materia de derechos humanos de las poblaciones afectadas y le da herramientas adicionales a las existentes en favor del Estado para forzar el cumplimiento de esas obligaciones por parte de las empresas.

²² Corte Constitucional, sentencia C- 180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
²³ Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo

Vale precisar, en todo caso que, de manera adicional a las audiencias de control, se incluyen para la etapa de exploración audiencias ambientales. Si bien son diferentes a las que ya están previstas en la Ley 99 de 1993, persiguen fines eminentemente informativos. Lo anterior se considera valioso bajo la comprensión de la participación en contextos extractivos como un proceso en el que la población y los actores interesados van profundizando paulatinamente en la comprensión de los proyectos y de sus implicaciones. Por ende, se considera importante que, adoptando mecanismos que permitan la decisión de la población en los asuntos que la afectan, estos estén antecedidos de escenarios que tengan por fin garantizar plenamente su derecho de acceso a la información.

C. Desarrollos del proyecto de ley Estatutaria.

Este proyecto de ley estatutaria, resultante de la acumulación de las iniciativas No. 107 y No.121 de 2021 Cámara, tiene 89 artículos divididos en cinco títulos. A continuación, se expone el desarrollo de cada título, indicando qué problemas se pretenden solucionar y los mecanismos previstos para tal fin:

• **Primer título. Disposiciones generales.**

El primer título está orientado a desarrollar las disposiciones generales del proyecto de ley, dentro de las que se cuentan su objeto (artículo 1), los principios que deben orientar el derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables (artículo 2), un artículo sobre el ámbito de aplicación dedicado a acotar la aplicación en el tiempo de la ley (artículo 3), una definición sobre las personas a las que se dirige el derecho de participación que reglamenta la ley (artículo 4), la creación de un sistema de información público sobre proyectos de explotación y exploración de recursos naturales no renovables. Este sistema busca integrar y mejorar los esfuerzos y desarrollos dados por las autoridades mineras y de hidrocarburos, centralizar la información y garantizar su permanente acceso y publicidad como una condición necesaria para que la participación cumpla los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos (artículo 5). Finalmente, se prevé la participación y acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo como garantes del proceso y de la aplicación de los mecanismos de participación.

• **Segundo título. Derechos que el proyecto de ley reconoce a la ciudadanía afectadas y potencialmente afectada por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.**

El segundo título tiene por objeto desarrollar una serie de derechos que deben ser reconocidos legalmente a la ciudadanía potencialmente afectada por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. En primer término, reconoce el derecho específico y especial que tienen todas aquellas personas y comunidades afectadas o potencialmente afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables a participar activamente en todas las fases y etapas de dichos proyectos (artículo 7), el derecho a la democracia como deliberación (artículo 8), el derecho a la democracia como decisión (artículo 9), y el derecho de acceso a la información frente a proyectos de exploración y extracción de recursos naturales o renovables (artículo 10).

Estos derechos están orientados adecuar derechos ya reconocidos (como la participación o el acceso a la información) a las particularidades en las que dichos derechos deben ser respetados y garantizados por el Estado cuando su ejercicio esté relacionado con la exploración y extracción de recursos naturales o renovables.

• **Tercer título: mecanismos de participación en la etapa de exploración de recursos naturales no renovables. De la audiencia pública ambiental y del cabildo abierto socioambiental.**

El tercer título desarrolla los mecanismos de participación que deben aplicarse con ocasión de la etapa de exploración. En primer lugar, reconoce la audiencia pública ambiental ante la recepción de solicitudes de exploración o ante la apertura de convocatorias para el desarrollo de proyectos de esa naturaleza. Esta audiencia busca ser un primer espacio informativo que anteceda la aplicación de los mecanismos de participación con vocación decisoria sobre el desarrollo de los proyectos extractivos. Como se explicó con anterioridad, esto responde a la comprensión de la participación como un proceso y no meramente como la aplicación descoordinada de mecanismos de participación. Esta audiencia está reglada en los artículos 11, 12 y 13.

Valga precisar que en virtud del artículo 13 será obligatoria la realización de estas audiencias cada vez que se inicie una nueva fase perteneciente a la etapa de exploración. Como se indica en el articulado, solo la primera audiencia (artículos 11 y 12) da lugar a la aplicación subsiguiente del cabildo abierto socioambiental.

información necesaria para la rendición de cuentas sobre el desarrollo de los proyectos, el avance de las actividades, los impactos ambientales generados y la demás información relevante relacionada con la ejecución de los proyectos.

A partir de esa información integral sobre el panorama real de los proyectos en etapa de explotación, la ciudadanía tendrá un espacio para pronunciarse y se podrán tomar decisiones de ajuste, si es el caso, sobre las medidas de prevención, mitigación y compensación adoptadas. Se prevé que cada 6 meses deba hacerse un seguimiento de las medidas acordadas en esos espacios de audiencia de control socio ambiental.

En segundo lugar, el cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto está regulado en los artículos 53 al 86. Este mecanismo busca que la población pueda deliberar y decidir en torno a las medidas de compensación, corrección y reparación a las que haya lugar con ocasión del desarrollo del proyecto y pueda manifestarse sobre la satisfacción o insatisfacción respecto del cumplimiento de las obligaciones relacionadas por parte de las autoridades y de los particulares. Además, pretende darle herramientas a la población y al Estado para garantizar que los responsables de los proyectos cumplan con sus obligaciones antes de cerrar el proyecto y que los impactos sociales y ambientales sean plenamente atendidos conforme las expectativas de la población afectada.

Por ende, el mecanismo pretende que población, autoridades y particulares puedan revisar conjuntamente los impactos ambientales y sociales del proyecto y las afectaciones causadas; que puedan asegurar que las partes responsables den cumplimiento a sus obligaciones y a las medidas necesarias para compensar, corregir y reparar esos impactos y que las partes puedan buscar fórmulas de acuerdo para adoptar medidas adicionales antes de que el proyecto culmine.

Así las cosas, la población debe manifestarse al final del cabildo sobre la conveniencia o inconveniencia de permitir el cierre del proyecto debido a su satisfacción o insatisfacción con la aplicación de las medidas y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas responsables del proyecto. Así, se prevé que las partes adopten acuerdos participativos para concretar compromisos para la correcta aplicación de las medidas de compensación, corrección y reparación y para el cumplimiento de las obligaciones como condición para poder cerrar el proyecto. A su vez, los artículos 76 y 77 precisan la creación y funciones de un Comité encargado de hacer seguimiento al cumplimiento de lo acordado en el cabildo con miras a cerrar el proyecto.

El cabildo abierto socioambiental está regulado en los artículos 14 al 32. Los artículos 33 y 34 explican el alcance del acuerdo participativo al que se propone llegar como resultado de la aplicación del cabildo y los artículos 35, 36 y 37 explican las particularidades para lograr la publicidad del acto administrativo mediante el cual se formaliza la decisión y el contenido mínimo del mismo.

Finalmente, los artículos 38, 39,40 y 41 acotan los términos de aplicación del cabildo, la aplicación progresiva de las disposiciones del título II y adopta medidas para priorizar la aplicación de los mecanismos de participación en los municipios que llevaron a cabo consultas populares sobre la industria minero-energética, o aquellos que, mediante sus concejos municipales, adoptaron acuerdos restringiendo la actividad minero-energética en sus territorios. Ello se justifica en tanto, al momento de realizarse, tanto las consultas como los acuerdos gozaron de un respaldo legal y jurisprudencial y se realizaron justamente debido a la ausencia de mecanismos de participación. Es decir, tuvieron como razón de ser la exigencia de participación ciudadana y de respeto por las competencias municipales. El legislador no puede obviar este hecho, por lo que el proyecto de ley propone la creación de este derecho de prelación para atender el conflicto socioambiental que está vigente en estos territorios y que se puede exacerbar si se desconoce que los municipios que adelantaron consultas populares o que adoptaron acuerdos municipales lo hicieron para atender un déficit de participación.

• **Cuarto título: mecanismos de participación en la etapa de explotación de recursos naturales no renovables. De la audiencia pública participativa de control socio ambiental y del cabildo abierto preparativo para el cierre del proyecto.**

El cuarto título prevé los mecanismos que deben aplicarse durante la etapa de explotación, en caso de que esta tuviera lugar. La audiencia pública de control socioambiental está regulada en los artículos 42 al 52. Se trata de una propuesta que atiende a las necesidades de contar con un mecanismo específico para la rendición de cuentas de carácter obligatorio y periódico frente al desarrollo de proyectos que se encuentren en etapa de explotación de recursos naturales no renovables, con el fin de que la ciudadanía pueda hacerles seguimiento hasta la terminación del proyecto.

En este escenario de participación, las autoridades del orden nacional y regional, según el caso, dan a conocer a la ciudadanía de los municipios impactados por la ejecución de proyectos en etapa de explotación de recursos naturales no renovables, así como a las autoridades de los mismos, toda la

Los artículos finales del título precisan la naturaleza, contenido y requisitos de publicidad del acto administrativo mediante se formalizan los referidos acuerdos y preceptúan el proceso que debe seguir la autoridad nacional para cerrar el proyecto cuando se haya verificado el cumplimiento de los referidos acuerdos participativos.

• **Quinto título: disposiciones finales.**

Para cerrar, el proyecto de ley plantea un artículo para garantizar que las disposiciones que lo contienen no alteran los derechos de las comunidades étnicas, ya que dichos grupos tiene consagrado el derecho a la consulta previa, el cual no se aborda ni se afecta mediante este proyecto de ley. De hecho, esta propuesta está orientada a llenar el vacío legal que existe en materia de participación frente a grupos no étnicos en lo que respecta a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables (artículo 87). Asimismo, se plantea un artículo destinado a garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de los mecanismos de participación que el proyecto desarrolla (artículo 88); finalmente, se cierra con un artículo sobre la vigencia de la ley, la cual se adopta a partir del momento de su promulgación (artículo 89).

Así las cosas, en el articulado se evidencia que se tomaron como referencia mecanismos tales como el cabildo abierto, la audiencia pública ambiental, y el derecho de petición. Todos estos mecanismos, salvo por el derecho de petición, sufren alteraciones en algunos de los postulados normativos que los rigen en el ámbito general. Así, el presente proyecto de ley toma como influencia o inspiración mecanismos ya existentes para crear unos mecanismos nuevos y únicos específicamente diseñados para garantizar la participación en el contexto constitucional de interés.

Atendiendo a lo anterior, los mecanismos y normas contenidas en el presente proyecto de ley estatutaria son de aplicación restrictiva para el contexto de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. En cualquier otro contexto que demande la participación, se deben preferir las normas que actualmente gobiernan cada uno de los mecanismos de participación.

El proyecto desarrolla la relación entre la protección del derecho a la participación y el goce efectivo de otros derechos como el de acceso a la información. A su vez, reconoce que todas los ciudadanos afectados o potencialmente afectados por proyectos extractivos, deben ver garantizado su derecho a participar y decidir en las decisiones que les afectan, con independencia de que cuenten o no con identidades étnicas. Lo anterior pues todas las comunidades en cuyos territorios se desarrollan proyectos de

exploración y explotación de recursos naturales no renovables se ven profundamente afectadas por esas actividades. Esos impactos afectan sus modos de vida, su economía, sus tradiciones culturales, sus formas de relacionamiento, sus actividades productivas, el tejido social, entre otros. Incluso, como ha ocurrido con las comunidades de la zona carbonífera del Cesar en Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo, las actividades extractivas pueden llevar a que estas comunidades pierdan el arraigo al verse obligadas a desplazarse a otros territorios ante la profunda contaminación de las zonas que habitan.

Reconociendo la gravedad y alcance de los impactos que sufren o podrían llegar a sufrir estas comunidades se decide relacionadas con el ciclo de vida de los proyectos extractivos, el proyecto crea mecanismos novedosos e idóneos para permitir que las comunidades incidan y decidan sobre las medidas de compensación, corrección y reparación por los impactos sociales y ambientales sufridos y para que puedan hacer exigible su cumplimiento.

Finalmente, debe tenerse presente que esta propuesta es una garantía mínima. Es decir, sin perjuicio de que se deban convocar los mecanismos de participación en los términos planteados por el articulado, la población puede hacer uso de cualquier otro mecanismo de participación en cualquier momento del ciclo de vida de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. El único requisito será que esas iniciativas de participación se adecuen a la regulación general que de ordinario gobierna los mecanismos de participación.

4.8. SOBRE LA NATURALEZA DE LEY ESTATUTARIA.

Se considera que el presente proyecto de ley debe ser tramitado por vía de Ley Estatutaria considerando los artículos 152 de la Constitución y 207 de la Ley 5 de 1992. A tenor de lo dispuesto en esos fundamentos normativos, serán leyes estatutarias aquellas que regulen las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y las que regulen derechos y deberes fundamentales de las personas y establezcan procedimientos para su protección.

Si bien la Corte Constitucional ha precisado que no toda ley que tenga relación con algún o algunos derechos fundamentales es estatutaria, lo cierto es que este proyecto de ley dialoga con los fundamentos esenciales del derecho a la participación y con su garantía en un escenario constitucional determinante como el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

En consecuencia, se considera que este proyecto satisface tres los criterios para ser estatutaria, a saber: de regular elementos esenciales de un derecho y deber fundamental como lo es la participación; de regular los mecanismos de participación y de desarrollar mecanismos para su protección.

5. COMPETENCIA DEL CONGRESO

5.1. CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.
4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

5.2. LEGAL

LEY 5 DE 1992. POR LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CONGRESO; EL SENADO Y LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

ARTÍCULO 6°. Clases de funciones del Congreso. El Congreso de la República cumple:

(...)

2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación.

ARTÍCULO 139. Presentación de proyectos. Los proyectos de ley podrán presentarse en la Secretaría General de las Cámaras o en sus plenarios.

ARTÍCULO 140. Iniciativa legislativa. Pueden presentar proyectos de ley:

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.

LEY 3 DE 1992. POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE LAS COMISIONES DEL CONGRESO DE COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

ARTÍCULO 2°. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia.

Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Cámaras serán siete (7) a saber:

Comisión Primera.

Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos étnicos. (Subrayado por fuera del texto).

6. CONFLICTO DE INTERÉS

Dando alcance a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, "Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992", se hacen las siguientes consideraciones a fin de describir la circunstancias o eventos que podrían generar conflicto de interés en la discusión y votación de la presente iniciativa legislativa, de conformidad con el artículo 286 de la Ley 5 de 1992, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, que reza:

"Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

- a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.
- b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.
- c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

(...)"

Sobre este asunto la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Honorable Consejo de Estado en su sentencia 02830 del 16 de julio de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, señaló que:

“No cualquier interés configura la causal de desinversión en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concorra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.

Se estima que la discusión y aprobación del presente Proyecto de Ley Estatutaria no configura un beneficio particular, actual o directo a favor de un congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ya que el desarrollo de derechos consagrados en la Constitución Política, las disposiciones relativas a la protección y garantía del derecho fundamental a la participación en el contexto del desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, no otorga privilegios de ninguna clase, no genera ganancias, no crea indemnizaciones económicas y no elimina obligaciones de ningún tipo.

Es menester señalar que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite o votación del presente Proyecto de Ley Estatutaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley 5 de 1992 modificado por la Ley 2003 de 2019, no exime al Congresista de identificar causales adicionales en las que pueda estar incurso.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 107 DE 2021C	PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 121 DE 2021C	TEXTO DE LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE	COMENTARIOS
<i>Por medio de la cual se regula el derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones</i>	<i>Por medio del cual se regula el derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y se crean mecanismos de participación ciudadana para deliberar y decidir sobre la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</i>	<i>Por medio de la cual se regula el derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, se crean mecanismos de participación para deliberar y decidir sobre la ejecución y desarrollo de esos proyectos y se dictan otras disposiciones</i>	Título común, resultado de la integración de los títulos de ambos proyectos de ley estatutaria.
TITULO I DISPOSICIONES GENERALES	TITULO I DISPOSICIONES GENERALES	TITULO I DISPOSICIONES GENERALES	Título común. Sin modificaciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria tiene por objeto garantizar el derecho a la participación en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Para ello desarrolla mecanismos de participación al servicio de las comunidades que habiten municipios y/o distritos en cuyo territorio se pretenda desarrollar, o se estén llevando a cabo, proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.	Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley estatutaria es promover, proteger y garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía frente a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, mediante la regulación del derecho a la participación activa y eficaz de la ciudadanía afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y el establecimiento de mecanismos de participación frente a este tipo de proyectos. La presente ley desarrolla los mecanismos de participación ciudadana como el cabildo abierto socioambiental y la audiencia pública	Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria tiene por objeto, promover, proteger y garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía frente a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Para ello crea y desarrolla mecanismos de participación al servicio de quienes habiten en municipios o distritos en cuyo territorio se pretenda desarrollar, o se estén llevando a cabo, proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.	Texto común, resultado de la integración de los Artículos 1 del PLE 107 y del PLE121. Se elimina la referencia del artículo 1 del PLE 121 a los mecanismos que prevé el proyecto y a algunas características de la participación por considerar que las segundas se desarrollan con mayor detalle en el segundo artículo y porque no son las únicas cualidades que caracterizan la participación que deben ser tenidas en cuenta.

CAMARA DE REPRESENTANTES			
	participativa para los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables de mediana y gran escala.		
<p>Artículo 2°. Principios. El derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe guiarse por los siguientes principios:</p> <p>2.1. Permanencia y gradualidad. La aplicación de los mecanismos de participación debe estar garantizada, por parte de las autoridades públicas del orden nacional, departamental y local, en todo momento durante todas las etapas o fases de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. Los mecanismos de participación aplicados en cada fase o etapa deben responder a las particularidades y efectos de cada una de ellas y deben permitir dimensionar de manera diferenciada los impactos ambientales, sociales y culturales de las mismas.</p> <p>Los mecanismos de convocatoria, los espacios de reunión y las</p>	<p>Artículo 2. Principios orientadores del derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. En la interpretación y aplicación del derecho a la participación ciudadana de comunidades afectadas y potencialmente afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se deben aplicar los siguientes principios:</p> <p>a. Principio de eficacia: la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe ser activa y eficaz, con real incidencia en la toma de decisiones públicas, y debe ser promovida activamente por parte de autoridades públicas en el orden nacional, departamental y local.</p> <p>b. Principio de no discriminación: la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe garantizarse</p>	<p>Artículo 2°. Principios orientadores del derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. La interpretación y aplicación del derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe guiarse por la aplicación de los siguientes principios:</p> <p>2.1. Permanencia y gradualidad. La aplicación de los mecanismos de participación debe estar garantizada, por parte de las autoridades del orden nacional, departamental y local, de manera transversal a las etapas o fases de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. Los mecanismos de participación aplicados en cada fase o etapa deben responder a las particularidades y efectos de cada una de ellas y deben permitir dimensionar de manera diferenciada los impactos ambientales, sociales y culturales de las mismas.</p> <p>Los mecanismos de convocatoria, los espacios de reunión y las metodologías participativas deben considerar y adecuarse a las características, necesidades y particularidades ambientales, culturales, sociales y económicas del territorio y de las comunidades en que pretendan desarrollarse.</p>	<p>Artículo común. Se tomó como base el artículo 2 del PLE 107 y se incorporaron elementos de los principios planteados por el artículo 2 del PLE121.</p> <p>Así: Al principio 2.1. Permanencia y gradualidad se incorpora el contenido del principio de diferencialidad planteado por el PLE121.</p> <p>En el principio 2.5. Incidencia se incorpora el contenido del principio de eficacia previsto en el PLE 121 y se modifica la redacción para hacerlo compatible con la incorporación en la ponencia de mecanismos con capacidad de decisión.</p> <p>Los principios de buena fe y de no discriminación eran comunes y sus textos fueron integrados.</p> <p>Se añadieron los principios de subsidiariedad, de participación democrática en materia de recursos naturales y el principio de interrelación entre el suelo y el subsuelo y se eliminó el principio</p>

<p>metodologías participativas deben considerar y adecuarse a las características, necesidades y particularidades ambientales, culturales, sociales y económicas del territorio y de las comunidades en que pretendan desarrollarse.</p> <p>2.2. Accesibilidad y no discriminación. El ejercicio de los mecanismos de participación debe garantizar la igualdad de las personas participantes. Para ello, las autoridades competentes según sea el caso, deben adecuar los mecanismos de convocatoria, los espacios de reunión y las metodologías participativas de manera que estos no comporten barreras que imposibiliten o dificulten el ejercicio del derecho a la participación.</p> <p>No se puede impedir el acceso a estos mecanismos con base en criterios diferentes a los que esta ley determine y en ningún caso pueden imponerse barreras arbitrarias para la participación basadas en el género, la orientación sexual, la nacionalidad, la edad, la raza, la condición social, las creencias religiosas y las concepciones políticas de quienes estén habilitados para hacer parte de los espacios de participación.</p> <p>2.3. Pertinencia. La aplicación de los mecanismos de</p>	<p>a todas las personas en igualdad de condiciones sin distinciones arbitrarias basadas en la raza, el género, el origen, la ocupación y las creencias políticas o religiosas.</p> <p>c. Principio de diferencialidad: los mecanismos de participación ciudadana que contempla esta ley responden a las distintas etapas de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables según se encuentren en etapa de solicitud o de participación en procesos de licitación pública, en etapa de exploración, o en etapa de explotación.</p> <p>d. Principio de buena fe: todas las personas y entidades de derecho público y privado que tomen parte en los mecanismos de participación que contempla esta ley deberán regirse por conductas honestas y leales.</p> <p>e. Principio de interrelación entre el suelo y subsuelo: las actividades que se realizan en el subsuelo tienen una incidencia directa y significativa sobre el suelo y son de competencia del Estado entendido como la nación y los entes territoriales.</p>	<p>2.2. Accesibilidad y no discriminación. El ejercicio de los mecanismos de participación debe garantizar la igualdad de las personas participantes. Para ello, las autoridades competentes según sea el caso, deben adecuar los mecanismos de convocatoria, los espacios de reunión y las metodologías participativas de manera que estos no comporten barreras que imposibiliten o dificulten el ejercicio del derecho a la participación.</p> <p>No se puede impedir el acceso a estos mecanismos con base en criterios diferentes a los que esta ley determine y en ningún caso pueden imponerse barreras o distinciones arbitrarias para la participación basadas en el género, la orientación sexual, la nacionalidad, la edad, la raza, la condición social, las creencias religiosas y las concepciones políticas de quienes estén habilitados para hacer parte de los espacios de participación.</p> <p>2.3. Pertinencia. La aplicación de los mecanismos de participación debe darse antes de que la autoridad</p>	<p>de concertación, en tanto son fundamento constitucional de los mecanismos que reconocen poder de decisión a las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por los proyectos extractivos.</p>
--	---	---	--

CAMARA DE REPRESENTANTES

<p>participación debe darse antes de que la autoridad competente tome las decisiones que correspondan, según sea el caso, para cada etapa o fase del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2.4. Representatividad. Al aplicar los mecanismos de participación en cada etapa y fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se debe reconocer y vincular a las autoridades de las entidades territoriales, así como a las y los líderes sociales y comunitarios debidamente reconocidos por las comunidades.</p> <p>2.5. Incidencia. La aplicación de los mecanismos de participación debe garantizar que las personas participantes incidan en el proceso de toma de decisión de la autoridad competente según corresponda para cada etapa y fase del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Ello implica que las autoridades deben dar cuenta de los argumentos, intereses, expectativas, deseos y preocupaciones expresados por la población en los escenarios participativos que antecedieron la decisión.</p> <p>En el acto por medio del cual se formaliza la</p>		<p>competente tome las decisiones que correspondan, según sea el caso, para cada etapa o fase del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2.4. Representatividad. Al aplicar los mecanismos de participación en cada etapa y fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se debe reconocer y vincular a las autoridades de las entidades territoriales, así como a las y los líderes sociales y comunitarios debidamente reconocidos por las comunidades.</p> <p>2.5. Incidencia. La participación de las personas afectadas y potencialmente afectadas por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe ser activa y eficaz y se debe garantizar que las personas participantes incidan en las decisiones públicas que correspondan para cada etapa y fase del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Ello implica que las autoridades del orden nacional, departamental y local deben promover activamente los mecanismos de participación.</p>	
--	--	---	--

CAMARA DE REPRESENTANTES

<p>decisión la autoridad competente debe explicar los motivos por los cuales esas expresiones de la población fueron o no tenidas en cuenta para decidir. No se satisface el derecho a la participación si la aplicación de los mecanismos se limita a espacios de socialización e información y en el acto decisorio no se evidencia la consideración de los criterios aportados por la comunidad.</p> <p>2.6. Pluralismo. Los mecanismos de participación y su aplicación en cada etapa o fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben propender por vincular a todos los actores sociales afectados y que se puedan ver afectados directa o indirectamente por estos proyectos. Ello implica que cada actor social debe tener plenas garantías para expresar sus intereses, preocupaciones y argumentos respecto de los asuntos sometidos a su consideración.</p> <p>2.7. Transparencia y máxima publicidad. Antes, durante y después de la aplicación de los mecanismos de participación y en cada etapa o fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, las autoridades locales y las empresas vinculadas</p>		<p>2.6. Pluralismo. Los mecanismos de participación y su aplicación en cada etapa o fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben propender por vincular a todos los actores sociales afectados y que se puedan ver afectados directa o indirectamente por estos proyectos. Ello implica que cada actor social debe tener plenas garantías para expresar sus intereses, preocupaciones y argumentos respecto de los asuntos sometidos a su consideración.</p> <p>2.7. Transparencia, información y máxima publicidad. Antes, durante y después de la aplicación de los mecanismos de participación y en cada etapa o fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, las autoridades y las empresas vinculadas con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben entregar a la población, garantizando</p>	
--	--	--	--

CÁMARA DE REPRESENTANTES

<p>con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben entregar a la población, garantizando su accesibilidad, toda la información necesaria para que esta participe e incida en el proceso decisorio.</p> <p>2.8. Diálogo. Los mecanismos de participación y su aplicación en cada etapa y fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben garantizar el intercambio abierto y permanente de información y debe velar por la libertad de expresión de todos los actores sociales involucrados.</p> <p>2.9. Buena fe. En el desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación de los que trata esta ley las autoridades públicas y los particulares deberán actuar de manera honesta, leal, sincera y de buena fe. Lo anterior, como garantía para evitar abusos del derecho y desviaciones de poder en el ejercicio y aplicación de los mecanismos de participación.</p> <p>2.10. Confianza. En virtud del principio de confianza, las autoridades públicas deben preservar un comportamiento consecuente y no contradictorio frente a los particulares en todo momento y lugar con ocasión de la aplicación de los mecanismos de</p>		<p>su accesibilidad, toda la información necesaria para que esta participe e incida en el proceso decisorio.</p> <p>2.8. Diálogo. Los mecanismos de participación y su aplicación en cada etapa y fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben garantizar el intercambio abierto y permanente de información y debe velar por la libertad de expresión de todos los actores sociales involucrados.</p> <p>2.9. Buena fe. En el desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación de los que trata esta ley las autoridades y los particulares deberán actuar de manera honesta, leal y sincera.</p> <p>2.10. Confianza. En virtud del principio de confianza, las autoridades deben preservar un comportamiento consecuente y no contradictorio frente a los particulares en todo momento y lugar con ocasión de la aplicación de los mecanismos de participación de los que trata la presente ley.</p>	
--	--	---	--

<p>participación de los que trata la presente ley.</p> <p>2.11. Concertación. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por la concertación en la toma de decisiones entre las autoridades públicas del orden nacional y las autoridades locales y entre éstas y los particulares de manera que las personas puedan hacer parte de los procesos de toma de decisión respecto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2.12. Precaución y prevención. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por la protección de la diversidad e integridad del ambiente, por la garantía de los derechos fundamentales</p>		<p>2.11. Subsidiariedad. Ante ausencia de concertación entre autoridades locales y nacionales, las autoridades del orden nacional no podrán adoptar unilateralmente decisiones sobre la ocurrencia y desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que excluyan la participación e incidencia de quienes se ven directamente afectados por esos proyectos. En ese escenario se privilegiará el poder de decisión de las autoridades locales y de las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por el proyecto de exploración o explotación de recursos naturales no renovables en atención a que están más próximas a los efectos de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2.12. Participación democrática en materia de recursos naturales. En el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables los habitantes de los territorios afectados o potencialmente afectados por esos proyectos tienen el derecho a participar de manera efectiva y a decidir sobre la ocurrencia y desarrollo de esos proyectos para garantizar su inclusión en el gobierno de los recursos naturales y por la potencial afectación que tienen los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables sobre ellos y sus formas de vida.</p> <p>2.13. Precaución y prevención. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por la protección de la diversidad e integridad del ambiente, por la garantía de los derechos fundamentales de las personas y por el bienestar animal. Se debe garantizar que con ocasión del ejercicio de estos mecanismos se conozcan los posibles daños</p>	
---	--	--	--

<p>de las personas y por el bienestar animal. Se debe garantizar que con ocasión del ejercicio de estos mecanismos se conozcan los posibles daños ambientales, sociales y culturales para obrar de manera anticipada en favor del ambiente, de las personas y de los animales.</p> <p>2.13. Equidad Intergeneracional. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por garantizar que las decisiones respecto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables permitan preservar los recursos naturales para las generaciones futuras.</p> <p>2.14. No regresividad. Las autoridades públicas tienen que dar razones ciertas, claras, suficientes y contundentes al adoptar cualquier decisión relacionada con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2.15. Progresividad. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por avanzar en la eficacia y cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que habitan en las zonas en que se desarrolle o se planeen desarrollar proyectos de</p>		<p>ambientales, sociales y culturales para obrar de manera anticipada en favor del ambiente, de las personas y de los animales.</p> <p>2.14. Equidad Intergeneracional. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por garantizar que las decisiones respecto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables permitan preservar los recursos naturales para las generaciones futuras.</p> <p>2.15. No regresividad. Las autoridades tienen que dar razones ciertas, claras, suficientes y contundentes al adoptar cualquier decisión relacionada con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. No podrán afectarse negativamente las protecciones existentes a las áreas ambientalmente protegidas.</p> <p>2.16. Progresividad. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por avanzar en la eficacia y cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que habitan en las zonas en que se desarrolle o se planeen desarrollar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>	
--	--	--	--

CÁMARA DE REPRESENTANTES

<p>exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>		<p>2.17. Principio de interrelación entre el suelo y subsuelo. Las actividades que se realizan en el subsuelo tienen una incidencia directa y significativa sobre el suelo y son de competencia del Estado entendido como la nación y los entes territoriales.</p>	
<p>Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a todos los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables cuyo inicio se dé luego de la entrada en vigor de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1. A los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que estén en curso al momento de la entrada en vigor de la presente ley, sólo les serán aplicables las disposiciones relativas a las etapas del proyecto que no hayan iniciado.</p> <p>Parágrafo 2. Lo dispuesto en la presente ley no obsta para que las personas interesadas puedan hacer uso de cualquier mecanismo de participación legal y constitucionalmente reconocido en cualquier etapa o fase de los</p>	<p>-</p>	<p>Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables de manera integral a todos los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables cuyo inicio se dé luego de la entrada en vigor de la presente ley.</p> <p>A los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que esten en curso al momento de la entrada en vigencia de la presente ley les serán aplicables los mecanismos de participación de manera progresiva, de conformidad con las etapas y fases que vayan surtiendo.</p> <p>Parágrafo 1. A los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que estén en curso al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, sólo les serán aplicables las disposiciones relativas a las etapas del proyecto que no hayan iniciado.</p> <p>Parágrafo 2. Lo dispuesto en la presente ley no obsta para que las personas interesadas puedan hacer uso de cualquier otro mecanismo de participación legal y constitucionalmente reconocido, diferente a los previstos en la presente ley, en cualquier etapa o fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>	<p>Este artículo, planteado en el PLE 107 no tenía equivalente en el PLE 121. Se adopta el artículo para la ponencia y se hacen precisiones de redacción para dar mayor claridad sobre la aplicación de la ley en el tiempo.</p>

<p>proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Parágrafo 3. La aplicación de los mecanismos de participación previstos en la presente ley no obsta para el desarrollo de otros escenarios y mecanismos de información, deliberación, decisión y seguimiento que existan de manera específica para cada fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>		<p>Parágrafo 3. La aplicación de los mecanismos de participación previstos en la presente ley no obsta para el desarrollo de otros escenarios y mecanismos de información, deliberación, decisión y seguimiento que existan de manera específica para cada fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>	
<p>-</p>	<p>Artículo 3. Ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Se refiere a las personas, grupos de personas o comunidades que puedan estar en riesgo de continuar desarrollando sus actividades, ver afectados sus intereses y derechos, se les altere su situación o posición jurídica, entre otros aspectos, por la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Tratándose de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables de mediana y gran escala, la afectación puede recaer en la ciudadanía de uno o más municipios en los que se lleven a cabo o se pretendan llevar a cabo dichos proyectos.</p>	<p>Artículo 4. Ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Se refiere a las personas, grupos de personas o comunidades que puedan estar en riesgo de ver afectados sus modos de vida, su relación con el ambiente, que encuentren dificultades para continuar desarrollando sus actividades, intereses y derechos o a los que se les pueda alterar su situación o posición jurídica por la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Tratándose de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables de mediana y gran escala, la afectación puede recaer en la ciudadanía de uno o más municipios y en uno o más departamentos en los que se lleven a cabo o se pretendan llevar a cabo dichos proyectos.</p>	<p>Este artículo, previsto en el PLE 121, no tenía equivalente en PLE107. Se adopta el artículo en la ponencia con ajustes en la redacción para indicar que los proyectos de exploración y explotación pueden afectar a varios departamentos a la vez.</p>
<p>Artículo 4°. Sistema de información público</p>	<p>-</p>	<p>Artículo 5°. Sistema de información público sobre</p>	<p>Este artículo, previsto en el PLE 107, no</p>

CAMARA DE REPRESENTANTES

<p>sobre proyectos de explotación y exploración de recursos naturales no renovables. En un término no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno Nacional deberá crear y poner en funcionamiento el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN). Este Sistema estará bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que será el responsable de vigilar el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y que podrá apropiar los recursos necesarios para su funcionamiento.</p> <p>El SIPPEERN debe formar parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe garantizar su articulación con los demás subsistemas de información que componen el SIAC.</p> <p>El SIPPERN deberá contar con la información completa y actualizada de todos los proyectos de exploración y explotación de recursos del subsuelo que existan en Colombia. Como mínimo deberá contar, de manera desagregada para cada proyecto, con la siguiente información:</p>		<p>proyectos de explotación y exploración de recursos naturales no renovables. En un término no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno Nacional deberá crear y poner en funcionamiento el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN). Este Sistema estará bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que será el responsable de vigilar el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y que podrá apropiar los recursos necesarios para su funcionamiento.</p> <p>El SIPPEERN debe formar parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe garantizar su articulación con los demás subsistemas de información que componen el SIAC.</p> <p>El SIPPERN deberá contar con la información completa y actualizada de todos los proyectos de exploración y explotación de recursos del subsuelo que existan en Colombia. Como mínimo deberá contar, de manera desagregada para cada proyecto, con la siguiente información:</p>	<p>tiene equivalnete en el PLE121.</p> <p>Se adopta en la ponencia luego de ser complementado con disposiciones normativas contenidas en los artículos 7, 20 y 39 del PLE 121 sobre la información que debe entregarse a la población con ocasión de los cabildos socio ambientales, y en las audiencias de control socio ambiental.</p> <p>El contenido de los literales se complementó de conformidad con las recomendaciones de los participantes en la audiencia pública y en las mesas técnicas.</p>
--	--	--	---

<p>a. Los procesos de selección de contratistas y/o de propuestas de contratos de concesión y solicitudes de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>b. Los contratos de concesión suscritos.</p> <p>c. El Estado de avance de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>d. El estado de avance de los trámites y gestiones ambientales y sociales que correspondan.</p> <p>e. Los impactos ambientales y sociales que se prevean como consecuencia de la actividad exploratoria y de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>f. Las inversiones sociales y las regalías generadas y</p>		<p>a. Los procesos de selección de contratistas y/o de propuestas de contratos de concesión y solicitudes de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como toda la información presentada por personas naturales o jurídicas como sustento a la solicitud de contratos de concesión para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>b. Los contratos de concesión suscritos y toda la información expedida por autoridades administrativas relacionada con los contratos, convenios y otros actos jurídicos mediante los cuales se otorgan concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>c. El Estado de avance de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>d. El estado de avance de los trámites y gestiones ambientales y sociales que correspondan.</p> <p>e. Los impactos ambientales y sociales que se prevean como consecuencia de la actividad exploratoria y de explotación de recursos naturales no renovables.</p>	
---	--	---	--

<p>esperadas por el proyecto.</p> <p>g. Las medidas de corrección y compensación ambiental y social adecuadas al entorno y a las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>h. Las medidas de reparación ambiental y social ordenadas en favor de los ecosistemas y las comunidades y/o poblaciones afectadas negativamente por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>i. Las memorias y conclusiones de cada mecanismo y espacio de participación que con referencia al proyecto se haya realizado.</p> <p>j. Todas las decisiones y actos administrativos expedidos con relación a cada proyecto en cada una de sus etapas y fases.</p>		<p>f. Las inversiones sociales y las regalías generadas y esperadas por el proyecto.</p> <p>g. Las medidas de corrección y compensación ambiental y social adecuadas al entorno y a las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>h. Las medidas de reparación ambiental y social ordenadas en favor de los ecosistemas y las comunidades y/o poblaciones afectadas negativamente por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>i. Las memorias, conclusiones y actos administrativos resultantes de la aplicación de cada mecanismo y espacio de participación que con referencia al proyecto se haya realizado.</p> <p>j. Todas las decisiones, actos administrativos e información expedida por autoridades administrativas ambientales, nacionales, departamentales y municipales relacionada con los estudios técnicos realizados, permisos ambientales solicitados, otorgados y revocados que estén relacionados con cada proyecto en cada una de sus etapas y fases de la exploración y explotación de</p>	
--	--	--	--

<p>k. El informe de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo respecto del desarrollo de cada mecanismo de participación que haya sido aplicado durante las diferentes fases y etapas del proyecto</p> <p>Parágrafo 1. El SIPPEERN deberá actualizarse como mínimo una vez al mes. Si la información no está actualizada en el SIPPEERN para el momento de inicio de cada etapa o fase del proyecto de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las autoridades ambientales competentes no otorgarán los permisos o licencias necesarios para el desarrollo de la siguiente etapa o fase del proyecto.</p>		<p>recursos naturales no renovables.</p> <p>k. Toda la información proferida por órganos de control que, en virtud de sus competencias, hagan seguimiento y control a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Esto incluye los informes sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente y otros cálculos de costos ambientales elaborados por la Contraloría General de la República con respecto al proyecto, el informe de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo de los que trata la presente ley respecto del desarrollo de cada mecanismo de participación que haya sido aplicado durante las diferentes fases y etapas del proyecto.</p> <p>Parágrafo 1. El SIPPEERN deberá actualizarse siempre que ocurra un cambio en la información de los literales anteriores. Si la información requerida de acuerdo con lo dispuesto en esta ley no está actualizada en el SIPPEERN para el momento de inicio de cada etapa o fase del proyecto de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las autoridades ambientales competentes no otorgarán los permisos o licencias necesarios para el desarrollo de la siguiente etapa o fase del proyecto.</p>	
<p>Artículo 5°. Alcance de la Consulta Previa e incorporación de Consultas Universales Anticipadas en contextos de</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Este artículo del PLE 107 no tenía un par en el PLE 121. Fue eliminado en la ponencia para primer debate toda vez que</p>

CAPARA DE REPRESENTANTES			
<p>exploración y explotación de recursos naturales no renovables. En el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables la autoridad ambiental está obligada a consultar a las comunidades que habitan municipios y/o distritos en cuyo territorio se pretendan desarrollar estos proyectos. Ello, aunque las poblaciones interesadas no sean pueblos étnicos.</p> <p>Las comunidades que no se identifiquen como étnicas tendrán a su servicio el mecanismo de las Consultas Universales Anticipadas. Esas consultas se desarrollarán con base en las normas que rigen a la Consulta Previa y conforme las normas especiales previstas en la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, la Consulta Previa y la Consulta Universal Anticipada son mecanismos diferentes e independientes.</p> <p>Cuando exista presencia de comunidades étnicas en estos territorios es necesario desarrollar la Consulta Previa de forma independiente y diferenciada para esas poblaciones.</p> <p>Las disposiciones para Consultas Universales Anticipadas y las demás disposiciones previstas en la presente ley no</p>			<p>se prescindió del mecanismo de Consulta Universal Anticipada.</p>

<p>desmejoran, modifican, alteran ni afectan las garantías y disposiciones normativas relacionadas con la Consulta Previa para comunidades étnicas.</p>			
<p>Artículo 6°. Acompañamiento de la Procuraduría General y de la Defensoría del Pueblo. En el desarrollo de cada mecanismo de participación previsto en la presente ley se deberá garantizar el acompañamiento de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. En el marco de sus competencias, participarán como garantes y vigilarán el correcto desarrollo de los mecanismos de participación previstos en la presente ley. Podrán difundir información y solucionar las dudas que tengan los participantes y la población en general respecto de los mecanismos de participación de los que trata la presente ley.</p> <p>En un término no mayor a cinco (5) días hábiles tras la celebración de cada mecanismo de participación deberán entregar a la autoridad competente del desarrollo del mecanismo de participación un informe en el que den cuenta del desarrollo del proceso, del cumplimiento de lo previsto en la presente ley y del goce efectivo del derecho a la participación.</p>		<p>Artículo 6°. Acompañamiento de la Procuraduría General y de la Defensoría del Pueblo. En el desarrollo de cada mecanismo de participación previsto en la presente ley se deberá garantizar el acompañamiento de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. En el marco de sus competencias, participarán como garantes y vigilarán el correcto desarrollo de los mecanismos de participación previstos en la presente ley. Podrán difundir información y solucionar las dudas que tengan los participantes y la población en general respecto de los mecanismos de participación de los que trata la presente ley.</p> <p>En un término no mayor a dos (2) días calendario tras la celebración de cada mecanismo de participación deberán entregar a la autoridad competente del desarrollo del mecanismo de participación un informe en el que den cuenta del desarrollo del proceso, del cumplimiento de lo previsto en la presente ley y del goce efectivo del derecho a la participación.</p>	<p>Este artículo, que no tiene equivalente en el PLE121 fue adoptado en la ponencia.</p> <p>Se redujo de 5 a 2 días el término para que remitan el informe del que trata este artículo en atención a los comentarios de la ciudadanía recibidos en la audiencia pública y en las mesas técnicas.</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

<p>Este informe deberá ser publicado en el SIPPEERN en un término no mayor a tres (3) días hábiles luego de que sea entregado a la autoridad competente de la realización del mecanismo de participación.</p>		<p>Este informe deberá ser publicado en el SIPPEERN en un término no mayor a dos (2) días calendario luego de que sea entregado a la autoridad competente de la realización del mecanismo de participación.</p>	
<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">TÍTULO II.</p> <p style="text-align: center;">DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CIUDADANÍA AFECTADA Y POTENCIALMENTE AFECTADA POR LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES</p>	<p style="text-align: center;">TÍTULO II</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO ÚNICO</p> <p style="text-align: center;">DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y POTENCIALMENTE AFECTADAS POR LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES</p>	<p>Este título, previsto en el PLE 121, no tenía equivalente en el PLE 107.</p> <p>Se precisó en la ponencia para primer debate que el título tiene un solo capítulo.</p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Artículo 4. Derecho especial de participación de las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables tienen derecho a participar, activa y efectivamente, en todas las decisiones de carácter administrativo mediante las cuales se pretenda aprobar la realización de proyectos de dicha naturaleza, así como en la identificación de los impactos sociales, económicos, ambientales</p>	<p>Artículo 7. Derecho especial de participación de las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables tienen derecho a participar, activa y efectivamente, en todas las decisiones de carácter administrativo mediante las cuales se pretenda aprobar la realización de proyectos de dicha naturaleza, así como en la identificación de los impactos sociales, económicos, ambientales y culturales causados por dichos proyectos.</p>	<p>Este artículo, previsto en el PLE 121, no tenía equivalente en el PLE 107. Se adoptó para la ponencia de primer debate.</p>

	<p>y culturales causados por dichos proyectos.</p> <p>La participación activa y eficaz de la que trata este artículo se debe garantizar en todas las etapas y fases de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los mecanismos que crea esta ley.</p> <p>Asimismo, la participación debe ser real, libre, informada y efectiva frente a la aprobación, la ejecución y la evaluación de los proyectos de los que trata esta ley.</p>	<p>La participación y eficaz de la que trata este artículo se debe garantizar en todas las etapas y fases de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los mecanismos que crea esta ley.</p> <p>Asimismo, la participación debe ser real, libre, informada, efectiva y estar a disposición frente a la aprobación, la ejecución y la evaluación de los proyectos de los que trata esta ley.</p>	
-	<p>Artículo 5. Derecho a la democracia como deliberación. Las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tienen derecho a impulsar los mecanismos de participación de los que trata esta ley para promover una deliberación en la toma de decisiones sobre dicho tipo de actividades.</p> <p>Los mecanismos de participación que regula esta ley deben garantizar procesos de deliberación libres de interferencias y tienen como objetivo promover el diálogo horizontal de la ciudadanía, construir consensos y reconocer diferencias legítimas relacionadas con prioridades y necesidades locales y nacionales.</p>	<p>Artículo 8. Derecho a la democracia como deliberación. Las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables tienen derecho a impulsar los mecanismos de participación de los que trata esta ley para promover una deliberación en la toma de decisiones sobre dicho tipo de actividades.</p> <p>Los mecanismos de participación que regula esta ley deben garantizar procesos de deliberación libres de interferencias y tienen como objetivo promover el diálogo horizontal de la ciudadanía, construir consensos y reconocer diferencias legítimas relacionadas con prioridades y necesidades locales y nacionales.</p>	<p>Este artículo, previsto en el PLE 121, no tenía equivalente en el PLE 107. Se adoptó para la ponencia de primer debate.</p>
-	<p>Artículo 6. Derecho a la democracia como</p>	<p>Artículo 9. Derecho a la democracia como decisión. Las decisiones que</p>	<p>Este artículo, previsto en el PLE 121, no</p>

	<p>decisión. Las decisiones que se adopten como resultado de la aplicación de los mecanismos de participación de los que trata esta ley reflejarán la deliberación como principio democrático.</p> <p>Los resultados de las discusiones en el marco de los mecanismos desarrollados por esta ley son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del orden local, departamental y nacional.</p>	<p>se adopten como resultado de la aplicación de los mecanismos de participación de los que trata esta ley reflejarán la deliberación como principio democrático.</p> <p>Los resultados de las discusiones en el marco de los mecanismos desarrollados por esta ley son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del orden local, departamental y nacional, así como para la ciudadanía y los particulares responsables o interesados en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>	<p>tenía equivalente en el PLE 107. Se adoptó para la ponencia de primer debate.</p>
<p>-</p>	<p>Artículo 7. Derecho de acceso a la información frente a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Se garantiza a la ciudadanía el derecho de acceso a la información relacionada con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, lo cual incluye:</p> <p>1. Acceso a la información presentada por personas naturales o jurídicas como sustento a la solicitud de contratos de concesión para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2. Acceso a la información expedida por autoridades administrativas relacionada con los contratos, convenios y otros actos jurídicos mediante los cuales se otorgan concesiones para la exploración y</p>	<p>Artículo 10. Derecho de acceso a la información frente a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Se garantiza a la ciudadanía el derecho de acceso a la información relacionada con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>	<p>Este artículo, previsto en el PLE 121, no tenía equivalente en el PLE 107. Se adoptó para la ponencia de primer debate.</p> <p>El contenido normativo previsto en los numerales del artículo en la versión propuesta por el PLE121 fue acogido en el artículo 5 de la ponencia para primer debate.</p>

<p>explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>3. Acceso a la información expedida por autoridades administrativas ambientales, nacionales, departamentales y municipales relacionada con los estudios técnicos realizados, permisos ambientales solicitados, otorgados y revocados que estén relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>4. Acceso a la información proferida por órganos de control que, en virtud de sus competencias, hagan seguimiento y control a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>El derecho de acceso a la información sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables implica que la información debe ser previa, permanente, transparente, clara y suficiente, debe estar disponible, de fácil acceso y de manera gratuita para las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por ese tipo de proyectos y actividades.</p> <p>Parágrafo. El contenido de este derecho y la garantía para el acceso se interpretará integralmente por lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>El derecho de acceso a la información sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables implica que la información debe ser previa, permanente, transparente, clara y suficiente, debe estar disponible, ser accesible y gratuita para las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por ese tipo de proyectos y actividades.</p> <p>El contenido de este derecho y la garantía para el acceso se interpretará integralmente por lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 o por aquellas normas que la modifiquen o deroguen</p>		
			<p>Se adopta como título III del proyecto. Se</p>

CAMARA DE REPRESENTANTES			
TÍTULO II	TÍTULO III	TÍTULO III	
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA DE EXPLORACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A SOLICITUDES DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETIVA PARA LA ASIGNACIÓN DE ÁREAS PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES PROMOVIDOS POR EL ESTADO Y PROYECTOS DE ESTA NATURALEZA QUE ESTÉN EN ETAPA DE EXPLORACIÓN.	CAPÍTULO ÚNICO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA DE EXPLORACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	<p>opta por dejar el nombre propuesto por el PLE107 por considerar que es más claro.</p> <p>Se precisa que el título es de capítulo único.</p> <p style="text-align: center;">DECISIONES GENERALES SOBRE EL TÍTULO III AL ACUMULAR LOS PLE:</p> <p>Se mantiene el mecanismo de Audiencia pública ambiental ante la solicitud o apertura de convocatoria (arts. 7 y 8 PLE 107), las audiencias públicas ambientales en las fases de exploración (Art. 21 PLE 107), y el Cabildo Abierto Socioambiental y los subsecuentes Acuerdos participativos frente a la conveniencia o inconveniencia del proyecto (Arts. 10-27 y Arts. 28-31 PLE 121). Se mantiene la prelación para municipios con consultas o acuerdos municipales sobre extractivismo (Arts. 32 y 33 PLE 121). Se elimina el mecanismo de Consulta Universal Anticipada previsto en el PLE 107. Se mantiene el tema de agotamiento de los mecanismos y la aplicación progresiva de las disposiciones (PLE 107).</p>
CAPÍTULO I	CAPÍTULO 1	-	Se elimina la división de capítulos para el título III. En la

<p>MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ANTE LA SOLICITUD DE EXPLORACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y/O ANTE LA APERTURA DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA EL DESARROLLO DE ESOS PROYECTOS</p>	<p>DEL CABILDO ABIERTO SOCIOAMBIENTAL DELIBERATIVO Y DECISORIO FRENTE A NUEVOS PROYECTOS DE EXPLORACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN ETAPA DE EXPLORACIÓN.</p>		<p>ponencia será un título de capítulo único.</p>
<p>Artículo 7°. Audiencia pública ambiental. Siempre que la autoridad ambiental competente ordene la apertura de una convocatoria para la selección de contratistas o reciba una solicitud para la exploración de recursos naturales no renovables tiene que convocar una audiencia pública ambiental en los términos previstos por el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y por el Decreto 1076 de 2015 o por aquellas disposiciones que las modifiquen o deroguen.</p> <p>Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y por el Decreto 1076 de 2015 o por aquellas disposiciones que las modifiquen o deroguen, a esta audiencia deberá convocarse a la población de los distritos y/o municipios en que converge la eventual actividad de exploración de recursos naturales no renovables.</p> <p>Con veinte (20) días de antelación a la realización de la audiencia deberá estar</p>	<p>-</p>	<p>Artículo 11°. Audiencia pública ambiental ante solicitudes o convocatorias para el desarrollo de proyectos de exploración de recursos naturales no renovables. Siempre que la autoridad competente ordene la apertura de una convocatoria para la selección de contratistas o reciba una solicitud para la exploración de recursos naturales no renovables tiene que convocar una audiencia pública ambiental.</p> <p>A esta audiencia deberá convocarse a la población de los distritos y/o municipios en que converge la eventual actividad de exploración de recursos naturales no renovables.</p> <p>Con un (1) mes de antelación a la realización de la audiencia deberá estar cargada y a disposición del público en el Sistema de Información</p>	<p>Se adopta el artículo 7 del PLE107 en la medida que desarrolla el mecanismo de audiencia pública ambiental en el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Se le hicieron modificaciones para garantizar que se diferenciara de la audiencia pública ambiental de la que trata la Ley 99 de 1993. También se amplía en 10 días el término de antelación con el que debe estar la información disponible para la población. Ambas modificaciones se realizaron en atención a las recomendaciones recibidas en la audiencia pública y las mesas técnicas en ese respecto.</p> <p>Finalmente, se incluyó el parágrafo 3 y el parágrafo 4 para lograr la debida articulación de este mecanismo con el</p>

<p>cargada y a disposición del público en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) la información sobre la(s) solicitud(es) y/o propuesta(s) de exploración. Esto debe incluir los impactos y afectaciones sociales y ambientales que se espera tener con la actividad exploratoria.</p> <p>Al inicio de la audiencia deberá darse lectura de la información referida en el inciso anterior y deberá entregarse copia impresa o digital, según lo soliciten los participantes.</p> <p>Parágrafo 1. Deberán asistir a la audiencia todos los proponentes y solicitantes de las actividades de exploración que converjan sobre el mismo territorio.</p> <p>Parágrafo 2. La realización de la audiencia pública ambiental, en los términos descritos en esta ley, será requisito para que la autoridad ambiental competente pueda dar continuidad al proceso de selección objetiva y/o de concesión para la exploración de recursos naturales no renovables.</p>		<p>Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) la información sobre la(s) solicitud(es) y/o propuesta(s) de exploración. Deberan incluirse las líneas bases ambientales y sociales para el área de influencia del proyecto, a cargo de las autoridades ambientales y las alcaldías de los municipios y distritos que puedan verse vinculados con la actividad exploratoria.</p> <p>Al inicio de la audiencia deberá darse lectura de la información referida en el inciso anterior y deberá entregarse copia impresa o digital, según lo soliciten los participantes.</p> <p>Parágrafo 1. Deberán asistir a la audiencia todos los proponentes y solicitantes de las actividades de exploración que converjan sobre el mismo territorio.</p> <p>Parágrafo 2. La realización de la audiencia pública ambiental, en los términos descritos en esta ley, será requisito para que la autoridad minera o de hidrocarburos competente pueda dar continuidad al proceso contractual para la exploración de recursos naturales no renovables y para avanzar a las siguientes fases del proyecto una vez esté en ejecución la etapa de exploración.</p> <p>Parágrafo 3. A esta audiencia deberá estar atada la convocatoria subsiguiente a un Cabildo Abierto</p>	<p>Cabildo Abierto Socio ambiental que estaba previsto en el PLE 121.</p>
---	--	--	---

		<p>Socioambiental que permita deliberación y decisión respecto de la ejecución del proyecto de exploración de recursos naturales no renovables.</p> <p>Parágrafo 4. La audiencia pública ambiental de la que trata este artículo sólo será exigible para los proyectos de exploración de recursos naturales no renovables cuya convocatoria o solicitud se dé con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.</p>	
<p>Artículo 8°. Notificación del acta de la audiencia. La autoridad ambiental competente notificará por aviso y de manera personal el acta de la audiencia pública de la que trata el artículo 2.2.2.4.1.14 del Decreto 1076 de 2015, a todos los participantes de la audiencia en un término de cinco (5) días hábiles siguientes a la elaboración del acta. En los casos de la notificación por aviso, esta deberá fijarse en la sede de la Alcaldía Municipal o Distrital y en la sede virtual de la respectiva entidad y deberá circularse en las radios comunitarias y medios de comunicación local.</p> <p>A través de esos mismos canales de comunicación y en el mismo momento se convocará a una Consulta Universal Anticipada que deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación.</p> <p>La autoridad ambiental competente deberá notificar en el mismo término de cinco (5) días hábiles a la Dirección de Consulta Previa para que ésta active el proceso de</p>		<p>Artículo 12°. Notificación del acta de la audiencia. La autoridad minera o de hidrocarburos competente notificará por aviso y de manera personal el acta de la audiencia pública a todos los participantes de la audiencia en un término de cinco (5) días calendario siguientes a la elaboración del acta. En los casos de la notificación por aviso, esta deberá fijarse en la sede de la Alcaldía Municipal o Distrital y en la sede virtual de la respectiva entidad y deberá circularse en las radios comunitarias y medios de comunicación local.</p> <p>A través de esos mismos canales de comunicación y en el mismo momento se notificará al(os) concejo(s) municipal(es) o a la asamblea departamental, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la presente ley, para que estos convoquen a un Cabildo Abierto Socioambiental. La convocatoria deberá hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la que trata el presente artículo y el Cabildo Abierto Socioambiental deberá celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del acta de la audiencia.</p>	<p>Se adopta el artículo 8 del PLE 107 para garantizar la notificación del acta de audiencia. Se realizaron modificaciones para diferenciar este mecanismo del previsto en la Ley 99 de 1993 y en el segundo parágrafo para hacer compatible y armoniosa su aplicación no ya con la Consulta Universal Anticipada (que fue un mecanismo que fue descartado para la ponencia) sino con el Cabildo Abierto Socio Ambiental.</p> <p>Se ajusta un asunto de competencia entre la autoridad ambiental y minera y de hidrocarburos justamente para hacer compatibles las competencias de esas autoridades con la convocatoria al cabildo abierto.</p>

<p>convocatoria a la Consulta Universal Anticipada según lo dispuesto en el Decreto 1066 de 2015.</p> <p>Parágrafo 1. Si alguna de las personas que intervino en la audiencia pública tiene alguna discrepancia con el contenido del acta, podrá hacerlo saber a la autoridad ambiental en un término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación. La autoridad ambiental deberá notificar una versión del acta con las enmiendas siempre que éstas existieren en un término de tres (3) días hábiles siguientes al día en que se cumpla el término para que la ciudadanía presente sus discrepancias con el acta original.</p> <p>Parágrafo 2°. En los casos de que trata el parágrafo 1, la autoridad ambiental deberá repetir el proceso de notificación previsto en el primer inciso del presente artículo. La notificación del acta con enmiendas no afectará el término de treinta (30) días hábiles para la celebración de la Consulta Universal Anticipada previsto en el inciso primero del presente artículo.</p>		<p>Parágrafo 1. Si alguna de las personas que intervino en la audiencia pública tiene alguna discrepancia con el contenido del acta, podrá hacerlo saber a la autoridad minera o de hidrocarburos en un término de dos (2) días calendario siguientes a la notificación. La autoridad deberá notificar una versión del acta con las enmiendas siempre que éstas existieren en un término de tres (3) días calendario siguientes al día en que se cumpla el término para que la ciudadanía presente sus discrepancias con el acta original.</p> <p>Parágrafo 2°. En los casos de que trata el parágrafo 1, la autoridad minera o de hidrocarburos deberá repetir el proceso de notificación previsto en el primer inciso del presente artículo. La notificación del acta con enmiendas no afectará el término de dos (2) meses para convocar al Cabildo Abierto Socioambiental ni el afecta el término de tres (3) meses para la celebración del Cabildo Abierto Socioambiental previsto en el inciso segundo del presente artículo.</p>	
<p>Artículo 9°. Consulta Universal Anticipada para la exploración de recursos naturales no renovables. Notificada del acta de la audiencia pública ambiental, la Dirección de Consulta Previa deberá convocar a una Consulta Universal Anticipada dentro de los</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Este artículo fue eliminado para la ponencia para primer debate en atención a que no tenía un equivalente en el PLE 121 y que se prefirió optar por el Cabildo Abierto Socioambiental, prescindiendo de la</p>

<p>treinta (30) días hábiles siguientes.</p> <p>La Consulta Universal Anticipada se aplica a la población en general que habita en los municipios y/o distritos en que se pretenda realizar o en que se estén realizando proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Salvo por aquellas de carácter especial que se añaden en esta ley, se rige por las normas generales previstas para la Consulta Previa en el Decreto 1066 de 2015 o en aquellas normas que lo modifiquen o deroguen.</p> <p>La Consulta Universal Anticipada no sustituye ni equivale a la Consulta Previa. Los pueblos étnicos deben ver garantizado su derecho a la Consulta Previa en los términos previstos en el ordenamiento jurídico, con independencia del desarrollo de Consultas Universales Anticipadas.</p> <p>Parágrafo 1. Cuando haya presencia de comunidades étnicas en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se pretenda realizar la exploración de recursos naturales no renovables se deberán desarrollar las Consultas Previas a las que hubiere lugar. Estas serán adicionales e independientes a la Consulta Universal Anticipada, prevista para la población en general, y se desarrollarán de conformidad con lo previsto por el Decreto</p>			<p>Consulta Universal Anticipada como mecanismo principal en la etapa de exploración.</p>
---	--	--	---

----- CÁMARA DE REPRESENTANTES -----

<p>1066 de 2015 o en aquellas normas que lo modifiquen o deroguen.</p>			
<p>Artículo 10°. Participantes de la Consulta Universal Anticipada para la exploración de recursos naturales no renovables. En las consultas universales anticipadas deberá permitirse la participación de todos los actores sociales e institucionales involucrados en la exploración de recursos naturales no renovables.</p> <p>Además, será obligatoria la participación de todos los proponentes y/o solicitantes de las actividades de exploración que converjan sobre el mismo territorio. Será también obligatoria la participación de la autoridad ambiental competente ante la que se radicó la solicitud de exploración o que dio apertura al proceso de contratación para tal fin.</p> <p>Parágrafo 1°. La ausencia de alguno de los proponentes o solicitantes de las actividades de exploración y/o de las autoridades ambientales competentes impedirá el desarrollo de la Consulta Universal Anticipada. A su vez, el no desarrollo de la consulta impedirá la decisión de fondo por parte de la autoridad ambiental competente sobre la concesión para la exploración de recursos naturales no renovables y/o para la elección de los contratistas para tal fin.</p>		<p style="text-align: center;">ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Este artículo fue eliminado para la ponencia para primer debate en atención a que no tenía un equivalente en el PLE 121 y que se prefirió optar por el Cabildo Abierto Socio ambiental, prescindiendo de la Consulta Universal Anticipada como mecanismo principal en la etapa de exploración.</p>

<p>Artículo 11°. Desarrollo del proceso de consulta. El desarrollo de las consultas de las que trata la presente ley deberá seguir el proceso previsto en el Decreto 1066 de 2015 o en aquellas normas que lo modifiquen o deroguen. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá leer en la primera reunión el acta final del proceso de audiencia pública ambiental de la que tratan los artículos 7 y 8 de esta ley.</p> <p>Será requisito para el inicio del proceso de consulta que en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible el acta final con o sin enmiendas, según sea el caso, de la audiencia pública ambiental. También deberán constar en el SIPPEERN, como requisito para el inicio de la consulta, las actualizaciones o modificaciones que se hubieran realizado a los documentos de los que trata el artículo 4 de la presente ley entre la celebración de la audiencia pública ambiental y el inicio de la consulta.</p> <p>Al inicio de la consulta deberá darse lectura de la información referida en el inciso anterior y deberá entregarse copia impresa o digital, según lo soliciten los participantes.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Este artículo fue eliminado para la ponencia para primer debate en atención a que no tenía un equivalente en el PLE 121 y que se prefirió optar por el Cabildo Abierto Socio ambiental, prescindiendo de la Consulta Universal Anticipada como mecanismo principal en la etapa de exploración.</p>
--	--	---	---

<p>Parágrafo 1°. El desarrollo de la Consulta Universal Anticipada será requisito para que la autoridad ambiental competente pueda dar continuidad al proceso de selección objetiva y/o de concesión para la exploración de recursos naturales no renovables.</p>			
<p>Artículo 12°. Notificación de las conclusiones del proceso de consulta. La Dirección de Consulta Previa deberá notificar las conclusiones del mecanismo de consulta a quienes participaron de la misma, al Concejo municipal y/o distrital y a la autoridad ambiental responsable del proceso de exploración. Para hacerlo tendrá un término no mayor a cinco (5) días hábiles tras la celebración de la Reunión de Cierre de la Consulta.</p> <p>Si tras la realización de la Consulta las comunidades participantes no consensuaran el desarrollo de la actividad exploratoria, en el documento proferido por la Dirección de Consulta que recoja las conclusiones del proceso, deberá recomendar a la comunidad la convocatoria a un Cabildo Abierto para ampliar la discusión y deliberación en torno al proyecto. Esa recomendación deberá estar acompañada de un instructivo detallado sobre los requisitos para la convocatoria y desarrollo de ese mecanismo de participación.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Este artículo fue eliminado para la ponencia para primer debate en atención a que no tenía un equivalente en el PLE 121 y que se prefirió optar por el Cabildo Abierto Socio ambiental, prescindiendo de la Consulta Universal Anticipada como mecanismo principal en la etapa de exploración.</p>

<p>Parágrafo 1. El documento del que trata el presente artículo deberá ser publicado en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) por la autoridad ambiental competente en un término no mayor a tres (3) días hábiles.</p>			
<p>Artículo 21°. Audiencia pública ambiental en fases de exploración. Previo inicio de cada una de las fases previstas como constitutivas de la etapa de exploración se deberá desarrollar una audiencia pública en los términos previstos en el Título II de la presente ley.</p>		<p>Artículo 13°. Audiencia pública ambiental en las fases de la exploración. Previo inicio de cada una de las fases previstas como constitutivas de la etapa de exploración se deberá desarrollar una audiencia pública ambiental en los términos previstos en el presente artículo.</p> <p>Estas audiencias públicas ambientales son diferentes e independientes a la audiencia pública ambiental de la que tratan los dos artículos anteriores toda vez que estas no contemplan la subsiguiente convocatoria a un Cabildo Abierto Socioambiental y tienen como objeto preparar la siguiente fase de la etapa de exploración, no anteceder a la deliberación y decisión sobre la puesta en marcha del proyecto de exploración.</p>	<p>Se toma como base el artículo 21 del PLE 107 para permitir la aplicación del mecanismo de audiencia pública de manera transversal a la exploración, al inicio de cada una de sus fases.</p> <p>Se precisan las particularidades de las audiencias públicas ambientales cuando estas se apliquen al inicio de cada una de las fases de la etapa de exploración. El PLE121 no tiene artículo equivalente pues no desarrolla ese mecanismo de participación.</p> <p>Se modifican apartes de la redacción, incorporando un nuevo segundo inciso para hacer compatible la aplicación de estas audiencias previstas en el PLE 107 con el Cabildo Abierto Socioambiental previsto en el PLE121.</p>
<p>Parágrafo 1. La autoridad ambiental competente debe convocar a la población de los distritos y/o municipios en que converge la actividad de exploración de recursos naturales no renovables y a los terceros interesados en el desarrollo del proyecto. Será obligatoria</p>		<p>Parágrafo 1. Previo al inicio de cada una de las fases de exploración, la autoridad minera o de hidrocarburos competente debe convocar a la población de los distritos y/o municipios en que converge la actividad de exploración de recursos naturales no renovables y a los terceros interesados en el desarrollo del proyecto. Será obligatoria la participación en la audiencia de la(s) empresa(s) y ejecutores responsables</p>	

<p>la participación para la(s) empresa(s) y ejecutores responsables de la fase de exploración de recursos naturales no renovables. Su inasistencia impide el desarrollo de la audiencia y sin su presencia no se tendrá por agotado el mecanismo de participación.</p> <p>Parágrafo 2. El agotamiento de este mecanismo de participación será requisito para que la autoridad ambiental y las empresas involucradas puedan proseguir con el desarrollo de las fases siguientes de la etapa de exploración.</p> <p>Parágrafo 3. Al inicio de cada audiencia se dará lectura y se entregará a los participantes una copia física o digital del documento preparado por la autoridad ambiental convocante en que consten las conclusiones en materia de impactos ambientales y sociales de la fase previa y un estimativo de los impactos de la fase siguiente.</p> <p>En todas las audiencias las empresas, en conjunto con la autoridad ambiental competente, deben informar a los participantes de la audiencia las medidas de prevención, atención y reparación para evitar, controlar y reparar eventuales afectaciones sociales y ambientales que pudieran causarse en</p>		<p>de la fase de exploración de recursos naturales no renovables. Su inasistencia impide el desarrollo de la audiencia y sin su presencia no se tendrá por agotado el mecanismo de participación.</p> <p>Parágrafo 2. El agotamiento de este mecanismo de participación será requisito para que la autoridad minera o de hidrocarburos y las empresas involucradas puedan proseguir con el desarrollo de las fases siguientes de la etapa de exploración.</p> <p>Parágrafo 3. Al inicio de cada audiencia se dará lectura y se entregará a los participantes una copia física o digital del documento preparado por la autoridad ambiental convocante. Cuando corresponda, en ese documento deben constar las conclusiones en materia de impactos ambientales y sociales de la fase previa y un estimativo de los impactos de la fase siguiente.</p> <p>En todas las audiencias las empresas, en conjunto con la autoridad competente, deben informar a los participantes de la audiencia las medidas de prevención, atención y reparación para evitar, controlar y reparar eventuales afectaciones sociales y ambientales que pudieran causarse en la siguiente fase de la exploración.</p>	
---	--	--	--

<p>la siguiente fase de la exploración.</p> <p>En la primera audiencia celebrada en la etapa de exploración se dará lectura al acto administrativo que aprobó el desarrollo de dicha etapa.</p> <p>Parágrafo 4. La información de la que tratan los párrafos anteriores debe estar publicada y disponible para consulta en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN). Dicha publicación debe darse por parte de la autoridad ambiental en asocio con las empresas al menos con veinte (20) días hábiles de anterioridad a la celebración de la audiencia.</p> <p>Parágrafo 5. Los mecanismos de publicidad, notificación y enmienda de las actas de las audiencias públicas previstos en el Capítulo I de este Título serán aplicables para todas las audiencias que se celebren durante la etapa de exploración.</p> <p>Parágrafo 6. Sólo cuando se trate de la audiencia preparatoria para la última fase de la etapa de exploración se deberá seguir el procedimiento previsto para convocar inmediatamente a la Consulta Universal</p>		<p>En la primera audiencia luego de celebrado el Cabildo Abierto Socioambiental se dará lectura al acto administrativo que aprobó el desarrollo de dicha etapa.</p> <p>Parágrafo 4. La información de la que tratan los párrafos anteriores debe estar publicada y disponible para consulta en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN). Dicha publicación debe darse por parte de la autoridad ambiental en asocio con las empresas al menos con veinte (20) días hábiles de anterioridad a la celebración de la audiencia.</p> <p>Parágrafo 5. Los mecanismos de publicidad, notificación y enmienda de las actas de las audiencias públicas previstos en los dos artículos anteriores serán aplicables para todas las audiencias que se celebren durante la etapa de exploración, salvo lo relacionado con la convocatoria al Cabildo Abierto Socioambiental.</p> <p>Parágrafo 6. Las audiencias públicas ambientales de las que trata este artículo sólo serán aplicables a las fases de la etapa de exploración que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.</p>	
--	--	---	--

<p>Anticipada de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la presente ley.</p>			
<p>Artículo 14°. Celebración de cabildo abierto. El Cabildo Abierto se desarrollará conforme lo previsto en la Ley 1757 de 2015 o en aquellas normas que la modifiquen o deroguen. Sin perjuicio de aquello, si se solicita para discutir asuntos relacionados con la exploración de recursos naturales no renovables deberá contar con la presencia de la autoridad ambiental competente para decidir sobre el proyecto de exploración y de los proponentes o solicitantes de las actividades de exploración. En caso de haber sido convocada en los términos previstos por el inciso segundo del artículo 13 de la presente ley, la ausencia de alguno de esos actores impedirá el desarrollo del cabildo.</p> <p>Con independencia del momento de su convocatoria, en caso de realizarse, el registro y memorias del evento deberán publicarse en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN). Esa información deberá ser publicada por la autoridad ambiental competente en un término no mayor a cinco (5)</p>	<p>Artículo 8. Del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es un mecanismo de participación ciudadana de carácter deliberativo y decisorio mediante el que la ciudadanía de uno o varios municipios potencialmente afectados por una o varias solicitudes para la ejecución de un proyecto de exploración de recursos naturales no renovables y por procesos de asignación de áreas para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables promovidos por el Estado, se informará, discutirá y decidirá sobre su conveniencia o inconveniencia, en el marco de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales.</p> <p>La decisión que se adopte en el cabildo abierto socioambiental estará basada en la información que sobre los proyectos a los que se refiere este artículo brinden las autoridades del orden nacional a la ciudadanía que participe en el cabildo, en la información que tengan las comunidades sobre el territorio, en la información proporcionada por la persona natural o jurídica interesada en el proyecto, y en la</p>	<p>Artículo 14. Del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es un mecanismo de participación ciudadana de carácter deliberativo y decisorio mediante el que la ciudadanía de uno o varios municipios potencialmente afectados por una o varias solicitudes para la ejecución de un proyecto de exploración de recursos naturales no renovables y por procesos de asignación de áreas para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables promovidos por el Estado, se informará, discutirá y decidirá sobre su conveniencia o inconveniencia, en el marco de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales o de los concejos municipales o distritales.</p> <p>La decisión que se adopte en el cabildo abierto socioambiental estará basada en la información que sobre los proyectos a los que se refiere este artículo brinden las autoridades del orden nacional a la ciudadanía que participen en el cabildo, en la información que tengan las comunidades sobre el territorio, en la información proporcionada por la persona natural o jurídica interesada en el proyecto, y en la información sobre los determinantes del ordenamiento territorial que brinden las autoridades del orden nacional, departamental y local competentes.</p>	<p>Se descarta el artículo del PLE107 y se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p>

<p>días hábiles tras la realización del cabildo.</p>	<p>información sobre los determinantes del ordenamiento territorial que brinden autoridades del orden nacional, departamental y local competentes.</p> <p>La decisión que se adopte debe tener en cuenta y aplicar los principios de precaución y prevención ambiental.</p>	<p>La decisión que se adopte debe tener en cuenta y aplicar los principios de precaución y prevención ambiental.</p>	
<p>Artículo 13°. Término de oportunidad para la convocatoria al cabildo. Las comunidades consultadas podrán, con independencia del resultado de las consultas, convocar en cualquier momento a un Cabildo Abierto en su municipio y/o distrito para ampliar la discusión y deliberación en torno al proyecto de exploración.</p> <p>Si la comunidad radicara la petición de Cabildo Abierto dentro de un término de treinta (30) días tras la notificación de las conclusiones de la consulta, el agotamiento del Cabildo Abierto se convertirá en requisito sin el cual la autoridad ambiental competente no podrá dar continuidad al proceso de exploración de recursos naturales no renovables. Lo anterior, siempre que la comunidad cumpla con los requisitos para activar el Cabildo Abierto y las autoridades locales cumplan los términos previstos por la Ley 1757 de 2015 o las normas que la modifiquen o deroguen.</p>	<p>Artículo 9. Obligatoriedad del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es de obligatoria realización en todos los casos en que la autoridad nacional competente reciba una o varias solicitudes mediante las que personas naturales o jurídicas persigan la concesión para la exploración de recursos naturales no renovables.</p> <p>Se puede realizar un cabildo abierto socioambiental que agrupe varias solicitudes, así sean de personas naturales o jurídicas diferentes, en aras de comprender los impactos que en el ordenamiento territorial tendría la realización de actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables en el municipio o municipios afectados.</p> <p>También será obligatorio en casos en los que la autoridad competente decida abrir un proceso de selección objetiva,</p>	<p>Artículo 15. Obligatoriedad del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es de obligatoria realización en todos los casos en que la autoridad nacional competente reciba una o varias solicitudes mediante las que personas naturales o jurídicas persigan la concesión para la exploración de recursos naturales no renovables.</p> <p>Se puede realizar un cabildo abierto socioambiental que agrupe varias solicitudes siempre que estas comprendan la exploración de los mismos recursos naturales no renovables en el mismo territorio, así sean de personas naturales o jurídicas diferentes, en aras de comprender los impactos que en el ordenamiento territorial tendría la realización de actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables en el municipio o municipios afectados.</p> <p>También será obligatorio en casos en los que la autoridad competente decida abrir un proceso de selección objetiva, mediante convocatoria, para la exploración y explotación de</p>	<p>Se descarta el artículo del PLE107 y se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción en el inciso 4 para garantizar que con independencia del municipio en que se realice el cabildo, se permita la participación de la ciudadanía de todos los municipios sobre los que tenga injerencia el proyecto.</p> <p>Se elimina el parágrafo 2 para garantizar la correcta aplicación de la ley en el tiempo y porque se incluye un artículo más adelante específicamente previsto para garantizar la aplicación progresiva del mecanismo.</p>

	<p>mediante convocatoria, para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Ante esta situación, se realizará un único cabildo que comprenda a todos los municipios del área objeto de la convocatoria.</p> <p>En caso de que la solicitud o convocatoria afecte a más de un municipio de un mismo departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental, y en caso de que la solicitud afecte a más de un departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental con mayor porción de afectación en el territorio.</p> <p>Parágrafo 1°. En ningún caso, la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos podrá avanzar en el procedimiento de concesión o de selección objetiva hasta tanto no se agote este mecanismo de participación ciudadana.</p> <p>Parágrafo 2. Frente a los contratos de concesión para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables que se encuentren debidamente formalizados en la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y que se encuentren en etapa de exploración, la celebración de estos cabildos también será</p>	<p>recursos naturales no renovables. Ante esta situación, se realizará un único cabildo que comprenda a todos los municipios del área objeto de la convocatoria.</p> <p>En caso de que la solicitud o convocatoria afecte a más de un municipio de un mismo departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental, y en caso de que la solicitud afecte a más de un departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental del departamento con mayor porción de afectación en el territorio. En todo caso se debe garantizar la participación de la ciudadanía que habita en todos los municipios afectados o potencialmente afectados. Sean o no del departamento en cuyo territorio se desarrolla el cabildo.</p> <p>Parágrafo 1°. En ningún caso la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o las autoridades que hagan sus veces, podrán avanzar en el procedimiento de concesión o de selección objetiva hasta tanto no se agote este mecanismo de participación ciudadana.</p>	
--	--	---	--

	<p>obligatoria y se realizará de manera paulatina y progresiva, bajo una priorización orientada por criterios de urgencia ambiental y social.</p>		
	<p>Artículo 10. Notificación de las autoridades nacionales a los concejos municipales y distritales sobre nuevas solicitudes. Siempre que la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos reciban una solicitud contractual para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, o siempre que pretendan abrir una convocatoria para la selección de contratistas con el mismo fin, deberán notificar a los concejos municipales y distritales competentes para que puedan activar la realización del cabildo abierto.</p> <p>La notificación deberá hacerse dentro de los 10 días calendario siguientes a su recepción en caso de las solicitudes, o de la apertura de la convocatoria en el caso de los procedimientos de selección de contratistas.</p> <p>La notificación deberá contener información básica sobre:</p> <p>a) La persona natural o jurídica en el caso de solicitudes elevadas por personas naturales o jurídicas.</p> <p>b) Los términos de referencia y guías minero ambientales que regulan el proyecto a ejecutar.</p>	<p>Artículo 16. Notificación de las autoridades nacionales a los concejos municipales y distritales sobre nuevas solicitudes. Siempre que la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o quienes hagan sus veces reciban una solicitud para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, o siempre que pretendan abrir una convocatoria para la selección de contratistas con el mismo fin, deberán notificar a los concejos municipales y distritales competente o a la asamblea departamental competente.</p> <p>La notificación deberá hacerse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción en caso de las solicitudes, o de la apertura de la convocatoria en el caso de los procedimientos de selección de contratistas.</p> <p>La notificación deberá contener información básica sobre:</p> <p>a) La persona natural o jurídica en el caso de solicitudes elevadas por personas naturales o jurídicas.</p> <p>b) Los términos de referencia y guías minero-ambientales que regulan el proyecto a ejecutar.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se incluye un nuevo inciso para hacer compatible la notificación con la realización del mecanismo de audiencia pública ambiental ante nuevas solicitudes o apertura de nuevas convocatorias para la exploración.</p>

	<p>c) El tipo de proyecto que se pretende ejecutar.</p> <p>d) El tipo de recurso natural no renovable que se pretende explorar y explotar.</p> <p>e) El tiempo de duración del proyecto.</p> <p>f) Una descripción de los actos jurídicos que son necesarios para dar viabilidad a la solicitud o a la convocatoria pública.</p> <p>g) Una descripción de las obligaciones que tendrían las partes en caso de firmarse y formalizarse los contratos derivados de la solicitud o de la convocatoria pública.</p>	<p>c) El tipo de proyecto que se pretende ejecutar.</p> <p>d) El tipo de recurso natural no renovable que se pretende explorar y explotar.</p> <p>e) El tiempo de duración del proyecto.</p> <p>f) Una descripción de los actos jurídicos que son necesarios para dar viabilidad a la solicitud o a la convocatoria pública.</p> <p>g) Una descripción de las obligaciones que tendrían las partes en caso de firmarse y formalizarse los contratos derivados de la solicitud o de la convocatoria pública.</p> <p>Adicionalmente, deberán convocar y desarrollar la audiencia pública ambiental en los términos previstos en la presente ley y luego de celebrada la audiencia deberán notificar el acta de audiencia a los concejos municipales y distritales o a la asamblea departamental competente para que puedan convocar a la realización del cabildo abierto socioambiental.</p>	
	<p>Artículo 11. Notificación de las autoridades nacionales a los concejos municipales y distritales sobre los contratos formalizados que se encuentren en etapa de exploración de recursos naturales no renovables y que afecten a sus municipios. En los casos en que se encuentren formalizados contratos que estén en etapa de exploración de recursos naturales no renovables y que afecten a sus municipios, la Agencia Nacional de Minería o la</p>	<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Se prescinde de este artículo en la ponencia por considerar que puede ser problemático en materia de aplicación de ley en el tiempo frente a la seguridad jurídica de los particulares responsables de proyectos de exploración en curso para el momento de entrada en vigencia de la ley.</p>

	<p>Agencia Nacional de Hidrocarburos deberán notificar a los concejos municipales y distritales en cuya jurisdicción exista traslape con el área en exploración, para que puedan activar la realización del cabildo abierto.</p> <p>Estas notificaciones deberán hacerse de manera paulatina y progresiva y bajo una priorización que esté orientada por criterios de urgencia ambiental y social.</p> <p>La notificación deberá contener información básica sobre:</p> <p>a) La persona natural o jurídica firmante del contrato o acto jurídico mediante la que se le permite la exploración de recursos naturales no renovables.</p> <p>b) Los contratos o actos jurídicos firmados mediante los que se le permite la exploración de recursos naturales no renovables (obligaciones para las partes, tiempo de duración, cláusulas, etc.).</p> <p>c) El tipo de proyecto de exploración objeto del contrato o acto jurídico.</p> <p>d) El tipo de recurso natural no renovable que se está explorando.</p> <p>e) Los impactos causados por la exploración hasta la fecha de notificación y las medidas de prevención, mitigación y compensación adoptadas.</p>		
--	---	--	--

	<p>Artículo 12. Aviso a los residentes. Por todos los medios de los que disponga, la Secretaría del concejo municipal o distrital, según sea el caso, dará aviso a sus residentes sobre la notificación que envíe la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos referida en los dos artículos anteriores.</p> <p>El aviso se fijará en las sedes del concejo municipal y se dará amplia difusión por medios de comunicación locales y departamentales, según el caso, durante 20 días calendario.</p> <p>Este aviso activará la posibilidad para que la ciudadanía solicite la realización del cabildo abierto socioambiental, la cual podrá presentarse desde el día siguiente a su desfijación, por un plazo no mayor a dos meses.</p>	<p>Artículo 17. Aviso a los residentes. Por todos los medios de los que disponga, la Secretaría del concejo municipal o distrital, según sea el caso, dará aviso a sus residentes sobre la notificación que envíe la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos referida en el artículo anterior.</p> <p>El aviso se fijará en las sedes del Concejo Municipal el día siguiente de recibida la notificación de la que trata el artículo anterior y se le dará amplia difusión por medios de comunicación locales y departamentales, según el caso, durante veinte (20) días calendario.</p> <p>Este aviso activará la posibilidad para que, notificada el acta de la audiencia pública ambiental, la ciudadanía solicite ante el concejo o concejos municipales o ante la asamblea departamental competente la realización del cabildo abierto socioambiental. Esa solicitud podrá presentarse en un término de dos (2) meses contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del acta de la audiencia pública ambiental.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción del tercer inciso para hacerla compatible con la aplicación de la audiencia pública prevista en el PLE107.</p>
	<p>Artículo 13. Solicitud de realización de un cabildo abierto socioambiental por la ciudadanía. Por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de la ciudadanía del censo electoral del respectivo municipio o distrito, la ciudadanía podrá solicitar al concejo municipal o distrital, según sea el caso y mediante un comité promotor, la celebración de un cabildo abierto socioambiental para deliberar y decidir sobre</p>	<p>Artículo 18. Solicitud de realización de un cabildo abierto socioambiental por la ciudadanía. Por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de la ciudadanía del censo electoral del respectivo municipio o distrito, la ciudadanía podrá solicitar a la Secretaría del concejo municipal o distrital o a la asamblea departamental según sea el caso y mediante un comité promotor, la celebración de un cabildo abierto socioambiental para deliberar y decidir sobre la notificación que hagan las autoridades nacionales relacionada con la posibilidad de explorar y explotar recursos</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se elimina parte del primer inciso del artículo 13 del PLE 121 para hacerlo compatible con la</p>

	<p>la notificación que hagan las autoridades nacionales relacionada con la posibilidad de explorar y explotar recursos naturales no renovables en su municipio de residencia, o relacionada con la ejecución de proyectos que se encuentran en etapa exploratoria y cuyos contratos fueron formalizados con anterioridad a la vigencia de la presente ley.</p> <p>Dada la naturaleza de este tipo de cabildo y a las competencias concurrentes de los entes territoriales y de la nación en la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, es obligación de la persona en cabeza de la Alcaldía y de las autoridades nacionales asistir al cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Parágrafo. Si la ciudadanía no presenta solicitud de cabildo en las fechas dispuestas en este artículo, la secretaría del concejo municipal o distrital, según sea el caso, iniciará el proceso de convocatoria contemplado en el artículo 15 de la presente ley, una vez se cumplan dos meses después de la fijación del aviso.</p>	<p>naturales no renovables en su municipio de residencia.</p> <p>Dada la naturaleza de este tipo de cabildo y las competencias concurrentes de los entes territoriales y de la nación en la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, es obligación del alcalde municipal o distrital y del gobernador, según sea el caso, así como de las autoridades mineras y de hidrocarburos y de las autoridades ambientales asistir al cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Parágrafo. Si la ciudadanía no presenta solicitud de convocatoria a cabildo abierto socioambiental dentro de (2) meses contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del acta de la audiencia pública ambiental, la secretaría del concejo municipal o distrital, o la secretaría de la asamblea departamental, según sea el caso, deberá convocar al Cabildo Abierto Socioambiental garantizando que se cumplan los tiempos para la celebración del Cabildo que están contemplados en la presente ley.</p>	<p>eliminación del artículo 11 del PLE121.</p> <p>Se ajusta la redacción del parágrafo para hacerlo compatible con la numeración del articulado resultante de la acumulación de los PLE.</p>
	<p>Artículo 14. Aprobación del cabildo abierto socioambiental. De cumplirse con las firmas necesarias para la solicitud del cabildo, debidamente revisadas y avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el</p>	<p>Artículo 19. Aprobación del cabildo abierto socioambiental. De cumplirse con las firmas necesarias para la solicitud del cabildo, debidamente revisadas y avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el concejo municipal o distrital o la asamblea departamental, según corresponda, fijará la fecha de su realización, la</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como</p>

	<p>concejo municipal o distrital fijará la fecha de su realización, la cual deberá fijarse, como máximo, dentro de los 20 días calendario siguientes a la notificación enviada por la Registraduría.</p>	<p>cual deberá fijarse, como máximo, dentro del término de tres (3) meses contados a partir del día de la notificación del acta de la audiencia pública ambiental.</p> <p>La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá priorizar la revisión de la solicitud ciudadana de cabildo abierto socioambiental de manera que esta pueda avalarse oportunamente para que la autoridad local o regional cumpla con los términos de convocatoria previstos en el inciso anterior.</p>	<p>resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción del primer inciso para hacer compatible los términos de convocatoria previstos en los artículos precedentes sobre la convocatoria al cabildo abierto socio ambiental y se añade un inciso para garantizar la oportuna intervención de la Registraduría.</p>
	<p>Artículo 15. Convocatoria al cabildo abierto socioambiental. Una vez fijada la fecha de celebración del cabildo abierto socioambiental, el concejo municipal o distrital, según sea el caso, la comunicará por escrito a las autoridades del orden nacional, departamental y local que deban concurrir en virtud de sus competencias.</p> <p>La comunicación que se eleve a las autoridades del orden nacional se hará en atención a la notificación enviada por estas a las autoridades municipales a la que se refieren los artículos 10 y 11 de esta ley, y en respeto a sus competencias en la materia.</p> <p>La ciudadanía del municipio o municipios afectados será convocada mediante aviso que se fijará en las sedes de los órganos de administración municipales, así como mediante medios de comunicación locales que</p>	<p>Artículo 20. Convocatoria al cabildo abierto socioambiental. Una vez fijada la fecha de celebración del cabildo abierto socioambiental, el concejo municipal o distrital o la asamblea departamental, según sea el caso, la comunicará por escrito a las autoridades del orden nacional, departamental y local que deban concurrir en virtud de sus competencias.</p> <p>La comunicación que se eleve a las autoridades del orden nacional se hará en atención a la notificación enviada por estas a las autoridades municipales a la que se refiere el artículo 16 de esta ley, y en respeto a sus competencias en la materia.</p> <p>La ciudadanía del municipio o municipios afectados será convocada mediante aviso que se fijará en las sedes de los órganos de administración municipales, así como mediante medios de comunicación locales que garanticen una amplia difusión de la celebración del cabildo abierto socioambiental, de su fecha de realización y de la</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción del segundo inciso para hacerla compatible con la numeración resultante de la acumulación de los PLE.</p>

	<p>garanticen una amplia difusión de la celebración del cabildo abierto, de su fecha de realización y de la inscripción que deben hacer quienes deseen intervenir</p>	<p>inscripción que deben hacer quienes deseen intervenir.</p>	
	<p>Artículo 16. Participantes del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es de carácter público para la ciudadanía residente del municipio o municipios cuya área sea afectada por el proyecto o proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Su intervención durante el cabildo únicamente estará limitada a una inscripción formal para efectos de organizar su adecuado desarrollo.</p> <p>Adicionalmente, deberán concurrir las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan competencias en asuntos relacionados con la política minero energética, ambiental y agropecuaria.</p> <p>El Ministerio Público también será convocado en virtud de sus competencias de guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de</p>	<p>Artículo 21. Participantes del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es de carácter público para la ciudadanía residente del municipio(s) o distrito(s) cuya área sea afectada por el proyecto o proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Su intervención durante el cabildo únicamente estará supeditada a acreditar la residencia en alguno de los municipios afectados o potencialmente afectados por el proyecto y a una inscripción formal para efectos de organizar el adecuado desarrollo del Cabildo abierto socio ambiental.</p> <p>Adicionalmente, deberán concurrir de manera obligatoria las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan competencias en asuntos relacionados con la política minero-energética, ambiental y agropecuaria.</p> <p>Podrán participar en el cabildo, en calidad de asesores, los técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica y/u organizaciones de la sociedad civil invitadas por la ciudadanía residente en los municipios afectados, para tomar decisiones informadas.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo también serán convocadas en virtud de sus competencias de guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción del segundo inciso para insistir en la obligatoria participación de las autoridades.</p> <p>Se incluye un inciso para permitir la participación de terceros en calidad de asesores de la comunidad.</p> <p>Se ajusta la redacción del inciso 4 para hacerla compatible con la participación del Procuraduría y Defensoría prevista en el PLE107.</p> <p>Se ajusta la redacción del parágrafo 2 para hacerla compatible con la nueva numeración del articulado y se incluye un tercer parágrafo para darle una consecuencia jurídica a la inasistencia de las autoridades.</p>

	<p>quienes desempeñan funciones públicas.</p> <p>Parágrafo 1°. Para garantizar la participación de la ciudadanía que reside en el municipio o municipios involucrados, la secretaria del concejo municipal o distrital, según el caso, dispondrá de un registro que estará disponible desde la comunicación de la fecha del cabildo hasta dos días antes de su celebración.</p> <p>La secretaria del concejo municipal o distrital, según el caso, no podrá exigir requisito diferente al de ser ciudadano residente del municipio y solicitará datos básicos para la inscripción.</p> <p>Parágrafo 2°. Las personas naturales o jurídicas solicitantes de un contrato de concesión para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las que participen en procesos de selección y asignación de áreas, y aquellas que ya tengan formalizados este tipo de contratos con el Estado, solo podrán participar en la sesión de apertura del cabildo y se limitarán a intervenir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley.</p> <p>En ningún caso podrán intervenir en otros momentos del cabildo y se deben abstener de interferir sobre la información</p>	<p>públicas y para actuar conforme lo previsto en la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1°. Para garantizar la participación de la ciudadanía que reside en el municipio o municipios involucrados, la secretaria del concejo municipal o distrital, o la secretaria de la asamblea departamental, según el caso, dispondrá de un registro que estará disponible desde la comunicación de la fecha del cabildo hasta dos días antes de su celebración.</p> <p>La secretaria del concejo municipal o distrital, según el caso, no podrá exigir requisito diferente al de ser ciudadano residente del municipio u acreditar pertenencia a alguno de los actores cuya participación está prevista conforme el contenido del artículo anterior. En todos los casos solicitará datos básicos de identificación personal para la inscripción.</p> <p>Parágrafo 2°. Las personas naturales o jurídicas solicitantes de un contrato de concesión para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las que participen en procesos de selección y asignación de áreas, y aquellas que ya tengan formalizados este tipo de contratos con el Estado, solo podrán participar en la sesión de apertura del cabildo y se limitarán a intervenir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley.</p> <p>En ningún caso podrán intervenir en otros momentos del cabildo y se deben abstener de interferir sobre la información proporcionada por entidades públicas y en la</p>	
--	---	---	--

	<p>proporcionada por entidades públicas y en la información u opinión brindada por la ciudadanía que participe.</p>	<p>información u opinión brindada por la ciudadanía que participe.</p> <p>Parágrafo 3°. La ausencia de alguno de los proponentes o solicitantes de las actividades de exploración y/o de las autoridades ambientales competentes impedirá el desarrollo del Cabildo Abierto Socioambiental. A su vez, el no desarrollo del Cabildo por esta causa o por cualquier otra causa predicable de las autoridades estatales impedirá la decisión de fondo respecto del desarrollo del proyecto para la exploración de recursos naturales no renovables.</p>	
	<p>Artículo 17. Contenidos del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental del que trata esta ley solo podrá abordar las materias de su convocatoria, relacionadas con la notificación que las autoridades nacionales hagan a las autoridades municipales de la que tratan los artículos 10 y 11 de esta ley. En ningún caso se podrán abordar temas que estén por fuera de dicha notificación.</p>	<p>Artículo 22. Contenidos del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental del que trata esta ley solo podrá abordar las materias de su convocatoria, relacionadas con la notificación que las autoridades nacionales hagan a las autoridades municipales de la que trata el artículo 16 de esta ley. En ningún caso se podrán abordar temas que estén por fuera de dicha notificación.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción para hacerla compatible con la numeración del articulado resultante de la acumulación de los proyectos.</p>
	<p>CAPÍTULO 2 DESARROLLO DEL CABILDO ABIERTO SOCIOAMBIENTAL</p>		<p>En la ponencia se elimina la división por capítulos del Título III por considerar que en términos de estructura dicha decisión facilita la acumulación de los mecanismos previstos por el PLE107 y por el PLE121 en etapa de exploración.</p>
	<p>Artículo 18. Sesiones del cabildo abierto</p>	<p>Artículo 23. Sesiones del cabildo abierto socioambiental. El cabildo</p>	<p>Se toma como referencia el artículo</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

	<p>socioambiental. El cabildo abierto socioambiental se desarrollará en tres sesiones. Una sesión de apertura, una sesión de deliberación y una sesión decisoria. Estas sesiones tienen un carácter informativo, deliberativo y decisorio respectivamente.</p>	<p>abierto socioambiental se desarrollará en tres sesiones. Una sesión de apertura, una sesión de deliberación y una sesión decisoria. Estas sesiones tienen un carácter informativo, deliberativo y decisorio respectivamente.</p>	<p>del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p>
	<p>Artículo 19. Sesión de apertura del cabildo abierto socioambiental. En la sesión de apertura del cabildo abierto socioambiental las autoridades del orden nacional darán a conocer a la ciudadanía residente de los municipios potencialmente afectados por la solicitud de concesión o por procesos de selección objetiva para la asignación de áreas para exploración y explotación de recursos naturales no renovables, toda la información relacionada con dichas solicitudes para garantizar la discusión y la deliberación acerca de su conveniencia e inconveniencia, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales que influyen en el ordenamiento territorial.</p>	<p>Artículo 24. Sesión de apertura del cabildo abierto socioambiental. En la sesión de apertura del cabildo abierto socioambiental las autoridades del orden nacional darán a conocer a la ciudadanía residente de los municipios potencialmente afectados por la solicitud de concesión o por procesos de selección objetiva para la asignación de áreas para exploración y explotación de recursos naturales no renovables, toda la información relacionada con dichas solicitudes para garantizar la discusión y la deliberación acerca de su conveniencia e inconveniencia, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales que influyen en el ordenamiento territorial.</p> <p>A su vez, tendrán que dar cuenta de lo acontecido en la audiencia pública ambiental preparatoria del cabildo; resolver las inquietudes y peticiones formuladas por los participantes de la audiencia y actualizar la información y acciones relacionadas con el proyecto que hubieran tenido lugar entre la celebración de la audiencia pública ambiental y la sesión de apertura del cabildo socioambiental.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se incluye un nuevo inciso para hacer compatible la aplicación de la sesión de apertura del cabildo con las audiencias públicas ambientales previstas en el PLE107.</p>
	<p>Artículo 20. Información que debe ser suministrada por</p>	<p>Artículo 25. Información que debe ser suministrada por autoridades al municipio en la sesión de apertura.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

	<p>autoridades al municipio en la sesión de apertura. Para garantizar el carácter deliberativo de las sesiones del cabildo, así como la legitimidad de sus decisiones, es indispensable que las autoridades nacionales, departamentales y locales suministren toda la información relacionada con la solicitud de concesión o por procesos de selección objetiva para la asignación de áreas para exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>La información será presentada en el siguiente orden, luego de que el alcalde dé apertura formal al cabildo abierto:</p> <p>a) Una persona delegada de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según el caso, la cual deberá presentar la siguiente información: solicitudes de los contratos de concesión vigentes, alcance de los proyectos que se quieren realizar (tipo de recurso natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono), naturaleza e importancia de los proyectos a realizar, los términos de referencia y guías minero ambientales que regulan el proyecto, evaluación de la propuesta desde el punto de vista técnico, económico, jurídico y social, revisión de los</p>	<p>Para garantizar el derecho de acceso a la información, el carácter deliberativo de las sesiones del cabildo, así como la legitimidad de sus decisiones, es indispensable que las autoridades nacionales, departamentales y locales suministren toda la información relacionada con la solicitud de concesión o por procesos de selección objetiva para la asignación de áreas para exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>La información será presentada en el siguiente orden, luego de que el alcalde o los alcaldes o gobernador, según corresponda, dé apertura formal al cabildo abierto:</p> <p>a) Una persona delegada de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de las autoridades que hagan sus veces según el caso, la cual deberá presentar la siguiente información: solicitudes de los contratos de concesión vigentes, alcance de los proyectos que se quieren realizar (tipo de recurso natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono), naturaleza e importancia local y regional de los proyectos a realizar, los términos de referencia y guías minero ambientales que regulan el proyecto, evaluación de la propuesta desde el punto de vista técnico, económico, jurídico y social, revisión de los requisitos establecidos en la ley para el otorgamiento del contrato de concesión, traslapes con zonas excluibles de la minería e hidrocarburos u otras que hagan parte del Sistema de Áreas Protegidas del país, resguardos indígenas y</p>	<p>desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajustan algunos contenidos de información que debe ser suministrada y se añade la participación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y de las universidades y terceros en calidad de asesores técnicos, atendiendo a las recomendaciones dadas en las mesas técnicas.</p> <p>Se incluye un nuevo párrafo para darle consecuencias jurídicas al incumplimiento de los previsto en el artículo.</p>
--	--	--	--

CAPA DE REPRESENTANTES	
<p>requisitos establecidos en la ley para el otorgamiento del contrato de concesión, traslapes con zonas excluibles de la minería u otras que hagan parte del Sistema de Áreas Protegidas del país, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, zonas especiales (páramos, humedales), los Planes de Gestión Social y la demás información relacionada con los proyectos a realizar que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>b) Una persona delegada del Ministerio de Minas y Energía, la cual deberá presentar la siguiente información: lineamientos de las políticas, planes y programas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables de carácter nacional que resulten pertinentes para la ciudadanía residente en el municipio o municipios en los que se pretende la realización del proyecto.</p> <p>c) Una persona representante de la persona natural o jurídica que eleva la solicitud de concesión o que la detenta en su etapa exploratoria, la cual deberá presentar la siguiente información: identificación y breve descripción del sujeto solicitante (nacional, extranjero, objeto de la persona jurídica), y descripción del proyecto extractivo (tipo de recurso natural no renovable,</p>	<p>territorios colectivos de comunidades negras, zonas especiales (páramos, humedales), los Planes de Gestión Social y la demás información relacionada con los proyectos a realizar que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>b) Una persona delegada del Ministerio de Minas y Energía, la cual deberá presentar la siguiente información: lineamientos de las políticas, planes y programas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables de carácter nacional que resulten pertinentes para la ciudadanía residente en el municipio o municipios en los que se pretende la realización del proyecto.</p> <p>c) Una persona representante de la persona natural o jurídica que eleva la solicitud de concesión o que la detenta en su etapa exploratoria, la cual deberá presentar la siguiente información: identificación y breve descripción del sujeto solicitante (nacional, extranjero, objeto de la persona jurídica), y descripción del proyecto extractivo (tipo de recurso natural no renovable,</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

	<p>duración, extensión y localización del polígono, presencia de grupos étnicos o zonas mineras indígenas, estimativo de la inversión económica).</p> <p>d) Una persona representante de la autoridad ambiental del orden nacional y una persona representante de la autoridad ambiental del orden regional, las cuales deberán presentar la siguiente información: áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo Parques Nacionales Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; solicitud de sustracción de reservas forestales con ocasión de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto del cabildo; estado de las cuencas hidrográficas y de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas; panorama de los determinantes ambientales del territorio y los instrumentos existentes para su desarrollo e implementación en el</p>	<p>d) Una persona representante de la autoridad ambiental del orden nacional y una persona representante de la autoridad ambiental del orden regional, las cuales deberán presentar la siguiente información: áreas de los Sistemas Nacional, Regional y Local de Áreas Protegidas incluyendo Parques Nacionales Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; solicitud de sustracción de reservas forestales con ocasión de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto del cabildo; estado de las cuencas hidrográficas y de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas; panorama de los determinantes ambientales del territorio y los instrumentos existentes para su desarrollo e implementación en el territorio, y demás información relevante sobre la importancia ambiental y ecológica del territorio en cuestión.</p>	
--	---	--	--

CÁMARA DE REPRESENTANTES

	<p>territorio, y demás información relevante sobre la importancia ambiental y ecológica del territorio en cuestión.</p> <p>e) Una persona representante de Parques Nacionales Naturales, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo.</p> <p>f) Una persona representante de la Agencia Nacional de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: procesos de adjudicación de baldíos o programas de tierras implementados en el municipio o municipios; procesos de delimitación y constitución de zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial; procesos de titulación colectiva a comunidades étnicas y negras y, en general, la información que considere relevante como máxima autoridad de las tierras de la nación sobre los municipios o el municipio participante en el cabildo.</p> <p>g) Una persona representante de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la cual deberá presentar la siguiente información: criterios técnicos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la propiedad de la</p>	<p>e) Una persona representante de Parques Nacionales Naturales, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo.</p> <p>f) Una persona representante de la Agencia Nacional de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: procesos de adjudicación de baldíos o programas de tierras implementados en el municipio o municipios; procesos de delimitación y constitución de zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial; procesos de titulación colectiva a comunidades étnicas y negras y, en general, la información que considere relevante como máxima autoridad de las tierras de la nación sobre los municipios o el municipio participante en el cabildo.</p> <p>g) Una persona representante de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la cual deberá presentar la siguiente información: criterios técnicos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural de los municipios o el municipio participante en el cabildo que resulten de importancia para la ciudadanía.</p>	
--	---	--	--

	<p>tierra rural de los municipios o el municipio participante en el cabildo que resulten de importancia para la ciudadanía.</p> <p>h) Una persona representante de la Unidad de Restitución de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de procesos de restitución de tierras despojadas en el o los municipios; número de sentencias de restitución de tierras despojadas en el o los municipios y estado de ejecución de las mismas.</p> <p>i) La persona en cabeza de la Alcaldía municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: descripción general del municipio (demografía, datos administrativos, territorio), vocación del suelo y actividades económicas principales, conflictos socioambientales relevantes y demás información relacionada que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>j) La persona que ejerce la presidencia del concejo municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: proyectos de acuerdo, debates de control político, debates de asuntos de interés general y demás actuaciones relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio que resulten relevantes para</p>	<p>h) Una persona representante de la Unidad de Restitución de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de procesos de restitución de tierras despojadas en el o los municipios; número de sentencias de restitución de tierras despojadas en el o los municipios y estado de ejecución de las mismas.</p> <p>i) La persona en cabeza de la Alcaldía municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: descripción general del municipio (demografía, datos administrativos, territorio), vocación del suelo y actividades económicas principales, conflictos socioambientales relevantes y demás información relacionada que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>j) La persona que ejerce la presidencia del concejo municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: proyectos de acuerdo, debates de control político, debates de asuntos de interés general y demás actuaciones relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio que resulten relevantes para la ciudadanía que participa en el cabildo.</p>	
--	--	---	--

	<p>la ciudadanía que participa en el cabildo.</p> <p>k) Una persona representante del Ministerio del Interior, la cual deberá presentar la información sobre la presencia de grupos étnicos en el territorio.</p> <p>l) Una persona representante del Ministerio Público, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos en el territorio y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía participante en el cabildo.</p> <p>Parágrafo. Toda la información que presenten las autoridades antes señaladas quedará a disposición del municipio para la solicitud y consulta de la ciudadanía que la requiera.</p>	<p>k) Una persona representante del Ministerio del Interior, la cual deberá presentar la información sobre la presencia de grupos étnicos en el territorio.</p> <p>l) Una persona representante del Ministerio Público, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos en el territorio y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía participante en el cabildo.</p> <p>m) Una persona representante del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la cual debe presentar un concepto sobre las posibilidades y riesgos de que el proyecto puede poner en riesgo la preservación del patrimonio arqueológico.</p> <p>n) Personas representantes de universidades públicas y privadas, institutos y centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, académicos o expertos para que puedan aportar información sobre los estudios previos a la exploración y sobre los eventuales impactos del proyecto y recomendaciones para atenderlos.</p> <p>Parágrafo. Toda la información que presenten las autoridades antes señaladas quedará a disposición del municipio para la solicitud y consulta de la ciudadanía que la requiera.</p>	
--	--	---	--

		<p>Parágrafo 2. Será requisito para el inicio de la sesión deliberativa del cabildo abierto socioambiental que en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible el acta final con o sin enmiendas, según sea el caso, de la audiencia pública ambiental, la información contenida en la notificación de las autoridades nacionales sobre nuevas solicitudes, toda la información presentada en la sesión de apertura del cabildo, el acta de la sesión de apertura del cabildo, y las actualizaciones o modificaciones que se hubieran realizado a los documentos de los que trata el artículo 5 de la presente ley entre la celebración de la audiencia pública ambiental y la sesión de apertura del cabildo.</p> <p>Esta información deberá estar disponible en el referido sistema de información, así como en la sede de los concejos municipales o distritales o de la asamblea departamental según sea el caso desde el día siguiente al cierre de la sesión inicial del cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Al inicio de la sesión deliberativa del cabildo abierto socioambiental deberá darse lectura de la información y entregarse en copia impresa o digital, según lo soliciten los participantes.</p>	
	<p>Artículo 21. Intervenciones ciudadanas y deliberación. Una vez se haya presentado la información relacionada en el artículo anterior, intervendrá el comité que solicitó el cabildo abierto, si es del caso, y enseguida todas las personas que se hayan inscrito ante la secretaria del concejo municipal o distrital.</p> <p>Estas intervenciones tendrán como objeto elevar preguntas respetuosas a las</p>	<p>Artículo 26. Intervenciones ciudadanas y deliberación. Una vez se haya presentado la información relacionada en el artículo anterior, intervendrá el comité que solicitó el cabildo abierto, si es del caso, y enseguida todas las personas que se hayan inscrito ante la secretaria del concejo municipal o distrital.</p> <p>Estas intervenciones tendrán como objeto elevar preguntas respetuosas a las autoridades para tener un mejor criterio sobre el proyecto, contrato de</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se añade que también podrán elevarse preguntas a los proponentes o</p>

	<p>autoridades para tener un mejor criterio sobre el proyecto, contrato de concesión o proceso de selección que se está poniendo en consideración.</p> <p>Posteriormente, se dará espacio para que las autoridades intervengan y puedan dar respuesta inmediata a aquello que bajo su competencia. Lo que no pueda ser contestado deberá ser materia de respuesta en la sesión siguiente y se entiende formulado bajo el derecho de petición colectivo, el cual debe ser atendido siguiendo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto.</p>	<p>concesión o proceso de selección que se está poniendo en consideración. También podrá elevarse preguntas a los proponentes y/o solicitantes de las actividades de exploración.</p> <p>Posteriormente, se dará espacio para que las autoridades y los particulares proponentes o solicitantes de los proyectos de exploración intervengan y puedan dar respuesta inmediata a aquello que bajo su competencia. Lo que no pueda ser contestado deberá ser materia de respuesta en la sesión siguiente y se entiende formulado bajo el derecho de petición colectivo, el cual debe ser atendido siguiendo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto.</p>	<p>solicitantes de la exploración.</p>
	<p>Artículo 22. Cierre de sesión inicial del cabildo abierto socioambiental. Finalizada la etapa anterior, se dará cierre a la sesión de apertura del cabildo abierto mediante acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital, según sea el caso, que recogerá todas las intervenciones, las preguntas elevadas por la ciudadanía y una relación de las preguntas cuya respuesta debe ser atendida en la siguiente sesión.</p> <p>La sesión del cabildo será grabada para garantizar la fidelidad del acta, la cual quedará a disposición de la ciudadanía en la secretaria del concejo municipal o distrital, según el caso.</p>	<p>Artículo 27. Cierre de sesión inicial del cabildo abierto socioambiental. Luego de realizadas las intervenciones de las que trata el artículo anterior, se dará cierre a la sesión de apertura del cabildo abierto. Se deberá elaborar un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, que recogerá todas las intervenciones, las preguntas elevadas por la ciudadanía, la respuesta dada por las autoridades y particulares responsables del proyecto y una relación de las preguntas cuya respuesta debe ser atendida en la siguiente sesión.</p> <p>La sesión del cabildo será grabada para garantizar la fidelidad del acta, la cual quedará a disposición de la ciudadanía en la secretaria del concejo municipal o distrital o en la secretaria de la asamblea departamental según el caso.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción del segundo inciso para hacerlo compatible con el desarrollo del cabildo en las asambleas departamentales.</p>

	<p>Artículo 23. Sesión deliberativa del cabildo. Se trata de sesiones autónomas ciudadanas cuya celebración debe ser garantizada por el concejo municipal o distrital, serán de carácter abierto y participativo.</p> <p>Quienes deseen intervenir deberán inscribirse ante la secretaría del concejo municipal o distrital, según sea el caso, la cual brindará el registro oficial al comité promotor del cabildo, el cual convocará esta sesión que puede estar compuesta por un máximo de tres reuniones deliberativas.</p> <p>Se celebrarán a los 10 días después del cierre de la sesión inicial del cabildo. Entre la primera y última reunión no pueden pasar más de 30 días.</p> <p>En estas sesiones, la comunidad deliberará sobre la información suministrada por las autoridades en la sesión de apertura del cabildo y, de considerarlo pertinente, convocará a técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica o a organizaciones de la sociedad civil para tomar decisiones informadas.</p> <p>Parágrafo. En los casos en los que no se cuente con el comité promotor, la secretaría del concejo municipal o distrital, según el caso, se encargará de convocar la sesión o sesiones deliberativas.</p>	<p>Artículo 28. Sesión deliberativa del cabildo. Se trata de sesiones autónomas ciudadanas cuya celebración debe ser garantizada por el concejo municipal o distrital o por la asamblea departamental, según sea el caso. Serán de carácter abierto y participativo.</p> <p>Quienes deseen intervenir deberán inscribirse ante la secretaría del concejo municipal o distrital o ante la secretaría de la asamblea departamental, según sea el caso, la cual brindará el registro oficial al comité promotor del cabildo, el cual convocará esta sesión que puede estar compuesta por un máximo de tres reuniones deliberativas.</p> <p>Se celebrarán a los diez (10) días después del cierre de la sesión inicial del cabildo. Entre la primera y última reunión de la sesión deliberativa no pueden pasar más de treinta (30) días.</p> <p>En estas reuniones la comunidad deliberará sobre la información suministrada por las autoridades en la sesión de apertura del cabildo y, de considerarlo pertinente, convocará a técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica y/o a organizaciones de la sociedad civil para tomar decisiones informadas.</p> <p>Parágrafo. En los casos en los que no se cuente con el comité promotor, la secretaría del concejo municipal o distrital o la secretaría de la asamblea departamental según el caso, se encargará de convocar la sesión o sesiones deliberativas.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta redacción para hacerlo compatible con el desarrollo del cabildo en las asambleas departamentales.</p>
--	--	--	---

CAMARA DE REPRESENTANTES		
	<p>Artículo 24. Resultado de la sesión deliberativa del cabildo. Como resultado de las reuniones celebradas en el marco de la sesión deliberativa del cabildo, resultará un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital competente que condense las distintas posturas ciudadanas expresadas en dichos espacios y, las dudas de carácter técnico, económico, social o ambiental que aún queden por resolver.</p> <p>El acta podrá expresar el consenso, si lo hubiere, entre la comunidad, sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar o continuar con el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio o municipios. En cualquiera de los dos casos, el acta dejará constancia de las recomendaciones y solicitudes que la ciudadanía eleva a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que participan en el cabildo.</p> <p>También expresará el disenso, si lo hubiere, entre la comunidad, dejando constancia de las distintas posturas existentes sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto, indicando en cada caso los argumentos que las sostienen.</p> <p>El acta contendrá el nombre de hasta 10</p>	<p>Artículo 29. Resultado de la sesión deliberativa del cabildo. Como resultado de las reuniones celebradas en el marco de la sesión deliberativa del cabildo, resultará un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental competente que condense las distintas posturas ciudadanas expresadas en dichos espacios y, las dudas de carácter técnico, económico, social o ambiental que aún queden por resolver.</p> <p>El acta podrá expresar el consenso, si lo hubiere, entre la comunidad, sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio o municipios. En cualquiera de los dos casos, el acta dejará constancia de las recomendaciones y solicitudes que la ciudadanía eleva a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que participan en el cabildo.</p> <p>También expresará el disenso, si lo hubiere, entre la comunidad, dejando constancia de las distintas posturas existentes sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto, indicando en cada caso los argumentos que las sostienen.</p> <p>El acta contendrá el nombre de hasta diez (10) personas delegadas</p>
		<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p>

COMISIÓN DE REPRESENTANTES			
	<p>personas delegadas designadas por la comunidad para que intervengan en la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental.</p> <p>La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o la persona delegada para tal fin, según sea el caso, será la que presente el acta que resulte de la sesión deliberativa.</p> <p>Parágrafo. Para llegar al resultado de la sesión deliberativa, la ciudadanía debe tener en cuenta la información suministrada por las personas e instituciones intervinientes en la sesión de apertura, la información que tiene la ciudadanía sobre su territorio y los determinantes ambientales del territorio.</p>	<p>designadas por la comunidad para que intervengan en la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental. Se deberá promover que las personas delegadas reflejen de la mayor manera posible las diferentes posturas y tendencias de la ciudadanía respecto del proyecto.</p> <p>La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o la persona delegada para tal fin, según sea el caso, será la que presente el acta que resulte de la sesión deliberativa.</p> <p>Parágrafo. Para llegar al resultado de la sesión deliberativa, la ciudadanía debe tener en cuenta la información suministrada por las personas e instituciones intervinientes en la sesión de apertura así como la que fue suministrada durante la sesión deliberativa, la información que tiene la ciudadanía sobre su territorio y los determinantes ambientales del territorio.</p>	
	<p>Artículo 25. Remisión del acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades participantes de la sesión de apertura. El acta deberá ser remitida por la secretaria del concejo municipal o distrital dentro de los 5 días siguientes a las autoridades que participaron en la sesión de apertura del cabildo</p>	<p>Artículo 30. Remisión del acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades participantes de la sesión de apertura. El acta deberá ser remitida por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la última reunión de la sesión deliberativa a las autoridades que participaron en la sesión de apertura del cabildo.</p> <p>Parágrafo. Será requisito para el inicio de la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental que en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible la misma información prevista en el artículo 5 de la presente ley junto con el acta de la sesión inicial del cabildo, el acta de la sesión</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se incluye un nuevo parágrafo para garantizar el derecho de acceso a la información y acotar la aplicación de lo previsto en el artículo 5 de la ponencia.</p>

CAMERA DE REPRESENTANTES			
		<p>deliberativa del cabildo y la información novedosa que hubiera sido presentada durante las reuniones de la sesión deliberativa del cabildo.</p> <p>Esta información deberá estar disponible en el referido sistema de información, así como en la sede de los concejos municipales o distritales o de la asamblea departamental según sea el caso desde el día siguiente a la notificación del acta de la sesión deliberativa del cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Al inicio de la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental deberá darse lectura de la información que no hubiese sido presentada al inicio de la sesión deliberativa y deberá entregarse copia impresa o digital de la totalidad de la información según lo soliciten los participantes.</p>	
	<p>Artículo 26. Sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental. Una vez la secretaria del concejo municipal o distrital, según el caso, haya enviado el acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades competentes, convocará a la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental dentro de los 15 días siguientes.</p> <p>Serán convocadas las mismas autoridades asistentes a la sesión de apertura, excepto las personas naturales o jurídicas solicitantes, participantes en procesos de selección objetiva o que ya tengan formalizados contratos para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables con el Estado, las cuales no podrán ingresar a esta sesión.</p>	<p>Artículo 31. Sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental. Una vez la secretaria del concejo municipal o distrital o la secretaria de la asamblea departamental, según el caso, haya enviado el acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades ambientales competentes, convocará a la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental dentro de los quince (15) días calendario siguientes.</p> <p>Serán convocadas las mismas autoridades asistentes a la sesión de apertura, excepto las personas naturales o jurídicas solicitantes, participantes en procesos de selección, las cuales no podrán ingresar a esta sesión.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se incluye un nuevo inciso final para precisar que se dará espacio para tomar la decisión sobre el desarrollo de la exploración.</p>

CAMARA DE REPRESENTANTES			
	<p>Esta sesión tendrá el siguiente orden de intervenciones:</p> <p>1) La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o de la ciudadanía, la cual presentará un informe que debe reflejar lo expresado en el acta de la sesión deliberativa.</p> <p>2) Las personas designadas por la comunidad en el acta de las sesiones deliberativas hasta un máximo de diez.</p> <p>3) Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diferentes disciplinas que hayan asesorado a la comunidad en el espacio de la sesión deliberativa para que expresen su concepto.</p> <p>4) Las entidades públicas en el mismo orden de la sesión de apertura, las cuales responderán las preguntas pendientes de la sesión de apertura y se pronunciarán sobre el contenido del acta de la sesión deliberativa del cabildo.</p>	<p>Esta sesión tendrá el siguiente orden de intervenciones:</p> <p>1) La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o de la ciudadanía, la cual presentará un informe que debe reflejar lo expresado en el acta de la sesión deliberativa.</p> <p>2) Las personas designadas por la comunidad en el acta de las sesiones deliberativas hasta un máximo de diez.</p> <p>3) Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diferentes disciplinas que hayan asesorado a la comunidad en el espacio de la sesión deliberativa para que expresen su concepto.</p> <p>4) Las entidades públicas en el mismo orden de la sesión de apertura, las cuales responderán las preguntas pendientes de la sesión de apertura y se pronunciarán sobre el contenido del acta de la sesión deliberativa del cabildo.</p> <p>Finalizadas las intervenciones se dará el espacio para que la decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar el o los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables sea adoptada.</p>	
	<p>Artículo 27. Decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar o continuar con proyectos de exploración de recursos naturales no renovables. La decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar o continuar con</p>	<p>Artículo 32. Decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar o continuar con proyectos de exploración de recursos naturales no renovables. La decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se adoptará mediante consenso mayoritario entre la comunidad y se</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES			
	<p>proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se adoptará mediante consenso mayoritario entre la comunidad y se deberá manifestar expresamente al momento de reiniciar la sesión decisoria.</p> <p>En cualquiera de los dos casos, la decisión de la ciudadanía debe ser motivada y debe tener en cuenta criterios sociales, económicos, ambientales y culturales.</p> <p>Expresada la decisión, se entenderá que el cabildo culmina con un acuerdo participativo.</p> <p>Parágrafo. Para efectos de esta ley y de los mecanismos de participación que desarrolla, se entiende por consenso mayoritario la adopción de decisiones por unanimidad menos el 5% del total de ciudadanos y ciudadanas intervinientes tanto en la sesión deliberativa como en la decisoria.</p>	<p>deberá manifestar expresamente durante la sesión decisoria.</p> <p>En cualquiera de los dos casos, sea que la decisión manifieste la conveniencia del proyecto o sea que manifieste la inconveniencia del proyecto, la decisión de la ciudadanía debe ser motivada y debe tener en cuenta criterios sociales, económicos, ambientales y culturales.</p> <p>Expresada la decisión, se entenderá que el cabildo abierto participativo culmina con un acuerdo participativo.</p> <p>Parágrafo. Para efectos de esta ley y de los mecanismos de participación que desarrolla, se entiende por consenso mayoritario la adopción de decisiones por el 65% del total de ciudadanos y ciudadanas intervinientes tanto en la sesión deliberativa como en la decisoria.</p>	<p>acumulación de los PLE.</p>
	<p>Artículo 28. Acuerdo participativo sobre la conveniencia del proyecto. En caso de decidir, por consenso mayoritario, sobre la conveniencia del proyecto, las autoridades municipales, departamentales y nacionales deberán darles curso a los trámites administrativos subsiguientes, en respeto de las competencias de cada cual, y de las leyes que rigen dichos</p>	<p>Artículo 33. Acuerdo participativo sobre la conveniencia del proyecto. En caso de decidir, por consenso mayoritario, sobre la conveniencia del proyecto, las autoridades municipales, departamentales y nacionales deberán darles curso a los trámites administrativos subsiguientes, en respeto de las competencias de cada cual, y de las leyes que rigen dichos procedimientos, para decidir sobre la viabilidad jurídica del mismo.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se hacen ajustes en la redacción de los</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

	<p>procedimientos, para decidir sobre la viabilidad jurídica del mismo.</p> <p>Junto con el acuerdo participativo sobre la conveniencia del proyecto, la comunidad podrá elevar solicitudes especiales en materia social, económica, ambiental y cultural para prevenir o compensar los impactos previstos, las cuales deben ser atendidas por las autoridades en las etapas subsiguientes.</p> <p>En caso de desestimarlas, deben brindar razones fundadas en derecho o en razones técnicas plausibles y suficientemente motivadas.</p>	<p>Junto con el acuerdo participativo sobre la conveniencia del proyecto, la comunidad podrá elevar ante las autoridades competentes, según sea el caso, solicitudes especiales en materia social, económica, ambiental y cultural para prevenir o compensar los impactos previstos, las cuales deben ser atendidas por las autoridades en las fases subsiguientes de la etapa de exploración y en la etapa de explotación si ella tuviera lugar.</p> <p>En caso de desestimar dichas peticiones, las autoridades competentes, deben brindar razones fundadas en derecho o en razones técnicas plausibles y suficientemente motivadas.</p>	<p>últimos dos incisos para proveer mayor precisión.</p>
	<p>Artículo 29. Acuerdo participativo sobre la inconveniencia del proyecto. En caso de decidir sobre la inconveniencia del proyecto por consenso mayoritario, la comunidad debe comunicar a las autoridades participantes del cabildo si su decisión obedece al proyecto específico que se le ha puesto en consideración o si se debe a una incompatibilidad entre el mismo y algún elemento determinante del ordenamiento territorial.</p> <p>En este último caso, la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según sea el caso, no podrá volver a notificar de nuevas solicitudes al municipio o municipios participantes del cabildo sino hasta</p>	<p>Artículo 34. Acuerdo participativo sobre la inconveniencia del proyecto. En caso de decidir sobre la inconveniencia del proyecto por consenso mayoritario, la comunidad debe comunicar a las autoridades participantes del cabildo si su decisión obedece al proyecto específico que se le ha puesto en consideración o si se debe a una incompatibilidad entre el mismo y algún elemento determinante del ordenamiento territorial.</p> <p>En este último caso, la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la autoridad que haga sus veces según sea el caso, no podrá dar trámite a nuevas solicitudes de exploración en el municipio o municipios participantes del cabildo sino hasta dentro de 5 años luego de la realización de la sesión decisoria del</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción del segundo inciso para proveer mayor precisión.</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

	<p>dentro de 5 años luego de la realización del cabildo abierto socioambiental en que se adoptó la decisión.</p> <p>En ambos casos, sea que la decisión se base en la inconveniencia del proyecto presentado a consideración de la ciudadanía o en la incompatibilidad entre el ordenamiento territorial y la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio, la decisión es vinculante para las autoridades y así deberá quedar consignado en el acuerdo participativo con el que cierra el cabildo.</p>	<p>cabildo abierto socioambiental en que se adoptó la decisión.</p> <p>En ambos casos, sea que la decisión se base en la inconveniencia del proyecto presentado a consideración de la ciudadanía o en la incompatibilidad entre el ordenamiento territorial y la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio, la decisión es vinculante para las autoridades y así deberá quedar consignado en el acuerdo participativo con el que cierra el cabildo.</p>	
	<p>Artículo 30. Naturaleza del Acuerdo participativo: El acuerdo participativo del que tratan los artículos 28 y 29 de esta ley se adoptará mediante acto administrativo, el cual deberá ser proferido por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de conformidad con las competencias correspondientes.</p>	<p>Artículo 35. Naturaleza del Acuerdo participativo. El acuerdo participativo del que tratan los artículos 33 y 34 de esta ley se adoptará mediante acto administrativo motivado, el cual deberá ser proferido por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o por quienes hagan sus veces, de conformidad con las competencias correspondientes dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la sesión decisoria del Cabildo Abierto Participativo.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p> <p>Se ajusta la redacción para hacer compatible con la numeración de la ponencia para primer debate y para precisar los términos en que debe ser expedido el acto administrativo y para acotar que este debe ser motivado.</p>
		<p>Artículo 36. Contenido del acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo. En el acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo la autoridad ambiental</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO.</p> <p>Se incorpora este artículo nuevo al notar la necesidad de precisar los contenidos mínimos y</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

		<p>responsable de su expedición debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El recuento de lo acontecido y de las conclusiones alcanzadas tras la aplicación de la Audiencia Pública Ambiental y el Cabildo Abierto Socioambiental. b) Las posturas de la población y de las autoridades frente al proyecto de exploración que fueron expresadas en los mecanismos de participación. c) Los aportes de los participantes que fueron tenidos en cuenta en el proceso de decisión sobre el desarrollo del proyecto de exploración, así como la información y motivación de carácter social, económica, ambiental y cultural que soportó la decisión. d) El Acuerdo Participativo sobre la conveniencia o inconveniencia del proceso, según sea el caso. Deberá incluirse, según corresponda, la información de cada Acuerdo en los términos previstos en la presente ley. <p>En el caso del Acuerdo Participativo sobre la inconveniencia deberá quedar explícita la prohibición de notificar de nuevas solicitudes al municipio o municipios participantes del cabildo dentro de los cinco (5) años siguientes a la realización de la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental en que se adoptó la decisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> e) En caso de haberse adoptado el Acuerdo Participativo sobre la conveniencia del proyecto, 	<p>asuntos sobre los que debe pronunciarse la administración con ocasión del Acuerdo Participativo.</p> <p>Para su redacción se hace uso de contenidos previstos en los artículos 15 a 19 del PLE 107 sobre requisitos de publicidad, contenidos mínimos y carga argumentativa de los actos administrativos que formalicen las conclusiones y decisiones de los mecanismos de participación.</p>
--	--	--	--

CÁMARA DE REPRESENTANTES

		<p>el acto administrativo del que trata el presente artículo deberá incluir las respuestas a las peticiones ciudadanas y las obligaciones a las que estará sujeta la licencia, permiso o concesión, con el fin de garantizar las medidas de corrección, compensación y reparación social y ambiental a las que haya lugar con ocasión de la etapa de exploración, de conformidad con las preocupaciones que haya señalado la comunidad en los distintos mecanismos de participación. Ello no obsta para que las autoridades ambientales planteen exigencias adicionales con ocasión del desarrollo del proyecto.</p>	
<p>Artículo 18°. Publicación de la decisión respecto de la exploración de recursos naturales no renovables. El acto administrativo del que trata el artículo 16 de la presente ley deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal o distrital y del Concejo. Allí deberá permanecer al menos durante noventa (90) días calendario.</p> <p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión.</p>		<p>Artículo 37. Publicación del acto administrativo que formaliza el Acuerdo Participativo. El acto administrativo que formaliza el Acuerdo Participativo deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal o distrital y del o de los concejos municipales o de la asamblea departamental que estuviera a cargo del desarrollo del Cabildo Abierto Participativo. También deberá publicarse en la sede virtual de la autoridad responsable del proyecto de exploración y explotación.</p> <p>Allí deberá permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proyecto en caso de haberse adoptado el Acuerdo Participativo sobre la conveniencia del proyecto o durante los cinco años siguientes a su expedición en caso de haber sido adoptado el Acuerdo Participativo sobre la inconveniencia del proyecto.</p> <p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión. Su difusión no generará costo alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2)</p>	<p>Se toma como base el artículo del PLE 107 en medida que no hay artículo equivalente en el PLE 121 y que el primero desarrolla requisitos de publicidad del acto administrativo. Se ajusta la redacción para hacerlo compatible con las particularidades del Cabildo Abierto Socioambiental y del Acuerdo Participativo resultante de la aplicación de ese mecanismo.</p> <p>Se elimina el inciso que preveía que contra dicho acto no procedían recursos por considerar su eliminación es más garantista con las partes interesadas.</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES			
<p>Su difusión no generará costo alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2) días hábiles a partir de expedido el acto.</p> <p>Contra ese acto administrativo no proceden recursos</p> <p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se aprobó el proyecto de exploración de recursos naturales no renovables podrá solicitar la aclaración del acto administrativo del que trata el artículo 16 de la presente ley en cualquier momento por medio de un derecho de petición.</p>		<p>días hábiles a partir de expedido el acto.</p> <p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se aprobó el proyecto de exploración de recursos naturales no renovables podrá solicitar la aclaración del acto administrativo mediante el cual se formaliza el acuerdo participativo en cualquier momento por medio de un derecho de petición.</p>	
	<p>Artículo 31. Tiempo de espera entre las diferentes etapas de los cabildos abiertos. En ningún caso, la totalidad de las etapas que componen un cabildo abierto socioambiental podrá exceder los seis meses.</p>	<p>Artículo 38. Tiempo de espera entre las diferentes etapas de los cabildos abiertos. En ningún caso, la totalidad de las etapas que componen un cabildo abierto socioambiental podrá exceder los seis meses.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 por desarrollar el mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p>
	<p>CAPÍTULO 4 DISPOSICIONES TRANSITORIAS SOBRE EL CABILDO ABIERTO SOCIOAMBIENTAL</p>		<p>En la ponencia se elimina la división por capítulos del Título III por considerar que en términos de estructura dicha decisión facilitaba la acumulación de los mecanismos previstos por el PLE107 y por el PLE121 en etapa de exploración.</p>
	<p>Artículo 32. Derecho de prelación de los municipios que realizaron consultas populares municipales</p>	<p>Artículo 39. Derecho de prelación de los municipios que realizaron consultas populares municipales sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 toda vez que no hay artículo equivalente en el PLE</p>

	<p>sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Los municipios que a la entrada en vigencia de esta ley hayan realizado consultas populares para que la ciudadanía se pronuncie sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tendrán un derecho de prelación para la realización del cabildo abierto socioambiental del que tratan los capítulos precedentes.</p> <p>Las votaciones de las consultas que cuenten con el aval de autoridades administrativas y judiciales y se encuentren en firme deberán ser tenidas en cuenta en la etapa deliberativa y decisoria del cabildo y serán un criterio preferente, en tanto materializaron el derecho fundamental de participación ciudadana, al momento de la toma de decisiones del cabildo abierto socioambiental.</p>	<p>no renovables. Los municipios que al momento de entrada en vigor de esta ley hayan realizado consultas populares para que la ciudadanía se pronuncie sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tendrán un derecho de prelación para la realización del cabildo abierto socioambiental del que tratan los capítulos precedentes.</p> <p>Las votaciones de las consultas que cuenten con el aval de autoridades administrativas y judiciales y se encuentren en firme deberán ser tenidas en cuenta en la etapa deliberativa y decisoria del cabildo y serán un criterio preferente para la toma de la decisión, en tanto materializaron el derecho fundamental de participación ciudadana, al momento de la toma de decisiones del cabildo abierto socioambiental.</p>	<p>107 y que su contenido es complementario con el desarrollo del mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p>
	<p>Artículo 33. Derecho de prelación de los municipios que adoptaron acuerdos municipales sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Los municipios que a la entrada en vigencia de esta ley hayan adoptado Acuerdos municipales para permitir o prohibir proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tendrán un derecho de</p>	<p>Artículo 40. Derecho de prelación de los municipios que adoptaron acuerdos municipales sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Los municipios que al momento de entrada en vigor de esta ley hayan adoptado Acuerdos municipales para permitir o prohibir proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tendrán un derecho de prelación para la realización del cabildo abierto socioambiental del que tratan los capítulos precedentes.</p>	<p>Se toma como referencia el artículo del PLE121 toda vez que no hay artículo equivalente en el PLE 107 y que su contenido es complementario con el desarrollo del mecanismo de cabildo abierto socioambiental que es el mecanismo elegido para la etapa de exploración como resultado de la acumulación de los PLE.</p>

CAMARA DE REPRESENTANTES

	prelación para la realización del cabildo abierto socioambiental del que tratan los capítulos precedentes.		
Artículo 31. Aplicación progresiva de estas disposiciones. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables únicamente a las fases de la etapa de exploración de recursos naturales no renovables que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.		Artículo 41. Aplicación progresiva de estas disposiciones. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables únicamente a las fases de la etapa de exploración de recursos naturales no renovables que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.	Se adopta el artículo 31 del PLE107 al considerar que no hay artículo equivalente en el PLE 121 y que su contenido coadyuva a la correcta implementación de la ley en el tiempo.
Artículo 15°. Agotamiento de los mecanismos de participación. El agotamiento de la audiencia pública ambiental, de la Consulta Universal Anticipada y, cuando corresponda, del Cabildo Abierto serán requisitos sin los cuales no será posible para la autoridad ambiental competente decidir sobre la selección objetiva y/o de concesión para la exploración de recursos naturales no renovables.		ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE	Se prescindió de este artículo atendiendo a que se optó por mecanismos previstos en el PLE121 para la exploración. Su contenido sirvió para la redacción del artículo 36 del PLE acumulado.
Artículo 16°. Decisión respecto de la exploración de recursos naturales no renovables. La autoridad ambiental competente, con el fin de decidir sobre la realización de la exploración de los recursos naturales no renovables, deberá expedir un acto administrativo motivado mediante el que le comunique a la población interesada la decisión sobre el desarrollo del proyecto de exploración de recursos naturales no renovables.		ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE	Se prescindió de este artículo considerando que podría ser reiterativo con previsiones existentes en el PLE 121. En todo caso, su contenido sirvió para la redacción del artículo 36 del PLE acumulado

CAMARA DE REPRESENTANTES

<p>Dicho acto deberá ser proferido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la formalización del contrato de concesión con el solicitante de exploración o con el contratista que fuera seleccionado por la autoridad competente.</p>			
<p>Artículo 17°. Carga argumentativa sobre la decisión de continuar con el proceso de exploración de recursos naturales no renovables. En el acto administrativo del que trata el artículo 16 de la presente ley la autoridad ambiental responsable de su expedición debe:</p> <p>a) Describir las conclusiones alcanzadas tras la aplicación de cada uno de los mecanismos de participación previstos en el presente capítulo.</p> <p>b) Resumir las posturas de la población frente al proyecto de exploración que fueron expresadas en los mecanismos de participación.</p> <p>c) Identificar los aportes de los participantes que fueron tenidos en cuenta en el proceso de decisión sobre la continuidad del proyecto de exploración.</p> <p>d) Argumentar de manera amplia y suficiente las razones que llevaron a desconocer y/o a acoger las perspectivas y posturas de las personas que hicieron parte de los diferentes espacios de participación que antecedieron la decisión.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Se prescindió de este artículo atendiendo a que se optó por mecanismos previstos en el PLE121 para la exploración.</p> <p>Su contenido sirvió para la redacción del artículo 36 del PLE acumulado.</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES			
<p>e) Exponer las condiciones u obligaciones a las que estará sujeta la licencia, permiso o concesión, con el fin de garantizar las medidas de corrección, compensación y reparación social y ambiental a las que haya lugar, de conformidad con las preocupaciones que haya señalado la comunidad en los distintos mecanismos de participación.</p>			
<p>Artículo 19°. Aplicación progresiva de estas disposiciones. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables únicamente a los proyectos de exploración de recursos naturales no renovables cuya convocatoria o solicitud se dé con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Se prescindió de este artículo considerando que podría ser reiterativo con otros artículos del PLE121.</p> <p>En todo caso, su contenido sirvió para la redacción del artículo 36 del PLE acumulado.</p>
<p>CAPÍTULO II MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES</p>		<p>CAPÍTULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Se prescindió de este capítulo al considerar que su eliminación facilitaba la acumulación de los proyectos. Resultaba inconveniente diferenciar entre la forma de aplicar los mecanismos antes del inicio de la etapa de exploración y la forma de aplicarlos durante la etapa. Esto, atendiendo a que se optó por dotarles carácter decisor y en consecuencia se optó por las audiencias y el cabildo abierto socioambiental.</p> <p>El primero solo se aplica una vez por lo</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

<p>Artículo 20°. Oportunidad de aplicación de los mecanismos de participación. Los mecanismos de participación de los que trata el Capítulo I del Título II de la presente ley deberán ser aplicados al menos una vez cada uno durante la etapa de exploración.</p> <p>La audiencia pública ambiental debe ser convocada por la autoridad ambiental con anterioridad al inicio de cada fase de la exploración.</p> <p>La autoridad ambiental competente debe convocar a una Consulta Universal Anticipada durante el desarrollo de la última fase de exploración una vez esté claro que el proyecto continuará hacia una etapa de explotación de recursos naturales no renovables. En ese escenario una vez culminada la consulta, el consejo municipal y/o distrital según corresponda deberá convocar a un Cabildo Abierto preparatorio para la etapa de explotación.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>que la precitada distinción era inocua.</p> <p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>
<p>Artículo 22°. Consulta en fases de exploración. En caso de que la población decida convocar a Consulta Universal Anticipada en otro momento de la fase de exploración diferente al previsto en el artículo anterior, podrá hacerlo. En ese caso, la Consulta se regirá por las disposiciones previstas</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de</p>

<p>en el Capítulo I del Título II de la presente ley.</p>			<p>este artículo en la ponencia para primer debate.</p>
<p>Artículo 23°. Consulta Universal Anticipada en fases de exploración. La autoridad ambiental, luego de publicar el acta de la audiencia pública ambiental desarrollada antes del inicio de la última fase de la etapa de exploración, tiene que convocar a la Consulta Universal Anticipada para el cierre de la fase de explotación.</p> <p>Serán aplicables las mismas normas previstas para el desarrollo de la Consulta Universal Anticipada en el Capítulo I del Título II de la presente ley.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, esta Consulta tendrá por objeto indagar por la opinión de la población respecto del desarrollo de la etapa de explotación del proyecto. Con independencia de la posición de la comunidad respecto del desarrollo del proceso de explotación la Dirección de Consulta Previa deberá seguir el mismo proceso previsto en el parágrafo primero del artículo 12 de la presente ley. Además, tendrá que remitir copia de lo actuado al Concejo Municipal y/o Distrital según corresponda.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>
<p>Artículo 24°. Cabildo Abierto preparatorio para la fase de explotación. De manera extraordinaria el Concejo Municipal y/o Distrital, según corresponda, está</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la</p>

<p>obligado a convocar a un Cabildo Abierto preparatorio para la fase de exploración. Deberá hacerlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del documento con las conclusiones de la Consulta Universal Anticipada remitido por la Dirección de Consulta Previa.</p> <p>El mecanismo de cabildo abierto se regirá, salvo las disposiciones especiales contenidas en los siguientes artículos por lo dispuesto en la Ley 1757 de 2013 o en aquellas normas que la modifiquen o deroguen.</p>			<p>exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>
<p>Artículo 25°. Participantes del Cabildo Abierto preparatorio para la fase de explotación. Se debe propender por la participación plural y diversa de la sociedad civil con el ánimo de contar con tantas posturas sobre el desarrollo de la etapa de explotación como sea posible. Sin embargo, la participación de la población civil es voluntaria.</p> <p>Es obligatoria la participación de la autoridad ambiental competente para decidir sobre el proyecto de exploración y de explotación y de las empresas vinculadas con el proyecto tanto en su fase de exploración como de explotación.</p> <p>La ausencia de los actores a los que hace referencia el inciso anterior imposibilita el desarrollo del cabildo que</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>

<p>deberá ser convocado nuevamente por el Concejo Municipal y/o Distrital hasta que pueda desarrollarse con la presencia de las referidas autoridades y particulares. En tanto ello no ocurra no podrá tenerse por agotado el mecanismo de participación y no se podrá dar inicio a la etapa de explotación.</p>			
<p>Artículo 26°. Asuntos del Cabildo y contenidos mínimos por discutir. Las autoridades estatales vinculadas con la etapa de exploración, así como las empresas encargadas de desarrollar esas actividades deben informar al inicio del cabildo sobre:</p> <p>a) La identificación de impactos ambientales y sociales generados durante la etapa de exploración y los que se espera que cause la etapa de explotación.</p> <p>b) La formulación de medidas de corrección y compensación ambientales y sociales al entorno y a las comunidades afectadas y su aplicación durante la etapa de exploración. Se deben precisar las medidas que se prevén en caso de afectaciones durante la etapa de explotación.</p> <p>c) Las medidas de reparación ambientales y sociales adoptadas durante la etapa de exploración en caso de haber sido procedentes y las que se imaginan como</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>

<p>posibles atendiendo a las posibles afectaciones que se causen durante la etapa de explotación.</p> <p>La sociedad civil tendrá oportunidad de deliberar sobre lo expresado por las autoridades ambientales y las empresas en cada uno de los 3 ejes referidos en el primer inciso de este artículo. Podrán interpelar las versiones dadas por las autoridades y las empresas y expresar propuestas y preocupaciones sobre esas tres temáticas.</p> <p>El Concejo municipal y/o distrital podrá expresar sus consideraciones y propuestas. Al final del cabildo el Concejo no tendrá poder decisorio sobre el desarrollo de la etapa de explotación, pero sí deberá consignar las conclusiones del espacio que servirán como insumo a la autoridad ambiental competente para decidir sobre el particular.</p> <p>Las conclusiones del Cabildo también deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad ambiental al consensuar o imponer a la empresa, según corresponda, acuerdos para el manejo y prevención de los riesgos de impactos ambientales y sociales durante la explotación y/o para sancionar los daños causados a la población y al ambiente durante la explotación.</p>			
<p>Artículo 27°. Publicidad de las conclusiones del Cabildo Abierto preparatorio para la</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la</p>

<p>etapa de explotación. El Concejo municipal y/o distrital según sea el caso debe publicar en su sede física y virtual las conclusiones del Cabildo. Deberá difundir el contenido en las emisoras de radio comunitarias y en los medios de prensa locales para su amplia difusión.</p> <p>Tendrá que hacer llegar copia de las conclusiones a las autoridades ambientales competentes y a las empresas que debieron hacer parte del Cabildo conforme lo dispuesto en esta ley. Para ello tendrá ocho (8) días calendario desde la culminación del Cabildo.</p> <p>Una vez la obligación de publicidad se haya cumplido se tendrá por agotado el mecanismo de Cabildo Abierto preparatorio para la etapa de explotación y luego de ello podrá darse por terminada la última fase de la etapa de exploración.</p>			<p>elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>
<p>Artículo 28°. Decisión respecto de la explotación de recursos naturales no renovables. La autoridad ambiental competente para dar inicio a la etapa de explotación de los recursos naturales no renovables deberá expedir un acto administrativo motivado mediante el que le comunique a la población interesada la decisión sobre el desarrollo del proyecto de explotación de recursos naturales no renovables.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>

<p>Dicho acto deberá ser proferido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la culminación de la última fase de la etapa de exploración.</p>			
<p>Artículo 29°. Carga argumentativa sobre la decisión de continuar con la etapa de explotación de recursos naturales no renovables. En el acto administrativo del que trata el artículo anterior la autoridad ambiental responsable de su expedición debe:</p> <p>a) Describir las conclusiones alcanzadas tras la aplicación de cada uno de los mecanismos de participación previstos en el presente capítulo.</p> <p>b) Resumir las posturas de la población frente al proyecto de exploración y de explotación que fueron expresadas en los mecanismos de participación.</p> <p>c) Identificar los aportes de los participantes que fueron tenidos en cuenta en el proceso de decisión sobre la continuidad del proyecto en etapa de explotación.</p> <p>d) Argumentar de manera amplia y suficiente las razones que llevaron a desconocer y/o a acoger las perspectivas y posturas de las personas integrantes de la sociedad civil que hicieron parte de los diferentes espacios de participación que antecedieron la decisión.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>

<p>e) Exponer las condiciones u obligaciones a las que estará sujeta la licencia, permiso o concesión, con el fin de garantizar las medidas de corrección, compensación y reparación social y ambiental a las que haya lugar, de conformidad con las preocupaciones que haya señalado la comunidad en los distintos mecanismos de participación.</p>			
<p>Artículo 30°. Publicación de la decisión respecto de la explotación de recursos naturales no renovables. El acto administrativo del que trata el artículo 28 de la presente ley deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal o distrital y del Concejo. Allí deberá permanecer al menos durante noventa (90) días calendario.</p> <p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión. Su difusión no generará costo alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2) días hábiles a partir de la expedición del acto.</p> <p>Contra ese acto administrativo no proceden recursos.</p> <p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se aprobó el proyecto de explotación de recursos naturales no</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La decisión de dotar de poder decisión a los mecanismos de participación y la elección del Cabildo Abierto Socio ambiental como mecanismo para la exploración en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>

<p>renovables podrá solicitar la aclaración del acto administrativo del que trata el artículo 28 de la presente ley en cualquier momento por medio de un derecho de petición.</p>			
<p>TÍTULO III MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES</p>	<p>TÍTULO III. DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES QUE SE ENCUENTREN EN ETAPA DE EXPLOTACIÓN</p>	<p>TÍTULO IV MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES</p>	<p>Se deja como título IV para hacerlo compatible con la numeración. Se prefiere el nombre dado por el PLE 107 por considerar que da más claridad.</p> <p>PRINCIPALES DECISIONES PARA LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>Se reconoce la aplicación de la audiencia pública participativa de control socioambiental (Arts. 34-43 del PLE 121), que se complementa con algunas disposiciones previstas por el PLE 107 sobre las audiencias públicas ambientales en etapa de explotación (Art.32);</p> <p>Se crea un nuevo mecanismo: Cabildo preparatorio para el cierre del proyecto, tomando la estructura del cabildo socioambiental. El propósito es garantizar los propósitos planteados por el PLE 107 para permitir la participación en el cierre del proyecto y en especial en la definición y seguimiento al cumplimiento de las</p>

			<p>medidas de compensación, corrección y reparación asociadas al proyecto.</p> <p>Se crea un Comité para garantizar el seguimiento y acreditación del cumplimiento de las obligaciones de las partes en etapa de explotación.</p> <p>Se incrementa el poder de decisión de la población sobre el cierre del proyecto para impedir que se cierre sin el debido cumplimiento de las obligaciones ya referidas.</p> <p>Se incluyen los artículos del PLE 107 sobre aplicación progresiva y obligatoriedad de agotar los mecanismos de participación.</p> <p>Se elimina el mecanismo de la consulta universal anticipada pero por vía del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto se garantizan los propósitos para los que estaba previsto ese mecanismo.</p>
<p>CAPÍTULO ÚNICO</p>	<p>CAPÍTULO 1 DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE CONTROL SOCIOAMBIENTAL</p>	<p>CAPÍTULO ÚNICO</p>	<p>Se precisa que es un título de capítulo I y en consecuencia se elimina el complemento propuesto por el PLE121.</p>
	<p>Artículo 34. Audiencia pública participativa de control socioambiental. Las audiencias públicas</p>	<p>Artículo 42. Audiencia pública participativa de control socioambiental. Las audiencias públicas participativas de control</p>	<p>Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay</p>

	<p>participativas de control socioambiental son un mecanismo de rendición de cuentas obligatorio, convocado y organizado por las entidades de la administración encargadas de la política minero energética y ambiental del país, y del seguimiento a los contratos de concesión para la explotación de recursos naturales no renovables, con el fin de presentar a las personas y comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales no renovables un informe de rendición sobre el estado de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables que estén en curso en cuanto a sus obligaciones contractuales, sociales y ambientales, escuchar a la ciudadanía y tomar decisiones de ajuste, si es el caso, sobre las medidas de prevención, mitigación y compensación adoptadas.</p> <p>Estas audiencias serán de carácter municipal, intermunicipal o departamental, dependiendo de la existencia de uno o más proyectos en un municipio, o la existencia de un proyecto con una extensión territorial que abarque más de un municipio o más de un departamento.</p>	<p>socioambiental son un mecanismo obligatorio de rendición de cuentas y de seguimiento a los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Estas audiencias deben ser convocadas y organizadas por la Agencia Nacional de Minería o por la Agencia Nacional de Hidrocarburos o por la autoridad que haga sus veces según sea el caso. En estas audiencias se debe presentar a las personas y comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales no renovables un informe de rendición de cuentas sobre el estado de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables que estén en curso, dando cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales, sociales y ambientales; se debe escuchar a la ciudadanía y tomar decisiones de ajuste, si es el caso, sobre las obligaciones y las subsecuentes medidas de prevención, mitigación, compensación y reparación que</p>	<p>equivalente en el PLE107.</p> <p>Incorpora también el contenido del artículo 38 del PLE121.</p> <p>Se incluye un nuevo inciso final para hacerlo compatible con el mecanismo creado en la acumulación de los textos para la etapa de explotación: el cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p>
--	---	--	---

	<p>Parágrafo 1°. Las audiencias de las que trata el presente artículo se deben realizar cada 3 años contados a partir del inicio de la fase de explotación y hasta tanto se dé por terminado el proyecto de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Parágrafo 2°. En aquellos casos en los que las personas titulares de los contratos de concesión presenten una solicitud de prórroga para ampliar el plazo de explotación de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables, o una solicitud de terminación de la concesión, la autoridad nacional competente está en la obligación de convocar de manera inmediata la audiencia pública</p>	<p>deben ser adoptadas por las empresas y/o por el Estado con ocasión del proyecto de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>De esta manera se garantiza la discusión y la deliberación acerca del adecuado desarrollo del proyecto, de las medidas de carácter social, económico, cultural, jurídico y ambiental que se deban adoptar frente al proyecto para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, la protección del ambiente y el goce efectivo de los derechos humanos de las poblaciones afectadas.</p> <p>Estas audiencias serán de carácter municipal, intermunicipal o departamental, dependiendo de la existencia de uno o más proyectos en un municipio, o la existencia de un proyecto con una extensión territorial que abarque más de un municipio o más de un departamento.</p> <p>Parágrafo 1°. Las audiencias de las que trata el presente artículo se deben realizar con anterioridad al inicio de cada fase de la etapa de explotación o cada 3 años contados a partir del inicio de la fase de explotación y hasta tanto se dé por terminado el proyecto. Se preferirá la condición o plazo que ocurra primero en el tiempo.</p> <p>Parágrafo 2°. En aquellos casos en los que las personas titulares de los contratos de concesión presenten una solicitud de prórroga para ampliar el plazo de explotación de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables la autoridad nacional competente está en la obligación de convocar de manera inmediata la audiencia pública participativa de control socioambiental de la que trata este artículo.</p>	
--	---	---	--

	<p>participativa de control socioambiental de la que trata este artículo.</p>	<p>En caso de que esas mismas personas presenten una solicitud para la terminación de la concesión la autoridad nacional competente está en la obligación de convocar de manera inmediata el Cabildo Abierto Preparatorio para el Cierre del Proyecto en los términos previstos en la presente ley.</p>	
	<p>Artículo 35. Notificación de las autoridades competentes a las autoridades municipales sobre el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental. Siempre que las autoridades nacionales competentes estén en la obligación de realizar una audiencia pública participativa de control socioambiental, deberán notificar a la autoridad municipal o autoridades municipales concernidas la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia para que estas, a su vez, puedan comunicar a la ciudadanía residente del municipio o municipios la realización de dicho mecanismo de participación.</p> <p>La notificación de la que trata este artículo deberá contener información básica sobre:</p> <p>a) El tipo de proyecto que se está ejecutando y la etapa en la que se encuentra.</p> <p>b) La persona natural o jurídica titular del contrato de concesión.</p>	<p>Artículo 43. Notificación de las autoridades competentes a las autoridades municipales sobre el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental. Siempre que la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos o quienes hagan sus veces estén en la obligación de realizar una audiencia pública participativa de control socioambiental, deberán notificar a la alcaldía municipal o distrital la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia para que estas, a su vez, puedan comunicar a la ciudadanía residente del municipio(s) o distrito(s) y a terceros interesados sobre la realización de dicho mecanismo de participación.</p> <p>La notificación de la que trata este artículo deberá contener información básica sobre:</p> <p>a) El tipo de proyecto que se está ejecutando y la fase en la que se encuentra.</p> <p>b) La persona natural o jurídica titular del contrato de concesión.</p>	<p>Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay equivalente en el PLE107.</p> <p>Se hacen ajustes menores de redacción para hacerlo compatible con la aplicación del mecanismo en varios municipios o distritos.</p>

	<p>c) Los contratos o actos jurídicos firmados mediante los que se le permite la explotación de recursos naturales no renovables (obligaciones para las partes, tiempo de duración, cláusulas, etc.).</p> <p>d) El tipo de proyecto y el tipo de recurso natural no renovable objeto de explotación.</p> <p>e) El tiempo de inicio y terminación del contrato.</p> <p>f) Un informe de rendición de cuentas en el que se incluya una descripción de las obligaciones que tienen las partes contractuales y el estado de cumplimiento de las mismas, y en el que se dé cuenta de los impactos causados por la ejecución del proyecto hasta la fecha de notificación y de las medidas de prevención, mitigación y compensación adoptadas.</p> <p>Parágrafo 1°. El envío de la notificación de la que trata el presente artículo estará a cargo de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de acuerdo con la naturaleza de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables objeto de control.</p>	<p>c) Los contratos o actos jurídicos firmados mediante los que se le permite la explotación de recursos naturales no renovables (obligaciones para las partes, tiempo de duración, cláusulas, etc.).</p> <p>d) El tipo de proyecto y el tipo de recurso natural no renovable objeto de explotación.</p> <p>e) El tiempo de inicio y terminación del contrato.</p> <p>f) Un informe de rendición de cuentas en el que se incluya una descripción de las obligaciones que tienen las partes contratantes y el estado de cumplimiento de las mismas, y en el que se dé cuenta de los impactos causados por la ejecución del proyecto hasta la fecha de notificación y de las medidas de prevención, mitigación, compensación y reparación adoptadas.</p> <p>Parágrafo 1°. El envío de la notificación de la que trata el presente artículo estará a cargo de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de las entidades que hagan sus veces, de acuerdo con la naturaleza de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables objeto de control.</p>	
	<p>Artículo 36. Aviso del municipio a la ciudadanía residente. Por todos los medios de los que disponga, la persona en cabeza de la alcaldía o alcaldías dará</p>	<p>Artículo 44. Aviso del municipio a la ciudadanía residente y a terceros interesados. El día posterior a la notificación por parte de la autoridad minera o de hidrocarburos, la persona en cabeza de la alcaldía o alcaldías dará aviso a sus residentes</p>	<p>Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay equivalente en el PLE107.</p>

	<p>aviso a sus residentes sobre la notificación que envíen las autoridades competentes para el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental e indicarán la fecha, lugar, hora y objeto de la audiencia.</p> <p>El aviso se fijará en las sedes de la administración local por 10 días dentro de los cuales se deberá dar difusión por medios de comunicación locales y departamentales, según el caso, y por todos los medios de difusión que se consideren relevantes. No bastará con una convocatoria virtual a través de las páginas web institucionales, ya que ello limita el acceso de poblaciones rurales.</p> <p>Parágrafo. En ningún caso, la fecha que establezcan las autoridades encargadas para el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental podrá ser inferior a un mes contado a partir de la fecha en la que las autoridades municipales competentes reciben la notificación.</p>	<p>sobre la notificación que envíen las autoridades competentes para el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental e indicarán la fecha, lugar, hora y objeto de la audiencia.</p> <p>El aviso se fijará en las sedes de la administración local por diez (10) días calendario dentro de los cuales se deberá dar difusión por medios de comunicación locales y departamentales, según el caso, y por todos los medios de difusión que se consideren relevantes. La difusión de estos anuncios deberá hacerse de manera gratuita por parte de los medios locales por lo que no generará costo alguno para la administración. No bastará con una convocatoria virtual a través de las páginas web institucionales ya que ello limita el acceso a la información de poblaciones rurales.</p> <p>Parágrafo. En ningún caso la fecha que establezcan las autoridades encargadas para el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental podrá ser mayor a un mes contado a partir de la fecha en la que las autoridades municipales o distritales competentes reciban la notificación.</p>	
	<p>Artículo 37. Participantes de la audiencia pública participativa de control socioambiental. La audiencia pública participativa de control socioambiental es de carácter público y abierto para la ciudadanía. Su intervención en la audiencia estará limitada a una inscripción formal</p>	<p>Artículo 45. Participantes de la audiencia pública participativa de control socioambiental. La audiencia pública participativa de control socioambiental es de carácter público y abierto para la ciudadanía. Su intervención en la audiencia estará condicionada únicamente a acreditar que residen en el municipio o que fueron invitados en calidad de asesores por la ciudadanía. En todos los casos deberán diligenciar una inscripción formal para efectos de</p>	<p>Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay equivalente en el PLE107.</p> <p>Se incluye un inciso para permitir la participación de terceros en calidad de asesores técnicos.</p>

	<p>para efectos de organizar su adecuado desarrollo.</p> <p>A la audiencia pública participativa de control socioambiental deberán concurrir las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan competencias en asuntos relacionados con el desarrollo de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables objeto de control, así como el Ministerio Público.</p> <p>Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas titulares del contrato de concesión para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, solo podrán intervenir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de esta ley.</p> <p>En ningún caso podrán intervenir en otros momentos de la audiencia y se deben abstener de interferir en la información proporcionada por entidades públicas y en la información u opinión brindada por la ciudadanía.</p>	<p>organizar el adecuado desarrollo de la audiencia.</p> <p>A la audiencia pública participativa de control socioambiental deberán concurrir las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan competencias en asuntos relacionados con el desarrollo de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables objeto de control, así como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Podrán participar en la audiencia, en calidad de asesores, los técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica y/u organizaciones de la sociedad civil invitadas por la ciudadanía residente en los municipios afectados, para tomar decisiones informadas.</p> <p>Será obligatoria la participación para la(s) empresa(s) y ejecutores responsables de la fase de explotación de recursos naturales no renovables. Su inasistencia impide el desarrollo de la audiencia y sin su presencia no se tendrá por agotado el mecanismo de participación.</p>	<p>Se elimina el parágrafo para permitir una participación más aplica de los actores que deben rendir cuentas en este espacio y para hacerlo compatible con la nueva numeración del articulado.</p>
--	---	---	---

CÁMARA DE REPRESENTANTES

	<p>Artículo 38. Objeto de la audiencia pública participativa de control socioambiental. La audiencia pública participativa se desarrollará con el fin de que las autoridades del orden nacional y regional, según el caso, den a conocer a la ciudadanía de los municipios impactados por la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como a las autoridades de los mismos, toda la información necesaria para la rendición de cuentas sobre el desarrollo de los proyectos, el avance de las actividades, los impactos ambientales generados y la demás información relacionada con la ejecución de los proyectos.</p> <p>De esta manera se garantiza la discusión y la deliberación acerca del adecuado desarrollo del proyecto, su conveniencia o inconveniencia, las medidas a adoptar para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, y las demás medidas de carácter social, económico, cultural, jurídico y ambiental que se deban adoptar frente al proyecto.</p>	<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>Este artículo se unificó con el artículo 34 del PLE121 para dar lugar al artículo 42 de la ponencia.</p>
	<p>CAPÍTULO 2 DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE CONTROL SOCIOAMBIENTAL</p>		<p>En la ponencia se elimina la división por capítulos del Título IV por considerar que en términos de estructura dicha decisión facilitaba la</p>

			<p>acumulación de los mecanismos previstos por el PLE107 y por el PLE121 en etapa de explotación.</p>
	<p>Artículo 39. Información que debe ser suministrada a la ciudadanía durante la audiencia pública participativa de control socioambiental. Para garantizar el carácter deliberativo de la audiencia, así como la legitimidad de sus decisiones, es indispensable que las autoridades nacionales, departamentales y locales suministren toda la información relacionada con el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que estén en ejecución, desde la etapa de explotación.</p> <p>La información será presentada en el siguiente orden, luego de que una persona representante de la autoridad que notificó la audiencia dé apertura formal al espacio:</p> <p>a) Una persona delegada de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según el caso, quien deberá presentar la siguiente información: descripción del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en ejecución y la etapa en la que se encuentra, titular del contrato de concesión, la fecha de inicio y terminación</p>	<p>Artículo 46. Información que debe ser suministrada a la ciudadanía durante la audiencia pública participativa de control socioambiental. Para garantizar el carácter deliberativo de la audiencia, así como la legitimidad de sus decisiones, es indispensable que las autoridades nacionales, departamentales y locales así como las empresas responsables del proyecto de explotación suministren toda la información relacionada con el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que estén en ejecución, desde la etapa de explotación.</p> <p>La información será presentada en el siguiente orden, luego de que una persona representante de la autoridad que notificó la audiencia dé apertura formal al espacio:</p> <p>a) Una persona delegada de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según el caso, deberá presentar la siguiente información: descripción del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en ejecución y la etapa en la que se encuentra, titular del contrato de concesión, la fecha de inicio y terminación del contrato de concesión, el tipo de recurso natural no renovable objeto de explotación, el acto administrativo que aprobó el desarrollo de la etapa de explotación,</p>	<p>Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay equivalente en el PLE107.</p> <p>Se ajusta la redacción de los literales para incorporar de contenidos que se recomendó incluir en las mesas técnicas.</p> <p>Se añade un literal para permitir información que puede ser suministrada por universidades y terceros técnicos.</p> <p>Se añade un parágrafo para darle aplicación al artículo 5 de la ponencia para primer debate y garantizar el derecho de acceso a la información.</p>

	<p>del contrato de concesión, el tipo de recurso natural no renovable objeto de explotación, la descripción de las obligaciones que tienen las partes contractuales y el estado de cumplimiento de las mismas, el balance en la ejecución de proyecto desde el punto de vista técnico, económico, jurídico y social y de los impactos causados, los traslapes con zonas excluibles de la minería, los Planes de Gestión Social y la demás información relacionada con los proyectos en ejecución que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>b) Una persona delegada del Ministerio de Minas y Energía, la cual deberá presentar la siguiente información: lineamientos de las políticas, planes y programas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que resulten relevantes frente a la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de control.</p> <p>c) Una persona representante de la persona natural o jurídica titular del contrato de concesión, la cual deberá presentar la siguiente información: identificación y breve descripción del titular del</p>	<p>la descripción de las obligaciones que tienen las partes contractuales y el estado de cumplimiento de las mismas, el balance en la ejecución de proyecto desde el punto de vista técnico, económico, jurídico y social y de los impactos causados, los traslapes con zonas excluibles de la minería y de explotación de hidrocarburos, los Planes de Gestión Social, las conclusiones en materia de impactos ambientales y sociales de la fase previa y un estimativo de los impactos de la fase siguiente, las medidas de prevención, atención y reparación para evitar, controlar y reparar eventuales afectaciones sociales y ambientales que pudieran causarse en la siguiente fase de la explotación y la demás información relacionada con los proyectos en ejecución que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>b) Una persona delegada del Ministerio de Minas y Energía, la cual deberá presentar la siguiente información: lineamientos de las políticas, planes y programas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que resulten relevantes frente a la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de control.</p> <p>c) Una persona representante de la persona natural o jurídica titular del contrato de concesión, la cual deberá presentar la siguiente información: identificación y breve descripción del titular del contrato de concesión (nacional, extranjero, objeto de la persona jurídica), descripción del proyecto extractivo (tipo de recurso</p>	
--	--	--	--

	<p>contrato de concesión (nacional, extranjero, objeto de la persona jurídica), descripción del proyecto extractivo (tipo de recurso natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono, presencia de grupos étnicos o zonas mineras indígenas, estimativo de la inversión económica), estado actual del proyecto (en cuanto a sus obligaciones sociales, ambientales y económicas).</p> <p>d) Una persona representante de la autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental, la cual deberá presentar la siguiente información: balance en el cumplimiento de lo dispuesto en la licencia ambiental o el plan de manejo ambiental, según el caso, frente a las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los impactos ambientales del proyecto; modificaciones de la licencia ambiental y sus alcances; informes de control y seguimiento emitidos; procesos sancionatorios en curso o que se hayan realizado frente a los proyectos objeto de control y la demás información relevante para la ciudadanía en el marco de la competencia de esta autoridad.</p> <p>e) Una persona representante de las</p>	<p>natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono, presencia de grupos étnicos o zonas mineras indígenas, estimativo de la inversión económica), estado actual del proyecto (en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones sociales, ambientales y económicas), las conclusiones en materia de impactos ambientales y sociales de la fase previa y un estimativo de los impactos de la fase siguiente y las medidas de prevención, atención y reparación para evitar, controlar y reparar eventuales afectaciones sociales y ambientales que pudieran causarse en la siguiente fase de la explotación.</p> <p>d) Una persona representante de la autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental, la cual deberá presentar la siguiente información: balance en el cumplimiento de lo dispuesto en la licencia ambiental o el plan de manejo ambiental, según el caso, frente a las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación, reparación y manejo de los impactos ambientales del proyecto; modificaciones de la licencia ambiental y sus alcances; informes de control y seguimiento emitidos; procesos sancionatorios en curso o que se hayan realizado frente a los proyectos objeto de control y la demás información relevante para la ciudadanía en el marco de la competencia de esta autoridad.</p> <p>e)Una persona representante de las demás autoridades ambientales del</p>	
--	---	--	--

	<p>demás autoridades ambientales del orden nacional y regional, las cuales deberán presentar la siguiente información: localización y descripción de zonas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo las áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras que se encuentren en el o los municipios participantes en la audiencia; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; solicitud de sustracción de reservas forestales con ocasión de la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de la audiencia y el estado en el que se encuentran; afectaciones e impactos ocasionados por los proyectos en las áreas previamente mencionadas y la demás información relevante sobre la importancia ecológica del territorio en cuestión.</p> <p>f) Una persona representante de Parques Nacionales Naturales, la cual deberá presentar la</p>	<p>orden nacional y regional, las cuales deberán presentar la siguiente información: localización y descripción de zonas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo las áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras que se encuentren en el o los municipios participantes en la audiencia; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; solicitud de sustracción de reservas forestales con ocasión de la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de la audiencia y el estado en el que se encuentran; afectaciones e impactos ocasionados por los proyectos en las áreas previamente mencionadas y la demás información relevante sobre la importancia ecológica del territorio en cuestión.</p> <p>f)Una persona representante de Parques Nacionales Naturales, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de la administración y manejo de las áreas</p>	
--	---	--	--

	<p>siguiente información: estado actual de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios participantes de la audiencia; afectaciones e impactos ocasionados por los proyectos en las áreas previamente mencionadas y la demás información relevante sobre la importancia el manejo de estas áreas y el desarrollo de los proyectos.</p> <p>g) La persona en cabeza de la Alcaldía municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual del instrumento de ordenamiento territorial y su compatibilidad con los proyectos en ejecución, conflictos socioambientales relevantes que se hayan suscitado con ocasión de la ejecución del proyecto y demás información relacionada que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>h) La persona que ejerce la presidencia del concejo municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: proyectos de ley, debates de control político, debates de asuntos de interés general, y demás actuaciones relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables o con los proyectos objeto de control que se han</p>	<p>del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios participantes de la audiencia; afectaciones e impactos ocasionados por los proyectos en las áreas previamente mencionadas y la demás información relevante sobre la importancia el manejo de estas áreas y el desarrollo de los proyectos.</p> <p>g) La persona en cabeza de la Alcaldía municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual del instrumento de ordenamiento territorial y su compatibilidad con los proyectos en ejecución, conflictos socioambientales relevantes que se hayan suscitado con ocasión de la ejecución del proyecto, afectaciones a la salud pública asociadas con el proyecto y demás información relacionada que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>h) La persona que ejerce la presidencia del concejo municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: acuerdos municipales u ordenanzas, debates de control político, debates de asuntos de interés general, y demás actuaciones relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables o con los proyectos objeto de control que se han llevado a cabo en el municipio y que resulten relevantes para la</p>	
--	--	---	--

	<p>llevado a cabo en el municipio y que resulten relevantes para la ciudadanía que participa en la audiencia.</p> <p>i) Una persona representante del Ministerio Público, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio relacionadas con el desarrollo de proyectos objeto de control, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos con ocasión del desarrollo de los proyectos, y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía participante en la audiencia.</p> <p>j) Una persona representante de la Contraloría General de la República, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre hallazgos que se hayan proferido en el marco del desarrollo del proyecto objeto de control, denuncias en curso sobre el desarrollo del proyecto.</p> <p>Parágrafo. Toda la información que presenten las</p>	<p>ciudadanía que participa en la audiencia.</p> <p>i) Una persona representante de la Defensoría del Pueblo y una persona representante de la Procuraduría General de la Nación, las cuales deberán presentar la siguiente información: informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio relacionadas con el desarrollo de proyectos objeto de control, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos con ocasión del desarrollo de los proyectos, y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía participante en la audiencia.</p> <p>j) Una persona representante de la Contraloría General de la República, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre hallazgos que se hayan proferido en el marco del desarrollo del proyecto objeto de control, denuncias en curso sobre el desarrollo del proyecto.</p> <p>k) Personas representantes de universidades públicas y privadas, institutos y centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, académicos o expertos para que puedan aportar información sobre los impactos del proyecto y recomendaciones para atenderlos.</p> <p>Parágrafo 1. Toda la información de la que trata el presente artículo deberá estar publicada y disponible</p>	
--	---	--	--

	<p>autoridades antes señaladas quedará a disposición del municipio para la solicitud y consulta de la ciudadanía que la requiera.</p>	<p>para consulta al menos con veinte (20) días hábiles de anterioridad a la celebración de la audiencia en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) en los términos previstos en del artículo 5 de la presente ley y quedará a disposición del municipio para la solicitud y consulta de la ciudadanía que la requiera. Además, será presentada y entregada al inicio de la audiencia en copia física o digital a los participantes.</p>	
	<p>Artículo 40. Intervenciones ciudadanas y deliberación. Una vez se haya presentado la información relacionada en el artículo anterior, intervendrán todas las personas que se hayan inscrito ante la Alcaldía.</p> <p>Estas intervenciones tendrán como objeto elevar preguntas respetuosas a las autoridades para tener un mejor criterio sobre el proyecto o contrato de concesión objeto de control.</p> <p>Posteriormente, se dará espacio para que las autoridades intervengan y puedan dar respuesta inmediata a aquello que esté bajo su competencia.</p>	<p>Artículo 47. Intervenciones ciudadanas y deliberación. Una vez se haya presentado la información relacionada en el artículo anterior, intervendrán todas las personas que se hayan inscrito ante la Alcaldía del municipio en que se desarrolle la audiencia.</p> <p>Estas intervenciones tendrán como objeto elevar preguntas respetuosas a las autoridades para tener un mejor criterio sobre el proyecto de explotación objeto de control.</p> <p>Posteriormente, se dará espacio para que las autoridades y/o las personas responsables de la ejecución del proyecto de explotación intervengan y puedan dar respuesta inmediata a aquello que esté bajo su competencia. Además, precisaran las distintas medidas y compromisos que deben asumir las autoridades y las personas naturales o jurídicas titulares del contrato de concesión para corregir las irregularidades evidenciadas en el desarrollo del proyecto y para implementar las acciones adicionales encaminadas a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sociales.</p> <p>En un tercer momento la población civil inscrita tendrá la oportunidad de</p>	<p>Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay equivalente en el PLE107.</p> <p>Se hacen ajustes en la redacción y se incluye disposiciones para precisar el alcance de las intervenciones ciudadanas y los turnos para lograr la deliberación.</p>

	<p>Lo que no sea contestado deberá ser materia de respuesta y se entiende que es un derecho de petición colectivo, el cual debe ser atendido siguiendo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto.</p>	<p>interpelar las respuestas dadas por las autorizadas y las respuestas dadas por los particulares responsables del proyecto de explotación, así como las medidas y compromisos a los que deben hacer referencia las autoridades en su intervención.</p> <p>Lo que no sea contestado por las autoridades y los particulares responsables del proyecto de explotación deberá ser materia de respuesta y se entiende que es un derecho de petición colectivo, el cual debe ser atendido siguiendo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto. En esa misma respuesta deben ampliar los argumentos para controvertir la interpelación de la población, en caso de que esta hubiera tenido lugar.</p>	
	<p>Artículo 41. Resultado de la Audiencia pública participativa socioambiental. El resultado de la audiencia pública realizada es un acta diligenciada por el municipio, la cual condensará las distintas medidas y compromisos que deben asumir las autoridades y las personas naturales o jurídicas titulares del contrato de concesión, para corregir las irregularidades evidenciadas en el desarrollo de los contratos e implementar las acciones adicionales encaminadas a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.</p>	<p>Artículo 48. Resultado de la Audiencia pública participativa de control socio ambiental. El resultado de la audiencia pública realizada será un acta diligenciada por la alcaldía municipal o distrital. Esta deberá estar suscrita por las empresas y los particulares responsables del proyecto, por la autoridad minera o de hidrocarburos y por las autoridades ambientales competentes.</p> <p>El acta de la que trata el presente artículo condensará las distintas medidas y compromisos que deben asumir las autoridades y las personas naturales o jurídicas titulares del contrato de concesión, para corregir las irregularidades evidenciadas en el desarrollo de los contratos e implementar las acciones adicionales encaminadas a prevenir, mitigar y</p>	<p>Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay equivalente en el PLE107.</p> <p>Se incluye un inciso adicional para darle alcance y precisar el contenido del acta.</p>

	<p>Parágrafo 1°. Al finalizar la audiencia se deberá hacer una lectura del acta con el fin de que sea aprobada por la ciudadanía que participó en el espacio.</p> <p>Parágrafo 2°. En cualquier caso, si frente a la ejecución de los proyectos objeto de control se evidencian irregularidades o incumplimiento de disposiciones legales y constitucionales diferentes a las establecidas frente a los requisitos del contrato de concesión, en el acta se podrá conminar a las autoridades competentes para que adopten las medidas correspondientes, incluyendo: procesos sancionatorios ambientales, procesos disciplinarios, procesos fiscales, denuncias penales, entre otras medidas encaminadas a garantizar el desarrollo de los proyectos conforme al ordenamiento jurídico.</p> <p>Parágrafo 3°. Si en desarrollo de la audiencia pública se evidencia el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los contratos de concesión que regulan los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de control, en el acta se podrá conminar a la autoridad nacional competente para que declare la caducidad del contrato de acuerdo con</p>	<p>compensar los impactos ambientales y sociales.</p> <p>Parágrafo 1°. Al finalizar la audiencia se deberá hacer una lectura del acta con el fin de que sea aprobada por la ciudadanía que participó en el espacio.</p> <p>Parágrafo 2°. En cualquier caso, si frente a la ejecución de los proyectos objeto de control se evidencian irregularidades o incumplimiento de disposiciones legales y constitucionales diferentes a las establecidas frente a los requisitos del contrato de concesión, en el acta se podrá conminar a las autoridades competentes para que adopten las medidas correspondientes, incluyendo: procesos sancionatorios ambientales, procesos disciplinarios, procesos fiscales, denuncias penales, entre otras medidas encaminadas a garantizar el desarrollo de los proyectos conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico.</p> <p>Parágrafo 3°. Si en desarrollo de la audiencia pública se evidencia el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los contratos de concesión que regulan los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de control, en el acta se podrá conminar a la autoridad nacional competente para que de apertura a los procedimientos administrativos correspondientes y para que declare la caducidad del contrato de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.</p>	
--	--	--	--

	las disposiciones legales aplicables.		
	Artículo 42: Adopción del acta resultante de la Audiencia pública participativa socioambiental. El acta de la que trata el artículo 43 de esta ley se adoptará mediante acto administrativo proferido por las autoridades competentes conforme a lo decidido en la audiencia.	Artículo 49. Adopción del acta resultante de la Audiencia pública participativa de control socio ambiental. El acta de la audiencia pública participativa de control socio ambiental se adoptará mediante acto administrativo proferido por las autoridades competentes conforme a lo decidido en la audiencia.	Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay equivalente en el PLE107.
		Artículo 50. Requisito de agotamiento de la Audiencia Pública de control socio ambiental. El agotamiento de la Audiencia Pública de control socio ambiental será requisito para que la autoridad ambiental y las empresas involucradas puedan proseguir con el desarrollo de las fases siguientes de la etapa de explotación.	ARTÍCULO NUEVO Se considera necesario incluir este artículo, inspirado en las disposiciones del PLE 107 relacionadas con darle un efecto jurídico a la inaplicación del mecanismo y como incentivo para lograr su aplicación.
		Artículo 51. Notificación del acta de la audiencia. La autoridad minera o de hidrocarburos competente notificará por aviso y de manera personal el acta de la audiencia pública participativa de control socio ambiental a todos los participantes de la audiencia en un término de cinco (5) días calendario siguientes a la elaboración del acta. En los casos de la notificación por aviso, esta deberá fijarse en la sede de la Alcaldía Municipal o Distrital y en la sede virtual de la respectiva entidad y deberá circularse en los radios comunitarios y medios de comunicación local. Sólo cuando se trate de la audiencia pública participativa de control socioambiental celebrada para la última fase de la etapa de explotación a través de esos mismos canales de comunicación y en el mismo momento se notificará al(os) concejo(s) municipal(es) o a la asamblea departamental, según corresponda, para que estos convoquen a un Cabildo Abierto	ARTÍCULO NUEVO Se considera necesario incluir este artículo para garantizar la debida notificación del acta de la audiencia de control socio ambiental y para articularlo con el mecanismo del Cabildo Abierto Preparatorio para el cierre del proyecto.

		<p>preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>La convocatoria al Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto deberá hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la que trata el presente artículo y el Cabildo Abierto deberá celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del acta de la audiencia, en los términos previstos en la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1. Si alguna de las personas que intervino en la audiencia pública tiene alguna discrepancia con el contenido del acta, podrá hacerlo saber a la autoridad minera o de hidrocarburos en un término de dos (2) días calendario siguientes a la notificación. La autoridad deberá notificar una versión del acta con las enmiendas siempre que éstas existieren en un término de tres (3) días calendario siguientes al día en que se cumpla el término para que la ciudadanía presente sus discrepancias con el acta original.</p> <p>Parágrafo 2°. En los casos de que trata el parágrafo 1, la autoridad minera o de hidrocarburos deberá repetir el proceso de notificación previsto en el primer inciso del presente artículo. La notificación del acta con enmiendas no afectará el término de dos (2) meses para convocar al Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto ni el afecta el término de tres (3) meses para la celebración del Cabildo Abierto previsto en el inciso segundo del presente artículo</p>	
	<p>Artículo 43. Seguimiento de la audiencia pública participativa de control socioambiental. En un término de 6 meses contados a partir de la fecha de celebración de la audiencia pública, las autoridades competentes deberán realizar y entregar un informe a las</p>	<p>Artículo 52. Seguimiento de la audiencia pública participativa de control socio ambiental. Cada 6 meses contados a partir de la fecha de celebración de la audiencia pública, las autoridades competentes junto con las personas responsables del desarrollo del proyecto de explotación deberán realizar y entregar un informe a las personas participantes en dicho mecanismo de participación, en el que se dé cuenta de los avances</p>	<p>Toma como base el artículo del PLE121 dado que no hay equivalente en el PLE107.</p>

	<p>personas participantes en dicho mecanismo de participación, en el que se dé cuenta de los avances y cumplimiento de las medidas y compromisos consignados en el acta a la que se hace referencia en el artículo anterior.</p> <p>El informe será remitido a la Alcaldía, la cual debe informar por todos los medios sobre su recepción y dejarlo a disposición para la consulta gratuita por parte de la ciudadanía.</p>	<p>y cumplimiento de las medidas y compromisos consignados en el acta a la que se hace referencia en el artículo anterior.</p> <p>El informe será remitido a la Alcaldía, la cual debe informar por todos los medios sobre su recepción y dejarlo a disposición para la consulta gratuita y permanente por parte de la ciudadanía.</p>	
<p>Artículo 32°. Oportunidad de aplicación de los mecanismos de participación. La audiencia pública ambiental debe ser convocada por la autoridad ambiental competente con anterioridad al inicio de cada fase de la etapa de explotación.</p> <p>La autoridad ambiental competente debe convocar a una Consulta Universal Anticipada de carácter especial durante el desarrollo de la última fase de explotación como requisito para poder dar por terminado el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La elección de la Audiencia Pública de Control Socioambiental y del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto como mecanismos para la explotación en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p> <p>Sin embargo, el espíritu del mecanismo y los desarrollos normativos propuestos en el PLE107 fueron tenidos en cuenta para la elaboración del mecanismo de Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto que está previsto en los artículos 53 y siguientes de la ponencia para primer debate.</p>
<p>Artículo 33°. Audiencia pública ambiental en fases de explotación. Previo inicio de cada una</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La elección de la Audiencia Pública de Control Socioambiental y del</p>

<p>de las fases previstas como constitutivas de la etapa de explotación se deberá desarrollar una audiencia pública en los términos previstos en el Título II de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1. La autoridad ambiental competente debe convocar a la población de los distritos y/o municipios en que converge la actividad de explotación de recursos naturales no renovables y a los terceros interesados en el desarrollo del proyecto. Será obligatoria la participación para la(s) empresa(s) y ejecutores responsables de la fase de explotación de recursos naturales no renovables. Su inasistencia impide el desarrollo de la audiencia y sin su presencia no se tendrá por agotado el mecanismo de participación.</p> <p>Parágrafo 2. El agotamiento de este mecanismo de participación será requisito para que la autoridad ambiental y las empresas involucradas puedan proseguir con el desarrollo de las fases siguientes de la etapa de explotación.</p> <p>Parágrafo 3. Al inicio de cada audiencia se dará lectura y se entregará a los participantes una copia física o digital del documento preparado por la autoridad ambiental convocante en que consten las conclusiones en materia de impactos ambientales y sociales de la fase</p>			<p>Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto como mecanismos para la explotación en perjuicio de las audiencias públicas ambientales planteadas por el PLE107 en fase de exploración hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>
---	--	--	---

<p>previa y un estimativo de los impactos de la fase siguiente.</p> <p>En todas las audiencias las empresas, en conjunto con la autoridad ambiental competente, deben informar a los participantes de la audiencia las medidas de prevención, atención y reparación para evitar, controlar y reparar eventuales afectaciones sociales y ambientales que pudieran causarse en la siguiente fase de la explotación.</p> <p>En la primera audiencia celebrada en la etapa de explotación se dará lectura al acto administrativo que aprobó el desarrollo de dicha etapa.</p> <p>Parágrafo 4. La información de la que tratan los párrafos anteriores debe estar publicada y disponible para consulta en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN). Dicha publicación debe darse por parte de la autoridad ambiental en asocio con las empresas al menos con veinte (20) días hábiles de anterioridad a la celebración de la audiencia.</p> <p>Parágrafo 5. Los mecanismos de publicidad, notificación y enmienda de las actas de las audiencias públicas previstos en el Capítulo II de la presente ley serán aplicables para todas las</p>			
---	--	--	--

<p>audiencias que se celebren durante la etapa de explotación.</p> <p>Parágrafo 6. Sólo cuando se trate de la audiencia preparatoria para la última fase de la etapa de explotación se deberá seguir el procedimiento previsto para convocar inmediatamente a la Consulta Universal Anticipada de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la presente ley.</p>			
<p>Artículo 34°. Consulta Universal Anticipada en fases de explotación. En caso de que la población decida convocar a Consulta Universal Anticipada en otro momento de la fase de explotación diferente al previsto en el artículo anterior podrá hacerlo. En ese caso, la Consulta se regirá por las disposiciones previstas en el Capítulo I del Título II de la presente ley.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La elección de la Audiencia Pública de Control Socioambiental y del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto como mecanismos para la explotación en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inoqua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p> <p>Sin embargo, el espíritu del mecanismo y los desarrollos normativos propuestos en el PLE107 fueron tenidos en cuenta para la elaboración del mecanismo de Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto que está previsto en los artículos 53 y siguientes de la ponencia para primer debate.</p>
<p>Artículo 35°. Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto y de la fase de explotación.</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La elección de la Audiencia Pública de Control Socioambiental y del Cabildo Abierto</p>

<p>La autoridad ambiental, luego de publicar el acta de la audiencia pública ambiental desarrollada antes del inicio de la última fase de la etapa de explotación, tiene que convocar a la Consulta Universal Anticipada para el cierre de la fase de explotación.</p> <p>Serán aplicables las mismas normas previstas para el desarrollo de la Consulta Universal Anticipada en el Título II de la presente ley.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, esta Consulta tendrá por objeto revisar de manera conjunta entre autoridad ambiental, empresas y población civil los impactos ambientales y sociales del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales y la afectación que sufrió la población y el ambiente con ocasión de la referida actividad. En consecuencia, este espacio de Consulta pretende establecer compromisos entre las partes para reparar el daño causado.</p> <p>Una vez esté claro el balance y los compromisos de los que trata el inciso anterior, en desarrollo de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto y la fase de explotación, se deberá hacer seguimiento a los compromisos y acreditar el cumplimiento de los mismos para poder proceder con el cierre del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>			<p>preparatorio para el cierre del proyecto como mecanismos para la explotación en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p> <p>Sin embargo, el espíritu del mecanismo y los desarrollos normativos propuestos en el PLE107 fueron tenidos en cuenta para la elaboración del mecanismo de Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto que está previsto en los artículos 53 y siguientes de la ponencia para primer debate.</p>
--	--	--	--

<p>Artículo 36°. Asuntos de la consulta y contenidos mínimos por discutir. Las autoridades estatales vinculadas con la totalidad del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como las empresas encargadas de desarrollar esas actividades deben informar al inicio del espacio de Consulta sobre:</p> <p>a) La identificación de impactos ambientales y sociales generados durante la totalidad del proyecto.</p> <p>b) La formulación de medidas de corrección y compensación ambiental y social al entorno y a las comunidades afectadas. Se deben precisar los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de esas medidas.</p> <p>c) Las medidas de reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido precedentes y las que se imaginan como posibles atendiendo a las posibles afectaciones que hayan identificado.</p> <p>La sociedad civil tendrá oportunidad de deliberar sobre lo expresado por las autoridades ambientales y las empresas en cada uno de los 3 ejes referidos en el primer inciso de este artículo. Podrán interpelar las versiones dadas por las autoridades y las empresas y expresar propuestas y</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La elección de la Audiencia Pública de Control Socioambiental y del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto como mecanismos para la explotación en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p> <p>Sin embargo, el espíritu del mecanismo y los desarrollos normativos propuestos en el PLE107 fueron tenidos en cuenta para la elaboración del mecanismo de Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto que está previsto en los artículos 53 y siguientes de la ponencia para primer debate.</p>
---	--	---	--

<p>preocupaciones sobre esas tres temáticas.</p> <p>La sociedad civil tendrá al menos treinta (30) días calendario para consolidar contra propuestas de medidas de corrección, compensación y/o reparación y para proponer mecanismos y garantías que les den confianza sobre el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.</p> <p>Las autoridades ambientales competentes podrán expresar sus consideraciones y propuestas y deberán advertir la viabilidad o imposibilidad jurídica de las estrategias expresadas por empresas y sociedad civil.</p> <p>Las conclusiones de la Consulta también deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad ambiental al consensuar o imponer a la empresa, según corresponda, medidas de compensación, corrección o reparación por las afectaciones causadas.</p>			
<p>Artículo 37°. Publicidad de las conclusiones de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto y de la etapa de explotación. La Dirección de Consulta Previa debe enviar a la autoridad ambiental y a las autoridades locales las conclusiones de la Consulta. Estas a su vez deben publicar las conclusiones en su sede física y virtual. Tienen</p>		<p>ARTÍCULO ELIMINADO AL ACUMULAR LOS PLE</p>	<p>La elección de la Audiencia Pública de Control Socioambiental y del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto como mecanismos para la explotación en perjuicio de la Consulta Universal Anticipada hacia inocua la inclusión de este artículo en la ponencia para primer debate.</p>

<p>que difundir el contenido en las emisoras de radio comunitarias y en los medios de prensa locales para su amplia difusión.</p> <p>La Dirección de Consulta Previa también deberá hacer llegar copia de las conclusiones a las empresas que debieron participar en la Consulta conforme lo dispuesto en esta ley. Para ello tendrá ocho (8) días calendario.</p> <p>No se tendrá por agotado el mecanismo de Consulta Universal Anticipada en tanto no se acredite el cumplimiento de los compromisos suscritos en la misma en lo relacionado con los mecanismos de compensación, corrección y/o reparación en favor de las comunidades afectadas por el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>			<p>Sin embargo, el espíritu del mecanismo y los desarrollos normativos propuestos en el PLE107 fueron tenidos en cuenta para la elaboración del mecanismo de Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto que está previsto en los artículos 53 y siguientes de la ponencia para primer debate.</p>
		<p>Artículo 53. Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El Cabildo Abierto Preparatorio para el cierre del proyecto es un mecanismo de participación ciudadana de carácter deliberativo y decisor mediante el que se:</p> <p>a. Revisa de manera conjunta entre autoridad ambiental, autoridades mineras o de hidrocarburos, empresas y población civil los impactos ambientales y sociales del proyecto de explotación de recursos naturales y la afectación que sufrió la población y el</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p>

		<p>ambiente con ocasión de la referida actividad;</p> <p>b. Asegura que las partes responsables den cumplimiento a las medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social que hubieran sido fijadas con anterioridad a la última fase del proyecto de explotación y a los compromisos resultantes de las Audiencias Públicas participativas de control socio ambiental;</p> <p>c. Buscan fórmulas de acuerdo entre la población civil afectada, las autoridades y las empresas responsables del proyecto para la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social adicionales a las fijadas con anterioridad a la última fase del proyecto de explotación, en caso de que alguna de esos tres actores lo considere necesario.</p>	<p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 54. Obligatoriedad del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y la subsecuente</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un</p>

		<p>acreditación del cumplimiento de las medidas de corrección y compensación será requisito en todos los casos para poder proceder con el cierre del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Se debe realizar un cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto para cada proyecto de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>En caso de que el proyecto de explotación afecte a más de un municipio de un mismo departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental, y en caso de que la solicitud afecte a más de un departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental con mayor porción de afectación en el territorio. En todo caso se debe garantizar la participación de la ciudadanía que habita en todos los municipios afectados o potencialmente afectados. Sean o no del departamento en cuyo territorio se desarrolla el cabildo.</p>	<p>mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 55. Oportunidad de aplicación del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. La autoridad responsable del proyecto de explotación, luego de publicar el acta de la audiencia pública desarrollada antes del inicio de la última fase de la etapa de explotación, tiene que convocar a un Cabildo Abierto Preparatorio para el Cierre del Proyecto como requisito para poder dar por terminado el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la</p>

			<p>Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 56. Asuntos del Cabildo y contenidos por discutir. Las autoridades estatales vinculadas con la totalidad del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como las empresas encargadas de desarrollar esas actividades deben informar al inicio del Cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La identificación de los impactos ambientales y sociales generados durante la totalidad del proyecto. b) El cumplimiento de las medidas de corrección y compensación ambiental y social al entorno y a las comunidades afectadas. En caso que no estén totalmente implementadas se deben precisar los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de esas medidas. c) Las medidas de reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido procedentes y las que se propongan atendiendo a las posibles afectaciones que se hayan identificado con posterioridad a la celebración de la última audiencia pública participativa de control socio ambiental. 	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>

		<p>La sociedad civil tendrá oportunidad de deliberar sobre lo expresado por las autoridades y las empresas en cada uno de los tres (3) ejes referidos en este artículo y en el artículo 53 de la presente ley.</p> <p>La sociedad civil podrá interpelar las versiones dadas por las autoridades y las empresas y podrá presentar contra propuestas de medidas de corrección, compensación y/o reparación y proponer mecanismos y garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas y del Estado.</p> <p>Las autoridades competentes podrán expresar sus consideraciones y propuestas y deberán advertir la viabilidad o imposibilidad jurídica de las estrategias expresadas por empresas y sociedad civil.</p> <p>Las conclusiones del Cabildo también deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad nacional para determinar, según corresponda, medidas adicionales de compensación, corrección o reparación por las afectaciones causadas.</p>	
		<p>Artículo 57. Notificación de las autoridades nacionales a los concejos municipales y distritales sobre el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Siempre que la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o quienes hagan sus veces publiquen el acta de la audiencia pública participativa de control socioambiental prevista para la última fase del proyecto de explotación de recursos naturales no renovables deberán notificar a los concejos municipales y distritales competentes o a la asamblea departamental competente la fecha en la que se llevará a cabo el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto para que estas, a su vez, puedan comunicar a la ciudadanía residente del municipio(s) o distrito(s) y a terceros interesados sobre la realización de dicho mecanismo de participación.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal</p>

		<p>La notificación deberá hacerse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la publicación del acta de la audiencia participativa de control socio ambiental.</p> <p>La notificación deberá contener información básica sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La(s) persona(s) natural o jurídica responsable del desarrollo del proyecto de explotación. b) Los términos de referencia y guías minero-ambientales que regulan el proyecto. c) El tipo de proyecto que está en ejecución. d) El tipo de recurso natural no renovable que se ha explotado. e) El tiempo de duración del proyecto y los hitos restantes para el cierre del proyecto. f) La identificación de los impactos ambientales y sociales generados durante la totalidad del proyecto. g) Las actas, informes y compromisos derivados de las audiencias públicas participativas de control socioambiental que hubieran tenido lugar y la acreditación de cumplimiento de esos compromisos. h) La formulación de medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social al entorno y a las comunidades afectadas. Se deben precisar los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de esas medidas. i) Las medidas de reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido procedentes y las adicionales que se propongan implementar atendiendo a las posibles afectaciones que se hayan identificado. j) Una descripción de los actos jurídicos que son necesarios 	<p>Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
--	--	--	--

		<p>para dar viabilidad a la implementación de las medidas de las que tratan los literales anteriores.</p> <p>k) Una descripción de las obligaciones generales de las partes con ocasión del proyecto de explotación y su estado de cumplimiento.</p>	
		<p>Artículo 58. Aviso a los residentes. Por todos los medios de los que disponga, la Secretaría del concejo municipal o distrital o de la asamblea departamental, según sea el caso, avisará a sus residentes sobre la notificación referida en el artículo anterior que envíe la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o la entidad que haga sus veces.</p> <p>El aviso se fijará en las sedes de los concejos municipales y se le dará amplia difusión por medios de comunicación locales y departamentales, según el caso, durante veinte (20) días calendario. La difusión del aviso no generará costo alguno por lo que su publicidad será gratuita.</p> <p>Este aviso activará la posibilidad para que, notificada el acta de la audiencia pública participativa de control socioambiental, la ciudadanía solicite ante el concejo o concejos municipales o ante la asamblea departamental competente la realización del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Esa solicitud podrá presentarse en un término de dos (2) meses contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del acta de la audiencia pública ambiental.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 59. Solicitud de realización de un cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de la ciudadanía del censo electoral del respectivo municipio o distrito, la ciudadanía podrá solicitar a la Secretaría del concejo municipal o distrital o a la asamblea departamental según sea el caso y</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p>

		<p>mediante un comité promotor, la celebración de un cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Dada la naturaleza de este tipo de cabildo y las competencias concurrentes de los entes territoriales y de la nación en la explotación de recursos naturales no renovables, es obligación del alcalde municipal o distrital y del gobernador, según sea el caso, así como de las autoridades nacionales asistir al cabildo abierto.</p> <p>Parágrafo. Si la ciudadanía no presenta solicitud de convocatoria a cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto dentro de dos (2) meses contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del acta de la audiencia pública participativa de control socioambiental, la secretaria del concejo municipal o distrital, o la secretaria de la asamblea departamental según sea el caso, deberá convocar al Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto garantizando que se cumplan los tiempos para la celebración del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto en los términos previstos en la presente ley.</p>	<p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 60. Aprobación del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. De cumplirse con las firmas necesarias para la solicitud del cabildo, debidamente revisadas y avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el concejo municipal o distrital o la asamblea departamental, según corresponda, fijará la fecha de su realización, la cual deberá fijarse, como máximo, dentro del término de tres (3) meses contados a partir del día de la notificación del acta de la audiencia pública de control socio ambiental.</p> <p>La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá priorizar la revisión de la solicitud ciudadana de cabildo abierto preparatorio para el cierre de manera que esta pueda avalarse oportunamente para que la autoridad local o regional cumpla con los</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p>

		<p>términos de convocatoria previstos en el inciso anterior.</p>	<p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 61. Convocatoria al cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Una vez fijada la fecha de celebración del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto, el concejo municipal o distrital o la asamblea departamental, según sea el caso, la comunicará por escrito a las autoridades del orden nacional, departamental y local que deban concurrir en virtud de sus competencias.</p> <p>La ciudadanía del municipio o municipios afectados será convocada mediante aviso que se fijará en las sedes de los órganos de administración municipales, así como mediante medios de comunicación locales que garanticen una amplia difusión de la celebración del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación, de su fecha de realización y de la inscripción que deben hacer quienes deseen intervenir.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 62. Participantes del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto es de carácter público para la ciudadanía residente del</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo</p>

		<p>municipio(s) o distrito(s) cuya área sea afectada por el proyecto o proyectos de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Su intervención durante el cabildo únicamente estará supeditada a la acreditación en alguno de los municipios en los que se desarrolla el proyecto de explotación y una inscripción formal para efectos de organizar su adecuado desarrollo. La secretaría del concejo municipal o distrital, según el caso, no podrá exigir requisito diferente al de ser ciudadano residente del municipio y solicitará datos básicos de identificación personal para la inscripción.</p> <p>Adicionalmente, deberán concurrir de manera obligatoria las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan competencias en asuntos relacionados con la política minero-energética, ambiental y agropecuaria sobre el territorio de incidencia del proyecto y sobre el desarrollo de este último.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo también serán convocadas en virtud de sus competencias de guarda y promoción de los derechos humanos para garantizar la protección del interés público, vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas y para actuar conforme lo previsto en la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1°. Para garantizar la participación de la ciudadanía que reside en el municipio o municipios involucrados, la secretaría del concejo municipal o distrital, o la secretaría de la asamblea departamental, según el caso, dispondrá de un registro que estará disponible desde la comunicación de la fecha del cabildo hasta dos días antes de su celebración.</p> <p>Parágrafo 2°. La ausencia de alguno de los particulares responsables del proyecto de explotación y/o de las autoridades involucradas en su</p>	<p>novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
--	--	--	--

		<p>desarrollo impedirá el desarrollo del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. A su vez, el no desarrollo del Cabildo impedirá la decisión de fondo respecto del cierre del proyecto y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes con ocasión del proyecto para la explotación de recursos naturales no renovables.</p>	
		<p>Artículo 63. Contenidos del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación del que trata esta ley solo podrá abordar las materias de su convocatoria previstas en la presente ley y aquellas relacionadas con la notificación que las autoridades nacionales hagan a las autoridades municipales de la que trata el artículo 57 de esta ley. En ningún caso se podrán abordar temas diferentes a esos.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 64. Sesiones del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto se desarrollará en tres sesiones. Una sesión de apertura, una sesión de deliberación y una sesión decisoria. Estas sesiones tienen un carácter informativo,</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

		<p>deliberativo y decisorio respectivamente.</p>	<p>preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 65. Sesión de apertura del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. En la sesión de apertura del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto las autoridades del orden nacional darán a conocer a la ciudadanía residente en los municipios afectados por la explotación de recursos naturales no renovables toda la información de la que trata el artículo siguiente de la presente ley para garantizar el cumplimiento del objeto del cabildo.</p> <p>A su vez, tendrán que resolver las inquietudes y peticiones formuladas por los participantes de la audiencia pública participativa de control socioambiental de la última fase del proyecto de explotación y actualizar la información y acciones relacionadas con el proyecto que hubieran tenido lugar entre la celebración de la audiencia pública participativa de control socioambiental y la sesión de apertura del cabildo abierto</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto</p>

		<p>preparatorio para el cierre del proyecto.</p>	<p>que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 66. Información que debe ser suministrada por autoridades al municipio en la sesión de apertura. Para garantizar el derecho de acceso a la información, el carácter deliberativo de las sesiones del cabildo y la legitimidad de sus decisiones, es indispensable que las autoridades nacionales, departamentales y locales, así como las personas naturales y/o jurídicas responsables del proyecto de explotación suministren toda la información relacionada con la fase de explotación del proyecto incluyendo la prevista en el artículo 46 de la presente ley.</p> <p>La información será presentada en el siguiente orden, luego de que la autoridad municipal, distrital o departamental, según corresponda, dé apertura formal al cabildo abierto:</p> <p>a) Una persona delegada de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de las autoridades que hagan sus veces según sea el caso, la cual deberá presentar la siguiente información: alcance del proyecto de explotación (tipo de recurso natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono), naturaleza e importancia local y regional del proyecto, los términos de referencia y guías minero ambientales que regulan el proyecto; la identificación de los impactos ambientales y sociales generados durante la totalidad del proyecto; las actas y compromisos adquiridos por la entidad y por los particulares</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>

CAMARA DE REPRESENTANTES

		<p>responsables de la ejecución del proyecto con ocasión de las audiencias públicas participativas de control socioambiental que hubieran tenido lugar y la acreditación de cumplimiento de esos compromisos; las medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido procedentes haciendo referencia a los cronogramas, mecanismos y garantías para dar cumplimiento y hacer cumplir por parte de los particulares las obligaciones pendientes.</p> <p>b) Una persona delegada del Ministerio de Minas y Energía, la cual deberá presentar la siguiente información: los términos de referencia y guías minero ambientales que regulan el proyecto; hitos restantes para el cierre del proyecto y las ganancias obtenidas en favor del Estado con ocasión del proyecto de explotación.</p> <p>c) Una persona representante de la persona natural o jurídica responsable de la etapa de explotación, la cual deberá presentar la siguiente información: identificación y breve descripción del sujeto responsable (nacional, extranjero, objeto de la persona jurídica); descripción del proyecto extractivo (tipo de recurso natural no renovable, duración del proyecto e hitos restantes para el cierre del mismo, extensión y localización del polígono, presencia de grupos étnicos o zonas mineras indígenas, estimativo de la inversión económica realizada y de las ganancias obtenidas con ocasión del proyecto); identificación de los impactos ambientales y sociales</p>	
--	--	--	--

CAPÍTULO PRIMARIO			
		<p>generados durante la totalidad del proyecto; las medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido precedentes; las obligaciones a su cargo derivadas de las audiencias públicas participativas de control socio ambiental y las asociadas con la totalidad del proyecto de explotación; la acreditación de cumplimiento de esas obligaciones y los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de las obligaciones pendientes.</p> <p>d) Una persona representante de la autoridad ambiental del orden nacional y una persona representante de la autoridad ambiental del orden regional, las cuales deberán presentar la siguiente información: áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo Parques Nacionales Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; sustracción de reservas forestales con ocasión de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables objeto del cabildo; estado de las cuencas hidrográficas y de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas; panorama de los determinantes ambientales del territorio y los</p>	

CABILDOS PARTICIPANTES			
		<p>instrumentos existentes para su desarrollo e implementación en el territorio, y demás información relevante sobre la importancia ambiental y ecológica del territorio en cuestión. Toda esta información deberá presentarse de manera que la población pueda contrastar el estado de esos indicadores al momento en que se desarrolla el cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y la situación existente al momento en que se celebró el cabildo abierto socioambiental.</p> <p>e) Una persona representante de Parques Nacionales Naturales, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo.</p> <p>f) Una persona representante de la Agencia Nacional de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: procesos de adjudicación de baldíos o programas de tierras implementados en el municipio o municipios; procesos de delimitación y constitución de zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial; procesos de titulación colectiva a comunidades étnicas y negras y, en general, la información que considere relevante como máxima autoridad de las tierras de la nación sobre los municipios o el municipio participante en el cabildo.</p> <p>g) Una persona representante de la Unidad de Planificación</p>	

		<p>Rural Agropecuaria, la cual deberá presentar la siguiente información: criterios técnicos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural de los municipios o el municipio participante en el cabildo que resulten de importancia para la ciudadanía.</p> <p>h) Una persona representante de la Unidad de Restitución de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de procesos de restitución de tierras despojadas en el o los municipios; número de sentencias de restitución de tierras despojadas en el o los municipios y estado de ejecución de estas.</p> <p>i) La persona en cabeza de la Alcaldía municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: un comparativo que presente aspectos generales del municipio conforme su estado antes del inicio de la etapa de explotación y al momento de desarrollo del cabildo. Entre esa información deberá estar: una descripción general del municipio (demografía, datos administrativos, territorio), vocación del suelo y actividades económicas principales, conflictos socioambientales relevantes y demás información relacionada que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>j) La persona que ejerce la presidencia del concejo municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: proyectos de acuerdo, debates de control político, debates de asuntos de interés general y demás</p>
--	--	---

		<p>actuaciones relacionadas con la explotación de recursos naturales no renovables en el municipio que resulten relevantes para la ciudadanía que participa en el cabildo.</p> <p>k) Una persona representante del Ministerio del Interior, la cual deberá presentar la información sobre la presencia de grupos étnicos en el territorio.</p> <p>b) Una persona representante del Ministerio Público, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos en el territorio y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía participante en el cabildo.</p> <p>c) Personas representantes de universidades públicas y privadas, institutos y centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, académicos o expertos para que puedan aportar información sobre los impactos del proyecto y recomendaciones para atenderlos.</p> <p>Parágrafo. Toda la información que presenten las autoridades y particulares antes señaladas quedará a disposición del municipio para la solicitud y consulta de la ciudadanía que la requiera.</p> <p>Parágrafo 2. Será requisito para el inicio de la sesión deliberativa del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto que en el Sistema de Información Público de Proyectos</p>
--	--	--

		<p>de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible el acta final con o sin enmiendas, según sea el caso, de las audiencias públicas participativas de control socio ambiental, los informes presentados con motivo del seguimiento a esas audiencias, la información contenida en la notificación de las autoridades nacionales sobre la audiencia realizada en la última fase de la etapa de explotación, toda la información presentada en la sesión de apertura del cabildo, el acta de la sesión de apertura del cabildo, y las actualizaciones o modificaciones que se hubieran realizado a los documentos de los que trata el artículo 5 de la presente ley entre la celebración de la última audiencia pública participativa de control socioambiental y la sesión de apertura del cabildo.</p> <p>Esta información deberá estar disponible en el referido sistema de información, así como en la sede de los concejos municipales o distritales o de la asamblea departamental según sea el caso desde el día siguiente a la notificación del acta de la sesión inicial del cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Al inicio de la sesión deliberativa del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación deberá darse lectura y deberá entregarse copia impresa o digital de la información, según lo soliciten los participantes.</p>	
		<p>Artículo 67. Intervenciones ciudadanas y deliberación. Una vez se haya presentado la información relacionada en el artículo anterior, intervendrá el comité que solicitó el cabildo abierto, si es del caso, y enseguida todas las personas que se hayan inscrito ante la secretaria del concejo municipal o distrital o ante la asamblea departamental.</p> <p>Estas intervenciones tendrán como objeto elevar preguntas respetuosas a las autoridades para tener un mejor criterio sobre los impactos</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el</p>

		<p>ambientales y sociales causados por el proyecto y sobre la naturaleza e implementación de las medidas de compensación, corrección y reparación acordadas para atender esos impactos. También podrá elevarse preguntas a los responsables de la ejecución del proyecto de explotación.</p> <p>Posteriormente, se dará espacio para que las autoridades y los particulares responsables del proyecto de explotación intervengan y puedan dar respuesta inmediata a aquello que se encuentre bajo su competencia. Lo que no pueda ser contestado deberá ser materia de respuesta en la sesión siguiente y se entiende formulado bajo el derecho de petición colectivo, el cual debe ser atendido siguiendo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto.</p>	<p>artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 68. Cierre de sesión inicial del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Finalizada la etapa anterior, se dará cierre a la sesión de apertura del cabildo abierto y se deberá elaborar un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, que recogerá todas las intervenciones, las preguntas elevadas por la ciudadanía, las respuestas dada por las autoridades y particulares responsables del proyecto y una relación de las preguntas cuya respuesta debe ser atendida en la siguiente sesión.</p> <p>La sesión del cabildo será grabada para garantizar la fidelidad del acta, la cual quedará a disposición de la ciudadanía en la secretaria del concejo municipal o distrital o en la secretaria de la asamblea departamental según el caso.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos</p>

			<p>en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 69. Sesión deliberativa del cabildo. Se trata de sesiones autónomas ciudadanas cuya celebración debe ser garantizada por el concejo municipal o distrital o por la asamblea departamental, según sea el caso. Serán de carácter abierto y participativo.</p> <p>Quienes deseen intervenir deberán inscribirse ante la secretaria del concejo municipal o distrital o ante la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, la cual brindará el registro oficial al comité promotor del cabildo, el cual convocará esta sesión que puede estar compuesta por un máximo de tres reuniones deliberativas. En total, no podrán ser más de 3 reuniones.</p> <p>Se celebrarán a los diez (10) días después del cierre de la sesión inicial del cabildo. Entre la primera y última reunión de la sesión deliberativa no pueden pasar más de treinta (30) días.</p> <p>En estas reuniones la comunidad deliberará sobre la información suministrada por las autoridades y los particulares responsables del proyecto en la sesión de apertura del cabildo y, de considerarlo pertinente, convocará a técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica y/o a organizaciones de la sociedad civil para tomar decisiones informadas.</p> <p>Parágrafo. En los casos en los que no se cuente con el comité promotor, la secretaria del concejo municipal o distrital o la secretaria de la asamblea departamental según el caso, se encargará de convocar la sesión o sesiones deliberativas.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 70. Resultado de la sesión deliberativa del cabildo. Como resultado de las reuniones celebradas en el marco de la sesión deliberativa del cabildo, deberá elaborarse un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en</p>

		<p>secretaría de la asamblea departamental competente que condense las distintas posturas ciudadanas expresadas en dichos espacios, las dudas de carácter técnico, económico, social o ambiental que aún queden por resolver, el balance de cumplimiento de las obligaciones y medidas de corrección, compensación y reparación a cargo de los particulares y del Estado en favor de las comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales asociados al proyecto de explotación así como los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de las obligaciones y medidas pendientes.</p> <p>El acta podrá expresar el consenso, si lo hubiere entre la comunidad, sobre la satisfacción o insatisfacción con el cumplimiento de las medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales generados por el proyecto de explotación y sobre la consecuente conveniencia o inconveniencia de dar cierre al proyecto de explotación de recursos naturales no renovables en el municipio o municipios. En cualquiera de los dos casos, el acta dejará constancia de las recomendaciones y solicitudes que la ciudadanía eleva a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que participan en el cabildo y dejará constancia de las expectativas de la comunidad respecto del cumplimiento de las medidas de corrección, compensación y reparación como condición para que se dé el cierre del proyecto.</p> <p>También expresará el disenso, si lo hubiere, entre la comunidad, dejando constancia de las distintas posturas existentes sobre la satisfacción o insatisfacción con las medidas de corrección, compensación y reparación adoptadas y sobre la consecuente conveniencia o inconveniencia de permitir el cierre</p>	<p>la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
--	--	---	--

CÁMARA DE REPRESENTANTES

		<p>del proyecto, indicando en cada caso los argumentos que las sostienen.</p> <p>El acta contendrá el nombre de hasta diez (10) personas delegadas designadas por la comunidad para que intervengan en la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental. Se deberá promover que las personas delegadas reflejen de la mayor manera posible las diferentes posturas y tendencias de la ciudadanía respecto de la satisfacción o insatisfacción con las medidas de corrección, compensación y reparación de los impactos sociales y ambientales y con el cierre del proyecto.</p> <p>La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o la persona delegada para tal fin, según sea el caso, será la que presente el acta que resulte de la sesión deliberativa.</p> <p>Parágrafo. Para llegar al resultado de la sesión deliberativa, la ciudadanía debe tener en cuenta la información suministrada por las autoridades y los particulares intervinientes en la sesión de apertura así como la que fue suministrada durante la sesión deliberativa, la información que tiene la ciudadanía sobre su territorio y los determinantes ambientales y sociales del territorio.</p>	
		<p>Artículo 71. Remisión del acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades participantes de la sesión de apertura. El acta deberá ser remitida por la secretaría del concejo municipal o distrital o por la secretaría de la asamblea departamental, según sea el caso, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la última reunión de la sesión deliberativa a las autoridades que participaron en la sesión de apertura del cabildo.</p> <p>Parágrafo. Será requisito para el inicio de la sesión decisoria del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación que en el Sistema de Información Público de Proyectos de</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

		<p>Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible la misma información prevista en el artículo 5 de la presente ley junto con el acta de la sesión inicial del cabildo, el acta de la sesión deliberativa del cabildo y la información novedosa que hubiera sido presentada durante las reuniones de la sesión deliberativa del cabildo.</p> <p>Esta información deberá estar disponible en el referido sistema de información, así como en la sede de los concejos municipales o distritales o de la asamblea departamental según sea el caso desde el día siguiente al cierre de la sesión deliberativa del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Al inicio de la sesión decisoria del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto deberá darse lectura de la información que no hubiese sido presentada al inicio de la sesión deliberativa y deberá entregarse copia impresa o digital de la totalidad de la información según lo soliciten los participantes.</p>	<p>III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 72. Sesión decisoria del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación. Una vez la secretaria del concejo municipal o distrital o la secretaria de la asamblea departamental, según el caso, haya enviado el acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades responsables del proyecto de explotación, convocará a la sesión decisoria del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación dentro de los quince (15) días calendario siguientes.</p> <p>Serán convocadas las mismas autoridades y particulares responsables del proyecto de explotación asistentes a la sesión de apertura.</p> <p>Esta sesión tendrá el siguiente orden de intervenciones:</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

		<ol style="list-style-type: none"> 1) La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o de la ciudadanía, la cual presentará un informe que debe reflejar lo expresado en el acta de la sesión deliberativa. 2) Las personas designadas por la comunidad en el acta de las sesiones deliberativas hasta un máximo de diez. 3) Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diferentes disciplinas que hayan asesorado a la comunidad en el espacio de la sesión deliberativa para que expresen su concepto. 4) Las entidades públicas y los particulares responsables del proyecto de explotación en el mismo orden 	<p>Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
--	--	---	---

		<p>de la sesión de apertura, las cuales responderán las preguntas pendientes de la sesión de apertura y se pronunciarán sobre el contenido del acta de la sesión deliberativa del cabildo.</p> <p>Finalizadas las intervenciones se dará el espacio para que se tome la decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de permitir el cierre del proyecto de exploración de recursos naturales no renovables.</p>	
		<p>Artículo 73. Decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de dar por finalizado el proyecto de exploración de recursos naturales no renovables. La decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de dar por finalizado el proyecto de explotación de recursos naturales no renovables se adoptará mediante consenso mayoritario entre la comunidad y se deberá manifestar expresamente durante la sesión decisoria.</p> <p>En cualquiera de los dos casos, sea que la decisión manifieste la conveniencia del cierre del proyecto o sea que manifieste la inconveniencia del cierre del proyecto, la decisión de la ciudadanía debe ser motivada y debe tener en cuenta criterios sociales, económicos, ambientales y culturales, las medidas de corrección, compensación y reparación adoptadas y el estado de cumplimiento de estas por parte del Estado y de los particulares responsables.</p> <p>Expresada la decisión, se entenderá que el cabildo abierto culmina con un acuerdo participativo para el cierre del proyecto de explotación.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos</p>

		<p>Parágrafo. Para efectos de esta ley y de los mecanismos de participación que desarrolla, se entiende por consenso mayoritario la adopción de decisiones por el 65% del total de ciudadanos y ciudadanas intervinientes tanto en la sesión deliberativa como en la decisoria.</p>	<p>en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 74. Tiempo de espera entre las diferentes etapas de los cabildos abiertos. En ningún caso, la celebración de las tres sesiones que componen un cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto podrá exceder los seis meses.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 75. Agotamiento del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. No se tendrá por agotado el mecanismo del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto en tanto no se acredite el cumplimiento de los compromisos suscritos en el Acuerdo Participativo en lo relacionado con las medidas de compensación, corrección y/o reparación en favor de las</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p>

		<p>comunidades afectadas por el proyecto de explotación de recursos naturales no renovables. Dicha labor de acreditación será realizada por parte del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación.</p>	<p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 76. Constitución del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación. Una vez se adopte la decisión de la que trata el artículo anterior se debe constituir un Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación.</p> <p>El Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación deberá estar conformado por:</p> <p>a) Un representante de cada una de las empresas responsables del desarrollo del proyecto de explotación de recursos naturales no renovables.</p>	<p>ARTICULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y en particular desarrolla el Comité para darle seguimiento a los acuerdos logrados en ese Cabildo.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b) Un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible c) Un representante del Ministerio de Minas y Energía d) Un representante de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de la autoridad que haga sus veces. e) Un representante de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales f) Un representante de la gobernación del o de los departamentos en cuyo territorio se desarrolle el proyecto de explotación. g) Un representante de cada alcaldía municipal o distrital en donde se desarrolle el proyecto de explotación. h) La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o de la ciudadanía, la cual presentará un informe que debe reflejar lo expresado en el acta de la sesión deliberativa. i) Las personas designadas por la comunidad en el acta de las sesiones deliberativas del Cabildo Abierto hasta un máximo de diez. j) Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diferentes disciplinas que hayan asesorado a la comunidad en el espacio de la sesión deliberativa para que expresen su concepto, hasta un máximo de 5. k) Un representante de la Defensoría del Pueblo y un representante de la Procuraduría General de la Nación encargados de velar por la transparencia y el cabal cumplimiento de las funciones del Comité y de 	
--	--	---	--

		<p>prestar la información y asesoramiento que requieran las partes para la garantía de sus derechos.</p>	
		<p>Artículo 77. Funciones del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación. El Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación tendrá las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Hacer seguimiento a la implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación y al cumplimiento de las obligaciones cuyo cumplimiento o implementación estén pendientes por parte del Estado o de los particulares responsables del proyecto de explotación, en los términos previstos en los Acuerdos Participativos sobre la satisfacción o insatisfacción y sobre la conveniencia o inconveniencia de dar cierre al proyecto. b) Fungir de espacio para que las partes expresen su postura frente a la implementación de las medidas y frente al cumplimiento de las obligaciones de las que trata el literal a del presente artículo. c) Facilitar la negociación y los acuerdos que sean necesarios para la correcta implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación a las que haya lugar. d) Acreditar la implementación de las medidas y el 	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y en particular desarrolla el Comité para darle seguimiento a los acuerdos logrados en ese Cabildo.</p>

		<p>cumplimiento de las obligaciones de las que trata el literal a del presente artículo a las autoridades ambientales nacionales encargadas de la organización del cabildo.</p> <p>Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá proferir en el año siguiente a la entrada en vigor de la presente ley la reglamentación que establezca el funcionamiento del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación.</p>	
		<p>Artículo 78. Acuerdo participativo sobre la satisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la conveniencia del cierre del proyecto. Si la comunidad decide la satisfacción con la implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y la consecuente conveniencia del proyecto, las autoridades municipales, departamentales y nacionales deberán darles curso a los trámites administrativos subsiguientes, en respeto de las competencias de cada cual y de las leyes que rigen dichos procedimientos, para proceder con el cierre del proyecto. En todo caso, deberán garantizar que las obligaciones contraídas por las partes y las medidas acordadas sean plenamente implementadas por el Estado y los particulares responsables antes de que se formalice el cierre del proyecto.</p> <p>Junto con el acuerdo participativo sobre la conveniencia del cierre del proyecto, la comunidad podrá elevar ante las autoridades competentes, según sea el caso, solicitudes especiales en materia social, económica, ambiental y cultural para</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y en particular da alcance al Acuerdo Participativo resultante.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos</p>

CÁMARA DE REPRESENTANTES

		<p>exigir el cumplimiento de las referidas medidas y obligaciones que no hubieran sido cumplidas al momento de suscripción del Acuerdo Participativo. En caso de desestimar dichas peticiones las autoridades competentes deben brindar razones fundadas en derecho o en razones técnicas plausibles y suficientemente motivadas.</p>	<p>en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 79. Acuerdo participativo sobre la insatisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la inconveniencia del cierre del proyecto. Si la comunidad decide la insatisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la consecuente inconveniencia del cierre del proyecto, la comunidad debe comunicar a las autoridades participantes del cabildo las medidas y obligaciones que espera sean cumplidas para sentirse satisfecha y considerar conveniente el cierre del proyecto. La comunidad no podrá hacer exigibles medidas ni obligaciones inexistentes al momento en que inició la sesión decisoria del cabildo.</p> <p>En caso de que la comunidad manifieste su insatisfacción y decida por la inconveniencia del cierre del proyecto, la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la autoridad que haga sus veces según sea el caso, no podrá formalizar el cierre del proyecto y los particulares responsables del proyecto de explotación no quedarán liberados de sus obligaciones hasta que den cabal implementación a las medidas y total cumplimiento de las obligaciones referidas en el inciso anterior.</p> <p>La decisión es vinculante para las autoridades y así deberá quedar consignado en el acuerdo participativo con el que cierra el cabildo.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y en particular da alcance al Acuerdo Participativo resultante.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>

		<p>Artículo 80. Naturaleza del Acuerdo participativo para el cierre del proyecto de explotación. El acuerdo participativo para el cierre del proyecto se adoptará mediante acto administrativo motivado, el cual deberá ser proferido por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o por quienes hagan sus veces, de conformidad con las competencias correspondientes dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la sesión decisoria del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y en particular da alcance al Acuerdo Participativo resultante.</p> <p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
		<p>Artículo 81. Contenido del acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo para el cierre del proyecto de explotación. En el acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo para el cierre del proyecto de explotación la autoridad ambiental responsable de su expedición debe incluir:</p> <p>a) El recuento de lo acontecido y de las conclusiones alcanzadas tras la aplicación</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y en particular da alcance al Acuerdo Participativo resultante.</p>

		<p>de las audiencias públicas participativas de control socioambiental y el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación.</p> <p>b) Las posturas de la población y de las autoridades frente a la implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación y sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado y de los particulares asociadas a los impactos sociales y ambientales causados por el proyecto de exploración.</p> <p>c) Los aportes de los participantes que fueron tenidos en cuenta en el proceso de decisión sobre la continuidad del proyecto de explotación, así como la información sobre la implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación y de las obligaciones contraídas.</p> <p>d) El Acuerdo Participativo sobre la satisfacción o insatisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la conveniencia o inconveniencia del cierre del proyecto, según sea el caso. Deberá incluirse, según corresponda, la información de cada Acuerdo en los términos previstos en la presente ley.</p> <p>e) La constitución del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre</p>	<p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
--	--	--	--

		<p>la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación.</p> <p>En el caso del Acuerdo Participativo sobre la insatisfacción e inconveniencia deberá quedar explícita la prohibición de formalizar el cierre del proyecto de explotación y la imposibilidad de que los particulares responsables del proyecto de explotación queden liberados de sus obligaciones hasta que den cabal implementación a las medidas de corrección, compensación y reparación y den total cumplimiento de las obligaciones identificadas en dicho Acuerdo.</p> <p>En caso de haberse adoptado el Acuerdo Participativo sobre la satisfacción y conveniencia, el acto administrativo del que trata el presente artículo deberá incluir las respuestas a las peticiones de las que trata el artículo 78 de la presente ley y las medidas y obligaciones a las que estará sujeta la formalización del cierre del proyecto. Ello con el fin de garantizar las medidas de corrección, compensación y reparación social y ambiental a las que haya lugar con ocasión de la etapa de explotación, de conformidad con las preocupaciones, expectativas y voluntades que haya señalado la comunidad en los distintos mecanismos de participación.</p>	
		<p>Artículo 82. Publicación del acto administrativo que formaliza el Acuerdo Participativo. El acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal/ distrital, de los concejos municipales o de la asamblea departamental que estuviera a cargo del desarrollo del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. También deberá publicarse en la sede virtual de la autoridad ambiental responsable del proyecto de explotación.</p>	<p>ARTÍCULO NUEVO</p> <p>Este artículo desarrolla un mecanismo novedoso, creado en la acumulación: el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y en particular da alcance al Acuerdo Participativo resultante.</p>

		<p>Allí deberá permanecer a disposición del público hasta que se formalice el cierre del proyecto en caso de haberse adoptado el Acuerdo Participativo sobre la satisfacción y la conveniencia del cierre del proyecto, o hasta que se implementen cabalmente las medidas y se dé cumplimiento a las obligaciones previstas en el Acuerdo Participativo sobre la insatisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la inconveniencia del cierre del proyecto.</p> <p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión. Su difusión no generará costo alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2) días hábiles a partir de expedido el acto.</p> <p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se aprobó el proyecto de exploración de recursos naturales no renovables y los particulares responsables del proyecto de explotación podrán solicitar la aclaración del acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo en cualquier momento por medio de un derecho de petición.</p>	<p>Este artículo se construyó tomando como referencia el artículo equivalente para el Cabildo Abierto Socioambiental incluidos en el título III de la ponencia para primer debate.</p> <p>Además, rescata el espíritu de la Consulta Universal Anticipada preparatoria para el cierre del proyecto que estaba prevista en el título III del PLE 107 y algunos de los contenidos previstos en los artículos que desarrollaban ese mecanismo en el PLE107.</p>
<p>Artículo 38°. Seguimiento y acreditación al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la población afectada y las empresas responsables. El Comité de Seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes en la Consulta deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento y acreditar el mismo una vez ocurra. En ese momento deberá citar a las partes a una Reunión de Cierre de la Consulta conforme lo dispuesto en el Decreto</p>		<p>Artículo 83°. Seguimiento y acreditación al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la población afectada y las empresas responsables. El Comité de Seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes en el Cabildo deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento y acreditar el mismo una vez ocurra por medio de un acto administrativo motivado y conforme lo reglamentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Una vez notificado el acto administrativo del que trata el presente artículo, podrá darse por agotado el mecanismo de participación y la autoridad competente podrá dar por terminada la etapa de explotación.</p>	<p>Se toma como referencia lo previsto en el artículo 38 del PLE107 pero se ajusta su redacción y contenido al desarrollo del mecanismo del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto desarrollado en esta ponencia para primer debate.</p>

<p>1066 de 2015 o la norma que lo modifique o derogue.</p> <p>Celebrada la reunión de Cierre de Consulta podrá darse por agotado el mecanismo de participación y la autoridad ambiental competente podrá proceder a dar por terminada la etapa de explotación.</p>			
<p>Artículo 39°. Decisión respecto del cierre del proyecto y de la etapa de explotación de recursos naturales no renovables. La autoridad ambiental competente para finalizar la etapa de explotación de los recursos naturales no renovables deberá expedir un acto administrativo motivado mediante el que le comunique a la población interesada la decisión sobre el cierre del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Dicho acto deberá ser proferido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la culminación de la última fase de la etapa de exploración</p>		<p>Artículo 84°. Decisión respecto del cierre del proyecto y de la etapa de explotación de recursos naturales no renovables. La autoridad competente para finalizar la etapa de explotación de los recursos naturales no renovables deberá expedir un acto administrativo motivado mediante el que le comunique a la población interesada la decisión sobre el cierre del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Dicho acto deberá ser proferido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo del que trata el artículo 83 de la presente ley.</p>	<p>Se adopta el texto propuesto por el PLE107 atendiendo a que no ay artículo equivalente en el PLE121.</p> <p>Se ajuste la redacción del inciso segundo para hacerlo compatible con la numeración del articulado de la ponencia.</p>
<p>Artículo 40°. Publicación de la decisión respecto del cierre del proyecto y de la etapa de explotación de recursos naturales no renovables. El acto administrativo del que trata el artículo anterior deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal o distrital, del Concejo y de la autoridad ambiental decisora. Allí deberá</p>		<p>Artículo 85°. Publicación de la decisión respecto del cierre del proyecto y de la etapa de explotación de recursos naturales no renovables. El acto administrativo mediante el cual se formaliza el cierre del proyecto deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal o distrital, del Concejo y de la autoridad ambiental decisora. Allí deberá permanecer al menos durante noventa (90) días calendario.</p>	<p>Se adopta el texto propuesto por el PLE107 atendiendo a que no ay artículo equivalente en el PLE121.</p> <p>Se elimina el inciso que indica que contra ese acto no proceden recursos por considerar que permitir esa posibilidad es más conveniente considerando la</p>

<p>permanecer al menos durante noventa (90) días calendario.</p> <p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión. Su difusión no generará costo alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2) días hábiles a partir de la expedición del acto.</p> <p>Contra ese acto administrativo no proceden recursos.</p> <p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se desarrolló el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables podrá solicitar la aclaración del acto administrativo del que trata el artículo 39.</p>		<p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión. Su difusión no generará costo alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2) días hábiles a partir de la expedición del acto.</p> <p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se desarrolló el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables podrá solicitar la aclaración del acto administrativo mediante el cual se formaliza el cierre del proyecto en cualquier momento por medio de un derecho de petición.</p>	<p>relevancia de ese acto administrativo.</p> <p>Se ajuste el parágrafo para hacerlo compatible con la numeración del articulado de la ponencia.</p>
<p>Artículo 41°. Aplicación progresiva de estas disposiciones. Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables únicamente a los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.</p>		<p>Artículo 86. Aplicación progresiva de estas disposiciones. Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables únicamente a los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.</p>	<p>Se adopta el texto del artículo 41 del PLE107 por considerar que es necesario para garantizar la correcta aplicación de la ley y atendiendo a que no hay artículo equivalente en el PLE121.</p>
	<p>TÍTULO V DISPOSICIONES FINALES</p>	<p>TITULO V CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES FINALES</p>	<p>Se adopta como título V del proyecto acumulado. Se toma el nombre propuesto por el PLE121 y se precisa que es de capítulo único.</p>
	<p>Artículo 44. Derechos de comunidades étnicas y campesinas. Las disposiciones y mecanismos de</p>	<p>Artículo 87. Derechos de comunidades étnicas y campesinas. Las disposiciones y mecanismos de participación que se regulan en la presente ley no</p>	<p>Se adopta el texto propuesto por el PLE 121 dado que no hay artículo equivalente en el PLE107.</p>

	participación que se regulan en la presente ley no intervienen ni alteran los derechos de las comunidades étnicas y campesinas reconocidos en otras disposiciones.	intervienen ni alteran los derechos de las comunidades étnicas y campesinas reconocidos en otras disposiciones.	
	Artículo 45. Apropriación presupuestal. El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto las partidas necesarias para el desarrollo de los mecanismos de participación de los que trata esta ley, de acuerdo con los procedimientos determinados por las normas vigentes.	Artículo 88. Apropriación presupuestal. El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto las partidas necesarias para el desarrollo de los mecanismos de participación de los que trata esta ley, de acuerdo con los procedimientos determinados por las normas vigentes.	Se adopta el texto propuesto por el PLE 121 dado que no hay artículo equivalente en el PLE107.
Artículo 42°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.	Artículo 46. Vigencia. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.	Artículo 89. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.	Contenido idéntico en ambos proyectos. Se adopta sin modificaciones.

8. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva con modificaciones para primer debate y, en consecuencia, solicito a los Honorables Representantes que integran la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dar Primer Debate al Proyecto de Ley Estatutaria No. 107 de 2021 Cámara *“Por medio de la cual se regula el derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones”*, acumulado con el Proyecto de Ley Estatutaria No. 121 de 2021 Cámara *“Por medio del cual se regula el derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables y se crean mecanismos de participación ciudadana para deliberar y decidir sobre la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”*.


JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
 Representante a la Cámara
 Partido Liberal
 Representante a la Cámara
 Partido Liberal

9. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 107 DE 2021 CÁMARA, ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 121 DE 2021 CÁMARA
“Por medio de la cual se regula el derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, se crean mecanismos de participación para deliberar y decidir sobre la ejecución y desarrollo de esos proyectos y se dictan otras disposiciones”,

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA

**TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1°. Objeto. La presente ley estatutaria tiene por objeto, promover, proteger y garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía frente a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Para ello crea y desarrolla mecanismos de participación al servicio de quienes habiten en municipios o distritos en cuyo territorio se pretenda desarrollar, o se estén llevando a cabo, proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Artículo 2°. Principios orientadores del derecho a la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. La interpretación y aplicación del derecho a la participación en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe guiarse por la aplicación de los siguientes principios:

2.1. Permanencia y gradualidad. La aplicación de los mecanismos de participación debe estar garantizada, por parte de las autoridades del orden nacional, departamental y local, de manera transversal a las etapas o fases de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. Los mecanismos de participación aplicados en cada fase o etapa deben responder a las particularidades y efectos de cada una de ellas y deben permitir dimensionar de manera diferenciada los impactos ambientales, sociales y culturales de las mismas.

Los mecanismos de convocatoria, los espacios de reunión y las metodologías participativas deben considerar y adecuarse a las características, necesidades y particularidades ambientales, culturales, sociales y económicas del territorio y de las comunidades en que pretendan desarrollarse.

<p>2.2. Accesibilidad y no discriminación. El ejercicio de los mecanismos de participación debe garantizar la igualdad de las personas participantes. Para ello, las autoridades competentes según sea el caso, deben adecuar los mecanismos de convocatoria, los espacios de reunión y las metodologías participativas de manera que estos no comporten barreras que imposibiliten o dificulten el ejercicio del derecho a la participación.</p> <p>No se puede impedir el acceso a estos mecanismos con base en criterios diferentes a los que esta ley determine y en ningún caso pueden imponerse barreras o distinciones arbitrarias para la participación basadas en el género, la orientación sexual, la nacionalidad, la edad, la raza, la condición social, las creencias religiosas y las concepciones políticas de quienes estén habilitados para hacer parte de los espacios de participación.</p> <p>2.3. Pertinencia. La aplicación de los mecanismos de participación debe darse antes de que la autoridad competente tome las decisiones que correspondan, según sea el caso, para cada etapa o fase del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2.4. Representatividad. Al aplicar los mecanismos de participación en cada etapa y fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se debe reconocer y vincular a las autoridades de las entidades territoriales, así como a las y los líderes sociales y comunitarios debidamente reconocidos por las comunidades.</p> <p>2.5. Incidencia. La participación de las personas afectadas y potencialmente afectadas por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables debe ser activa y eficaz y se debe garantizar que las personas participantes incidan en las decisiones públicas que correspondan para cada etapa y fase del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Ello implica que las autoridades del orden nacional, departamental y local deben promover activamente los mecanismos de participación.</p> <p>2.6. Pluralismo. Los mecanismos de participación y su aplicación en cada etapa o fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben propender por vincular a todos los actores sociales afectados y que se puedan ver afectados directa o indirectamente por estos proyectos. Ello implica que cada actor social debe tener plenas garantías para expresar sus intereses, preocupaciones y argumentos respecto de los asuntos sometidos a su consideración.</p> <p>2.7. Transparencia, información y máxima publicidad. Antes, durante y después de la aplicación de los mecanismos de participación y en cada etapa o fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no</p>	<p>culturales para obrar de manera anticipada en favor del ambiente, de las personas y de los animales.</p> <p>2.14. Equidad Intergeneracional. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por garantizar que las decisiones respecto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables permitan preservar los recursos naturales para las generaciones futuras.</p> <p>2.15. No regresividad. Las autoridades tienen que dar razones ciertas, claras, suficientes y contundentes al adoptar cualquier decisión relacionada con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. No podrán afectarse negativamente las protecciones existentes a las áreas ambientalmente protegidas.</p> <p>2.16. Progresividad. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por avanzar en la eficacia y cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que habitan en las zonas en que se desarrolle o se planeen desarrollar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2.17. Principio de interrelación entre el suelo y subsuelo. Las actividades que se realizan en el subsuelo tienen una incidencia directa y significativa sobre el suelo y son de competencia del Estado entendido como la nación y los entes territoriales.</p> <p>Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables de manera integral a todos los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables cuyo inicio se dé luego de la entrada en vigor de la presente ley.</p> <p>A los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que estén en curso al momento de la entrada en vigencia de la presente ley les serán aplicables los mecanismos de participación de manera progresiva, de conformidad con las etapas y fases que vayan surtiendo.</p> <p>Parágrafo 1. A los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que estén en curso al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, sólo les serán aplicables las disposiciones relativas a las etapas del proyecto que no hayan iniciado.</p> <p>Parágrafo 2. Lo dispuesto en la presente ley no obsta para que las personas interesadas puedan hacer uso de cualquier otro mecanismo de participación legal y constitucionalmente reconocido, diferente a los previstos en la presente ley, en cualquier etapa o fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p>
<p>renovables, las autoridades y las empresas vinculadas con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben entregar a la población, garantizando su accesibilidad, toda la información necesaria para que esta participe e incida en el proceso decisorio.</p> <p>2.8. Diálogo. Los mecanismos de participación y su aplicación en cada etapa y fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables deben garantizar el intercambio abierto y permanente de información y debe velar por la libertad de expresión de todos los actores sociales involucrados.</p> <p>2.9. Buena fe. En el desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación de los que trata esta ley las autoridades y los particulares deberán actuar de manera honesta, leal y sincera.</p> <p>2.10. Confianza. En virtud del principio de confianza, las autoridades deben preservar un comportamiento consecuente y no contradictorio frente a los particulares en todo momento y lugar con ocasión de la aplicación de los mecanismos de participación de los que trata la presente ley.</p> <p>2.11. Subsidiariedad. Ante ausencia de concertación entre autoridades locales y nacionales, las autoridades del orden nacional no podrán adoptar unilateralmente decisiones sobre la ocurrencia y desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que excluyan la participación e incidencia de quienes se ven directamente afectados por esos proyectos. En ese escenario se privilegiará el poder de decisión de las autoridades locales y de las comunidades afectadas o potencialmente afectadas por el proyecto de exploración o explotación de recursos naturales no renovables en atención a que están más próximas a los efectos de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>2.12. Participación democrática en materia de recursos naturales. En el contexto de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables los habitantes de los territorios afectados o potencialmente afectados por esos proyectos tienen el derecho a participar de manera efectiva y a decidir sobre la ocurrencia y desarrollo de esos proyectos para garantizar su inclusión en el gobierno de los recursos naturales y por la potencial afectación que tienen los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables sobre ellos y sus formas de vida.</p> <p>2.13. Precaución y prevención. Los mecanismos de participación y su aplicación deben propender por la protección de la diversidad e integridad del ambiente, por la garantía de los derechos fundamentales de las personas y por el bienestar animal. Se debe garantizar que con ocasión del ejercicio de estos mecanismos se conozcan los posibles daños ambientales, sociales y</p>	<p>Parágrafo 3. La aplicación de los mecanismos de participación previstos en la presente ley no obsta para el desarrollo de otros escenarios y mecanismos de información, deliberación, decisión y seguimiento que existan de manera específica para cada fase de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Artículo 4. Ciudadanía afectada y potencialmente afectada por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Se refiere a las personas, grupos de personas o comunidades que puedan estar en riesgo de ver afectados sus modos de vida, su relación con el ambiente, que encuentren dificultades para continuar desarrollando sus actividades, intereses y derechos o a los que se les pueda alterar su situación o posición jurídica por la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Tratándose de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables de mediana y gran escala, la afectación puede recaer en la ciudadanía de uno o más municipios y en uno o más departamentos en los que se lleven a cabo o se pretendan llevar a cabo dichos proyectos.</p> <p>Artículo 5°. Sistema de información público sobre proyectos de explotación y exploración de recursos naturales no renovables. En un término no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno Nacional deberá crear y poner en funcionamiento el Sistema de Información Pública de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN). Este Sistema estará bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que será el responsable de vigilar el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y que podrá apropiar los recursos necesarios para su funcionamiento.</p> <p>El SIPPEERN debe formar parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe garantizar su articulación con los demás subsistemas de información que componen el SIAC.</p> <p>El SIPPERN deberá contar con la información completa y actualizada de todos los proyectos de exploración y explotación de recursos del subsuelo que existan en Colombia. Como mínimo deberá contar, de manera desagregada para cada proyecto, con la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los procesos de selección de contratistas y/o de propuestas de contratos de concesión y solicitudes de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como toda la información presentada por personas naturales o jurídicas como sustento a la solicitud de contratos de concesión para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

- m. Los contratos de concesión suscritos y toda la información expedida por autoridades administrativas relacionada con los contratos, convenios y otros actos jurídicos mediante los cuales se otorgan concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
- n. El Estado de avance de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
- o. El estado de avance de los trámites y gestiones ambientales y sociales que correspondan.
- p. Los impactos ambientales y sociales que se prevean como consecuencia de la actividad exploratoria y de explotación de recursos naturales no renovables.
- q. Las inversiones sociales y las regalías generadas y esperadas por el proyecto.
- r. Las medidas de corrección y compensación ambiental y social adecuadas al entorno y a las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
- s. Las medidas de reparación ambiental y social ordenadas en favor de los ecosistemas y las comunidades y/o poblaciones afectadas negativamente por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
- t. Las memorias, conclusiones y actos administrativos resultantes de la aplicación de cada mecanismo y espacio de participación que con referencia al proyecto se haya realizado.
- u. Todas las decisiones, actos administrativos e información expedida por autoridades administrativas ambientales, nacionales, departamentales y municipales relacionada con los estudios técnicos realizados, permisos ambientales solicitados, otorgados y revocados que estén relacionados con cada proyecto en cada una de sus etapas y fases de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
- v. Toda la información proferida por órganos de control que, en virtud de sus competencias, hagan seguimiento y control a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Esto incluye los informes sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente y otros cálculos de costos ambientales elaborados por la Contraloría General de la República con respecto al proyecto, el informe de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo de los que trata la presente ley respecto del desarrollo de cada mecanismo de participación que haya sido aplicado durante las diferentes fases y etapas del proyecto.

Parágrafo 1. El SIPPEERN deberá actualizarse siempre que ocurra un cambio en la información de los literales anteriores. Si la información requerida de acuerdo con lo dispuesto en esta ley no está actualizada en el SIPPEERN para el momento de inicio de cada etapa o fase del proyecto de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las autoridades ambientales competentes no otorgarán los permisos o licencias necesarios para el desarrollo de la siguiente etapa o fase del proyecto.

Artículo 6°. Acompañamiento de la Procuraduría General y de la Defensoría del Pueblo. En el desarrollo de cada mecanismo de participación previsto en la presente ley se deberá garantizar el acompañamiento de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. En el marco de sus competencias, participarán como garantes y vigilarán el correcto desarrollo de los mecanismos de participación previstos en la presente ley. Podrán difundir información y solucionar las dudas que tengan los participantes y la población en general respecto de los mecanismos de participación de los que trata la presente ley.

En un término no mayor a dos (2) días calendario tras la celebración de cada mecanismo de participación deberán entregar a la autoridad competente del desarrollo del mecanismo de participación un informe en el que den cuenta del desarrollo del proceso, del cumplimiento de lo previsto en la presente ley y del goce efectivo del derecho a la participación.

Este informe deberá ser publicado en el SIPPEERN en un término no mayor a dos (2) días calendario luego de que sea entregado a la autoridad competente de la realización del mecanismo de participación.

TÍTULO II

**CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y
POTENCIALMENTE AFECTADAS POR LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES**

Artículo 7. Derecho especial de participación de las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables tienen derecho a participar, activa y efectivamente, en todas las decisiones de carácter administrativo mediante las cuales se pretenda aprobar la realización de proyectos de dicha naturaleza, así como en la identificación de los impactos sociales, económicos, ambientales y culturales causados por dichos proyectos.

La participación y eficaz de la que trata este artículo se debe garantizar en todas las etapas y fases de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los mecanismos que crea esta ley.

Asimismo, la participación debe ser real, libre, informada, efectiva y estar a disposición frente a la aprobación, la ejecución y la evaluación de los proyectos de los que trata esta ley.

Artículo 8. Derecho a la democracia como deliberación. Las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables tienen derecho a impulsar los mecanismos de participación de los que trata esta ley para promover una deliberación en la toma de decisiones sobre dicho tipo de actividades.

Los mecanismos de participación que regula esta ley deben garantizar procesos de deliberación libres de interferencias y tienen como objetivo promover el diálogo horizontal de la ciudadanía, construir consensos y reconocer diferencias legítimas relacionadas con prioridades y necesidades locales y nacionales.

Artículo 9. Derecho a la democracia como decisión. Las decisiones que se adopten como resultado de la aplicación de los mecanismos de participación de los que trata esta ley reflejarán la deliberación como principio democrático.

Los resultados de las discusiones en el marco de los mecanismos desarrollados por esta ley son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del orden local, departamental y nacional, así como para la ciudadanía y los particulares responsables o interesados en los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Artículo 10. Derecho de acceso a la información frente a proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Se garantiza a la ciudadanía el derecho de acceso a la información relacionada con los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

El derecho de acceso a la información sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables implica que la información debe ser previa, permanente, transparente, clara y suficiente, debe estar disponible, ser accesible y gratuita para las personas y comunidades afectadas y potencialmente afectadas por ese tipo de proyectos y actividades.

El contenido de este derecho y la garantía para el acceso se interpretará integralmente por lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 o por aquellas normas que la modifiquen o deroguen.

TÍTULO III

**CAPÍTULO ÚNICO
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA DE EXPLORACIÓN DE
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES**

Artículo 11°. Audiencia pública ambiental ante solicitudes o convocatorias para el desarrollo de proyectos de exploración de recursos naturales no renovables. Siempre que la autoridad competente ordene la apertura de una convocatoria para

la selección de contratistas o reciba una solicitud para la exploración de recursos naturales no renovables tiene que convocar una audiencia pública ambiental.

A esta audiencia deberá convocarse a la población de los distritos y/o municipios en que converja la eventual actividad de exploración de recursos naturales no renovables.

Con un (1) mes de antelación a la realización de la audiencia deberá estar cargada y a disposición del público en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) la información sobre la(s) solicitud(es) y/o propuesta(s) de exploración. Deberán incluirse las líneas bases ambientales y sociales para el área de influencia del proyecto, a cargo de las autoridades ambientales y las alcaldías de los municipios y distritos que puedan verse vinculados con la actividad exploratoria.

Al inicio de la audiencia deberá darse lectura de la información referida en el inciso anterior y deberá entregarse copia impresa o digital, según lo soliciten los participantes.

Parágrafo 1. Deberán asistir a la audiencia todos los proponentes y solicitantes de las actividades de exploración que converjan sobre el mismo territorio.

Parágrafo 2. La realización de la audiencia pública ambiental, en los términos descritos en esta ley, será requisito para que la autoridad minera o de hidrocarburos competente pueda dar continuidad al proceso contractual para la exploración de recursos naturales no renovables y para avanzar a las siguientes fases del proyecto una vez esté en ejecución la etapa de exploración.

Parágrafo 3. A esta audiencia deberá estar atada la convocatoria subsiguiente a un Cabildo Abierto Socioambiental que permita deliberación y decisión respecto de la ejecución del proyecto de exploración de recursos naturales no renovables.

Parágrafo 4. La audiencia pública ambiental de la que trata este artículo sólo será exigible para los proyectos de exploración de recursos naturales no renovables cuya convocatoria o solicitud se dé con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 12°. Notificación del acta de la audiencia. La autoridad minera o de hidrocarburos competente notificará por aviso y de manera personal el acta de la audiencia pública a todos los participantes de la audiencia en un término de cinco (5) días calendario siguientes a la elaboración del acta. En los casos de la notificación por aviso, esta deberá fijarse en la sede de la Alcaldía Municipal o Distrital y en la sede virtual de la respectiva entidad y deberá circularse en las radios comunitarias y medios de comunicación local.

A través de esos mismos canales de comunicación y en el mismo momento se notificará al(los) concejo(s) municipal(es) o a la asamblea departamental, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la presente ley, para que estos convoquen a un Cabildo Abierto Socioambiental. La convocatoria deberá hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la que trata el presente artículo y el Cabildo Abierto Socioambiental deberá celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del acta de la audiencia.

Parágrafo 1. Si alguna de las personas que intervino en la audiencia pública tiene alguna discrepancia con el contenido del acta, podrá hacerlo saber a la autoridad minera o de hidrocarburos en un término de dos (2) días calendario siguientes a la notificación. La autoridad deberá notificar una versión del acta con las enmiendas siempre que éstas existieren en un término de tres (3) días calendario siguientes al día en que se cumpla el término para que la ciudadanía presente sus discrepancias con el acta original.

Parágrafo 2°. En los casos de que trata el parágrafo 1, la autoridad minera o de hidrocarburos deberá repetir el proceso de notificación previsto en el primer inciso del presente artículo. La notificación del acta con enmiendas no afectará el término de dos (2) meses para convocar al Cabildo Abierto Socioambiental ni el afecta el término de tres (3) meses para la celebración del Cabildo Abierto Socioambiental previsto en el inciso segundo del presente artículo.

Artículo 13°. Audiencia pública ambiental en las fases de la exploración. Previo inicio de cada una de las fases previstas como constitutivas de la etapa de exploración se deberá desarrollar una audiencia pública ambiental en los términos previstos en el presente artículo.

Estas audiencias públicas ambientales son diferentes e independientes a la audiencia pública ambiental de la que tratan los dos artículos anteriores toda vez que estas no contemplan la subsiguiente convocatoria a un Cabildo Abierto Socioambiental y tienen como objeto preparar la siguiente fase de la etapa de exploración, no anteceder a la deliberación y decisión sobre la puesta en marcha del proyecto de exploración.

Parágrafo 1. Previo al inicio de cada una de las fases de exploración, la autoridad minera o de hidrocarburos competente debe convocar a la población de los distritos y/o municipios en que converge la actividad de exploración de recursos naturales no renovables y a los terceros interesados en el desarrollo del proyecto. Será obligatoria la participación en la audiencia de la(s) empresa(s) y ejecutores responsables de la fase de exploración de recursos naturales no renovables. Su inasistencia impide el desarrollo de la audiencia y sin su presencia no se tendrá por agotado el mecanismo de participación.

Parágrafo 2. El agotamiento de este mecanismo de participación será requisito para que la autoridad minera o de hidrocarburos y las empresas involucradas puedan proseguir con el desarrollo de las fases siguientes de la etapa de exploración.

Parágrafo 3. Al inicio de cada audiencia se dará lectura y se entregará a los participantes una copia física o digital del documento preparado por la autoridad ambiental convocante. Cuando corresponda, en ese documento deben constar las conclusiones en materia de impactos ambientales y sociales de la fase previa y un estimativo de los impactos de la fase siguiente.

En todas las audiencias las empresas, en conjunto con la autoridad competente, deben informar a los participantes de la audiencia las medidas de prevención, atención y reparación para evitar, controlar y reparar eventuales afectaciones sociales y ambientales que pudieran causarse en la siguiente fase de la exploración.

En la primera audiencia luego de celebrado el Cabildo Abierto Socioambiental se dará lectura al acto administrativo que aprobó el desarrollo de dicha etapa.

Parágrafo 4. La información de la que tratan los parágrafos anteriores debe estar publicada y disponible para consulta en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN). Dicha publicación debe darse por parte de la autoridad ambiental en asocio con las empresas al menos con veinte (20) días hábiles de anterioridad a la celebración de la audiencia.

Parágrafo 5. Los mecanismos de publicidad, notificación y enmienda de las actas de las audiencias públicas previstos en los dos artículos anteriores serán aplicables para todas las audiencias que se celebren durante la etapa de exploración, salvo lo relacionado con la convocatoria al Cabildo Abierto Socioambiental.

Parágrafo 6. Las audiencias públicas ambientales de las que trata este artículo sólo serán aplicables a las fases de la etapa de exploración que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

Artículo 14. Del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es un mecanismo de participación ciudadana de carácter deliberativo y decisorio mediante el que la ciudadanía de uno o varios municipios potencialmente afectados por una o varias solicitudes para la ejecución de un proyecto de exploración de recursos naturales no renovables y por procesos de asignación de áreas para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables promovidos por el Estado, se informará, discutirá y decidirá sobre su conveniencia o inconveniencia, en el marco de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales o de los concejos municipales o distritales.

La decisión que se adopte en el cabildo abierto socioambiental estará basada en la información que sobre los proyectos a los que se refiere este artículo brinden las autoridades del orden nacional a la ciudadanía que participen en el cabildo, en la información que tengan las comunidades sobre el territorio, en la información proporcionada por la persona natural o jurídica interesada en el proyecto, y en la información sobre los determinantes del ordenamiento territorial que brinden las autoridades del orden nacional, departamental y local competentes.

La decisión que se adopte debe tener en cuenta y aplicar los principios de precaución y prevención ambiental.

Artículo 15. Obligatoriedad del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es de obligatoria realización en todos los casos en que la autoridad nacional competente reciba una o varias solicitudes mediante las que personas naturales o jurídicas persigan la concesión para la exploración de recursos naturales no renovables.

Se puede realizar un cabildo abierto socioambiental que agrupe varias solicitudes siempre que estas comprendan la exploración de los mismos recursos naturales no renovables en el mismo territorio, así sean de personas naturales o jurídicas diferentes, en aras de comprender los impactos que en el ordenamiento territorial tendría la realización de actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables en el municipio o municipios afectados.

También será obligatorio en casos en los que la autoridad competente decida abrir un proceso de selección objetiva, mediante convocatoria, para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Ante esta situación, se realizará un único cabildo que comprenda a todos los municipios del área objeto de la convocatoria.

En caso de que la solicitud o convocatoria afecte a más de un municipio de un mismo departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental, y en caso de que la solicitud afecte a más de un departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental del departamento con mayor porción de afectación en el territorio. En todo caso se debe garantizar la participación de la ciudadanía que habita en todos los municipios afectados o potencialmente afectados. Sean o no del departamento en cuyo territorio se desarrolla el cabildo.

Parágrafo 1°. En ningún caso la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o las autoridades que hagan sus veces, podrán avanzar en el procedimiento de concesión o de selección objetiva hasta tanto no se agote este mecanismo de participación ciudadana.

Artículo 16. Notificación de las autoridades nacionales a los concejos municipales y distritales sobre nuevas solicitudes. Siempre que la Agencia

Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o quienes hagan sus veces reciban una solicitud para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, o siempre que pretendan abrir una convocatoria para la selección de contratistas con el mismo fin, deberán notificar a los concejos municipales y distritales competente o a la asamblea departamental competente.

La notificación deberá hacerse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción en caso de las solicitudes, o de la apertura de la convocatoria en el caso de los procedimientos de selección de contratistas.

La notificación deberá contener información básica sobre:

- La persona natural o jurídica en el caso de solicitudes elevadas por personas naturales o jurídicas.
- Los términos de referencia y guías minero-ambientales que regulan el proyecto a ejecutar.
- El tipo de proyecto que se pretende ejecutar.
- El tipo de recurso natural no renovable que se pretende explorar y explotar.
- El tiempo de duración del proyecto.
- Una descripción de los actos jurídicos que son necesarios para dar viabilidad a la solicitud o a la convocatoria pública.
- Una descripción de las obligaciones que tendrían las partes en caso de firmarse y formalizarse los contratos derivados de la solicitud o de la convocatoria pública.

Adicionalmente, deberán convocar y desarrollar la audiencia pública ambiental en los términos previstos en la presente ley y luego de celebrada la audiencia deberán notificar el acta de audiencia a los concejos municipales y distritales o a la asamblea departamental competente para que puedan convocar a la realización del cabildo abierto socioambiental.

Artículo 17. Aviso a los residentes. Por todos los medios de los que disponga, la Secretaría del concejo municipal o distrital, según sea el caso, dará aviso a sus residentes sobre la notificación que envíe la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos referida en el artículo anterior.

El aviso se fijará en las sedes del Concejo Municipal el día siguiente de recibida la notificación de la que trata el artículo anterior y se le dará amplia difusión por medios de comunicación locales y departamentales, según el caso, durante veinte (20) días calendario.

Este aviso activará la posibilidad para que, notificada el acta de la audiencia pública ambiental, la ciudadanía solicite ante el concejo o concejos municipales o ante la asamblea departamental competente la realización del cabildo abierto socioambiental. Esa solicitud podrá presentarse en un término de dos (2) meses

contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del acta de la audiencia pública ambiental.

Artículo 18. Solicitud de realización de un cabildo abierto socioambiental por la ciudadanía. Por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de la ciudadanía del censo electoral del respectivo municipio o distrito, la ciudadanía podrá solicitar a la Secretaría del concejo municipal o distrital o a la asamblea departamental según sea el caso y mediante un comité promotor, la celebración de un cabildo abierto socioambiental para deliberar y decidir sobre la notificación que hagan las autoridades nacionales relacionada con la posibilidad de explorar y explotar recursos naturales no renovables en su municipio de residencia.

Dada la naturaleza de este tipo de cabildo y las competencias concurrentes de los entes territoriales y de la nación en la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, es obligación del alcalde municipal o distrital y del gobernador, según sea el caso, así como de las autoridades mineras y de hidrocarburos y de las autoridades ambientales asistir al cabildo abierto socioambiental.

Parágrafo. Si la ciudadanía no presenta solicitud de convocatoria a cabildo abierto socioambiental dentro de (2) meses contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del acta de la audiencia pública ambiental, la secretaria del concejo municipal o distrital, o la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, deberá convocar al Cabildo Abierto Socioambiental garantizando que se cumplan los tiempos para la celebración del Cabildo que están contemplados en la presente ley.

Artículo 19. Aprobación del cabildo abierto socioambiental. De cumplirse con las firmas necesarias para la solicitud del cabildo, debidamente revisadas y avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el concejo municipal o distrital o la asamblea departamental, según corresponda, fijará la fecha de su realización, la cual deberá fijarse, como máximo, dentro del término de tres (3) meses contados a partir del día de la notificación del acta de la audiencia pública ambiental.

La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá priorizar la revisión de la solicitud ciudadana de cabildo abierto socioambiental de manera que esta pueda avalarse oportunamente para que la autoridad local o regional cumpla con los términos de convocatoria previstos en el inciso anterior.

Artículo 20. Convocatoria al cabildo abierto socioambiental. Una vez fijada la fecha de celebración del cabildo abierto socioambiental, el concejo municipal o distrital o la asamblea departamental, según sea el caso, la comunicará por escrito a las autoridades del orden nacional, departamental y local que deban concurrir en virtud de sus competencias.

La comunicación que se eleve a las autoridades del orden nacional se hará en atención a la notificación enviada por estas a las autoridades municipales a la que se refiere el artículo 16 de esta ley, y en respeto a sus competencias en la materia.

La ciudadanía del municipio o municipios afectados será convocada mediante aviso que se fijará en las sedes de los órganos de administración municipales, así como mediante medios de comunicación locales que garanticen una amplia difusión de la celebración del cabildo abierto socioambiental, de su fecha de realización y de la inscripción que deben hacer quienes deseen intervenir.

Artículo 21. Participantes del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental es de carácter público para la ciudadanía residente del municipio(s) o distrito(s) cuya área sea afectada por el proyecto o proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Su intervención durante el cabildo únicamente estará supeditada a acreditar la residencia en alguno de los municipios afectados o potencialmente afectados por el proyecto y a una inscripción formal para efectos de organizar el adecuado desarrollo del Cabildo abierto socio ambiental.

Adicionalmente, deberán concurrir de manera obligatoria las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan competencias en asuntos relacionados con la política minero-energética, ambiental y agropecuaria.

Podrán participar en el cabildo, en calidad de asesores, los técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica y/u organizaciones de la sociedad civil invitadas por la ciudadanía residente en los municipios afectados, para tomar decisiones informadas.

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo también serán convocadas en virtud de sus competencias de guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y para actuar conforme lo previsto en la presente ley.

Parágrafo 1°. Para garantizar la participación de la ciudadanía que reside en el municipio o municipios involucrados, la secretaria del concejo municipal o distrital, o la secretaria de la asamblea departamental, según el caso, dispondrá de un registro que estará disponible desde la comunicación de la fecha del cabildo hasta dos días antes de su celebración.

La secretaria del concejo municipal o distrital, según el caso, no podrá exigir requisito diferente al de ser ciudadano residente del municipio o acreditar pertenencia a alguno de los actores cuya participación está prevista conforme el contenido del artículo anterior. En todos los casos solicitará datos básicos de identificación personal para la inscripción.

Parágrafo 2°. Las personas naturales o jurídicas solicitantes de un contrato de concesión para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las que participen en procesos de selección y asignación de áreas, y aquellas que ya tengan formalizados este tipo de contratos con el Estado, solo podrán participar en la sesión de apertura del cabildo y se limitarán a intervenir de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley.

En ningún caso podrán intervenir en otros momentos del cabildo y se deben abstener de interferir sobre la información proporcionada por entidades públicas y en la información u opinión brindada por la ciudadanía que participe.

Parágrafo 3°. La ausencia de alguno de los proponentes o solicitantes de las actividades de exploración y/o de las autoridades ambientales competentes impedirá el desarrollo del Cabildo Abierto Socioambiental. A su vez, el no desarrollo del Cabildo por esta causa o por cualquier otra causa predicable de las autoridades estatales impedirá la decisión de fondo respecto del desarrollo del proyecto para la exploración de recursos naturales no renovables.

Artículo 22. Contenidos del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental del que trata esta ley solo podrá abordar las materias de su convocatoria, relacionadas con la notificación que las autoridades nacionales hagan a las autoridades municipales de la que trata el artículo 16 de esta ley. En ningún caso se podrán abordar temas que estén por fuera de dicha notificación.

Artículo 23. Sesiones del cabildo abierto socioambiental. El cabildo abierto socioambiental se desarrollará en tres sesiones. Una sesión de apertura, una sesión de deliberación y una sesión decisoria. Estas sesiones tienen un carácter informativo, deliberativo y decisorio respectivamente.

Artículo 24. Sesión de apertura del cabildo abierto socioambiental. En la sesión de apertura del cabildo abierto socioambiental las autoridades del orden nacional darán a conocer a la ciudadanía residente de los municipios potencialmente afectados por la solicitud de concesión o por procesos de selección objetiva para la asignación de áreas para exploración y explotación de recursos naturales no renovables, toda la información relacionada con dichas solicitudes para garantizar la discusión y la deliberación acerca de su conveniencia e inconveniencia, teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales que influyen en el ordenamiento territorial.

A su vez, tendrán que dar cuenta de lo acontecido en la audiencia pública ambiental preparatoria del cabildo; resolver las inquietudes y peticiones formuladas por los participantes de la audiencia y actualizar la información y acciones relacionadas con el proyecto que hubieran tenido lugar entre la celebración de la audiencia pública ambiental y la sesión de apertura del cabildo socioambiental.

Artículo 25. Información que debe ser suministrada por autoridades al municipio en la sesión de apertura. Para garantizar el derecho de acceso a la información, el carácter deliberativo de las sesiones del cabildo, así como la legitimidad de sus decisiones, es indispensable que las autoridades nacionales, departamentales y locales suministren toda la información relacionada con la solicitud de concesión o por procesos de selección objetiva para la asignación de áreas para exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

La información será presentada en el siguiente orden, luego de que el alcalde o los alcaldes o gobernador, según corresponda, dé apertura formal al cabildo abierto:

- a) Una persona delegada de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de las autoridades que hagan sus veces según sea el caso, la cual deberá presentar la siguiente información: solicitudes de los contratos de concesión vigentes, alcance de los proyectos que se quieren realizar (tipo de recurso natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono), naturaleza e importancia local y regional de los proyectos a realizar, los términos de referencia y guías minero ambientales que regulan el proyecto, evaluación de la propuesta desde el punto de vista técnico, económico, jurídico y social, revisión de los requisitos establecidos en la ley para el otorgamiento del contrato de concesión, traslapes con zonas excluidas de la minería e hidrocarburos u otras que hagan parte del Sistema de Áreas Protegidas del país, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, zonas especiales (páramos, humedales), los Planes de Gestión Social y la demás información relacionada con los proyectos a realizar que sea de importancia para la ciudadanía.
- b) Una persona delegada del Ministerio de Minas y Energía, la cual deberá presentar la siguiente información: lineamientos de las políticas, planes y programas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables de carácter nacional que resulten pertinentes para la ciudadanía residente en el municipio o municipios en los que se pretende la realización del proyecto.
- c) Una persona representante de la persona natural o jurídica que eleva la solicitud de concesión o que la detenta en su etapa exploratoria, la cual deberá presentar la siguiente información: identificación y breve descripción del sujeto solicitante (nacional, extranjero, objeto de la persona jurídica), y descripción del proyecto extractivo (tipo de recurso natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono, presencia de grupos étnicos o zonas mineras indígenas, estimativo de la inversión económica).
- d) Una persona representante de la autoridad ambiental del orden nacional y una persona representante de la autoridad ambiental del orden regional, las cuales deberán presentar la siguiente información: áreas de los Sistemas Nacional, Regional y Local de Áreas Protegidas incluyendo Parques Nacionales

<p>Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; solicitud de sustracción de reservas forestales con ocasión de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto del cabildo; estado de las cuencas hidrográficas y de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas; panorama de los determinantes ambientales del territorio y los instrumentos existentes para su desarrollo e implementación en el territorio, y demás información relevante sobre la importancia ambiental y ecológica del territorio en cuestión.</p> <p>e) Una persona representante de Parques Nacionales Naturales, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo.</p> <p>f) Una persona representante de la Agencia Nacional de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: procesos de adjudicación de baldíos o programas de tierras implementados en el municipio o municipios; procesos de delimitación y constitución de zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial; procesos de titulación colectiva a comunidades étnicas y negras y, en general, la información que considere relevante como máxima autoridad de las tierras de la nación sobre los municipios o el municipio participante en el cabildo.</p> <p>g) Una persona representante de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la cual deberá presentar la siguiente información: criterios técnicos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural de los municipios o el municipio participante en el cabildo que resulten de importancia para la ciudadanía.</p> <p>h) Una persona representante de la Unidad de Restitución de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de procesos de restitución de tierras despojadas en el o los municipios; número de sentencias de restitución de tierras despojadas en el o los municipios y estado de ejecución de las mismas.</p> <p>i) La persona en cabeza de la Alcaldía municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: descripción general del municipio (demografía, datos administrativos, territorio), vocación del suelo y actividades económicas principales, conflictos socioambientales relevantes y demás información relacionada que sea de importancia para la ciudadanía.</p>	<p>departamental según sea el caso desde el día siguiente al cierre de la sesión inicial del cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Al inicio de la sesión deliberativa del cabildo abierto socioambiental deberá darse lectura de la información y entregarse en copia impresa o digital, según lo soliciten los participantes.</p> <p>Artículo 26. Intervenciones ciudadanas y deliberación. Una vez se haya presentado la información relacionada en el artículo anterior, intervendrá el comité que solicitó el cabildo abierto, si es del caso, y enseguida todas las personas que se hayan inscrito ante la secretaria del concejo municipal o distrital.</p> <p>Estas intervenciones tendrán como objeto elevar preguntas respetuosas a las autoridades para tener un mejor criterio sobre el proyecto, contrato de concesión o proceso de selección que se está poniendo en consideración. También podrá elevarse preguntas a los proponentes y/o solicitantes de las actividades de exploración.</p> <p>Posteriormente, se dará espacio para que las autoridades y los particulares proponentes o solicitantes de los proyectos de exploración intervengan y puedan dar respuesta inmediata a aquello que bajo su competencia. Lo que no pueda ser contestado deberá ser materia de respuesta en la sesión siguiente y se entiendo formulado bajo el derecho de petición colectivo, el cual debe ser atendido siguiendo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto.</p> <p>Artículo 27. Cierre de sesión inicial del cabildo abierto socioambiental. Luego de realizadas las intervenciones de las que trata el artículo anterior, se dará cierre a la sesión de apertura del cabildo abierto. Se deberá elaborar un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, que recogerá todas las intervenciones, las preguntas elevadas por la ciudadanía, la respuesta dada por las autoridades y particulares responsables del proyecto y una relación de las preguntas cuya respuesta debe ser atendida en la siguiente sesión.</p> <p>La sesión del cabildo será grabada para garantizar la fidelidad del acta, la cual quedará a disposición de la ciudadanía en la secretaria del concejo municipal o distrital o en la secretaria de la asamblea departamental según el caso.</p> <p>Artículo 28. Sesión deliberativa del cabildo. Se trata de sesiones autónomas ciudadanas cuya celebración debe ser garantizada por el concejo municipal o distrital o por la asamblea departamental, según sea el caso. Serán de carácter abierto y participativo.</p> <p>Quienes deseen intervenir deberán inscribirse ante la secretaria del concejo municipal o distrital o ante la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, la cual brindará el registro oficial al comité promotor del cabildo, el cual</p>
<p>j) La persona que ejerce la presidencia del concejo municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: proyectos de acuerdo, debates de control político, debates de asuntos de interés general y demás actuaciones relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio que resulten relevantes para la ciudadanía que participa en el cabildo.</p> <p>k) Una persona representante del Ministerio del Interior, la cual deberá presentar la información sobre la presencia de grupos étnicos en el territorio.</p> <p>l) Una persona representante del Ministerio Público, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos en el territorio y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía participante en el cabildo.</p> <p>m) Una persona representante del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la cual debe presentar un concepto sobre las posibilidades y riesgos de que el proyecto puede poner en riesgo la preservación del patrimonio arqueológico.</p> <p>n) Personas representantes de universidades públicas y privadas, institutos y centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, académicos o expertos para que puedan aportar información sobre los estudios previos a la exploración y sobre los eventuales impactos del proyecto y recomendaciones para atenderlos.</p> <p>Parágrafo. Toda la información que presenten las autoridades antes señaladas quedará a disposición del municipio para la solicitud y consulta de la ciudadanía que la requiera.</p> <p>Parágrafo 2. Será requisito para el inicio de la sesión deliberativa del cabildo abierto socioambiental que en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible el acta final con o sin enmiendas, según sea el caso, de la audiencia pública ambiental, la información contenida en la notificación de las autoridades nacionales sobre nuevas solicitudes, toda la información presentada en la sesión de apertura del cabildo, el acta de la sesión de apertura del cabildo, y las actualizaciones o modificaciones que se hubieran realizado a los documentos de los que trata el artículo 5 de la presente ley entre la celebración de la audiencia pública ambiental y la sesión de apertura del cabildo.</p> <p>Esta información deberá estar disponible en el referido sistema de información, así como en la sede de los concejos municipales o distritales o de la asamblea</p>	<p>convocará esta sesión que puede estar compuesta por un máximo de tres reuniones deliberativas.</p> <p>Se celebrarán a los diez (10) días después del cierre de la sesión inicial del cabildo. Entre la primera y última reunión de la sesión deliberativa no pueden pasar más de treinta (30) días.</p> <p>En estas reuniones la comunidad deliberará sobre la información suministrada por las autoridades en la sesión de apertura del cabildo y, de considerarlo pertinente, convocará a técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica y/o a organizaciones de la sociedad civil para tomar decisiones informadas.</p> <p>Parágrafo. En los casos en los que no se cuente con el comité promotor, la secretaria del concejo municipal o distrital o la secretaria de la asamblea departamental según el caso, se encargará de convocar la sesión o sesiones deliberativas.</p> <p>Artículo 29. Resultado de la sesión deliberativa del cabildo. Como resultado de las reuniones celebradas en el marco de la sesión deliberativa del cabildo, resultará un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental competente que condense las distintas posturas ciudadanas expresadas en dichos espacios y, las dudas de carácter técnico, económico, social o ambiental que aún queden por resolver.</p> <p>El acta podrá expresar el consenso, si lo hubiere, entre la comunidad, sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio o municipios. En cualquiera de los dos casos, el acta dejará constancia de las recomendaciones y solicitudes que la ciudadanía eleva a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que participan en el cabildo.</p> <p>También expresará el disenso, si lo hubiere, entre la comunidad, dejando constancia de las distintas posturas existentes sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto, indicando en cada caso los argumentos que las sostienen.</p> <p>El acta contendrá el nombre de hasta diez (10) personas delegadas designadas por la comunidad para que intervengan en la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental. Se deberá promover que las personas delegadas reflejen de la mayor manera posible las diferentes posturas y tendencias de la ciudadanía respecto del proyecto.</p> <p>La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o la persona delegada para tal fin, según sea el caso, será la que presente el acta que resulte de la sesión deliberativa.</p>

<p>Parágrafo. Para llegar al resultado de la sesión deliberativa, la ciudadanía debe tener en cuenta la información suministrada por las personas e instituciones intervinientes en la sesión de apertura así como la que fue suministrada durante la sesión deliberativa, la información que tiene la ciudadanía sobre su territorio y los determinantes ambientales del territorio.</p> <p>Artículo 30. Remisión del acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades participantes de la sesión de apertura. El acta deberá ser remitida por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la última reunión de la sesión deliberativa a las autoridades que participaron en la sesión de apertura del cabildo.</p> <p>Parágrafo. Será requisito para el inicio de la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental que en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible la misma información prevista en el artículo 5 de la presente ley junto con el acta de la sesión inicial del cabildo, el acta de la sesión deliberativa del cabildo y la información novedosa que hubiera sido presentada durante las reuniones de la sesión deliberativa del cabildo.</p> <p>Esta información deberá estar disponible en el referido sistema de información, así como en la sede de los concejos municipales o distritales o de la asamblea departamental según sea el caso desde el día siguiente a la notificación del acta de la sesión deliberativa del cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Al inicio de la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental deberá darse lectura de la información que no hubiese sido presentada al inicio de la sesión deliberativa y deberá entregarse copia impresa o digital de la totalidad de la información según lo soliciten los participantes.</p> <p>Artículo 31. Sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental. Una vez la secretaria del concejo municipal o distrital o la secretaria de la asamblea departamental, según el caso, haya enviado el acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades ambientales competentes, convocará a la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental dentro de los quince (15) días calendario siguientes.</p> <p>Serán convocadas las mismas autoridades asistentes a la sesión de apertura, excepto las personas naturales o jurídicas solicitantes, participantes en procesos de selección, las cuales no podrán ingresar a esta sesión.</p> <p>Esta sesión tendrá el siguiente orden de intervenciones:</p>	<p>Junto con el acuerdo participativo sobre la conveniencia del proyecto, la comunidad podrá elevar ante las autoridades competentes, según sea el caso, solicitudes especiales en materia social, económica, ambiental y cultural para prevenir o compensar los impactos previstos, las cuales deben ser atendidas por las autoridades en las fases subsiguientes de la etapa de exploración y en la etapa de explotación si ella tuviera lugar. En caso de desestimar dichas peticiones, las autoridades competentes, deben brindar razones fundadas en derecho o en razones técnicas plausibles y suficientemente motivadas.</p> <p>Artículo 34. Acuerdo participativo sobre la inconveniencia del proyecto. En caso de decidir sobre la inconveniencia del proyecto por consenso mayoritario, la comunidad debe comunicar a las autoridades participantes del cabildo si su decisión obedece al proyecto específico que se le ha puesto en consideración o si se debe a una incompatibilidad entre el mismo y algún elemento determinante del ordenamiento territorial.</p> <p>En este último caso, la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la autoridad que haga sus veces según sea el caso, no podrá dar trámite a nuevas solicitudes de exploración en el municipio o municipios participantes del cabildo sino hasta dentro de 5 años luego de la realización de la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental en que se adoptó la decisión.</p> <p>En ambos casos, sea que la decisión se base en la inconveniencia del proyecto presentado a consideración de la ciudadanía o en la incompatibilidad entre el ordenamiento territorial y la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el municipio, la decisión es vinculante para las autoridades y así deberá quedar consignado en el acuerdo participativo con el que cierra el cabildo.</p> <p>Artículo 35. Naturaleza del Acuerdo participativo. El acuerdo participativo del que tratan los artículos 33 y 34 de esta ley se adoptará mediante acto administrativo motivado, el cual deberá ser proferido por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o por quienes hagan sus veces, de conformidad con las competencias correspondientes dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la sesión decisoria del Cabildo Abierto Participativo.</p> <p>Artículo 36. Contenido del acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo. En el acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo la autoridad ambiental responsable de su expedición debe incluir:</p> <p>f) El recuento de lo acontecido y de las conclusiones alcanzadas tras la aplicación de la Audiencia Pública Ambiental y el Cabildo Abierto Socioambiental.</p>
<p>1) La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o de la ciudadanía, la cual presentará un informe que debe reflejar lo expresado en el acta de la sesión deliberativa.</p> <p>2) Las personas designadas por la comunidad en el acta de las sesiones deliberativas hasta un máximo de diez.</p> <p>3) Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diferentes disciplinas que hayan asesorado a la comunidad en el espacio de la sesión deliberativa para que expresen su concepto.</p> <p>4) Las entidades públicas en el mismo orden de la sesión de apertura, las cuales responderán las preguntas pendientes de la sesión de apertura y se pronunciarán sobre el contenido del acta de la sesión deliberativa del cabildo.</p> <p>Finalizadas las intervenciones se dará el espacio para que la decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar el o los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables sea adoptada.</p> <p>Artículo 32. Decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar o continuar con proyectos de exploración de recursos naturales no renovables. La decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de realizar proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables se adoptará mediante consenso mayoritario entre la comunidad y se deberá manifestar expresamente durante la sesión decisoria.</p> <p>En cualquiera de los dos casos, sea que la decisión manifieste la conveniencia del proyecto o sea que manifieste la inconveniencia del proyecto, la decisión de la ciudadanía debe ser motivada y debe tener en cuenta criterios sociales, económicos, ambientales y culturales.</p> <p>Expresada la decisión, se entenderá que el cabildo abierto participativo culmina con un acuerdo participativo.</p> <p>Parágrafo. Para efectos de esta ley y de los mecanismos de participación que desarrolla, se entiende por consenso mayoritario la adopción de decisiones por el 65% del total de ciudadanos y ciudadanas intervinientes tanto en la sesión deliberativa como en la decisoria.</p> <p>Artículo 33. Acuerdo participativo sobre la conveniencia del proyecto. En caso de decidir, por consenso mayoritario, sobre la conveniencia del proyecto, las autoridades municipales, departamentales y nacionales deberán darles curso a los trámites administrativos subsiguientes, en respeto de las competencias de cada cual, y de las leyes que rigen dichos procedimientos, para decidir sobre la viabilidad jurídica del mismo.</p>	<p>g) Las posturas de la población y de las autoridades frente al proyecto de exploración que fueron expresadas en los mecanismos de participación.</p> <p>h) Los aportes de los participantes que fueron tenidos en cuenta en el proceso de decisión sobre el desarrollo del proyecto de exploración, así como la información y motivación de carácter social, económica, ambiental y cultural que soportó la decisión.</p> <p>i) El Acuerdo Participativo sobre la conveniencia o inconveniencia del proceso, según sea el caso. Deberá incluirse, según corresponda, la información de cada Acuerdo en los términos previstos en la presente ley.</p> <p>En el caso del Acuerdo Participativo sobre la inconveniencia deberá quedar explícita la prohibición de notificar de nuevas solicitudes al municipio o municipios participantes del cabildo dentro de los cinco (5) años siguientes a la realización de la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental en que se adoptó la decisión.</p> <p>j) En caso de haberse adoptado el Acuerdo Participativo sobre la conveniencia del proyecto, el acto administrativo del que trata el presente artículo deberá incluir las respuestas a las peticiones ciudadanas y las obligaciones a las que estará sujeta la licencia, permiso o concesión, con el fin de garantizar las medidas de corrección, compensación y reparación social y ambiental a las que haya lugar con ocasión de la etapa de exploración, de conformidad con las preocupaciones que haya señalado la comunidad en los distintos mecanismos de participación. Ello no obsta para que las autoridades ambientales planteen exigencias adicionales con ocasión del desarrollo del proyecto.</p> <p>Artículo 37. Publicación del acto administrativo que formaliza el Acuerdo Participativo. El acto administrativo que formaliza el Acuerdo Participativo deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal o distrital y del o de los concejos municipales o de la asamblea departamental que estuviera a cargo del desarrollo del Cabildo Abierto Participativo. También deberá publicarse en la sede virtual de la autoridad responsable del proyecto de exploración y explotación.</p> <p>Allí deberá permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proyecto en caso de haberse adoptado el Acuerdo Participativo sobre la conveniencia del proyecto o durante los cinco años siguientes a su expedición en caso de haber sido adoptado el Acuerdo Participativo sobre la inconveniencia del proyecto.</p> <p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión. Su difusión no generará costo alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2) días hábiles a partir de expedido el acto.</p>

<p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se aprobó el proyecto de exploración de recursos naturales no renovables podrá solicitar la aclaración del acto administrativo mediante el cual se formaliza el acuerdo participativo en cualquier momento por medio de un derecho de petición.</p> <p>Artículo 38. Tiempo de espera entre las diferentes etapas de los cabildos abiertos. En ningún caso, la totalidad de las etapas que componen un cabildo abierto socioambiental podrá exceder los seis meses.</p> <p>Artículo 39. Derecho de prelación de los municipios que realizaron consultas populares municipales sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Los municipios que al momento de entrada en vigor de esta ley hayan realizado consultas populares para que la ciudadanía se pronuncie sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tendrán un derecho de prelación para la realización del cabildo abierto socioambiental del que tratan los capítulos precedentes.</p> <p>Las votaciones de las consultas que cuenten con el aval de autoridades administrativas y judiciales y se encuentren en firme deberán ser tenidas en cuenta en la etapa deliberativa y decisoria del cabildo y serán un criterio preferente para la toma de la decisión, en tanto materializaron el derecho fundamental de participación ciudadana, al momento de la toma de decisiones del cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Artículo 40. Derecho de prelación de los municipios que adoptaron acuerdos municipales sobre proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Los municipios que al momento de entrada en vigor de esta ley hayan adoptado Acuerdos municipales para permitir o prohibir proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tendrán un derecho de prelación para la realización del cabildo abierto socioambiental del que tratan los capítulos precedentes.</p> <p>Artículo 41. Aplicación progresiva de estas disposiciones. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables únicamente a las fases de la etapa de exploración de recursos naturales no renovables que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO IV</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO ÚNICO</p> <p style="text-align: center;">MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES</p> <p>Artículo 42. Audiencia pública participativa de control socioambiental. Las audiencias públicas participativas de control socioambiental son un mecanismo</p>	<p>Artículo 43. Notificación de las autoridades competentes a las autoridades municipales sobre el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental. Siempre que la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos o quienes hagan sus veces estén en la obligación de realizar una audiencia pública participativa de control socioambiental, deberán notificar a la alcaldía municipal o distrital la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia para que estas, a su vez, puedan comunicar a la ciudadanía residente del municipio(s) o distrito(s) y a terceros interesados sobre la realización de dicho mecanismo de participación.</p> <p>La notificación de la que trata este artículo deberá contener información básica sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El tipo de proyecto que se está ejecutando y la fase en la que se encuentra. b) La persona natural o jurídica titular del contrato de concesión. c) Los contratos o actos jurídicos firmados mediante los que se le permite la explotación de recursos naturales no renovables (obligaciones para las partes, tiempo de duración, cláusulas, etc.). d) El tipo de proyecto y el tipo de recurso natural no renovable objeto de explotación. e) El tiempo de inicio y terminación del contrato. <p>f) Un informe de rendición de cuentas en el que se incluya una descripción de las obligaciones que tienen las partes contratantes y el estado de cumplimiento de las mismas, y en el que se dé cuenta de los impactos causados por la ejecución del proyecto hasta la fecha de notificación y de las medidas de prevención, mitigación, compensación y reparación adoptadas.</p> <p>Parágrafo 1°. El envío de la notificación de la que trata el presente artículo estará a cargo de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de las entidades que hagan sus veces, de acuerdo con la naturaleza de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables objeto de control.</p> <p>Artículo 44. Aviso del municipio a la ciudadanía residente y a terceros interesados. El día posterior a la notificación por parte de la autoridad minera o de hidrocarburos, la persona en cabeza de la alcaldía o alcaldías dará aviso a sus residentes sobre la notificación que envíen las autoridades competentes para el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental e indicará la fecha, lugar, hora y objeto de la audiencia.</p>
<p>obligatorio de rendición de cuentas y de seguimiento a los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Estas audiencias deben ser convocadas y organizadas por la Agencia Nacional de Minería o por la Agencia Nacional de Hidrocarburos o por la autoridad que haga sus veces según sea el caso. En estas audiencias se debe presentar a las personas y comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales no renovables un informe de rendición de cuentas sobre el estado de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables que estén en curso, dando cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales, sociales y ambientales; se debe escuchar a la ciudadanía y tomar decisiones de ajuste, si es el caso, sobre las obligaciones y las subsecuentes medidas de prevención, mitigación, compensación y reparación que deben ser adoptadas por las empresas y/o por el Estado con ocasión del proyecto de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>De esta manera se garantiza la discusión y la deliberación acerca del adecuado desarrollo del proyecto, de las medidas de carácter social, económico, cultural, jurídico y ambiental que se deban adoptar frente al proyecto para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, la protección del ambiente y el goce efectivo de los derechos humanos de las poblaciones afectadas.</p> <p>Estas audiencias serán de carácter municipal, intermunicipal o departamental, dependiendo de la existencia de uno o más proyectos en un municipio, o la existencia de un proyecto con una extensión territorial que abarque más de un municipio o más de un departamento.</p> <p>Parágrafo 1°. Las audiencias de las que trata el presente artículo se deben realizar con anterioridad al inicio de cada fase de la etapa de explotación o cada 3 años contados a partir del inicio de la fase de explotación y hasta tanto se dé por terminado el proyecto. Se preferirá la condición o plazo que ocurra primero en el tiempo.</p> <p>Parágrafo 2°. En aquellos casos en los que las personas titulares de los contratos de concesión presenten una solicitud de prórroga para ampliar el plazo de explotación de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables la autoridad nacional competente está en la obligación de convocar de manera inmediata la audiencia pública participativa de control socioambiental de la que trata este artículo.</p> <p>En caso de que esas mismas personas presenten una solicitud para la terminación de la concesión la autoridad nacional competente está en la obligación de convocar de manera inmediata el Cabildo Abierto Preparatorio para el Cierre del Proyecto en los términos previstos en la presente ley.</p>	<p>El aviso se fijará en las sedes de la administración local por diez (10) días calendario dentro de los cuales se deberá dar difusión por medios de comunicación locales y departamentales, según el caso, y por todos los medios de difusión que se consideren relevantes. La difusión de estos anuncios deberá hacerse de manera gratuita por parte de los medios locales por lo que no generará costo alguno para la administración. No bastará con una convocatoria virtual a través de las páginas web institucionales ya que ello limita el acceso a la información de poblaciones rurales.</p> <p>Parágrafo. En ningún caso la fecha que establezcan las autoridades encargadas para el desarrollo de la audiencia pública participativa de control socioambiental podrá ser mayor a un mes contado a partir de la fecha en la que las autoridades municipales o distritales competentes reciban la notificación.</p> <p>Artículo 45. Participantes de la audiencia pública participativa de control socioambiental. La audiencia pública participativa de control socioambiental es de carácter público y abierto para la ciudadanía. Su intervención en la audiencia estará condicionada únicamente a acreditar que residen en el municipio o que fueron invitados en calidad de asesores por la ciudadanía. En todos los casos deberán diligenciar una inscripción formal para efectos de organizar el adecuado desarrollo de la audiencia.</p> <p>A la audiencia pública participativa de control socioambiental deberán concurrir las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan competencias en asuntos relacionados con el desarrollo de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables objeto de control, así como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Podrán participar en la audiencia, en calidad de asesores, los técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica y/u organizaciones de la sociedad civil invitadas por la ciudadanía residente en los municipios afectados, para tomar decisiones informadas.</p> <p>Será obligatoria la participación para la(s) empresa(s) y ejecutores responsables de la fase de explotación de recursos naturales no renovables. Su inasistencia impide el desarrollo de la audiencia y sin su presencia no se tendrá por agotado el mecanismo de participación.</p> <p>Artículo 46. Información que debe ser suministrada a la ciudadanía durante la audiencia pública participativa de control socioambiental. Para garantizar el carácter deliberativo de la audiencia, así como la legitimidad de sus decisiones, es indispensable que las autoridades nacionales, departamentales y locales así como las empresas responsables del proyecto de explotación suministren toda la información relacionada con el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables que estén en ejecución, desde la etapa de explotación.</p>

<p>La información será presentada en el siguiente orden, luego de que una persona representante de la autoridad que notificó la audiencia dé apertura formal al espacio:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Una persona delegada de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según el caso, deberá presentar la siguiente información: descripción del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables en ejecución y la etapa en la que se encuentra, titular del contrato de concesión, la fecha de inicio y terminación del contrato de concesión, el tipo de recurso natural no renovable objeto de explotación, el acto administrativo que aprobó el desarrollo de la etapa de explotación, la descripción de las obligaciones que tienen las partes contractuales y el estado de cumplimiento de las mismas, el balance en la ejecución de proyecto desde el punto de vista técnico, económico, jurídico y social y de los impactos causados, los traslapes con zonas excluibles de la minería y de explotación de hidrocarburos, los Planes de Gestión Social, las conclusiones en materia de impactos ambientales y sociales de la fase previa y un estimativo de los impactos de la fase siguiente, las medidas de prevención, atención y reparación para evitar, controlar y reparar eventuales afectaciones sociales y ambientales que pudieran causarse en la siguiente fase de la explotación y la demás información relacionada con los proyectos en ejecución que sea de importancia para la ciudadanía. e) Una persona delegada del Ministerio de Minas y Energía, la cual deberá presentar la siguiente información: lineamientos de las políticas, planes y programas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que resulten relevantes frente a la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de control. f) Una persona representante de la persona natural o jurídica titular del contrato de concesión, la cual deberá presentar la siguiente información: identificación y breve descripción del titular del contrato de concesión (nacional, extranjero, objeto de la persona jurídica), descripción del proyecto extractivo (tipo de recurso natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono, presencia de grupos étnicos o zonas mineras indígenas, estimativo de la inversión económica), estado actual del proyecto (en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones sociales, ambientales y económicas), las conclusiones en materia de impactos ambientales y sociales de la fase previa y un estimativo de los impactos de la fase siguiente y las medidas de prevención, atención y reparación para evitar, controlar y reparar eventuales afectaciones sociales y ambientales que pudieran causarse en la siguiente fase de la explotación. g) Una persona representante de la autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental, la cual deberá presentar la siguiente información: balance en el cumplimiento de lo dispuesto en la licencia ambiental o el plan de manejo ambiental, según el caso, frente a las medidas de prevención, mitigación, 	<p>han llevado a cabo en el municipio y que resulten relevantes para la ciudadanía que participa en la audiencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> l) Una persona representante de la Defensoría del Pueblo y una persona representante de la Procuraduría General de la Nación, las cuales deberán presentar la siguiente información: informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio relacionadas con el desarrollo de proyectos objeto de control, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos con ocasión del desarrollo de los proyectos, y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía participante en la audiencia. m) Una persona representante de la Contraloría General de la República, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre hallazgos que se hayan proferido en el marco del desarrollo del proyecto objeto de control, denuncias en curso sobre el desarrollo del proyecto. n) Personas representantes de universidades públicas y privadas, institutos y centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, académicos o expertos para que puedan aportar información sobre los impactos del proyecto y recomendaciones para atenderlos. <p>Parágrafo 2. Toda la información de la que trata el presente artículo deberá estar publicada y disponible para consulta al menos con veinte (20) días hábiles de anterioridad a la celebración de la audiencia en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) en los términos previstos en el artículo 5 de la presente ley y quedará a disposición del municipio para la solicitud y consulta de la ciudadanía que la requiera. Además, será presentada y entregada al inicio de la audiencia en copia física o digital a los participantes.</p> <p>Artículo 47. Intervenciones ciudadanas y deliberación. Una vez se haya presentado la información relacionada en el artículo anterior, intervendrán todas las personas que se hayan inscrito ante la Alcaldía del municipio en que se desarrolle la audiencia. Estas intervenciones tendrán como objeto elevar preguntas respetuosas a las autoridades para tener un mejor criterio sobre el proyecto de explotación objeto de control.</p> <p>Posteriormente, se dará espacio para que las autoridades y/o las personas responsables de la ejecución del proyecto de explotación intervengan y puedan dar respuesta inmediata a aquello que esté bajo su competencia. Además, precisarán las distintas medidas y compromisos que deben asumir las autoridades y las personas naturales o jurídicas titulares del contrato de concesión para corregir las irregularidades evidenciadas en el desarrollo del proyecto y para implementar las acciones adicionales encaminadas a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sociales.</p>
<p>corrección, compensación, reparación y manejo de los impactos ambientales del proyecto; modificaciones de la licencia ambiental y sus alcances; informes de control y seguimiento emitidos; procesos sancionatorios en curso o que se hayan realizado frente a los proyectos objeto de control y la demás información relevante para la ciudadanía en el marco de la competencia de esta autoridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> h) Una persona representante de las demás autoridades ambientales del orden nacional y regional, las cuales deberán presentar la siguiente información: localización y descripción de zonas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo las áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras que se encuentren en el o los municipios participantes en la audiencia; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; solicitud de sustracción de reservas forestales con ocasión de la ejecución de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de la audiencia y el estado en el que se encuentran; afectaciones e impactos ocasionados por los proyectos en las áreas previamente mencionadas y la demás información relevante sobre la importancia ecológica del territorio en cuestión. i) Una persona representante de Parques Nacionales Naturales, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios participantes de la audiencia; afectaciones e impactos ocasionados por los proyectos en las áreas previamente mencionadas y la demás información relevante sobre la importancia el manejo de estas áreas y el desarrollo de los proyectos. j) La persona en cabeza de la Alcaldía municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual del instrumento de ordenamiento territorial y su compatibilidad con los proyectos en ejecución, conflictos socioambientales relevantes que se hayan suscitado con ocasión de la ejecución del proyecto, afectaciones a la salud pública asociadas con el proyecto y demás información relacionada que sea de importancia para la ciudadanía. k) La persona que ejerce la presidencia del concejo municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: acuerdos municipales u ordenanzas, debates de control político, debates de asuntos de interés general, y demás actuaciones relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables o con los proyectos objeto de control que se 	<p>En un tercer momento la población civil inscrita tendrá la oportunidad de interponer las respuestas dadas por las autoridades y las respuestas dadas por los particulares responsables del proyecto de explotación, así como las medidas y compromisos a los que deben hacer referencia las autoridades en su intervención.</p> <p>Lo que no sea contestado por las autoridades y los particulares responsables del proyecto de explotación deberá ser materia de respuesta y se entiende que es un derecho de petición colectivo, el cual debe ser atendido siguiendo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto. En esa misma respuesta deben ampliar los argumentos para controvertir la interposición de la población, en caso de que esta hubiera tenido lugar.</p> <p>Artículo 48. Resultado de la Audiencia pública participativa de control socio ambiental. El resultado de la audiencia pública realizada será un acta diligenciada por la alcaldía municipal o distrital. Esta deberá estar suscrita por las empresas y los particulares responsables del proyecto, por la autoridad minera o de hidrocarburos y por las autoridades ambientales competentes.</p> <p>El acta de la que trata el presente artículo condensará las distintas medidas y compromisos que deben asumir las autoridades y las personas naturales o jurídicas titulares del contrato de concesión, para corregir las irregularidades evidenciadas en el desarrollo de los contratos e implementar las acciones adicionales encaminadas a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sociales.</p> <p>Parágrafo 1°. Al finalizar la audiencia se deberá hacer una lectura del acta con el fin de que sea aprobada por la ciudadanía que participó en el espacio.</p> <p>Parágrafo 2°. En cualquier caso, si frente a la ejecución de los proyectos objeto de control se evidencian irregularidades o incumplimiento de disposiciones legales y constitucionales diferentes a las establecidas frente a los requisitos del contrato de concesión, en el acta se podrá conminar a las autoridades competentes para que adopten las medidas correspondientes, incluyendo: procesos sancionatorios ambientales, procesos disciplinarios, procesos fiscales, denuncias penales, entre otras medidas encaminadas a garantizar el desarrollo de los proyectos conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico.</p> <p>Parágrafo 3°. Si en desarrollo de la audiencia pública se evidencia el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los contratos de concesión que regulan los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables objeto de control, en el acta se podrá conminar a la autoridad nacional competente para que de apertura a los procedimientos administrativos correspondientes y para que declare la caducidad del contrato de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.</p>

Artículo 49. Adopción del acta resultante de la Audiencia pública participativa de control socio ambiental. El acta de la audiencia pública participativa de control socio ambiental se adoptará mediante acto administrativo proferido por las autoridades competentes conforme a lo decidido en la audiencia.

Artículo 50. Requisito de agotamiento de la Audiencia Pública de control socio ambiental. El agotamiento de la Audiencia Pública de control socio ambiental será requisito para que la autoridad ambiental y las empresas involucradas puedan proseguir con el desarrollo de las fases siguientes de la etapa de explotación.

Artículo 51. Notificación del acta de la audiencia. La autoridad minera o de hidrocarburos competente notificará por aviso y de manera personal el acta de la audiencia pública participativa de control socio ambiental a todos los participantes de la audiencia en un término de cinco (5) días calendario siguientes a la elaboración del acta. En los casos de la notificación por aviso, esta deberá fijarse en la sede de la Alcaldía Municipal o Distrital y en la sede virtual de la respectiva entidad y deberá circularse en las radios comunitarias y medios de comunicación local.

Sólo cuando se trate de la audiencia pública participativa de control socioambiental celebrada para la última fase de la etapa de explotación a través de esos mismos canales de comunicación y en el mismo momento se notificará al(los) concejo(s) municipal(es) o a la asamblea departamental, según corresponda, para que estos convoquen a un Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.

La convocatoria al Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto deberá hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de la que trata el presente artículo y el Cabildo Abierto deberá celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del acta de la audiencia, en los términos previstos en la presente ley.

Parágrafo 1. Si alguna de las personas que intervino en la audiencia pública tiene alguna discrepancia con el contenido del acta, podrá hacerlo saber a la autoridad minera o de hidrocarburos en un término de dos (2) días calendario siguientes a la notificación. La autoridad deberá notificar una versión del acta con las enmiendas siempre que éstas existieren en un término de tres (3) días calendario siguientes al día en que se cumpla el término para que la ciudadanía presente sus discrepancias con el acta original.

Parágrafo 2°. En los casos de que trata el parágrafo 1, la autoridad minera o de hidrocarburos deberá repetir el proceso de notificación previsto en el primer inciso del presente artículo. La notificación del acta con enmiendas no afectará el término de dos (2) meses para convocar al Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto ni el afecta el término de tres (3) meses para la celebración del Cabildo Abierto previsto en el inciso segundo del presente artículo

En caso de que el proyecto de explotación afecte a más de un municipio de un mismo departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental, y en caso de que la solicitud afecte a más de un departamento, el cabildo abierto tendrá lugar en la asamblea departamental con mayor porción de afectación en el territorio. En todo caso se debe garantizar la participación de la ciudadanía que habita en todos los municipios afectados o potencialmente afectados. Sean o no del departamento en cuyo territorio se desarrolla el cabildo.

Artículo 55. Oportunidad de aplicación del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. La autoridad responsable del proyecto de explotación, luego de publicar el acta de la audiencia pública desarrollada antes del inicio de la última fase de la etapa de explotación, tiene que convocar a un Cabildo Abierto Preparatorio para el Cierre del Proyecto como requisito para poder dar por terminado el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Artículo 56. Asuntos del Cabildo y contenidos por discutir. Las autoridades estatales vinculadas con la totalidad del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como las empresas encargadas de desarrollar esas actividades deben informar al inicio del Cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto sobre:

- d) La identificación de los impactos ambientales y sociales generados durante la totalidad del proyecto.
- e) El cumplimiento de las medidas de corrección y compensación ambiental y social al entorno y a las comunidades afectadas. En caso que no estén totalmente implementadas se deben precisar los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de esas medidas.
- f) Las medidas de reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido procedentes y las que se propongan atendiendo a las posibles afectaciones que se hayan identificado con posterioridad a la celebración de la última audiencia pública participativa de control socio ambiental.

La sociedad civil tendrá oportunidad de deliberar sobre lo expresado por las autoridades y las empresas en cada uno de los tres (3) ejes referidos en este artículo y en el artículo 53 de la presente ley.

La sociedad civil podrá interpelar las versiones dadas por las autoridades y las empresas y podrá presentar contra propuestas de medidas de corrección, compensación y/o reparación y proponer mecanismos y garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas y del Estado.

Artículo 52. Seguimiento de la audiencia pública participativa de control socio ambiental. Cada 6 meses contados a partir de la fecha de celebración de la audiencia pública, las autoridades competentes junto con las personas responsables del desarrollo del proyecto de explotación deberán realizar y entregar un informe a las personas participantes en dicho mecanismo de participación, en el que se dé cuenta de los avances y cumplimiento de las medidas y compromisos consignados en el acta a la que se hace referencia en el artículo anterior.

El informe será remitido a la Alcaldía, la cual debe informar por todos los medios sobre su recepción y dejarlo a disposición para la consulta gratuita y permanente por parte de la ciudadanía.

Artículo 53. Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El Cabildo Abierto Preparatorio para el cierre del proyecto es un mecanismo de participación ciudadana de carácter deliberativo y decisor mediante el que se:

- a. Revisa de manera conjunta entre autoridad ambiental, autoridades mineras o de hidrocarburos, empresas y población civil los impactos ambientales y sociales del proyecto de explotación de recursos naturales y la afectación que sufrió la población y el ambiente con ocasión de la referida actividad;
- b. Asegura que las partes responsables den cumplimiento a las medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social que hubieran sido fijadas con anterioridad a la última fase del proyecto de explotación y a los compromisos resultantes de las Audiencias Públicas participativas de control socio ambiental;
- c. Buscan fórmulas de acuerdo entre la población civil afectada, las autoridades y las empresas responsables del proyecto para la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social adicionales a las fijadas con anterioridad a la última fase del proyecto de explotación, en caso de que alguna de esos tres actores lo considere necesario.

Artículo 54. Obligatoriedad del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y la subsecuente acreditación del cumplimiento de las medidas de corrección y compensación será requisito en todos los casos para poder proceder con el cierre del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Se debe realizar un cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto para cada proyecto de explotación de recursos naturales no renovables.

Las autoridades competentes podrán expresar sus consideraciones y propuestas y deberán advertir la viabilidad o imposibilidad jurídica de las estrategias expresadas por empresas y sociedad civil.

Las conclusiones del Cabildo también deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad nacional para determinar, según corresponda, medidas adicionales de compensación, corrección o reparación por las afectaciones causadas.

Artículo 57. Notificación de las autoridades nacionales a los concejos municipales y distritales sobre el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Siempre que la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o quienes hagan sus veces publiquen el acta de la audiencia pública participativa de control socioambiental prevista para la última fase del proyecto de explotación de recursos naturales no renovables deberán notificar a los concejos municipales y distritales competentes o a la asamblea departamental competente la fecha en la que se llevará a cabo el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto para que estas, a su vez, puedan comunicar a la ciudadanía residente del municipio(s) o distrito(s) y a terceros interesados sobre la realización de dicho mecanismo de participación.

La notificación deberá hacerse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la publicación del acta de la audiencia participativa de control socio ambiental.

La notificación deberá contener información básica sobre:

- a) La(s) persona(s) natural o jurídica responsable del desarrollo del proyecto de explotación.
- b) Los términos de referencia y guías minero-ambientales que regulan el proyecto.
- c) El tipo de proyecto que está en ejecución.
- d) El tipo de recurso natural no renovable que se ha explotado.
- e) El tiempo de duración del proyecto y los hitos restantes para el cierre del proyecto.
- f) La identificación de los impactos ambientales y sociales generados durante la totalidad del proyecto.
- g) Las actas, informes y compromisos derivados de las audiencias públicas participativas de control socioambiental que hubieran tenido lugar y la acreditación de cumplimiento de esos compromisos.
- h) La formulación de medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social al entorno y a las comunidades afectadas. Se deben precisar los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de esas medidas.
- i) Las medidas de reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido procedentes y las adicionales que se

<p>propongan implementar atendiendo a las posibles afectaciones que se hayan identificado.</p> <p>j) Una descripción de los actos jurídicos que son necesarios para dar viabilidad a la implementación de las medidas de las que tratan los literales anteriores.</p> <p>k) Una descripción de las obligaciones generales de las partes con ocasión del proyecto de explotación y su estado de cumplimiento.</p> <p>Artículo 58. Aviso a los residentes. Por todos los medios de los que disponga, la Secretaría del concejo municipal o distrital o de la asamblea departamental, según sea el caso, avisará a sus residentes sobre la notificación referida en el artículo anterior que envíe la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o la entidad que haga sus veces.</p> <p>El aviso se fijará en las sedes de los concejos municipales y se le dará amplia difusión por medios de comunicación locales y departamentales, según el caso, durante veinte (20) días calendario. La difusión del aviso no generará costo alguno por lo que su publicidad será gratuita.</p> <p>Este aviso activará la posibilidad para que, notificada el acta de la audiencia pública participativa de control socioambiental, la ciudadanía solicite ante el concejo o concejos municipales o ante la asamblea departamental competente la realización del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Esa solicitud podrá presentarse en un término de dos (2) meses contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del acta de la audiencia pública ambiental.</p> <p>Artículo 59. Solicitud de realización de un cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil de la ciudadanía del censo electoral del respectivo municipio o distrito, la ciudadanía podrá solicitar a la Secretaría del concejo municipal o distrital o a la asamblea departamental según sea el caso y mediante un comité promotor, la celebración de un cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Dada la naturaleza de este tipo de cabildo y las competencias concurrentes de los entes territoriales y de la nación en la explotación de recursos naturales no renovables, es obligación del alcalde municipal o distrital y del gobernador, según sea el caso, así como de las autoridades nacionales asistir al cabildo abierto.</p> <p>Parágrafo. Si la ciudadanía no presenta solicitud de convocatoria a cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto dentro de dos (2) meses contados a partir del siguiente día hábil a la notificación del acta de la audiencia pública participativa de control socioambiental, la secretaria del concejo municipal o distrital, o la secretaria de la asamblea departamental según sea el caso, deberá convocar al Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto garantizando que se cumplan los tiempos</p>	<p>relacionados con la política minero-energética, ambiental y agropecuaria sobre el territorio de incidencia del proyecto y sobre el desarrollo de este último.</p> <p>La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo también serán convocadas en virtud de sus competencias de guarda y promoción de los derechos humanos para garantizar la protección del interés público, vigilar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas y para actuar conforme lo previsto en la presente ley.</p> <p>Parágrafo 1°. Para garantizar la participación de la ciudadanía que reside en el municipio o municipios involucrados, la secretaria del concejo municipal o distrital, o la secretaria de la asamblea departamental, según el caso, dispondrá de un registro que estará disponible desde la comunicación de la fecha del cabildo hasta dos días antes de su celebración.</p> <p>Parágrafo 2°. La ausencia de alguno de los particulares responsables del proyecto de explotación y/o de las autoridades involucradas en su desarrollo impedirá el desarrollo del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. A su vez, el no desarrollo del Cabildo impedirá la decisión de fondo respecto del cierre del proyecto y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes con ocasión del proyecto para la explotación de recursos naturales no renovables</p> <p>Artículo 63. Contenidos del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación del que trata esta ley solo podrá abordar las materias de su convocatoria previstas en la presente ley y aquellas relacionadas con la notificación que las autoridades nacionales hagan a las autoridades municipales de la que trata el artículo 57 de esta ley. En ningún caso se podrán abordar temas diferentes a esos.</p> <p>Artículo 64. Sesiones del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto se desarrollará en tres sesiones. Una sesión de apertura, una sesión de deliberación y una sesión decisoria. Estas sesiones tienen un carácter informativo, deliberativo y decisorio respectivamente.</p> <p>Artículo 65. Sesión de apertura del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. En la sesión de apertura del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto las autoridades del orden nacional darán a conocer a la ciudadanía residente en los municipios afectados por la explotación de recursos naturales no renovables toda la información de la que trata el artículo siguiente de la presente ley para garantizar el cumplimiento del objeto del cabildo.</p> <p>A su vez, tendrán que resolver las inquietudes y peticiones formuladas por los participantes de la audiencia pública participativa de control socioambiental de la última fase del proyecto de explotación y actualizar la información y acciones</p>
<p>para la celebración del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto en los términos previstos en la presente ley.</p> <p>Artículo 60. Aprobación del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. De cumplirse con las firmas necesarias para la solicitud del cabildo, debidamente revisadas y avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el concejo municipal o distrital o la asamblea departamental, según corresponda, fijará la fecha de su realización, la cual deberá fijarse, como máximo, dentro del término de tres (3) meses contados a partir del día de la notificación del acta de la audiencia pública de control socio ambiental.</p> <p>La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá priorizar la revisión de la solicitud ciudadana de cabildo abierto preparatorio para el cierre de manera que esta pueda avaluarse oportunamente para que la autoridad local o regional cumpla con los términos de convocatoria previstos en el inciso anterior.</p> <p>Artículo 61. Convocatoria al cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Una vez fijada la fecha de celebración del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto, el concejo municipal o distrital o la asamblea departamental, según sea el caso, la comunicará por escrito a las autoridades del orden nacional, departamental y local que deban concurrir en virtud de sus competencias.</p> <p>La ciudadanía del municipio o municipios afectados será convocada mediante aviso que se fijará en las sedes de los órganos de administración municipales, así como mediante medios de comunicación locales que garanticen una amplia difusión de la celebración del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación, de su fecha de realización y de la inscripción que deben hacer quienes deseen intervenir.</p> <p>Artículo 62. Participantes del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. El cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto es de carácter público para la ciudadanía residente del municipio(s) o distrito(s) cuya área sea afectada por el proyecto o proyectos de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Su intervención durante el cabildo únicamente estará supeditada a la acreditación en alguno de los municipios en los que se desarrolla el proyecto de explotación y una inscripción formal para efectos de organizar su adecuado desarrollo. La secretaria del concejo municipal o distrital, según el caso, no podrá exigir requisito diferente al de ser ciudadano residente del municipio y solicitará datos básicos de identificación personal para la inscripción.</p> <p>Adicionalmente, deberán concurrir de manera obligatoria las autoridades del orden municipal, departamental y nacional que tengan competencias en asuntos</p>	<p>relacionadas con el proyecto que hubieran tenido lugar entre la celebración de la audiencia pública participativa de control socioambiental y la sesión de apertura del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Artículo 66. Información que debe ser suministrada por autoridades al municipio en la sesión de apertura. Para garantizar el derecho de acceso a la información, el carácter deliberativo de las sesiones del cabildo y la legitimidad de sus decisiones, es indispensable que las autoridades nacionales, departamentales y locales, así como las personas naturales y/o jurídicas responsables del proyecto de explotación suministren toda la información relacionada con la fase de explotación del proyecto incluyendo la prevista en el artículo 46 de la presente ley.</p> <p>La información será presentada en el siguiente orden, luego de que la autoridad municipal, distrital o departamental, según corresponda, dé apertura formal al cabildo abierto:</p> <p>a) Una persona delegada de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de las autoridades que hagan sus veces según sea el caso, la cual deberá presentar la siguiente información: alcance del proyecto de explotación (tipo de recurso natural no renovable, duración, extensión y localización del polígono), naturaleza e importancia local y regional del proyecto, los términos de referencia y guías minero ambientales que regulan el proyecto; la identificación de los impactos ambientales y sociales generados durante la totalidad del proyecto; las actas y compromisos adquiridos por la entidad y por los particulares responsables de la ejecución del proyecto con ocasión de las audiencias públicas participativas de control socioambiental que hubieran tenido lugar y la acreditación de cumplimiento de esos compromisos; las medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido procedentes haciendo referencia a los cronogramas, mecanismos y garantías para dar cumplimiento y hacer cumplir por parte de los particulares las obligaciones pendientes.</p> <p>b) Una persona delegada del Ministerio de Minas y Energía, la cual deberá presentar la siguiente información: los términos de referencia y guías minero ambientales que regulan el proyecto; hitos restantes para el cierre del proyecto y las ganancias obtenidas en favor del Estado con ocasión del proyecto de explotación.</p> <p>c) Una persona representante de la persona natural o jurídica responsable de la etapa de explotación, la cual deberá presentar la siguiente información: identificación y breve descripción del sujeto responsable (nacional, extranjero, objeto de la persona jurídica); descripción del proyecto extractivo (tipo de recurso natural no renovable, duración del proyecto e hitos restantes para el cierre del mismo, extensión y localización del polígono, presencia de grupos</p>

<p>étnicos o zonas mineras indígenas, estimativo de la inversión económica realizada y de las ganancias obtenidas con ocasión del proyecto); identificación de los impactos ambientales y sociales generados durante la totalidad del proyecto; las medidas de corrección, compensación y reparación ambiental y social adoptadas durante la etapa de explotación en caso de haber sido precedentes; las obligaciones a su cargo derivadas de las audiencias públicas participativas de control socio ambiental y las asociadas con la totalidad del proyecto de explotación; la acreditación de cumplimiento de esas obligaciones y los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de las obligaciones pendientes.</p> <p>d) Una persona representante de la autoridad ambiental del orden nacional y una persona representante de la autoridad ambiental del orden regional, las cuales deberán presentar la siguiente información: áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo Parques Nacionales Naturales y Regionales, áreas de Reservas Forestales Protectoras, áreas de páramos y áreas de humedales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo; estado actual de la reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas previamente mencionadas; estado actual de la administración y manejo de las áreas previamente mencionadas a nivel regional; sustracción de reservas forestales con ocasión de los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables objeto del cabildo; estado de las cuencas hidrográficas y de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas; panorama de los determinantes ambientales del territorio y los instrumentos existentes para su desarrollo e implementación en el territorio, y demás información relevante sobre la importancia ambiental y ecológica del territorio en cuestión. Toda esta información deberá presentarse de manera que la población pueda contrastar el estado de esos indicadores al momento en que se desarrolla el cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y la situación existente al momento en que se celebró el cabildo abierto socioambiental.</p> <p>e) Una persona representante de Parques Nacionales Naturales, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de la administración y manejo de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales que se encuentren en el o los municipios participantes en el cabildo.</p> <p>f) Una persona representante de la Agencia Nacional de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: procesos de adjudicación de baldíos o programas de tierras implementados en el municipio o municipios; procesos de delimitación y constitución de zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial; procesos de titulación colectiva a comunidades étnicas y negras y, en general, la información que considere relevante como máxima autoridad de las tierras de la nación sobre los municipios o el municipio participante en el cabildo.</p>	<p>Parágrafo. Toda la información que presenten las autoridades y particulares antes señaladas quedará a disposición del municipio para la solicitud y consulta de la ciudadanía que la requiera.</p> <p>Parágrafo 2. Será requisito para el inicio de la sesión deliberativa del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto que en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible el acta final con o sin enmiendas, según sea el caso, de las audiencias públicas participativas de control socio ambiental, los informes presentados con motivo del seguimiento a esas audiencias, la información contenida en la notificación de las autoridades nacionales sobre la audiencia realizada en la última fase de la etapa de explotación, toda la información presentada en la sesión de apertura del cabildo, el acta de la sesión de apertura del cabildo, y las actualizaciones o modificaciones que se hubieran realizado a los documentos de los que trata el artículo 5 de la presente ley entre la celebración de la última audiencia pública participativa de control socioambiental y la sesión de apertura del cabildo.</p> <p>Esta información deberá estar disponible en el referido sistema de información, así como en la sede de los concejos municipales o distritales o de la asamblea departamental según sea el caso desde el día siguiente a la notificación del acta de la sesión inicial del cabildo abierto socioambiental.</p> <p>Al inicio de la sesión deliberativa del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación deberá darse lectura y deberá entregarse copia impresa o digital de la información, según lo soliciten los participantes.</p> <p>Artículo 67. Intervenciones ciudadanas y deliberación. Una vez se haya presentado la información relacionada en el artículo anterior, intervendrá el comité que solicitó el cabildo abierto, si es del caso, y enseguida todas las personas que se hayan inscrito ante la secretaria del concejo municipal o distrital o ante la asamblea departamental.</p> <p>Estas intervenciones tendrán como objeto elevar preguntas respetuosas a las autoridades para tener un mejor criterio sobre los impactos ambientales y sociales causados por el proyecto y sobre la naturaleza e implementación de las medidas de compensación, corrección y reparación acordadas para atender esos impactos. También podrá elevarse preguntas a los responsables de la ejecución del proyecto de explotación.</p> <p>Posteriormente, se dará espacio para que las autoridades y los particulares responsables del proyecto de explotación intervengan y puedan dar respuesta inmediata a aquello que se encuentre bajo su competencia. Lo que no pueda ser contestado deberá ser materia de respuesta en la sesión siguiente y se entiende formulado bajo el derecho de petición colectivo, el cual debe ser atendido siguiendo los criterios legales y jurisprudenciales establecidos para el efecto.</p>
<p>g) Una persona representante de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la cual deberá presentar la siguiente información: criterios técnicos, económicos, sociales, jurídicos y ambientales del ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural de los municipios o el municipio participante en el cabildo que resulten de importancia para la ciudadanía.</p> <p>h) Una persona representante de la Unidad de Restitución de Tierras, la cual deberá presentar la siguiente información: estado actual de procesos de restitución de tierras despojadas en el o los municipios; número de sentencias de restitución de tierras despojadas en el o los municipios y estado de ejecución de estas.</p> <p>i) La persona en cabeza de la Alcaldía municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: un comparativo que presente aspectos generales del municipio conforme su estado antes del inicio de la etapa de explotación y al momento de desarrollo del cabildo. Entre esa información deberá estar: una descripción general del municipio (demografía, datos administrativos, territorio), vocación del suelo y actividades económicas principales, conflictos socioambientales relevantes y demás información relacionada que sea de importancia para la ciudadanía.</p> <p>j) La persona que ejerce la presidencia del concejo municipal o distrital, la cual deberá presentar la siguiente información: proyectos de acuerdo, debates de control político, debates de asuntos de interés general y demás actuaciones relacionadas con la explotación de recursos naturales no renovables en el municipio que resulten relevantes para la ciudadanía que participa en el cabildo.</p> <p>k) Una persona representante del Ministerio del Interior, la cual deberá presentar la información sobre la presencia de grupos étnicos en el territorio.</p> <p>o) Una persona representante del Ministerio Público, la cual deberá presentar la siguiente información: informes sobre la situación de derechos humanos en el territorio, denuncias sobre la vulneración de derechos humanos en el territorio y demás información relevante sobre la vigilancia en la garantía de los derechos de la ciudadanía participante en el cabildo.</p> <p>p) Personas representantes de universidades públicas y privadas, institutos y centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, académicos o expertos para que puedan aportar información sobre los impactos del proyecto y recomendaciones para atenderlos.</p>	<p>Artículo 68. Cierre de sesión inicial del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto. Finalizada la etapa anterior, se dará cierre a la sesión de apertura del cabildo abierto y se deberá elaborar un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, que recogerá todas las intervenciones, las preguntas elevadas por la ciudadanía, las respuestas dadas por las autoridades y particulares responsables del proyecto y una relación de las preguntas cuya respuesta debe ser atendida en la siguiente sesión.</p> <p>La sesión del cabildo será grabada para garantizar la fidelidad del acta, la cual quedará a disposición de la ciudadanía en la secretaria del concejo municipal o distrital o en la secretaria de la asamblea departamental según el caso.</p> <p>Artículo 69. Sesión deliberativa del cabildo. Se trata de sesiones autónomas ciudadanas cuya celebración debe ser garantizada por el concejo municipal o distrital o por la asamblea departamental, según sea el caso. Serán de carácter abierto y participativo.</p> <p>Quienes deseen intervenir deberán inscribirse ante la secretaria del concejo municipal o distrital o ante la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, la cual brindará el registro oficial al comité promotor del cabildo, el cual convocará esta sesión que puede estar compuesta por un máximo de tres reuniones deliberativas. En total, no podrán ser más de 3 reuniones.</p> <p>Se celebrarán a los diez (10) días después del cierre de la sesión inicial del cabildo. Entre la primera y última reunión de la sesión deliberativa no pueden pasar más de treinta (30) días.</p> <p>En estas reuniones la comunidad deliberará sobre la información suministrada por las autoridades y los particulares responsables del proyecto en la sesión de apertura del cabildo y, de considerarlo pertinente, convocará a técnicos en materia jurídica, ambiental, geológica y/o a organizaciones de la sociedad civil para tomar decisiones informadas.</p> <p>Parágrafo. En los casos en los que no se cuente con el comité promotor, la secretaria del concejo municipal o distrital o la secretaria de la asamblea departamental según el caso, se encargará de convocar la sesión o sesiones deliberativas.</p> <p>Artículo 70. Resultado de la sesión deliberativa del cabildo. Como resultado de las reuniones celebradas en el marco de la sesión deliberativa del cabildo, deberá elaborarse un acta diligenciada por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental competente que condense las distintas posturas ciudadanas expresadas en dichos espacios, las dudas de carácter técnico, económico, social o ambiental que aún queden por resolver, el balance de</p>

<p style="text-align: center;">----- CARABO DE REPRESENTANTES -----</p> <p>cumplimiento de las obligaciones y medidas de corrección, compensación y reparación a cargo de los particulares y del Estado en favor de las comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales asociados al proyecto de explotación así como los cronogramas, mecanismos y garantías para el cumplimiento de las obligaciones y medidas pendientes.</p> <p>El acta podrá expresar el consenso, si lo hubiere entre la comunidad, sobre la satisfacción o insatisfacción con el cumplimiento de las medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales generados por el proyecto de explotación y sobre la consecuente conveniencia o inconveniencia de dar cierre al proyecto de explotación de recursos naturales no renovables en el municipio o municipios. En cualquiera de los dos casos, el acta dejará constancia de las recomendaciones y solicitudes que la ciudadanía eleva a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que participan en el cabildo y dejará constancia de las expectativas de la comunidad respecto del cumplimiento de las medidas de corrección, compensación y reparación como condición para que se dé el cierre del proyecto.</p> <p>También expresará el disenso, si lo hubiere, entre la comunidad, dejando constancia de las distintas posturas existentes sobre la satisfacción o insatisfacción con las medidas de corrección, compensación y reparación adoptadas y sobre la consecuente conveniencia o inconveniencia de permitir el cierre del proyecto, indicando en cada caso los argumentos que las sostienen.</p> <p>El acta contendrá el nombre de hasta diez (10) personas delegadas designadas por la comunidad para que intervengan en la sesión decisoria del cabildo abierto socioambiental. Se deberá promover que las personas delegadas reflejen de la mayor manera posible las diferentes posturas y tendencias de la ciudadanía respecto de la satisfacción o insatisfacción con las medidas de corrección, compensación y reparación de los impactos sociales y ambientales y con el cierre del proyecto.</p> <p>La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o la persona delegada para tal fin, según sea el caso, será la que presente el acta que resulte de la sesión deliberativa.</p> <p>Parágrafo. Para llegar al resultado de la sesión deliberativa, la ciudadanía debe tener en cuenta la información suministrada por las autoridades y los particulares intervinientes en la sesión de apertura así como la que fue suministrada durante la sesión deliberativa, la información que tiene la ciudadanía sobre su territorio y los determinantes ambientales y sociales del territorio.</p> <p>Artículo 71. Remisión del acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades participantes de la sesión de apertura. El acta deberá ser remitida por la secretaria del concejo municipal o distrital o por la secretaria de la asamblea departamental, según sea el caso, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes</p>	<p>4) Las entidades públicas y los particulares responsables del proyecto de explotación en el mismo orden de la sesión de apertura, las cuales responderán las preguntas pendientes de la sesión de apertura y se pronunciarán sobre el contenido del acta de la sesión deliberativa del cabildo.</p> <p>Finalizadas las intervenciones se dará el espacio para que se tome la decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de permitir el cierre del proyecto de explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Artículo 73. Decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de dar por finalizado el proyecto de explotación de recursos naturales no renovables. La decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de dar por finalizado el proyecto de explotación de recursos naturales no renovables se adoptará mediante consenso mayoritario entre la comunidad y se deberá manifestar expresamente durante la sesión decisoria.</p> <p>En cualquiera de los dos casos, sea que la decisión manifieste la conveniencia del proyecto o sea que manifieste la inconveniencia del cierre del proyecto, la decisión de la ciudadanía debe ser motivada y debe tener en cuenta criterios sociales, económicos, ambientales y culturales, las medidas de corrección, compensación y reparación adoptadas y el estado de cumplimiento de estas por parte del Estado y de los particulares responsables.</p> <p>Expresada la decisión, se entenderá que el cabildo abierto culmina con un acuerdo participativo para el cierre del proyecto de explotación.</p> <p>Parágrafo. Para efectos de esta ley y de los mecanismos de participación que desarrolla, se entiende por consenso mayoritario la adopción de decisiones por el 65% del total de ciudadanos y ciudadanas intervinientes tanto en la sesión deliberativa como en la decisoria.</p> <p>Artículo 74. Tiempo de espera entre las diferentes etapas de los cabildos abiertos. En ningún caso, la celebración de las tres sesiones que componen un cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto podrá exceder los seis meses.</p> <p>Artículo 75. Agotamiento del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. No se tendrá por agotado el mecanismo del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto en tanto no se acredite el cumplimiento de los compromisos suscritos en el Acuerdo Participativo en lo relacionado con las medidas de compensación, corrección y/o reparación en favor de las comunidades afectadas por el proyecto de explotación de recursos naturales no renovables. Dicha labor de acreditación será realizada por parte del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación.</p>
<p>a la última reunión de la sesión deliberativa a las autoridades que participaron en la sesión de apertura del cabildo.</p> <p>Parágrafo. Será requisito para el inicio de la sesión decisoria del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación que en el Sistema de Información Público de Proyectos de Explotación y Exploración de Recursos Naturales No Renovables (SIPPEERN) esté disponible la misma información prevista en el artículo 5 de la presente ley junto con el acta de la sesión inicial del cabildo, el acta de la sesión deliberativa del cabildo y la información novedosa que hubiera sido presentada durante las reuniones de la sesión deliberativa del cabildo.</p> <p>Esta información deberá estar disponible en el referido sistema de información, así como en la sede de los concejos municipales o distritales o de la asamblea departamental según sea el caso desde el día siguiente al cierre de la sesión deliberativa del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Al inicio de la sesión decisoria del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto deberá darse lectura de la información que no hubiese sido presentada al inicio de la sesión deliberativa y deberá entregarse copia impresa o digital de la totalidad de la información según lo soliciten los participantes.</p> <p>Artículo 72. Sesión decisoria del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación. Una vez la secretaria del concejo municipal o distrital o la secretaria de la asamblea departamental, según el caso, haya enviado el acta de la sesión deliberativa del cabildo a las autoridades responsables del proyecto de explotación, convocará a la sesión decisoria del cabildo abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación dentro de los quince (15) días calendario siguientes.</p> <p>Serán convocadas las mismas autoridades y particulares responsables del proyecto de explotación asistentes a la sesión de apertura.</p> <p>Esta sesión tendrá el siguiente orden de intervenciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o de la ciudadanía, la cual presentará un informe que debe reflejar lo expresado en el acta de la sesión deliberativa. 2) Las personas designadas por la comunidad en el acta de las sesiones deliberativas hasta un máximo de diez. 3) Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diferentes disciplinas que hayan asesorado a la comunidad en el espacio de la sesión deliberativa para que expresen su concepto. 	<p>Artículo 76. Constitución del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación. Una vez se adopte la decisión de la que trata el artículo anterior se debe constituir un Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación.</p> <p>El Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación deberá estar conformado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> l) Un representante de cada una de las empresas responsables del desarrollo del proyecto de explotación de recursos naturales no renovables. m) Un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible n) Un representante del Ministerio de Minas y Energía o) Un representante de la Agencia Nacional de Minería o de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de la autoridad que haga sus veces. p) Un representante de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales q) Un representante de la gobernación del o de los departamentos en cuyo territorio se desarrolle el proyecto de explotación. r) Un representante de cada alcaldía municipal o distrital en donde se desarrolle el proyecto de explotación. s) La persona que asuma la vocería del comité promotor del cabildo o de la ciudadanía, la cual presentará un informe que debe reflejar lo expresado en el acta de la sesión deliberativa. t) Las personas designadas por la comunidad en el acta de las sesiones deliberativas del Cabildo Abierto hasta un máximo de diez. u) Organizaciones de la sociedad civil y profesionales de diferentes disciplinas que hayan asesorado a la comunidad en el espacio de la sesión deliberativa para que expresen su concepto, hasta un máximo de 5. v) Un representante de la Defensoría del Pueblo y un representante de la Procuraduría General de la Nación encargados de velar por la transparencia y el cabal cumplimiento de las funciones del Comité y de prestar la información y asesoramiento que requieran las partes para la garantía de sus derechos. <p>Artículo 77. Funciones del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación. El Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación tendrá las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> e) Hacer seguimiento a la implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación y al cumplimiento de las obligaciones cuyo cumplimiento o implementación estén pendientes por parte del Estado o de

<p>los particulares responsables del proyecto de explotación, en los términos previstos en los Acuerdos Participativos sobre la satisfacción o insatisfacción y sobre la conveniencia o inconveniencia de dar cierre al proyecto.</p> <p>f) Fungir de espacio para que las partes expresen su postura frente a la implementación de las medidas y frente al cumplimiento de las obligaciones de las que trata el literal a del presente artículo.</p> <p>g) Facilitar la negociación y los acuerdos que sean necesarios para la correcta implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación a las que haya lugar.</p> <p>h) Acreditar la implementación de las medidas y el cumplimiento de las obligaciones de las que trata el literal a del presente artículo a las autoridades ambientales nacionales encargadas de la organización del cabildo.</p> <p>Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá proferir en el año siguiente a la entrada en vigor de la presente ley la reglamentación que establezca el funcionamiento del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación.</p> <p>Artículo 78. Acuerdo participativo sobre la satisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la conveniencia del cierre del proyecto. Si la comunidad decide la satisfacción con la implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y la consecuente conveniencia del proyecto, las autoridades municipales, departamentales y nacionales deberán darles curso a los trámites administrativos subsiguientes, en respeto de las competencias de cada cual y de las leyes que rigen dichos procedimientos, para proceder con el cierre del proyecto. En todo caso, deberán garantizar que las obligaciones contraídas por las partes y las medidas acordadas sean plenamente implementadas por el Estado y los particulares responsables antes de que se formalice el cierre del proyecto.</p> <p> Junto con el acuerdo participativo sobre la conveniencia del cierre del proyecto, la comunidad podrá elevar ante las autoridades competentes, según sea el caso, solicitudes especiales en materia social, económica, ambiental y cultural para exigir el cumplimiento de las referidas medidas y obligaciones que no hubieran sido cumplidas al momento de suscripción del Acuerdo Participativo. En caso de desestimar dichas peticiones las autoridades competentes deben brindar razones fundadas en derecho o en razones técnicas plausibles y suficientemente motivadas.</p> <p>Artículo 79. Acuerdo participativo sobre la insatisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la inconveniencia del cierre del proyecto. Si la comunidad decide la insatisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y</p>	<p>i) El Acuerdo Participativo sobre la satisfacción o insatisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la conveniencia o inconveniencia del cierre del proyecto, según sea el caso. Deberá incluirse, según corresponda, la información de cada Acuerdo en los términos previstos en la presente ley.</p> <p>j) La constitución del Comité de Seguimiento y Acreditación de los Acuerdos Suscritos entre la población afectada, el Estado y las empresas responsables del proyecto de explotación.</p> <p>En el caso del Acuerdo Participativo sobre la insatisfacción e inconveniencia deberá quedar explícita la prohibición de formalizar el cierre del proyecto de explotación y la imposibilidad de que los particulares responsables del proyecto de explotación queden liberados de sus obligaciones hasta que den cabal implementación a las medidas de corrección, compensación y reparación y den total cumplimiento de las obligaciones identificadas en dicho Acuerdo.</p> <p>En caso de haberse adoptado el Acuerdo Participativo sobre la satisfacción y conveniencia, el acto administrativo del que trata el presente artículo deberá incluir las respuestas a las peticiones de las que trata el artículo 78 de la presente ley y las medidas y obligaciones a las que estará sujeta la formalización del cierre del proyecto. Ello con el fin de garantizar las medidas de corrección, compensación y reparación social y ambiental a las que haya lugar con ocasión de la etapa de explotación, de conformidad con las preocupaciones, expectativas y voluntades que haya señalado la comunidad en los distintos mecanismos de participación.</p> <p>Artículo 82. Publicación del acto administrativo que formaliza el Acuerdo Participativo. El acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal/ distrital, de los concejos municipales o de la asamblea departamental que estuviera a cargo del desarrollo del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto. También deberá publicarse en la sede virtual de la autoridad ambiental responsable del proyecto de explotación.</p> <p>Allí deberá permanecer a disposición del público hasta que se formalice el cierre del proyecto en caso de haberse adoptado el Acuerdo Participativo sobre la satisfacción y la conveniencia del cierre del proyecto, o hasta que se implementen cabalmente las medidas y se dé cumplimiento a las obligaciones previstas en el Acuerdo Participativo sobre la insatisfacción con la implementación de medidas de corrección, compensación y reparación por impactos sociales y ambientales y sobre la inconveniencia del cierre del proyecto.</p> <p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión. Su difusión no generará costo</p>
<p>ambientales y sobre la consecuente inconveniencia del cierre del proyecto, la comunidad debe comunicar a las autoridades participantes del cabildo las medidas y obligaciones que espera sean cumplidas para sentirse satisfecha y considerar conveniente el cierre del proyecto. La comunidad no podrá hacer exigibles medidas ni obligaciones inexistentes al momento en que inició la sesión decisoria del cabildo.</p> <p>En caso de que la comunidad manifieste su insatisfacción y decida por la inconveniencia del cierre del proyecto, la Agencia Nacional de Minería o la Agencia Nacional de Hidrocarburos o la autoridad que haga sus veces según sea el caso, no podrá formalizar el cierre del proyecto y los particulares responsables del proyecto de explotación no quedarán liberados de sus obligaciones hasta que den cabal implementación a las medidas y total cumplimiento de las obligaciones referidas en el inciso anterior.</p> <p>La decisión es vinculante para las autoridades y así deberá quedar consignado en el acuerdo participativo con el que cierra el cabildo.</p> <p>Artículo 80. Naturaleza del Acuerdo participativo para el cierre del proyecto de explotación. El acuerdo participativo para el cierre del proyecto se adoptará mediante acto administrativo motivado, el cual deberá ser proferido por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, o por quienes hagan sus veces, de conformidad con las competencias correspondientes dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la sesión decisoria del Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto.</p> <p>Artículo 81. Contenido del acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo para el cierre del proyecto de explotación. En el acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo para el cierre del proyecto de explotación la autoridad ambiental responsable de su expedición debe incluir:</p> <p>f) El recuento de lo acontecido y de las conclusiones alcanzadas tras la aplicación de las audiencias públicas participativas de control socioambiental y el Cabildo Abierto preparatorio para el cierre del proyecto y de la fase de explotación.</p> <p>g) Las posturas de la población y de las autoridades frente a la implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación y sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado y de los particulares asociadas a los impactos sociales y ambientales causados por el proyecto de explotación.</p> <p>h) Los aportes de los participantes que fueron tenidos en cuenta en el proceso de decisión sobre la continuidad del proyecto de explotación, así como la información sobre la implementación de las medidas de corrección, compensación y reparación y de las obligaciones contraídas.</p>	<p>alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2) días hábiles a partir de expedido el acto.</p> <p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se aprobó el proyecto de exploración de recursos naturales no renovables y los particulares responsables del proyecto de explotación podrán solicitar la aclaración del acto administrativo mediante el cual se formaliza el Acuerdo Participativo en cualquier momento por medio de un derecho de petición.</p> <p>Artículo 83°. Seguimiento y acreditación al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la población afectada y las empresas responsables. El Comité de Seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes en el Cabildo deberá realizar el seguimiento a su cumplimiento y acreditar el mismo una vez ocurra por medio de un acto administrativo motivado y conforme lo reglamentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Una vez notificado el acto administrativo del que trata el presente artículo, podrá darse por agotado el mecanismo de participación y la autoridad competente podrá dar por terminada la etapa de explotación.</p> <p>Artículo 84°. Decisión respecto del cierre del proyecto y de la etapa de explotación de recursos naturales no renovables. La autoridad competente para finalizar la etapa de explotación de los recursos naturales no renovables deberá expedir un acto administrativo motivado mediante el que le comunique a la población interesada la decisión sobre el cierre del proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.</p> <p>Dicho acto deberá ser proferido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo del que trata el artículo 83 de la presente ley.</p> <p>Artículo 85°. Publicación de la decisión respecto del cierre del proyecto y de la etapa de explotación de recursos naturales no renovables. El acto administrativo mediante el cual se formaliza el cierre del proyecto deberá ser publicado en la sede física y virtual de la alcaldía municipal o distrital, del Concejo y de la autoridad ambiental decisora. Allí deberá permanecer al menos durante noventa (90) días calendario.</p> <p>El referido acto administrativo deberá ser enviado a las radios comunitarias y a los medios de comunicación locales para su difusión. Su difusión no generará costo alguno. Para ello la autoridad ambiental tendrá dos (2) días hábiles a partir de la expedición del acto.</p> <p>Parágrafo 1. La población que habita en los municipios y/o distritos en cuyo territorio se desarrolló el proyecto de exploración y explotación de recursos naturales no renovables podrá solicitar la aclaración del acto administrativo mediante el cual</p>

se formaliza el cierre del proyecto en cualquier momento por medio de un derecho de petición.

Artículo 86. Aplicación progresiva de estas disposiciones. Las disposiciones del presente Capítulo serán aplicables únicamente a los proyectos de explotación de recursos naturales no renovables que inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES FINALES

Artículo 87. Derechos de comunidades étnicas y campesinas. Las disposiciones y mecanismos de participación que se regulan en la presente ley no intervienen ni alteran los derechos de las comunidades étnicas y campesinas reconocidos en otras disposiciones.

Artículo 88. Apropiación presupuestal. El Gobierno Nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto las partidas necesarias para el desarrollo de los mecanismos de participación de los que trata esta ley, de acuerdo con los procedimientos determinados por las normas vigentes.

Artículo 89. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,



JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
Partido Liberal

Bibliografía adicional:

Brand, Ulrich/ Dietz, Kristina (2015): El neoextractivismo como modelo de crecimiento en América Latina. En: Economía y Desarrollo, Vol. 154, No. 1, pp. 185-198.

CENSAT AGUA VIVA (2010): Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia. Casos de la inversión británica. En: Colombia Internacional (93), pp. 93-117.

Dietz, Kristina (2018): Consultas populares mineras en Colombia: Condiciones de su realización y significados políticos. El caso de La Colosa.

Garay Salamanca, Luis Jorge (2013): Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista. Contraloría General de la República.

Pardo Soler, Juliana (2020): Las consultas populares sobre minería, en el marco de la sentencia.

Pérez-Rincón, Mario Alejandro (2014), Caracterización de las Injusticias ambientales en Colombia. SU095 de 2018. Universidad Militar Nueva Granada.

Sankey, Kyla (2013): El boom minero en Colombia: ¿locomotora del Desarrollo o de la Resistencia? En: Estudios críticos del Desarrollo, Vol. 3, No. 4, pp. 113-144.

Vélez-Torres (2013): Governmental extractivism in Colombia: Legislation, securization and the local settings of mining control. En: Political Geography, No. 38, pp. 68-78.

Vélez-Torres, Irene/Ruiz-Torres, Guillermo (2015): Extractivismo neoliberal minero y conflictos socioambientales en Perú y Colombia. En: Ambiente y Sostenibilidad, No. 5, pp. 3-15.